HISTORIA MÍNIMA DE

la Guerra Civil española

Enrique Moradiellos

Las causas, el desarrollo, las consecuencias y los protagonistas de la gran tragedia española del siglo XX.

Historia mínima la Guerra Civil española

ENRIQUE MORADIELLOS

EL COLEGIO DE MÉXICO

Título original:
Historia mínima de la Guerra Civil española
© Enrique Moradiellos García, 2016

De esta edición:
© Turner Publicaciones S. L., 2016
Rafael Calvo, 42
28010 Madrid
www.turnerlibros.com

DR © El Colegio de México, A. C.
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D. F.
www.colmex.mx

Primera edición: junio de 2016

Reservados todos los derechos en lengua castellana. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra, ni su tratamiento o transmisión por ningún medio o método sin la autorización por escrito de la editorial.

ISBN: 978-84-16714-76-6

Diseño de la colección:
Sánchez / Lacasta

La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
turner@turnerlibros.com

ÍNDICE

Prefacio

I
La Guerra Civil entre el mito y la historia

II
La Segunda República: política de masas en democracia

III
El estallido de la guerra: un golpe militar parcialmente fallido

IV
Reacción y militarización en la España insurgente: la construcción de una dictadura caudillista

V
Guerra y revolución en la España republicana: del colapso del estado a la precaria restauración democrática

VI
La dimensión internacional: el reñidero de toda Europa

VII
El curso militar: de una guerra breve de movimientos a una guerra larga de desgaste

VIII
Vencedores y vencidos: el coste humano de la Guerra Civil

Bibliografía: una selección básica

Para Inés, mi hija.
Para Susana, su madre.
Porque ambas son,
con permiso de Auden,
mi norte y mi sur,
mi este y mi oeste,
mi jornada laboral,
y mi descanso dominical.

PREFACIO

> Escribir libros de historia significa ofrecer la materia prima necesaria para un uso público del pasado. Aquélla no hace del historiador un guardián del patrimonio nacional –dejémosle esta ambición a otros– porque su intento consiste en interpretar el pasado, no en favorecer procesos de construcción de identidad o de reconciliación nacional. Un intelectual –y por lo tanto también un historiador–, 'orgánicamente' ligado a una clase, a una minoría, a un grupo o a un partido, corre el peligro de olvidar la autonomía crítica esencial para su trabajo.
>
> ENZO TRAVERSO, *A sangre y fuego. De la guerra civil europea, 1914-1945* (2007).

Este libro quiere ser una introducción panorámica sobre los antecedentes, curso, desenlace y significado histórico de la Guerra Civil librada en España durante casi tres años, entre julio de 1936 y abril de 1939. Fue una cruel contienda fratricida que constituye el hito trascendental de la historia contemporánea española y está en el origen de nuestro tiempo presente, transcurridos justo ahora ochenta años desde su comienzo. Y la obra aspira a cumplir esa tarea informativa e interpretativa con el mayor grado posible de rigor historiográfico, dentro de las coordenadas propuestas por el historiador italiano Enzo Traverso que figuran al comienzo. Esto es: presentando en toda su complejidad los perfiles básicos del conflicto español que puso fin a la Segunda República y dio origen a la dictadura del general Franco, con sus pertinentes matices de luces y sombras, sin ánimo beligerante sectario, ni propósito maniqueo intencionado.

La tarea no es nada sencilla porque la Guerra Civil española fue un cataclismo colectivo que abrió un cisma de extrema violencia en la convivencia de una sociedad atravesada por múltiples líneas de

fractura interna y grandes reservas de odio y miedo conjugados. Y que produjo en el país, ante todo y sobre todo, una cosecha brutal de sangre abundante y diversa: sangre de amigos, de vecinos, de hermanos, de conocidos, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de mayores, de culpables y de inocentes. Sencillamente porque en una guerra civil el frente de combate que divide las dos mitades enfrentadas es una trágica línea imprecisa que atraviesa familias, casas, barrios, ciudades y regiones, llevando a su paso un deplorable catálogo de atrocidades homicidas, horrores inhumanos, ignominias morales y a veces también de actos heroicos, gestos nobles y conductas filantrópicas. Y fue así en la guerra española como había sido antes en otros episodios similares, por ejemplo en la guerra civil rusa de 1917-1920, tal como recordaría el militante comunista Víctor Serge:

> No puede entenderse la guerra civil si uno no se representa a estas dos fuerzas [rojos y blancos], confundidas, viviendo la misma vida, rozándose en las arterias de las grandes ciudades con el sentimiento neto, constante, de que una de las dos debe matar a la otra. […] Guerra a muerte, sin hipocresías humanitarias, donde no hay Cruz Roja, donde no se admite a los camilleros. Guerra primitiva, guerra de exterminio, *guerra civil*.

La investigación histórica sobre las guerras civiles contemporáneas confirma esa impresión personal del testigo. La guerra civil es una forma de "guerra salvaje" precisamente por librarse entre vecinos y familiares conocidos, bastante iguales y siempre cercanos (no por ser todos desconocidos, diferentes y ajenos). El triste corolario de una contienda de esta naturaleza fue apuntado por el general Charles de Gaulle en 1970: "Todas las guerras son malas, porque simbolizan el fracaso de toda política. Pero las guerras civiles, en las que en ambas trincheras hay hermanos, son imperdonables, porque la paz no nace cuando la guerra termina".

En efecto, al término de la brutal contienda civil de 1936-1939 no habría de llegar a España la Paz sino la Victoria y una larga dictadura. Y entonces pudo comprobarse que, cualesquiera que hubieran sido los graves problemas imperantes en el verano de

1936, el recurso a las armas había sido una mala "solución" política y una pésima opción humanitaria para el conjunto del país. Simplemente porque había ocasionado sufrimientos inenarrables a la población afectada, devastaciones inmensas en todos los órdenes de la vida socioeconómica, daños profundos en la fibra moral que sostiene unida toda colectividad cívica y un legado de penurias y heridas, materiales y espirituales, que tardarían generaciones enteras en ser reparadas.

La tarea de recordar aquellos días y horrores no solo tiene como objetivo dar a conocer mejor lo que fue una inmensa carnicería que traumatizó a una sociedad decantada por siglos de convivencia, pero partida en dos de arriba abajo para la ocasión. También supone ejercitar una obligación de profilaxis cívica bellamente apuntada, en medio de tanta tragedia, por el presidente Manuel Azaña en un inspirado discurso en el ayuntamiento de Barcelona con ocasión del segundo aniversario del comienzo de la contienda (el 18 de julio de 1938):

> No […] voy a aplicar a este drama español la simplísima doctrina del adagio de que 'no hay mal que por bien no venga'. No es verdad, no es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón.

I
LA GUERRA CIVIL ENTRE EL MITO Y LA HISTORIA

La Guerra Civil española fue un cruento conflicto librado entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 que enfrentó a dos bandos armados en el campo de batalla. Por un lado, el bando republicano o frentepopulista (los "rojos" o "comunistas", según la terminología de sus enemigos), conformado por las fuerzas sociopolíticas de las izquierdas reformistas y revolucionarias que apoyaban al gobierno de la Segunda República constituido tras las elecciones generales de febrero de 1936. Por otro, el bando insurgente o franquista (los "azules" o "fascistas", según la denominación de sus enemigos), configurado en torno a los mandos militares sublevados contra dicho gobierno en el verano de 1936 y articulado por las fuerzas sociopolíticas de las derechas contrarrevolucionarias y antirrepublicanas. Fue, así pues, un conflicto que reproducía todas las características de una guerra civil conocidas en la historia: la fragmentación del poder unitario del estado por el surgimiento de dos facciones armadas que compiten por el control de un mismo territorio y población mediante el recurso a la violencia generalizada y extrema para lograr su propósito y aplastar toda resistencia contraria.

CONFLICTO INTERNO Y CONTIENDA INTERNACIONALIZADA

En su calidad de guerra civil, el conflicto de España es una manifestación evidente de la gravedad de las fracturas presentes en

la sociedad española, que están en el origen de su propio estallido. Como ya advirtiera Karl von Clausewitz a partir de su propia experiencia en las guerras napoleónicas: "La guerra nunca estalla de improviso ni su preparación tiene lugar en un instante. […] Las pasiones que deben prender en la guerra tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella".

La naturaleza y perfil de esas causas originarias son bien conocidas en líneas generales y planteaban desafíos complejos y nada prestos a soluciones rápidas: el agudo contraste entre zonas del país con predominio de una sociedad urbana modernizada y cosmopolita y zonas hegemonizadas por una sociedad rural de mayor atraso socioeconómico y hábitos tradicionales; la tensión entre grupos sociales partidarios de alternativas políticas liberal-democráticas o revolucionarias deudoras de una ética secularizante y defensores de tradiciones políticas y valores religiosos más conservadores o decididamente antiliberales; la dinámica opositora entre el nacionalismo español unitario y centralizador característico del estado liberal y las crecientes demandas autonomistas o secesionistas de nuevos nacionalismos de la periferia territorial alentados por la gran crisis colonial de 1898; el pulso latente entre la voluntad de primacía de la autoridad civil constitucional y las tentaciones de un veterano pretorianismo militar fraguado por decenios de conflictos internos y crisis coloniales, etcétera.

Dicho en otras palabras, quizá más certeras, la guerra de 1936-1939 fue la resultante última de varios conflictos combinados que acabaron traspasando el umbral de las hostilidades y convirtiéndose en una guerra declarada en la crítica coyuntura del verano de 1936. Conflictos, tensiones y fracturas de larga gestación previa que convirtieron la contienda, ante todo, en una verdadera lucha de clases por las armas, pero también en una lucha de ideologías políticas enfrentadas, de mentalidades socioculturales contrapuestas, de sentimientos nacionales mutuamente irreductibles y de creencias religiosas incompatibles. Como apreciaría ya en el exilio en 1939 poco antes de su muerte Manuel Azaña, el presidente de la República vencida que había sido uno de sus artífices principales,

esas causas del conflicto había que buscarlas en "el fondo mismo de la estructura social española y de su historia política en el último siglo".

No cabe duda, así pues, de que la guerra fue un conflicto endógeno de raíces internas que se convirtió en el acontecimiento central y decisivo de la historia española contemporánea: una "tragedia española" (palabras de Raymond Carr) que además de ser el punto culminante de su convulsa trayectoria histórica desde la guerra de Independencia de 1808 fue también su elemento diferencial más notorio en el contexto histórico europeo circundante, con un eco internacional y proyección simbólica excepcionales en la crítica coyuntura que precedió al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como dejó anotado el escritor estadounidense Arthur Miller en el año 2003:

> No hubo ningún otro acontecimiento tan trascendental para mi generación en nuestra formación de la conciencia del mundo. Para muchos fue nuestro rito de iniciación al siglo XX, probablemente el peor siglo de la historia.

En efecto, la Guerra Civil española no fue solo un conflicto interno librado en el seno de un país aparentemente situado en los márgenes de Europa y mayormente ajeno a sus dinámicas principales desde la pérdida de su inmenso imperio ultramarino a principios del siglo XIX. Fue también y decisivamente una contienda internacionalizada de vital proyección exterior, deviniendo así un episodio central de la crisis continental de los años 30 del siglo XX.

La razón básica de esta conversión de la arena española en un foco de atención mundial residió en un doble fenómeno. Por un lado, fue el resultado de la presencia de una analogía esencial entre la crisis española que dio origen a la guerra y la crisis general europea que se prolongó durante el llamado "periodo de entreguerras (1919-1939)": como subrayaría Azaña en el exilio, lo que afrontó la República española entre 1931 y 1936 "era un problema político no tan nuevo que no se hubiese visto ya en otras partes". Por otro lado, fue el producto de un estrecho paralelismo cronológico, de una sincronía temporal, entre el desarrollo de la guerra española y la

crisis final europea que condujo a la Segunda Guerra Mundial: una vinculación tan estrecha que haría que el reputado historiador británico Arnold J. Toynbee se preguntara en octubre de 1938 "si la guerra en España era una contienda civil española o una guerra internacional librada en la arena española".

Debido al primer factor analógico, la lucha española entre las fuerzas reformistas-revolucionarias de la República contra las fuerzas reaccionarias de un ejército insurgente parecía reduplicar en una escala menor la creciente tensión triangular que fracturaba al conjunto de Europa con alternativas sociopolíticas antagónicas: el bloque democrático occidental (la entente franco-británica) frente al eje revisionista totalitario (Alemania e Italia), con o sin el apoyo de la Unión Soviética revolucionaria. Debido al segundo factor cronológico, la temporización de la guerra en España se desarrolló justo a la par y en contacto con la crisis final que puso fin a la tregua de veinte años firmada por el armisticio de noviembre de 1918 y socavada gravemente por los efectos disolventes de la gran depresión económica de 1929. Por ambos motivos, la guerra de España suscitó un apasionado interés en la opinión pública europea, cualquiera que fuera su simpatía (ya porque se entendiera como una batalla crucial entre la democracia y el fascismo o como un combate radical entre el comunismo y la civilización occidental). Y, todavía más importante, esa analogía y sincronía también posibilitaron el súbito proceso de internacionalización de la contienda, derivado de la intervención (o inhibición) de varias potencias extranjeras en apoyo a los bandos en conflicto.

Por su propia naturaleza polifacética, la Guerra Civil ha generado desde sus inicios una fascinación constante entre lectores legos o duchos en la materia (mayormente españoles, pero también extranjeros). Y por eso mismo está a disposición del público una estimable pléyade de obras historiográficas que analizan desde distintas perspectivas casi todas sus dimensiones. En 1986, al cumplirse el 50 aniversario del inicio del conflicto, una estimación bibliométrica calculaba que se habían escrito sobre el tema, en España y en el extranjero, "más de quince mil libros", lo que

constituía "un epitafio literario equiparable al de la Segunda Guerra Mundial" (en palabras del hispanista Paul Preston). Y la tendencia no cesó después de ese aniversario puesto que en 1996 una nueva estimación registraba que en veinte años (1975-1995) se habían publicado no menos de 3.597 trabajos sobre la guerra española (casi trescientos editados en países extranjeros). Una última valoración sobre el asunto realizada en 2007 apuntaba que la producción bibliográfica sobre la guerra española para entonces alcanzaba "ya la cifra de 40.000 ejemplares".

El interés público, tanto español como internacional, por la Guerra Civil comenzó nada más estallar la contienda en el caluroso verano de 1936, justo cuando empezaban a configurarse los bandos europeos que habrían de enfrentarse apenas tres años después. A saber: el eje germano-italiano de potencias fascistas decididas a revisar el *statu quo* europeo y mundial de buen grado o por la fuerza de las armas; la entente franco-británica de potencias democráticas dubitativas entre el apaciguamiento del eje o la resistencia armada ante sus demandas revisionista; y la Unión Soviética como potencia revolucionaria anticapitalista, temerosa de la amenaza de los primeros pero desconfiada de las intenciones de los segundos y presta a sumarse a uno u otro bando según las circunstancias. Un contexto europeo, así pues, tenso e inestable que la propia crisis española agravó decisivamente hasta convertirse en uno de sus episodios fundamentales.

LOS MITOS ÉPICOS Y TRÁGICOS DE LA GUERRA CIVIL

Conviene recordar la naturaleza y perfil de esos relatos que surgieron sobre la Guerra Civil española desde sus inicios y que se mantuvieron vivos muchos años con posterioridad. Se trata de un conjunto de mitos que se organizaban en torno a dos grandes visiones contrapuestas: el mito de la Guerra Civil como gesta épica y heroica que hay que loar y recordar; y el mito de la Guerra Civil como locura trágica colectiva que hay que deplorar y olvidar.

Ambas visiones se estructuraban como verdaderos "mitos", como un relato narrativo de acciones extraordinarias a cargo de protagonistas sobresalientes (individuales o colectivos: la Patria o la Clase), bajo un formato idealizado y ritualizado, de perfiles nítidos y maniqueos, siempre sin asomo de duda o contradicción (sin "zonas grises" de penumbra, como afirmaría el escritor Primo Levi). Ya en 1958 Hans-Georg Gadamer recordaba que, desde la Grecia clásica, "la relación entre mito y *logos* (razón)" es "la que existe entre el pensamiento que tiene que rendir cuentas y la leyenda transmitida sin discusión", de modo que "el mito está concebido en este contexto como el concepto opuesto a la explicación racional del mundo".

En el orden temporal, el mito de la gesta heroica fue el primero en cristalizar, ya durante la contienda, porque era un mito de movilización bélica: un mito de estímulo para luchar. A tenor del mismo, la guerra era un combate heroico a vida o muerte entre dos bandos contendientes (uno "bueno", el otro "malo") que representaban a las "dos Españas" supuestamente existentes desde hacía siglos y encarnadas entonces en la "España republicana" y la "España franquista". Tanto unos como otros asumieron esa interpretación dualista del origen y carácter del conflicto porque respondía a las necesidades de movilización popular de cada uno de ellos y porque resultaba de utilidad justificativa de cara al ámbito interno tanto como exterior. El escritor José María Pemán, ferviente propagandista bélico en favor del general Franco, había explicado esa utilidad con palabras muy claras: "Las masas son cortas de vista y sólo perciben los colores crudos: negro y rojo".

En el caso franquista, esta visión mítica y dualista cobraba la forma de un combate entre una España católica y la anti-España atea, subrayando así las dimensiones nacionales y religiosas del conflicto. Por eso, según el bando sublevado, su combate era una cruzada "por Dios y por España" contra un enemigo demonizado y apátrida. Sirva de ejemplo cómo definió la guerra ya en agosto de 1936 el cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de la

iglesia en España, en un informe para el entonces cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII en 1939:

> En conjunto puede decirse que el movimiento [militar insurreccional] es una fuerte protesta de la conciencia nacional y del sentimiento patrio contra la legislación y procedimientos del Gobierno de este último quinquenio, que paso a paso llevaron a España al borde del abismo marxista y comunista. […] Puede afirmarse que en la actualidad luchan España y la anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie.

En el caso republicano, la visión mitificadora prescindía de los contornos nacionales y religiosos dominantes en la zona franquista y se centraba, con muchas tensiones internas, bien en las dimensiones clasistas o en las político-ideológicas inherentes a la contienda. Por este bando, la guerra respondía a una lucha secular entre los proletarios oprimidos y los opresores burgueses, entre los demócratas antifascistas y los reaccionarios fascistas. Y dejaremos de lado, por su menor entidad, las visiones ocasionales de los nacionalismos periféricos (vasquista o catalanista) que veían el combate como una lucha de España contra Euskadi o Cataluña. La primera lectura republicana, de matriz clasista, fue predominante entre los sectores anarcosindicalistas y socialistas largo-caballeristas (seguidores de Francisco Largo Caballero); en tanto que la segunda, de matriz político-ideológica, fue mayoritaria entre el republicanismo de izquierda, el socialismo prietista (seguidores de Indalecio Prieto) y el comunismo de inspiración soviética.

Buen ejemplo de la primera lectura clasista es la siguiente declaración de Andreu Nin, líder del filo-trotskista POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), en septiembre de 1936:

> La lucha continúa porque la lucha no está entablada entre la democracia burguesa y el fascismo, sino entre el fascismo y el socialismo, entre la clase obrera y la burguesía. […] En España no se lucha por la república democrática. Se levanta una nueva aurora en el cielo de nuestro país. Esta nueva aurora es la de la República socialista.

A su vez, buena muestra de la segunda lectura político-ideológica es este fragmento de una declaración del gobierno republicano

dirigida a la opinión pública internacional en el otoño de 1936:

> Contrariamente a ciertas alegaciones del exterior, el Gobierno republicano no aspira al establecimiento de un régimen soviético. Su fin esencial es el mantenimiento del régimen de la República parlamentaria democrática tal como ha sido creada por la Constitución que el pueblo español se ha dado libremente a sí mismo. Los rebeldes, por el contrario, son los portavoces del fascismo y del antiparlamentarismo.

Expuestas de modo sumario, estas fueron las dos visiones épicas contrapuestas sobre la Guerra Civil abrigadas por republicanos y por franquistas. Ambas eran maniqueas y ambas fueron intensamente divulgadas durante la contienda y con posterioridad, tanto en el plano del discurso propagandístico como en el análisis proto-historiográfico. Entre otras cosas, porque servían para legitimar moralmente las opciones políticas tomadas y porque evitaban mayores afanes críticos (sobre todo con relación a los defectos del bando propio).

En todo caso, la interpretación de la Guerra Civil como gesta heroica fue particularmente intensa en el bando franquista en razón de su victoria y de la duración del régimen triunfante en el conflicto. No en vano, ese triunfo en la guerra sería la fuente exclusiva de legitimidad del general Franco, el "Caudillo de la Victoria". Y por eso se implantó hasta mediados de la década de 1960 una férrea censura militar en el tratamiento de "la Cruzada Española" (contra el ateísmo) o "La Guerra de Liberación" (contra el comunismo). Y la consecuente doctrina ortodoxa fue elevada a condición de "verdad histórica oficial" incontestada en virtud de múltiples publicaciones que reiterarían los mitos históricos fundacionales del franquismo: desde la *Historia de la Cruzada Española* (dirigida por el periodista Joaquín Arrarás, publicada en Madrid entre 1939 y 1943) hasta la *Síntesis histórica de la Guerra de Liberación* (editada por el Estado Mayor Central del Ejército en 1968).

Solo avanzados los años 60, como parte de sus limitadas tentativas aperturistas, la dictadura eliminó la censura militar y admitió el uso público del término de "guerra civil", hasta entonces proscrito por sus connotaciones de equidad entre bandos

combatientes y reconocimiento de fractura interna del propio país. Ya había dejado suficientemente claro el motivo en 1945 el padre redentorista Andrés Goy, autor de un texto de formación religiosa y patriótica para los jóvenes escolares de 1945: "No era aquélla Guerra Civil, porque no es Guerra Civil la que mantiene la autoridad contra los ladrones, asesinos e incendiarios: eran los momentos del ser o no ser del alma española".

Frente a esa unanimidad interpretativa franquista vigilada por la censura militar, en el caso republicano la intensidad de sus divisiones quedó agrandada por la derrota y un amargo exilio disperso por varios continentes. Ambas circunstancias crearon dificultades insalvables para conformar una visión unitaria sobre el fenómeno bélico, más allá de su mínima condición de "guerra antifascista" de borrosos perfiles. Basta comparar tres visiones casi antagónicas sobre los motivos, el curso y el desenlace de la contienda: la interpretación que dejó el presidente Azaña en su libro *Causas de la guerra de España*, que escribe exiliado en Francia en 1939; la que lega el dirigente anarquista Diego Abad de Santillán en *Por qué perdimos la guerra*, publicado en 1940 pero ya en Argentina; o la que publica a partir de 1966 el Partido Comunista de España, bajo la dirección de Dolores Ibárruri, con el título de *Guerra y revolución en España* al amparo de instituciones editoras de la Unión Soviética.

En todo caso, es preciso subrayar que esas visiones míticas republicanas y franquistas fueron las lecturas hegemónicas sobre la Guerra Civil hasta los años 60 del siglo XX. Para entonces, una nueva visión del conflicto empezó a cobrar forma, en parte como resultado de dos fenómenos correlativos. Por un lado, el reemplazo generacional registrado en la pirámide social española: en los años 60 los segmentos activos y crecientemente dominantes de la sociedad eran los "hijos" de la guerra, que no habían combatido ni estaban comprometidos por deudas de sangre directas en la contienda. Por otro, la intensa modernización socioeconómica experimentada por la sociedad española durante aquellos años del desarrollismo, que dejaba atrás el tiempo de silencio, hambre y miseria que había caracterizado a la posguerra en los años 40 y 50.

Desde luego, la visión de la Guerra Civil que en ese nuevo contexto fue imponiéndose seguía siendo una concepción mítica y dualista en formato (seguían presentes las "dos Españas"). Pero ahora se concebía la Guerra Civil como una inmensa "locura trágica" y una "matanza fratricida" que era un "fracaso" vergonzoso de todos los españoles, sin claros tintes heroicos que loar y con muchos componentes trágicos que lamentar. Era una visión que implicaba el reconocimiento de algún grado de responsabilidad colectiva en el comportamiento brutal de los españoles y que incorporaba una lección moral nítida: "Todos fuimos culpables". Con su corolario: "Nunca más la guerra civil". En consecuencia, lo mejor era olvidar y perdonar las culpas colectivas de aquella carnicería y encarar el futuro en paz y sin volver la vista atrás. Baste citar la carta abierta que un dirigente socialista (Joaquín León) remitió en 1973 a un líder monárquico (Juan Ignacio Luca de Tena):

> Entienda que ni los hijos de usted ni los míos vibran con los ecos y los himnos que a nosotros nos conmovieron y que son hoy, para ellos, música celestial, cuando no los belicosos acordes con los que una generación inepta, que no fue capaz de encontrar otra solución a sus problemas que la barbarie de una guerra, acompañó la inmolación de un millón de hermanos. […] Ello traerá, al fin, el otorgamiento, a todos los muertos, del respeto y la paz que le son debidos. Para bien o para mal, entre todos ellos escribieron la historia, y nadie tiene derecho a pretender borrar un solo nombre de esas páginas que ya están escritas para siempre.

Por supuesto, esta transformación de la visión de la guerra desde el mito de la gesta heroica al mito de la locura trágica tuvo una enorme importancia sociopolítica durante el tardofranquismo y la transición política de la dictadura a la democracia. Sobre todo porque supuso una transformación de los principios de cultura cívica que resultó decisiva en aquella coyuntura y que, en gran medida, hizo posible la operación política de desmantelamiento pacífico del régimen franquista y su sustitución por el actual régimen democrático-parlamentario. No en vano, era un mito de reconciliación nacional: era la concepción de los hijos de la guerra

que trataban de dejar atrás las visiones y las culpas de la generación de sus padres y sus abuelos.

Significativamente, según una encuesta sobre actitudes políticas de los españoles realizada en 1974, un año antes de la muerte de Franco, el 60% de los encuestados era partidario de "principios democráticos de gobierno", frente al 18% que favorecía "principios autoritarios de gobierno" y un 22% que se abstenía de elegir. Unas opciones democráticas mayoritarias esbozadas en un momento en que el 70% de la población española tenía menos de cuarenta años de edad y, por tanto, no había vivido la Guerra Civil ni siquiera como niños con mínimo uso de razón. El encomiable valor moral y utilidad funcional durante la transición democrática de esa lección histórica implícita en el "Nunca más" resulta incontestable. Y, sin embargo, en sus presupuestos, formato y contenido seguía siendo una manera de tratar el problema histórico real de modo sustancialmente mitificado.

LA NUEVA MIRADA HISTORIOGRÁFICA

En todo caso, y no es pura coincidencia, justo a principios de la década de 1960 comenzaba a desplegar su vuelo una nueva historiografía sobre la Guerra Civil más científica y rigurosa. Se trataba de una perspectiva interpretativa menos lastrada por el compromiso político declarado (ya fuera "antifascista" pro-republicano o "anticomunista" pro-franquista) y necesariamente desacralizadora en sus pretensiones de búsqueda de la cruda verdad, siempre mucho más incómoda que reconfortante y tranquilizadora. Sencillamente porque la labor de la ciencia humana de la historia es permanentemente sacrílega y nunca santificante. Es por definición crítica y no dogmática. Demanda distancia personal respecto del fenómeno analizado y no admite adhesión emotiva con el mismo en la medida en que esta pueda eclipsar la búsqueda de la verdad. Dicho en otras palabras: obedece al más que milenario *dictum* de Cornelio Tácito según el cual la historia solo se escribe *bona fides, sine ira et studio* (con buena fe interpretativa de partida,

sin encono partidista sectario y tras meditada reflexión sobre los materiales probatorios disponibles).

Por razones evidentes (de libertad de expresión, de seguridad jurídica y de libre acceso a fuentes informativas disponibles), esa nueva historiografía emprendería su labor desde el extranjero y con bastantes problemas para llegar al interior de España. No sería justo desconocer que las perspectivas historiográficas inauguradas en la década de los 60 contaban con dos antecedentes influyentes. Por un lado, *El laberinto español*, la obra del británico Gerald Brenan publicada en inglés en plena guerra mundial (1943) y oportunamente traducida al español en 1962 por Ruedo Ibérico, la magna institución cultural del exilio republicano en París. Por otro, la *Historia de España* del hispanista francés Pierre Vilar (publicada en 1947), que contenía un crucial capítulo sobre "las crisis contemporáneas" y sería traducida al español, también en París y en medios republicanos exiliados, solo un año más tarde que la de Brenan (en 1963).

Sin embargo, el punto de arranque de esa nueva historiografía sobre la contienda española fue la aparición del libro titulado *La guerra civil española* firmado por el hispanista británico Hugh Thomas, publicado simultáneamente en inglés, francés y español en el año 1961. Traducido a casi todos los principales idiomas del mundo, era una minuciosa crónica del conflicto escrita desde perspectivas liberal-democráticas y con propósito de imparcialidad respecto de las pasiones partidistas aún vigentes. El estilo narrativo era fluido y elegante. Sus fuentes informativas provenían de literatura testimonial y hemerográfica y, en menor medida, de documentación archivística. Y en su relato el fenómeno bélico aparecía como resultado de acciones y omisiones de hombres, grupos políticos y organizaciones sociales y no como un fenómeno exigido por la evolución orgánica de estructuras históricas anónimas y suprasubjetivas.

El libro de Hugh Thomas, en gran medida por esas cualidades estilísticas y conceptuales, tuvo un enorme éxito de lectores y se convirtió en un hito canónico fundacional de la nueva historiografía

sobre la Guerra Civil española. Fue un éxito que no tuvieron otras dos obras aparecidas también en 1961 (pronto traducidas al español). Por un lado, el trabajo de los hispanistas franceses Pierre Broué y Émile Témime, *La Revolution et la Guerre d'Espagne*, que era una visión mucho más analítico-estructural y de compromiso político filo-trotskista. Por otro, el estudio del hispanista galés Burnett Bolloten, *The Grand Camouflage. The Communist Conspiracy in the Spanish Civil War*, un minucioso análisis sobre las actividades comunistas en la guerra de simpatía filo-anarquista.

A partir de esas tres obras señeras de 1961, la producción bibliográfica sobre la Guerra Civil a cargo de historiadores extranjeros no dejó de crecer a lo largo de toda la década, con contribuciones generalistas tanto como monográficas de gran alcance para la conceptualización del fenómeno bélico. Entre todas ellas, merecerían mencionarse las siguientes seis obras por su importancia: 1°) Herbert R. Southworth, *El mito de la Cruzada de Franco* (París, Ruedo Ibérico, 1963): un estudio magistral sobre la propaganda franquista que trituraba la idea de que el golpe militar se anticipaba a una conjura comunista inminente para tomar el poder. 2°) Gabriel Jackson, *The Spanish Republic and the Civil War* (Princeton, Princeton University Press, 1965): probablemente la visión filo-republicana de estirpe liberal-democrática más influyente. 3°) Raymond Carr, *Spain, 1808-1939* (Oxford, Oxford University Press, 1966): quizá la crónica sobre historia española contemporánea más solvente de las existentes hasta entonces y que todavía conserva su frescura. 4°) Manuel Tuñón de Lara, *La España del siglo XX* (París, Librería Española, 1966): la visión filo-republicana de mayor influencia en la izquierda antifranquista, tanto del interior de España como del exilio. 5°) Stanley G. Payne, *Politics and the Military in Modern Spain* (Stanford, Stanford University Press, 1967): el análisis pionero sobre el papel sociopolítico del ejército y las razones del potente militarismo en la historia contemporánea española. Y 6°) Edward Malefakis, *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain* (Ann Arbor, Michigan University Press, 1970): el estudio más renovador sobre la fracasada reforma agraria

republicana y la conflictividad agraria en el sur latifundista que tan crucial resultó para el estallido de la guerra.

Como era previsible, esa hegemonía de la producción extranjera (sobre todo, anglo-estadounidense) sobre la Guerra Civil empezó a remitir a medida que la crisis final de la dictadura franquista permitía a los historiadores españoles adentrarse en el "desierto inexplorado" de ese periodo y en sus antecedentes (la Segunda República) y consecuentes (la dictadura de Franco). Señalaba al respecto en 1994 Julián Casanova:

> Cuando aparecieron los primeros libros de esos autores angloamericanos, sus resultados sólo podían compararse con los de las obras de los propagandistas del régimen de Franco. O dicho de otra forma, ningún historiador español alejado de los presupuestos de la historiografía franquista había penetrado todavía en el análisis profundo del conflicto.

Sin duda, esa fue una de las razones del éxito de los hispanistas extranjeros que empezaron a estudiar la Guerra Civil. Aunque también habría que añadir otra razón que tiene que ver con su particular perspectiva analítica comparativa, sumamente atractiva para los lectores. José Álvarez Junco subrayó en 2007 este aspecto:

> El hecho de ser extranjeros les dio algunas ventajas. La primera, obvia, que podían escribir y publicar con libertad. La segunda, que veían los problemas ibéricos desde fuera, lo que les hacía adoptar como natural un enfoque comparado y unos modelos explicativos de validez general. Los historiadores españoles, en cambio, demasiado cercanos al tema y carentes de perspectiva, caían con facilidad en la trampa de la 'excepcionalidad' española.

Sobre esas limitaciones políticas de los historiadores españoles para hacer su labor profesional bajo la dictadura cabe recordar un episodio muy significativo: en 1971 las autoridades franquistas habían retirado de la circulación un libro oficial titulado *El Banco de España. Una historia económica* (Madrid, Banco de España, 1970). Se trataba de una obra hecha por economistas de la institución y editada por la propia institución. El motivo de esa excepcional medida era que en el libro se incluía una colaboración del profesor

Juan Sardá sobre la economía española entre 1931 y 1962 en la que había una referencia sobre el uso del oro en la Guerra Civil totalmente inaceptable (por ir contra el mito del "oro de Moscú" robado y dilapidado por los republicanos): "El tesoro español entregado a la URSS fue efectivamente gastado en su totalidad por el Gobierno de la República durante la guerra" (véase más en pp. 177 y 229-230).

Sin duda, un hito claro en este proceso de recuperación historiográfica de la Guerra Civil por parte de autores españoles no vinculados al régimen fue la autorización gubernativa para que se publicara el libro del economista (y dirigente comunista clandestino) Ramón Tamames, que formaba parte de una divulgada colección de historia de España y abarcaba un periodo titulado de modo tan extraño como aséptico: *La República. La era de Franco* (Madrid, Alianza, 1973). En ese mismo año y el siguiente verían la luz otras cuatro obras relevantes sobre el periodo bélico, ambas relativas a materias "sensibles" para la ideología franquista, que se convertirían en canónicas: 1°) Un trabajo de Josep María Bricall que abordaba un aspecto de la gestión autonómica en Cataluña (*Política económica de la Generalitat*, Barcelona, Nova Terra, 1973); 2°) Una enciclopédica investigación de un excombatiente franquista, el general Ramón Salas Larrazábal, sobre el ejército republicano (*Historia del Ejército Popular de la República*, Madrid, Editora Nacional, 1973); 3°) Un análisis de Ángel Viñas sobre la génesis de la ayuda inicial hitleriana a la sublevación franquista (*La Alemania nazi y el 18 de julio*, Madrid, Alianza, 1974); y 4°) Un estudio de Andreu Castells sobre los voluntarios extranjeros que combatieron al servicio de la República (*Las Brigadas Internacionales de la guerra de España*, Barcelona, Ariel, 1974).

Por supuesto, el final de la dictadura y el proceso de restablecimiento de la democracia a partir de 1975 originaron un cambio sustancial. Desde entonces, y sobre todo en torno al sexenio 1981-1986 (marcado por la celebración de dos cincuentenarios: la proclamación de la República y el comienzo de la Guerra Civil), se produjo una verdadera eclosión bibliográfica en la producción

historiográfica sobre la contienda, propiciada por el firme respaldo prestado por tres fenómenos coetáneos.

En primer lugar, por la configuración en los años de la transición de una difusa "escuela" en torno al historiador Manuel Tuñón de Lara, un investigador formado en el exilio francés que, afincado en la universidad de Pau desde 1970, había impulsado con ahínco el análisis de los problemáticos años 30. Era una escuela deudora de la metodología y concepciones marxistas y que, sin embargo, había conjugado con bastante fortuna ese compromiso ideológico y la práctica profesional solvente. Uno de sus grandes frutos fue la publicación del libro editado por Tuñón de Lara y sus colaboradores (Julio Aróstegui, Gabriel Cardona, Ángel Viñas y Joseph M. Bricall) bajo el título: *La guerra civil. 50 años después* (Barcelona, Labor, 1985).

El segundo fenómeno consistió en la floración de una generación de historiadores españoles formados en ámbitos universitarios extranjeros e impregnados de las nuevas tendencias historiológicas dominantes en esos lares. Ejemplos relevantes del proceso pudieran ser los siguientes autores: 1°) Juan Pablo Fusi, formado en la universidad de Oxford de la mano de Raymond Carr, y uno de cuyos primeros trabajos versaba sobre *El problema vasco durante la II República* (Madrid, Turner, 1979); 2°) Enric Ucelay-Da Cal, formado en la universidad de Nueva York y regresado a España durante la transición, cuyo gran estudio se publicó bajo el título *La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l'etapa republicana, 1931-1939* (Barcelona, La Magrana, 1982); y 3°) Alberto Reig Tapia, formado en Francia bajo la influencia de Tuñón de Lara, cuyo primer trabajo relevante resultó pionero en el estudio de una temática todavía actual: *Ideología e historia. Sobre la represión franquista en la guerra civil* (Madrid, Akal, 1984).

El tercer fenómeno tiene que ver con la irresistible aparición de una corriente de investigaciones historiográficas de ámbito territorial circunscrito (local, provincial, regional o autonómico). Esta tendencia pronto se convirtió en hegemónica en virtud del apoyo recibido por las instituciones políticas y culturales correspondientes a esos

ámbitos administrativos. Entre los mejores trabajos de esta índole cabría citar los siguientes: Julio Aróstegui y Jesús Martínez, *La Junta de Defensa de Madrid* (Madrid, Comunidad Autónoma, 1984); Julián Casanova, *Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938* (Madrid, Siglo XXI, 1985); y Josep María Solé y Sabaté, *La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953* (Barcelona, Edicions 62, 1985).

En general, salvando obligados matices, cabría decir que las investigaciones históricas publicadas desde entonces sobre la Guerra Civil han ido arrumbando sin remisión las visiones unívocas y simplistas sobre la contienda en favor de esquemas interpretativos más pluralistas y complejos. Sin que por ello hayan desaparecido aquellas, tanto en forma de una reactualización de los mitos franquistas que fueron verdad oficial hasta 1975, como en forma de renovadas idealizaciones de lo que fue la Segunda República en paz y en guerra.

II
LA SEGUNDA REPÚBLICA: POLÍTICA DE MASAS EN DEMOCRACIA

La Segunda República trajo la democracia a España en abril de 1931 y mediante el sufragio universal abrió las puertas a la era de la política de masas. Pero la generalizada alegría popular inicial fue resquebrajándose ante las dificultades encontradas por el nuevo régimen en el camino de la modernización del país: agudos desequilibrios sociales y territoriales, intensa polarización política e ideológica y hondo impacto de la crisis económica mundial. La consecuente dinámica política cobró la forma de una pugna triangular que enfrentaba a tres fuerzas con similares apoyos sociales e implantación territorial: el reformismo democrático republicano, la reacción autoritaria fascistizante y la revolución social internacionalista. A la altura de mediados del año 1936, esas tensiones habían creado las condiciones para una crisis de convivencia cívica muy grave y profunda, que planteó la posibilidad de cambiar los votos por las armas para dirimir de manera radical los problemas sociopolíticos y culturales planteados.

DEL AGOTAMIENTO DE LA MONARQUÍA A LA ESPERANZA DE LA REPÚBLICA

El resultado de las elecciones municipales celebradas el domingo 12 de abril de 1931, tras siete años de dictadura militar, fue crucial para la historia contemporánea de España por un doble motivo. En primer

término, porque supuso el epitafio final de la monarquía borbónica que había sido restaurada en 1874 y que estaba encabezada desde principios de siglo por el rey Alfonso XIII. En segundo orden, porque implicó el acta de nacimiento, pacífico e incruento, de la Segunda República española, casi sesenta años después de la caída de la efímera y turbulenta Primera República en 1873. Ambos fenómenos tomaron por sorpresa a casi todos los testigos contemporáneos, ya fueran monárquicos alfonsinos o republicanos de variadas tendencias, pese a que la consulta había sido la primera campaña electoral moderna de la historia española y se había convertido *de facto* en un plebiscito entre monarquía y república.

La derrota electoral monárquica había sido abrumadora en las ciudades y los principales centros urbanos. A pesar de tener en contra a los poderes constituidos y sus amplios recursos caciquiles, los candidatos de la conjunción republicana-socialista lograron una victoria incontestable en 41 de las 50 capitales de provincia y en todas las grandes concentraciones de población del país. Las aglomeraciones urbanas y los sectores más cultivados y modernizados del país rechazaron por amplia mayoría a un rey todavía aceptable para la manipulable opinión pública rural y agraria. Enfrentados a esa realidad y a las manifestaciones de entusiasmo republicano que invadieron las calles en los días 13 y 14 de abril, los políticos monárquicos optaron por negociar una salida pacífica a la crisis y aconsejaron al rey la partida hacia el exilio. El propio presidente del gobierno, almirante Aznar, reveló a la prensa el desconcierto de los líderes dinásticos: "¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un pueblo que se acuesta monárquico y se levanta republicano?".

La alternativa de resistir por la fuerza para preservar la corona era impracticable por una sencilla razón expuesta por el conde de Romanones, último ministro de Estado (Asuntos Exteriores), al propio Alfonso XIII: "Los sucesos de esta madrugada hacen temer a los Ministros que la actitud de los republicanos pueda encontrar adhesiones en elementos del Ejército y fuerza pública que se nieguen en momentos de revuelta a emplear las armas contra los

perturbadores". En consecuencia, el rey abandonó España en la tarde del 14 de abril de 1931, tras emitir un comunicado en el reconocía que las elecciones revelaban "que no tengo hoy el amor de mi pueblo". Pocas horas antes, los integrantes del comité que dirigía la coalición republicana-socialista, presididos por un católico y exministro liberal, el jurista Niceto Alcalá-Zamora, se constituían oficialmente en Gobierno Provisional de la República.

El súbito desplome de la monarquía hundía sus raíces en la etapa histórica precedente y, en esencia, era fruto de la incapacidad del sistema político de la Restauración borbónica para adaptarse a los rápidos cambios modernizadores sufridos por la sociedad y la economía española en el primer tercio del siglo XX, unas décadas de crecimiento económico y diversificación socio-ocupacional muy intensas. Como resultado, España contaba según el censo de 1930 con 24 millones de habitantes que disfrutaban de una esperanza media de vida de 52 años (14 más que en 1900) y vivían repartidos entre unos pujantes municipios urbanos (donde residía el 43% de la población) y numerosos pero decrecientes municipios rurales dispersos (donde habitaba el restante 57%). La tasa de alfabetización neta había alcanzado en aquella época el 71% de la ciudadanía española (base lectora de la numerosa y variada prensa que entonces circulaba), aunque todavía solo estaban escolarizados dos de cada tres niños en edad de cursar estudios primarios y apenas 37.000 jóvenes estudiaban en las universidades (poco más del 6% eran mujeres). También la composición de la población activa española mostraba síntomas de su lenta pero irreversible transformación. En 1930, por primera vez en la historia, la población laboral empleada en el sector primario agrícola había perdido su predominio secular y solo representaba al 45,5% de la población activa total, frente al 26,5% de población dedicada a actividades industriales y al 28% del variado sector terciario de servicios.

Precisamente esa composición de la población activa reflejaba el mayor de los contrastes socioeconómicos que parecían romper en dos mitades distintas al país. Por un lado, los dinámicos núcleos industrializados y enclaves urbanos modernos (con Madrid y

Barcelona superando ya el millón de habitantes) acogían a unas variadas burguesías y clases medias industriales, comerciales, artesanales, financieras y profesionales, así como a clases obreras cualificadas o semicualificadas (entre ellos, 1,3 millones de proletarios fabriles) y sectores populares sin cualificación y en su mayoría recién llegados a las ciudades desde el campo. Por otro lado, extensas zonas rurales preservaban una actividad agraria que parecía anclada en el tiempo y permitía malvivir a dos tipos de campesinado muy diferenciados: en el norte y centro del país residía la enorme mayoría de los casi dos millones de pequeños y medianos propietarios y arrendatarios, celosos de sus tradiciones y siempre pendientes de la climatología y los créditos para subsistir con sus minifundios y caseríos (el 90% menor de una hectárea de superficie laborable); mientras que en el sur (Extremadura, Andalucía y La Mancha) se agrupaban más de un millón y medio de míseros jornaleros sin tierra que eran empleados por una oligarquía terrateniente (menos de cien mil grandes propietarios) controladora de enormes latifundios (fincas superiores a cien hectáreas) que suponían algo más de la mitad de la tierra disponible en esa área.

Cabe apreciar esas dos Españas socioeconómicas, todavía mal comunicadas y localistas, atendiendo al contraste existente entre el variado mundo rural (el campo minifundista gallego, la mediana propiedad de las zonas cerealícolas leonesas y las dehesas latifundistas extremeñas) y la situación existente en las áreas de aglomeración urbana (las metrópolis madrileña y barcelonesa, la industriosa ría bilbaína o las cuencas mineras asturianas). Mientras que en 1930 el salario diario de un jornalero latifundista apenas llegaba a las cinco pesetas, el salario diario correspondiente a un obrero industrial casi alcanzaba las ocho pesetas. Por eso mismo, es harto probable, como señalaba Raymond Carr, que hacia 1930 "un romano (de la antigüedad) se habría encontrado en una finca andaluza como en su casa" y no hubiera dejado de reconocer en los campos españoles "el arado de madera, la hoz, la era y el alto horno de leña". Pero también es evidente que, para entonces, un viajero británico se habría sentido en casa en las ciudades españolas con

tendido eléctrico para mover tranvías, iluminar farolas, operar teléfonos y alimentar proyecciones cinematográficas en edificios soberbios para grandes masas. Era una coexistencia bien conocida por los propios testigos contemporáneos, como da fe Azaña en sus recuerdos de 1939:

> La sociedad española ofrecía los contrastes más violentos. En ciertos núcleos urbanos, un nivel de vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y a los pocos kilómetros, aldeas que parecen detenidas en el siglo XV. […] Una corriente vigorosa de libertad intelectual, que en materia de religión se traducía en indiferencia y agnosticismo, junto a demostraciones públicas de fanatismo y superstición. […] Provincias del noroeste donde la tierra está desmenuzada en pedacitos que no bastan para mantener al cultivador; provincias del sur y del oeste donde el propietario de 14.000 hectáreas detenta en una sola mano todo el territorio de un pueblo. En las grandes ciudades y en las cuencas fabriles, un proletariado industrial bien encuadrado y defendido por los sindicatos; en Andalucía y Extremadura, un proletariado rural que no había saciado el hambre, propicio al anarquismo.

Esa España "dual" de la modernización y el atraso combinados no era la manifestación última del sempiterno mito de "dos Españas" siempre mal avenidas y enfrentadas, como si fuera una maldición divina que pesaba sobre el país y sus habitantes. Los espacios geográficos y sus sectores productivos, atrasados o modernizados, nunca constituyen un protagonista sociopolítico, capaz de pensar, planificar y actuar: solo configuran escenarios y medios históricos en los que las personas, individualmente consideradas o colectivamente agrupadas, elaboran sus planes, definen sus propósitos y ejecutan sus acciones, siempre en interacción con sus semejantes. Las prosopopeyas antropomórficas, por efectistas que parezcan, siguen siendo generalizaciones impersonales y pseudo-organicistas que nunca pueden suplir al verdadero sujeto volitivo de la acción histórica real: el ser humano en su condición singular o en sus agrupaciones plurales. Por consiguiente, sobre la base física de esas "dos Españas" descritas, no surgían dos proyectos políticos unívocos con sus respectivos apoyos sociales, intereses económicos y cosmovisiones culturales.

Al contrario. En aquella sociedad española fragmentada y compleja se configuraron los tres núcleos de proyectos sociopolíticos antagónicos que existían en toda Europa en mayor o menor medida después del impacto devastador de la Gran Guerra de 1914-1918: el reformismo democrático, la reacción autoritaria o totalitaria y la revolución social. No en vano, por su condición de "guerra total" que había consumido millones de vidas en contextos de destrucción masiva de civiles y combatientes, la Primera Guerra Mundial había abierto las puertas a una nueva era de masas en la que aparecieron esos tres proyectos a tono con sus respectivos apoyos sociales e intereses económicos: el reformismo democrático que ofrecía sufragio universal y servicios sociales para conciliar economía capitalista, derechos individuales y cooperación interclasista (la opción triunfante en Gran Bretaña y Francia); la alternativa revolucionaria internacionalista de matriz proletaria y campesina que aspiraba a construir un régimen colectivista y antiburgués bajo la dirección de un partido-vanguardia obrero y popular (como en la Rusia bolchevique desde octubre de 1917); y el modelo reaccionario, ya autoritario ya totalitario, que postulaba un programa redentor de unión nacional y férrea disciplina social (como las variadas dictaduras militares de Europa centro-oriental desde 1919 y la dictadura civil de la Italia de Mussolini desde 1922).

La dinámica inaugurada por la ruptura de 1914-1918 y articulada en torno a las "Tres Erres" (Reforma, Reacción y Revolución) convirtió los años de entreguerras en un laboratorio de experimentación política singular donde la violencia llegó a ser parte legítima de la necesaria "higiene del mundo" por sus efectos depurativos y simplificadores (véase más en pp. 202 y siguientes). Una época de renacidas pasiones extremas cuyos brutales perfiles fueron bien definidos por Enzo Traverso: "La historia de Europa entre 1914 y 1945 es la de un continente desgarrado por una guerra civil".

España no entró en la Gran Guerra como beligerante, pero la tensión bélica sí entró en España de la mano de la movilización popular, de las exigencias de la guerra colonial en Marruecos y de la

virulenta "guerra de palabras" en apoyo a uno u otro de los combatientes europeos, como demostraron los conflictos del año 1917 y la aguda conflictividad sociopolítica de la inmediata postguerra. Fue entonces cuando los relativos equilibrios que habían preservado la estabilidad de la monarquía liberal-parlamentaria restaurada en 1874 y socavada por el desastre colonial de 1898 se rompieron definitivamente. Desde ese momento fueron configurándose alternativas políticas análogas a las del resto de Europa sobre tradiciones propias: un monarquismo católico cada vez más autoritario, antiparlamentario y ultranacionalista que sostendría la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1930; una corriente democrática que se articularía durante esa etapa sobre la colaboración entre el republicanismo burgués y el movimiento obrero socialista y reformista con el refuerzo del nacionalismo catalán; y una tendencia revolucionaria e internacionalista que se aglutinaría mucho más en torno al viejo anarcosindicalismo libertario que al nuevo y minoritario comunismo de inspiración soviética.

Así pues, a la altura de 1930, la España modernizada será escenario de actuación principal de los reformistas que se nutrían de las clases medias urbanas y de las clases obreras cualificadas, pero también contaba con la presencia de reaccionarios que abundaban en sus barrios acomodados o de sectores populares de religiosidad tradicional, del mismo modo que sentirá el creciente empuje de los revolucionarios implantados entre el obrerismo sin cualificación y expuesto al azote del desempleo. Por su parte, la España rural y atrasada había visto crecer sobre su suelo a unos reaccionarios que se reclutaban entre los grandes, medianos y pequeños campesinos propietarios, pero también a los revolucionarios que proliferaban entre la población jornalera de tierras de latifundio, con una menor presencia de elementos reformistas entre el campesinado no terrateniente ni proletarizado. En definitiva, la dinámica sociopolítica presente en España no era una lucha dual y binaria ("una España contra otra"), sino una pugna triangular que reproducía en pequeña escala la existente en toda Europa y cuyos apoyos respectivos se

encontraban tanto en zonas modernizadas como atrasadas en mayor o menor medida.

En el marco de esa lucha triangular, las elecciones municipales de abril de 1931 constituyeron un hito crítico que culminó con la sentencia de muerte de una monarquía agotada y el nacimiento esperanzado de la República. También cerraban el ciclo abierto con la instauración de la dictadura militar de Primo de Rivera de 1923 con patrocinio real. Con aquella medida que liquidaba el régimen parlamentario liberal de la Constitución de 1878, Alfonso XIII, además de faltar a su juramento, había apostado todas sus cartas al éxito de un régimen militar de fuerza y excepción que ofrecía estabilidad y cierto bienestar a cambio de la renuncia a las libertades civiles y al sufragio electoral. Sin embargo, en 1931, bajo el impacto creciente de la crisis económica mundial, resultaba evidente que la dictadura había fracasado en su tentativa ofrecer una solución permanente para la integración política de las pequeñas y medias burguesías de filiación liberal-democrática y de las clases obreras y populares agrupadas en sus propias organizaciones representativas. En efecto, para infortunio del monarca, el progresivo agotamiento del régimen militar había ido en paralelo a la expansión del republicanismo como esperanzada fórmula alternativa para la democratización de España.

Entre las clases medias burguesas, al lado del tradicional y cada vez más moderado Partido Republicano Radical (liderado por el periodista Alejandro Lerroux y su lugarteniente, Diego Martínez Barrio), surgieron otros muchos partidos que trataban de configurarse como ejes políticos de un republicanismo de izquierda, democrático, civilista y secularizante: Acción Republicana (fundada en 1925 y luego convertida en Izquierda Republicana: cuyo líder era el escritor Manuel Azaña); el Partido Republicano Radical-Socialista (creado en 1929 con figuras como el maestro Marcelino Domingo y el abogado Álvaro de Albornoz); o la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, constituida al amparo del prestigio del exmilitar Francesc Macià y de su delfín, el abogado Lluis Companys).

Por su parte, entre las clases obreras organizadas, el protagonismo correspondía al movimiento sindical socialista, que había experimentado un crecimiento muy notable desde principios de siglo y había logrado convertir la Unión General de Trabajadores (UGT) en una potente organización de masas liderada por el pragmático Francisco Largo Caballero, un obrero cualificado del ramo de la construcción. Ese crecimiento del ala sindical del socialismo superaba incluso al reforzamiento logrado por su ala política, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en cuyo seno convivían en precario equilibrio la ortodoxia aislacionista propiciada por Julián Besteiro, catedrático de lógica y presidente del PSOE, y la orientación favorable a una alianza antimonárquica con los republicanos defendida por líderes como el periodista autodidacta Indalecio Prieto y el jurista Fernando de los Ríos. Tampoco era ningún alivio para la monarquía en aquellas fechas el renacimiento del sindicalismo libertario de la mano de una Confederación Nacional del Trabajo (CNT) reconstituida en sus tradicionales bases de apoyo andaluzas y catalanas, sobre todo porque cada vez era más evidente su sometimiento a la recién fundada y radical Federación Anarquista Ibérica (FAI). Sin mencionar el igualmente inquietante retorno a la escena política de un minúsculo pero muy activo Partido Comunista de España (PCE).

Fue en ese crítico contexto cuando Alfonso XIII decidió destituir a Primo de Rivera en enero de 1930 para encomendar la tarea de formar gobierno al general Berenguer, como paso previo para retornar gradualmente al sistema parlamentario mediante elecciones libres escalonadas (primero municipales y, en último lugar, generales). Sin embargo, el proyecto político de la "dictablanda" de Berenguer (heredado por su sucesor, el almirante Aznar) tropezó con el grave obstáculo de la coalición que se había fraguado entre el movimiento obrero de inspiración socialista y el movimiento republicano de extracción pequeño-burguesa. No en vano, desde el verano de 1930, los partidos republicanos habían alcanzado un pacto político con el PSOE-UGT para promover la democratización de España al amparo de una República. En un primer momento, las fuerzas

firmantes del llamado "Pacto de San Sebastián" no consiguieron su objetivo de derribar la monarquía por medio de una huelga general convocada en diciembre de 1930, que fue poco seguida y fácilmente aplastada. Sin embargo, la fuerza insospechada de este potente movimiento antimonárquico se manifestó en la consulta electoral de abril de 1931.

La historia del quinquenio republicano suele dividirse en tres periodos diferentes: un primer bienio reformista (1931-1933); un segundo bienio rectificador (1934-1935); y el semestre de gobierno del Frente Popular en la primera mitad de 1936. Como veremos, la peculiaridad de la dinámica política española durante esos cinco años residiría en un fenómeno crucial: a diferencia de otros países continentales, en España fue alcanzándose un equilibrio inestable, un empate virtual de apoyos y capacidades (y de resistencias e incapacidades), entre las fragmentadas fuerzas de la alternativa reformista y su heteróclita contrafigura reaccionaria, haciéndose imposible la estabilización del país tanto por la similar potencia respectiva de ambos contrarios (y su compartida incapacidad para reclutar otros apoyos fuera de los propios), como por la presencia de un poderoso tercio excluso revolucionario, enfrentado a ambos por igual y volcado en su propia estrategia insurreccional. Sin menospreciar el hecho, singularmente español, de que cada una de esas alternativas evidenció una notable diversidad interna (en términos de partidos y grupos operativos tanto como de estrategias y tácticas propias) que dificultó su propia capacidad de actuación.

En estas circunstancias, la dinámica política de la Segunda República pareció configurarse como una especie de tenaza con dos brazos y un mismo objetivo a batir: Reacción y Revolución frente a Reforma. Con una circunstancia agravante de gran calado: según transcurría el quinquenio, las fuerzas reformistas-democráticas verían menguar sus filas a medida que la crisis económica internacional acentuaba su impacto disolvente sobre las relaciones sociales y propiciaba una polarización política favorable a ambos extremos del espectro existente. El sociólogo Juan José Linz apreció

bien el carácter catastrófico de ese proceso de polarización política y deslegitimación institucional en su diagnóstico de 1978:

> Toda la historia de la República puede ser considerada como un declive ininterrumpido, reflejo del crecimiento del número y la potencia de las oposiciones leales y semi-leales, prontas a colaborar con fuerzas desleales antes que a hacer frente común en un esfuerzo para estabilizar el régimen. […] Indicadores tales como el número de víctimas y la amplitud y persistencia de disturbios de orden público revelan que la crisis creció en intensidad y extensión a medida que pasaban los años. La memoria acumulativa amplificó la propaganda que generó un omnipresente temor a la guerra civil, una predisposición a la violencia preventiva que sólo realimentó el miedo y llevó a más propensión al uso de la violencia por el otro bando. Este círculo vicioso desembocó en la primavera de 1936 en una atmósfera de guerra civil no declarada.

En efecto, la más reciente literatura historiográfica sobre la Guerra Civil no ha dejado de subrayar que el proyecto democrático-republicano original de abril de 1931 sufrió una progresiva erosión de sus bases de apoyo sociales, políticas y territoriales durante el transcurso del quinquenio. Un proceso erosivo que llegó a conformar en 1936 una especie de "bloqueo político" y "parálisis institucional" de graves riesgos para la continuidad y consolidación del régimen.

EL BIENIO REFORMISTA DE 1931-1933

Entre abril de 1931 y octubre de 1933, ejerció el poder político una coalición de republicanos y socialistas que emprendió su tarea reformista bajo la dirección de un gobierno provisional presidido por Alcalá-Zamora (líder de la Derecha Liberal Republicana) y compuesto por los más destacados dirigentes de todos los partidos coaligados: el conservador Miguel Maura (cofundador de la DLR e hijo del antiguo líder carismático del conservadurismo dinástico) en la cartera de Gobernación; los radicales Alejandro Lerroux (al frente del ministerio de Estado, encargado de los Asuntos Exteriores) y Martínez Barrio (en Comunicaciones); el radical-socialista Marcelino Domingo (en Instrucción Pública); el republicano de izquierdas

Manuel Azaña (ministerio de Guerra); el catalanista Luis Nicolau d'Olwer (ministerio de Economía); y tres socialistas en las carteras de Hacienda (Prieto), Trabajo (Largo Caballero) y Justicia (Fernando de los Ríos).

Era un gobierno de coalición amplio y heterogéneo cuyos integrantes apenas gozaban de experiencia de gestión en ayuntamientos. Y comenzó a gobernar con decisión y acaso a veces con precipitación para hacer frente a sus muchos desafíos: 1°) En la cuestión catalana, atajando la creación unilateral de una república catalana por ERC y convenciendo a Macià de que presidiera una Generalitat concebida como gobierno interino hasta la concesión de un Estatuto de Autonomía; 2°) En el plano social, con medidas de protección obrera y jornalera dictadas por Largo Caballero y planes de reforma agraria para el sur latifundista, ambas muy inquietantes para los grandes propietarios rurales; 3°) En el ámbito educativo, con la secularización de las escuelas y la aprobación de un vasto programa de construcciones escolares; 4°) En el orden militar, con una reforma del ejército para reducir las dimensiones del cuerpo de jefes y oficiales mediante jubilaciones con pagas íntegras y reorganización de divisiones administrativas; y 5°) En el campo religioso, frenando con dificultad un trágico brote anticlerical en mayo con el asalto a varios conventos e iglesias en algunas ciudades españolas y tras expulsar del país al cardenal Segura, primado de la iglesia, por sus proclamas filo-monárquicas.

En todo caso, a tono con su proclamada voluntad de democratización, el gobierno convocó elecciones generales a Cortes constituyentes por sufragio universal masculino (con mayoría de edad a los 23 años) y con un complejo sistema electoral básicamente mayoritario y de listas provinciales (para acabar con el caciquismo del distrito uninominal).

La coalición republicano-socialista volvió a presentarse a las elecciones celebradas a finales de junio de 1931, aunque la desaparición de la cuestión monárquica había minado su coherencia interna y dejado aflorar crecientes desacuerdos (sobre Cataluña, la reforma agraria o la legislación laboral). Pese a ello, revalidó su

triunfo con una amplia participación popular (el 71% del censo acudió a votar: 4,4 millones de hombres de los 6,1 convocados) y ante la práctica desorganización de sus adversarios de las derechas católicas y monárquicas, todavía desconcertados por el fracaso de abril. El nuevo congreso de 470 diputados reflejaba un nuevo sistema político pluralista extremo, con 19 partidos o grupos representados en la cámara. De todos ellos, según los análisis de Julio Gil Pecharromán, el PSOE era la minoría mayoritaria (115 diputados), seguido de los republicanos radicales de Lerroux (94), de los radical-socialistas (59), de la ERC (31), del partido azañista (28), y a mucha distancia del principal grupo opositor derechista (los "agrarios" y la Acción Nacional, con 26, liderados por el jurista católico salmantino José María Gil Robles) y de la unión de carlistas y nacionalistas vascos (15 diputados).

A pesar del éxito electoral, la gestión del nuevo gobierno, otra vez presidido por Alcalá-Zamora y similar en composición al anterior, pronto dejó ver que los partidos coaligados tenían proyectos diferentes. Solo la necesidad de promover un nuevo texto constitucional impuso cierta unidad de acción en unas Cortes fragmentadas y con muchos grupos donde la disciplina partidista era escasa. De hecho, el detonante de sus primeras crisis serían las diferencias internas evidenciadas en la elaboración de la Constitución, que se prolongó durante tres largos meses abarcando todo tipo de asuntos (vertebración territorial, papel del ejército y la iglesia, legislación civil y laboral, posibilidad de expropiación por causa de utilidad pública, voto femenino, etcétera). Las demandas socialistas para consagrar el principio de socialización forzosa de la propiedad de interés público fueron rechazadas por los radicales de Lerroux, que limitaban la acción expropiadora del estado y garantizaban la compensación justa de la misma. También las cláusulas relativas a la relación entre iglesia y estado (los artículos 26 y 27, que no solo confirmaban la abolición del culto oficial, sino que prohibían a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza) fueron motivo de controversia interna en el gobierno y en su mayoría parlamentaria. De hecho, la aprobación de esos artículos a

mediados de octubre de 1931 conllevó la dimisión de Alcalá-Zamora de su cargo presidencial y el abandono de su partido de la coalición.

Esa dimisión forzó un reajuste gubernamental que se saldó con la elevación de Azaña a la presidencia en virtud de sus dotes oratorias y de manera sorpresiva (dado el pequeño grupo parlamentario que lideraba). Pero la crisis gubernamental siguió acentuándose por la resistencia de los radicales de Lerroux a las propuestas socialistas de plasmación en el texto constitucional de sus avanzadas medidas sociales. En todo caso, el 9 de diciembre de 1931 las Cortes aprobaron la Constitución por gran mayoría (368 votos a favor de los 470 diputados) y con la oposición del grupo de Gil Robles. Era un texto extenso, inspirado en la constitución de la república de Weimar de Alemania y que, según autores diversos, otorgaba rango constitucional a preceptos que hubieran requerido mayor flexibilidad legislativa. Y ello por una razón apuntada por Gil Pecharromán:

> Su minuciosidad revelaba el afán de sus redactores por hacer de ella un auténtico código para la reforma social y política de España y por no dejar huecos a través de los que la derecha pudiera en un futuro desvirtuar el espíritu progresista que la informaba.

Aprobado el marco constitucional sin referéndum popular, el gobierno de Azaña intentó compensar el golpe de la dimisión de Alcalá-Zamora con su elección como primer presidente de la República. A mediados de diciembre de 1931, las Cortes confirmaron la propuesta por mayoría absoluta (410 votos) y Alcalá-Zamora pasó a ejercer un cargo con amplios poderes moderadores que se presentaba como garantía contra los posibles excesos radicales del poder ejecutivo. Pero con esa última medida la gran coalición republicano-socialista de abril de 1931 dejó de existir.

En efecto, tras la elección presidencial, Azaña formó nuevo gobierno ya sin presencia de los ministros radicales de Lerroux y apoyándose solo en los republicanos azañistas (Santiago Casares Quiroga, en Gobernación, o José Giral, en Marina), los radical-socialistas (Domingo en Agricultura y Albornoz en Justicia) y los tres ministros socialistas que optaban por seguir en la coalición: Largo

Caballero en Trabajo, Prieto en Obras Públicas y De los Ríos en Instrucción Pública. Era sin duda un gobierno más homogéneo que el anterior, pero con menos apoyos en las Cortes y en la sociedad. Además, empezaba a actuar en un momento especialmente crítico, como apunta Mercedes Cabrera:

> Porque la proclamación de la República se produjo cuando ya se habían anunciado los primeros síntomas de una crisis económica, acompañada de la paralización de actividades y el incremento del paro forzoso, que en parte fue consecuencia de la gran depresión mundial, pero que en gran medida obedeció a causas internas.

En todo caso, apenas consciente de la intensidad de la crisis en ciernes, bajo la inspiración de Azaña, el gabinete republicano-socialista intentó poner en marcha un amplio programa de reformas que tenía dos campos de aplicación fundamentales: por un lado, una reforma profunda del aparato del estado en sentido democrático; y por otro, una reforma intensa de la estructura social española en sentido progresista.

Para la reforma del estado, el gobierno emprendió una triple tarea repleta de escollos: 1°) Conseguir la secularización mediante la tajante separación de la iglesia respecto del estado, especialmente en el campo educativo, que quedaba proscrito para las órdenes religiosas y fue objeto de atención preferente: hasta 1934 se construyeron más de diez mil escuelas de un programa de construcción de 27.000 para acoger a los alumnos procedentes de centros religiosos; 2°) Consolidar la primacía del poder civil sobre el militar mediante una reforma del ejército que eliminara la tentación militarista y la tradición pretoriana, lo que supuso una reducción de efectivos en la oficialidad y cambios de destino favorables a los mandos republicanos, unas gestiones que concitaron mucha animadversión contra Azaña como responsable último de las medidas; y 3°) Modificar la estructura centralista y uniformizadora del estado gracias a la posibilidad constitucional de establecer un estatuto de autonomía para Cataluña (aprobado en septiembre de 1932) y otras "regiones históricas" que lo solicitaran y justificaran mediante plebiscito municipal.

Para la reforma de la sociedad, el gabinete aprobó una serie de medidas jurídicas y laborales muy avanzadas para la época. Por ejemplo, las leyes de protección laboral obrera, de salario mínimo y de jornada de trabajo máxima; la concesión del voto electoral a las mujeres; la secularización de cementerios; la aprobación de la ley de divorcio y la implantación de la coeducación de sexos en todos los niveles educativos. El gran proyecto de esta faceta del programa, sin embargo, habría de ser la Ley para la Reforma Agraria en el sur latifundista, aprobada en septiembre de 1932, que preveía la expropiación forzosa de tierras para el asentamiento en ellas de campesinos jornaleros previa indemnización del propietario terrateniente.

Como era previsible, ese ambicioso proyecto para la modernización democrática del estado y de la sociedad española originó fortísimas resistencias. Y ello tanto por la derecha como por la izquierda, en una especie de tenaza virtual que acabaría a la postre con la capacidad de acción gubernativa.

Por parte de las derechas, desarticuladas tras la dictadura, la resistencia a la gestión del gabinete se conformó en torno a dos ejes programáticos: la defensa de la catolicidad agredida por un gobierno laico y la defensa de la unidad de la patria amenazada por las previsiones autonómicas. Pero esta resistencia adoptó dos vías estratégicas distintas y hasta enfrentadas en ocasiones.

Por un lado, las derechas monárquicas, tanto alfonsinas como carlistas, optaron desde el principio por una estrategia de oposición directa que confiaba en la posibilidad de utilizar el ejército como instrumento para la destrucción de la República. Sus organizaciones fueron el grupo alfonsino de Renovación Española, dirigido por José Calvo Sotelo, exministro de Hacienda de la dictadura; y la Comunión Tradicionalista, la renacida organización carlista liderada por Manuel Fal Conde, en la que persistía el movimiento reaccionario decimonónico cuyo lema seguía siendo "Dios, Patria y Rey". A estos dos grupos se les sumó desde octubre de 1933 Falange Española, un pequeño partido de inspiración fascista y mussoliniana liderado por el hijo del fallecido dictador, el joven abogado José Antonio Primo de

Rivera. El gran momento y fracaso de esta derecha "catastrofista" llegaría el 10 de agosto de 1932, cuando el general Sanjurjo (exdirector general de la Guardia Civil) intentó un abortado pronunciamiento militar para evitar que las Cortes aprobaran el estatuto de autonomía para Cataluña y la Ley de Reforma Agraria.

Por otro lado, las derechas católicas se estructuraron en la Confederación Española de Derechas Autonómas, creada bajo la inspiración de la jerarquía episcopal. La CEDA era un moderno partido de masas que no pretendía ya la vuelta del rey, se declaraba "accidentalista" respecto a la forma de estado y circunscribía su actuación a la defensa posibilista dentro de la legalidad de tres principios claves: el mantenimiento de la unidad nacional, el respeto a la propiedad privada, y la salvaguardia de los derechos de la religión católica. Para lograr esos fines y conseguir la reforma de la Constitución, la CEDA, bajo la hábil dirección de José María Gil Robles, renunció al uso de la fuerza y concentró sus energías en la lucha parlamentaria para ganar las elecciones y llevar a cabo su programa desde el poder.

Tanto más importante que la oposición de las derechas fue la oposición que encontró el gabinete de Azaña por parte de la izquierda obrera y sindical. La hostilidad del PCE era poco importante porque su militancia no suponía gran problema (apenas diez mil afiliados) y su implantación entre la clase obrera y jornalera agraria era insignificante, aparte de algunos puntos en Vizcaya, Asturias y Sevilla. Sin embargo, la CNT había resurgido tras la dictadura como una organización de masas (con más de medio millón de afiliados en 1931), bien implantada de nuevo en Andalucía y Cataluña, y en la que la dirección había caído en manos de anarquistas de la FAI (como Buenaventura Durruti, Juan García Oliver o Federica Montseny) en detrimento de los anarcosindicalistas más moderados (como Juan Peiró o Ángel Pestaña).

Considerando que el cambio de forma de estado en nada afectaba a la lucha social por la transformación revolucionaria (la República era "tan burguesa" y represiva como la monarquía), la CNT desplegó una estrategia insurreccional contra el gobierno que fue jalonando

de huelgas generales todo el bienio, con su secuela de detenidos y muertos en choques entre sindicalistas y fuerzas de orden público. El punto culminante de esa estrategia fue la huelga general revolucionaria convocada en enero de 1933 bajo la convicción de que "el fascismo no viene, ya está en el poder". La represión de esa nueva tentativa de "gimnasia revolucionaria" ocasionó varios muertos en la villa gaditana de Casas Viejas y provocó un grave deterioro del prestigio del gobierno de Azaña en el seno de la clase obrera.

Sometido al fuego cruzado de la militancia cenetista y de la resistencia conservadora, a finales de 1933 la capacidad del gabinete para proseguir las reformas estaba seriamente dañada. Sobre todo porque a la altura de ese periodo los efectos de la crisis internacional hostigaban a la frágil economía española y lastraban las posibilidades presupuestarias para financiar los proyectos reformistas. Como ha señalado Pablo Martín Aceña, para España "la década de 1930 fue un desastre" que frenó de manera brusca el proceso económico expansivo iniciado a finales del siglo XIX: entre 1929 y 1935 el PIB descendió casi un 10%, mientras la inversión caía en torno al 35%, las exportaciones retrocedían en una cuarta parte y el saldo del presupuesto público pasaba de balances positivos a déficits acumulados.

Esas dificultades gubernativas para superar los efectos disolventes de la gran depresión provocaban la frustración de sus propias bases sociales, particularmente en las filas del movimiento socialista. Así lo percibían a principios de 1932 los diplomáticos británicos destinados en España, que explicaban a su gobierno las dificultades afrontadas por el gabinete de Azaña:

> Es cierto que la situación económica y financiera del país, debido no sólo a conflictos internos sino también a la crisis mundial, ha creado un gran paro y extrema pobreza en las ciudades y los campos. El descontento generado hace que la gestión administrativa sea más difícil de lo que hubiera sido el caso en otra circunstancia. Además, este proceso socava el inicial entusiasmo pro-republicano, especialmente entre los trabajadores, a quienes los agitadores constantemente les dicen que la revolución republicana ha sido secuestrada por burgueses egoístas y que es necesario

> hacer otra nueva. […] Muchos obreros y campesinos en muchas partes del país apenas tienen algo que llevarse a la boca para comer. De ahí muchos problemas.

En efecto, la principal consecuencia de la crisis económica fue provocar un crecimiento espectacular del número de obreros en paro: en 1933 su cifra alcanzaba los 619.000, de los cuales el 60% pertenecía al sector agrario, eje de la problemática social española. Y ese paro generó la intensa conflictividad sociolaboral que registraron los años 1931-1933, cuando se pasó de contar de manera oficial 734 huelgas y 284.208 huelguistas al principio a registrar 1.127 huelgas y 908.634 huelguistas al final. Una escalada de conflictos que tuvo su secuela de muertos y heridos en choques con la Guardia Civil (en el campo) y la Guardia de Asalto (en las ciudades) y que acabaría con la alegría popular de abril de 1931 fomentando una creciente radicalización de las masas obreras para beneficio de las opciones revolucionarias frente a las reformistas.

En esa situación de desgaste brutal, tras varios errores del ejecutivo de Azaña, el golpe definitivo a su estabilidad lo dio la eficaz oposición parlamentaria ejercida por el Partido Radical. Lerroux estaba decidido a convertirse en el eje de un republicanismo conservador que estabilizara el régimen, aplacara la hostilidad católica y restaurase la confianza patronal en la gestión económica. Ante la imposibilidad de formar un gobierno sólido con aquellas Cortes fragmentadas, Alcalá-Zamora optó por convocar nuevas elecciones generales.

EL BIENIO RECTIFICADOR DE 1934-1935

Las elecciones celebradas el 19 de noviembre de 1933 fueron un hito crucial en la dinámica sociopolítica de la Segunda República por varias razones. Ante todo, significaron la definitiva entrada en la era de la política de masas en virtud de la presencia de un censo electoral duplicado respecto a 1931: fueron llamados a las urnas casi trece millones de electores (todos los hombres y mujeres mayores

de 23 años) y ejercieron su derecho de voto casi nueve millones (el 67,4%). En segundo lugar, la campaña electoral fue intensa y modernizada y los resultados electorales fueron fruto "de los deseos del cuerpo electoral, hasta el punto que el fraude y la corrupción tuvieron en ellos una incidencia marginal" (juicio de Roberto Villa). Y, en tercer lugar, reflejaron una polarización aguda de las opciones electorales que evidenciaban una creciente desafección respecto del régimen democrático republicano en sectores importantes del espectro político.

El tenor de esa radicalización incipiente cabe apreciarlo en las declaraciones hechas en campaña por los dos máximos dirigentes de los movimientos sociopolíticos que articulaban la mayoría social del país: Largo Caballero como líder del movimiento socialista (que optaba por acudir a las urnas en solitario rompiendo su coalición con los republicanos) y Gil Robles como líder del catolicismo político (que conseguía agrupar en torno a candidaturas dominadas por la CEDA a buena parte de las derechas). El primero, recién cesado de su cargo de ministro de Trabajo y muy sensible a la presión de sus bases sindicales, frustradas por la experiencia del bienio, pronunciaba en Badajoz una arenga electoral reveladora de una concepción instrumental de las reglas de juego democráticas constitucionales:

> Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la Guerra Civil. ¿Qué es sino la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena Guerra Civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o por desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. El día 19 vamos a las urnas… Mas no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas.

Por su parte, en esa misma campaña, Gil Robles mostró idéntico desapego por el régimen parlamentario democrático. En su primer discurso en Madrid, el 15 de octubre de 1933, declaró sin ambages:

> Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! Para eso nada de

> contubernios. No necesitamos el Poder con contubernios de nadie. Necesitamos el Poder íntegro y eso es lo que pedimos. Entre tanto no iremos al Gobierno en colaboración con nadie. Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer.

En medio de esas retóricas tronantes, que acrecentaban la desconfianza mutua y reducían los márgenes para el consenso, el resultado de la consulta electoral fue un cambio radical y sorprendente. La victoria correspondió a la CEDA, convertida en la nueva minoría mayoritaria (115 diputados), seguida a estrecha distancia del Partido Radical de Lerroux, convertido ya en un partido centrista (101 diputados), y muy por delante de las derechas catastrofistas (21 diputados carlistas y 13 de Renovación Española). Cedistas y radicales combinados tenían mayoría suficiente en las nuevas Cortes puesto que el PSOE había rebajado a la mitad su representación (59 diputados), en tanto los partidos republicanos se habían hundido (Izquierda Republicana de Azaña solo había conseguido 11 diputados) y solo la Esquerra catalana sobrevivía al desplome (con 17 diputados). En votos populares, la victoria de la derecha era neta pero más matizada: consiguió poco más de 4 millones de votos en conjunto, frente a los 2,8 millones de las izquierdas y los 1,6 millones del centro republicano.

Aparte del éxito de la movilización católica en esta convocatoria electoral, que causó estupor entre sus adversarios, la derrota de republicanos y socialistas se debía a la combinación de otros tres factores: en primer lugar, era el producto de su propia desunión puesto que habían acudido a las urnas por separado, una decisión suicida habida cuenta de que el sistema electoral favorecía a la mayoría; en segundo término, era el efecto de la llamada a la abstención de los anarquistas, que había tenido eco masivo en algunos sectores obreros y populares urbanos y rurales; y en tercer lugar, era explicable en virtud del nuevo voto de las mujeres, que se inclinó mayormente hacia las candidaturas de la CEDA y los partidos centristas.

Dado que la CEDA no podía formar gobierno en solitario y todavía no había prestado juramento de lealtad a la Constitución, se formó un gobierno minoritario del Partido Radical presidido por Lerroux que tenía a Martínez Barrio en la cartera de Guerra. Era un gabinete que gozaba de la benevolencia tácita de la CEDA y podía contar con su apoyo parlamentario en temas concretos por falta de otra alternativa, como confesaría Gil Robles en sus memorias: "No quedaba, pues, otro remedio que transigir con una situación de centro y obtener el mayor beneficio posible de tan delicada coyuntura".

Esa situación significaba una grave hipoteca para los radicales puesto que pronto descubrieron que la CEDA prestaba o retiraba su apoyo en función del carácter más o menos derechista de las propuestas gubernamentales. En esas circunstancias, a lo largo del primer año de legislatura, el ejecutivo experimentó varias crisis internas que fueron debilitando su fortaleza y generando escisiones (como la protagonizada en mayo de 1934 por Martínez Barrio que fundaría la Unión Republicana).

En virtud de su precariedad parlamentaria, los gobiernos de Lerroux con apoyo cedista fueron rectificando gradualmente las reformas sociales aprobadas con anterioridad: se congeló la reforma agraria por problemas presupuestarios y en atención a las protestas de los propietarios rurales; se modificó la legislación laboral a favor de los patronos o se dejó en suspenso su aplicación en varios ámbitos; se concedió la amnistía al general Sanjurjo y a los implicados en el golpe de 1932, aunque no a los anarquistas encarcelados; se aparcó la legislación secularizante para permitir la apertura de colegios religiosos y el pago de haberes del clero; se limitaron los traspasos de competencias al gobierno autónomo catalán y se impugnaron algunas de sus medidas, etcétera. Todo ello a la par que el deterioro de la coyuntura económica proseguía su curso y paralizaba las obras públicas y la construcción debido a los graves problemas presupuestarios generados por el desplome del valor de las exportaciones y la débil base tributaria de la Hacienda nacional. Esa contracción económica, que había extremado las

inquietudes de los empresarios, también agudizaba el malestar de las clases obreras y radicalizaba las bases del movimiento sindical socialista en franca competencia con la siempre presente movilización anarcosindicalista.

En efecto, la respuesta de la CNT a los resultados electorales había consistido en un levantamiento revolucionario a principios de diciembre de 1933. Liderado por Durruti, el movimiento ocasionó más de ochenta muertos y seis mil detenidos por incidentes graves en distintos puntos de Aragón, La Rioja, Extremadura y Andalucía. El enésimo fracaso libertario no desanimó a sus fanatizados inductores. Tampoco desactivó la creciente radicalización de los socialistas, que habían acordado responder al fiasco electoral con una grave advertencia a los radicales: "cooperar con ellos [la CEDA] es una traición" y su posible entrada en el gobierno sería respondida con "el compromiso de desencadenar, en este caso, la revolución". Es posible que para muchos de sus líderes (como Prieto) se tratara de una bravata retórica destinada a impedir tal hecho, como también cabe interpretar así las llamadas de Azaña a los radicales para impedir "la entrega de la República a sus enemigos". Pero es evidente que no lo era para Largo Caballero y la influyente izquierda socialista, que preconizaba la bolchevización del PSOE y la preparación de la revolución con consignas publicadas en el diario *El Socialista* de este tenor: "¿Concordia? No. ¡Guerra de clases! Odio a muerte a la burguesía criminal" (enero de 1934).

Esas eran las ideas dominantes entre los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT, que en junio de 1934 convocaron una huelga general campesina para exigir aumentos salariales y la aceleración del proceso de reforma agraria y de asentamiento de campesinos sin tierra. Mal preparada y desigualmente seguida, la huelga fue rápidamente desarticulada por el gobierno con detenciones masivas, clausura de locales sindicales y suspensión de ayuntamientos socialistas comprometidos en la acción.

El momento culminante en este proceso de "rectificación" de la República llegó a principios de octubre de 1934. Fue entonces

cuando Gil Robles condicionó la renovación de su apoyo al gobierno radical a la entrada de la CEDA en el gabinete. Temerosos de que una vez en el poder pudiera actuar como lo había hecho en marzo el canciller Dollfuss en Austria (destruyendo la democracia e implantando una dictadura católica), los socialistas reiteraron su advertencia de que si esa entrada tenía lugar responderían con una huelga general de protesta de alcance borrosamente ilimitado (para "defender la República" según Prieto; para "hacer triunfar la Revolución", según Largo Caballero). Sin embargo, para sorpresa de ambas tendencias socialistas y de los azañistas, Lerroux aceptó la demanda de Gil Robles y Alcalá-Zamora aprobó la decisión, que tenía lógica parlamentaria y era congruente con su esperanza de incorporar a las derechas católicas al juego político constitucional. Como resultado, el 4 de octubre de 1934 se formó un gobierno de coalición entre radicales y cedistas presidido por Lerroux que contaba con tres ministros de la CEDA (de su sector más demócrata-cristiano y menos antirrepublicano).

Como habían anunciado, el PSOE y la UGT decretaron la huelga general indefinida en toda España el 5 de octubre de 1934 y sin el apoyo de la CNT. La acción fue secundada un día después en Cataluña por el gobierno autónomo de Companys mediante la proclamación unilateral del "Estado catalán de la República Federal Española". Sin embargo, tanto la huelga socialista como la iniciativa secesionista catalanista, ambas productos de la improvisación voluntarista de sus respectivos líderes, fueron aplastadas por la imposición del estado de guerra y la movilización del ejército. Las operaciones estuvieron dirigidas por el general Francisco Franco Bahamonde, uno de los militares de más prestigio profesional de la época, en calidad de asesor personal del ministro de Guerra. Ese aplastamiento fue rápido y básicamente incruento en toda España, salvo en Barcelona y especialmente en la región asturiana, donde la huelga devino una insurrección armada de las milicias ugetistas del sindicato minero, apoyado por militantes anarquistas y comunistas.

En efecto, en Asturias la "Alianza Obrera" dirigida por el minero socialista Ramón González Peña consiguió liquidar la resistencia de la

Guardia Civil en las cuencas mineras, ocupar las ciudades de Avilés y Gijón e implantar durante quince días un nuevo orden social revolucionario. La acción incluyó el asesinato de 34 sacerdotes y seminaristas y la quema de varias iglesias: el primer episodio de violencia anticlerical después de muchas décadas en España. La represión de ese "octubre rojo" asturiano requirió la movilización de más de quince mil soldados y tres mil guardias civiles, además de fuerzas de la Legión y regulares indígenas ("moros"). La lucha cobró extraordinaria dureza con episodios de combates cuerpo a cuerpo en Oviedo, que vio incendiarse su catedral gótica y su universidad renacentista, además de buena parte de su centro histórico. Al final, el 18 de octubre, la dirección socialista se rindió a las fuerzas militares y fue posible ir descubriendo el terrible saldo de aquella tentativa: mil cien víctimas mortales entre los insurrectos y trescientas de las fuerzas militares.

La crisis de octubre de 1934, y sobre todo el episodio asturiano, fue un tajo en el devenir de la República. Azaña lo recordaría en 1939: "Era el prólogo de la guerra civil". Amplios sectores sociales conservadores quedarían alarmados por la violencia de aquella experiencia revolucionaria y abrigarían serias dudas sobre la lealtad democrática y constitucional del movimiento socialista y del catalanismo de izquierdas. Por su parte, a la vista de las medidas de fuerza empleadas para acabar con la insurrección y anteriores manifestaciones de protesta (la huelga campesina de junio), extensos segmentos obreros confirmarían su desconfianza hacia las vías políticas parlamentarias y nutrirían las filas militantes que forzaban la radicalización de los sindicatos.

En todo caso, el fracaso del movimiento socialista y del catalanismo fue seguido de una dura represión y de una profundización del programa contrarreformista de la coalición radical-socialista. Aparte de los casi treinta mil detenidos por los sucesos (y de las veinte sentencias de muerte dictadas por los tribunales: solo dos ejecutadas), fueron cesados los ayuntamientos presididos por socialistas, suspendida la autonomía catalana y encarcelado su gobierno. Poco después, a principios de mayo de

1935, la CEDA exigió incrementar su presencia en el ejecutivo a tono con su fuerza parlamentaria. El nuevo gabinete de composición paritaria radical-cedista estuvo presidido por Lerroux y contaba con la presencia de Gil Robles en la cartera de Guerra. Fue el gobierno que promovió la aprobación en agosto de una Ley para la Reforma de la Reforma Agraria que suponía en realidad su desmantelamiento. Y que también aprobó una serie de medidas militares que reforzaban el papel del ejército como guardián del orden social de la mano de generales conservadores como Franco (nombrado jefe del Estado Mayor Central).

Sin embargo, la actuación del gabinete radical-cedista no estuvo exenta de tensiones internas en los meses posteriores al triunfo de octubre de 1934. La razón estribaba en un grave problema político de fondo: ambas partes discrepaban sobre el alcance último de las contrarreformas en curso y, sobre todo, disentían sobre el mantenimiento del propio régimen democrático y de la Constitución de 1931. En esencia, Lerroux y Alcalá-Zamora entendían que las medidas de emergencia eran transitorias y habrían de ser derogadas a corto plazo, permitiendo la reintegración del socialismo y el catalanismo en la vida política democrática. Sin embargo, Gil Robles las estimaba como medidas permanentes hasta que la reforma constitucional (solo posible a partir de diciembre de 1935 sin una mayoría de dos tercios, según la propia norma) permitiera dar al régimen un sentido más autoritario y corporativo, en la línea del admirado *Estado Novo* portugués de Salazar.

La represión desatada contra las izquierdas en general (Azaña fue detenido e inculpado injustamente por la insurrección) y la amenaza que suponía la CEDA en el poder potenciaron un nuevo movimiento hacia la unidad entre las masas republicanas y socialistas. Recuperada su libertad al demostrarse su inocencia, Azaña emprendió a finales de mayo de 1935 una campaña de mítines por toda España para restablecer la coalición reformista de 1931 y que republicanos y socialistas concurriesen unidos a las próximas elecciones. Aprovechando la simpatía popular que generaba hacia su persona la crítica destemplada de las derechas, Azaña consiguió con

su campaña reverdecer el ánimo de los republicanos de izquierda. Pero también originó una división en el socialismo que fracturó al movimiento en dos mitades irreconciliables. La corriente moderada, bajo la inspiración de Prieto y mayoritaria en la dirección del PSOE, era partidaria de aceptar esa coalición y volver al poder por vía electoral para aplicar las reformas de tinte socialdemócrata interrumpidas en 1933, rechazando la experiencia revolucionaria asturiana como un error estratégico letal. Sus tesis tropezaban con la corriente radical liderada por Largo Caballero, que rechazaba la repetición de la colaboración gubernativa, propugnaba la "bolchevización" y apostaba por una estrategia de presión obrera autónoma desde la calle para disputar a la CNT su liderazgo reivindicativo.

Por imposición de esta facción largo-caballerista, la nueva conjunción republicano-socialista hubo de ser ampliada hacia la izquierda dando cabida al pequeño PCE (que aprovecharía la ocasión para crecer mediante la absorción de las juventudes socialistas) y atrayendo el voto anarquista con la promesa de amnistía para todos los presos por motivos políticos. De este modo, a mediados de enero de 1936, las izquierdas habían restablecido su unidad de cara a una nueva consulta electoral y habían constituido el llamado Frente Popular (integrado por Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, PCE y ERC, además de otros grupos menores).

Ese reagrupamiento electoral de las izquierdas tuvo lugar a la par que se desmoronaba la mayoría gubernamental radical-cedista en el otoño de 1935, víctima de sus propias divisiones latentes y de un escándalo de corrupción que acabó con Lerroux y con el viejo Partido Radical (el descubrimiento de los sobornos aceptados para autorizar un nuevo juego de ruleta trucada: el caso *straperlo*). Gil Robles intentó aprovechar la crisis para exigir a principios de diciembre de 1935 la presidencia del gobierno para su partido, consciente de que ya sería posible proceder a la reforma constitucional con una mayoría absoluta inferior a los dos tercios de las Cortes. Pero tropezó con la negativa de Alcalá-Zamora a encargarle esa tarea precisamente por temor a esa medida de

revisión constitucional de límites imprecisos. En esa circunstancia, ante el carácter insoluble de la crisis ministerial y dada su temor a entregar el poder a la CEDA en solitario, Alcalá-Zamora optó por nombrar un gobierno interino presidido por Manuel Portela Valladares (republicano conservador independiente) que convocó nuevas elecciones generales.

EL SEMESTRE DEL FRENTE POPULAR DE 1936

La consulta electoral celebrada el 16 de febrero de 1936 fue bipolar y estuvo enmarcada en un contexto de renovada crisis económica y agudo antagonismo sociopolítico. Las candidaturas unitarias del Frente Popular compitieron con candidaturas también unitarias articuladas por la CEDA en el llamado Frente de la Contrarrevolución (del que solo quedó excluido el Partido Nacionalista Vasco, PNV, gracias a la promesa del Frente Popular de otorgar un estatuto de autonomía similar al catalán en caso de victoria). Y, de nuevo como en la campaña de 1933, los máximos líderes del catolicismo político y del sindicalismo socialista (por no señalar a sus coaligados respectivos carlistas o comunistas) rivalizaron en agresividad mediante discursos de intransigencia política que buscaban la exclusión del adversario y sembraban el odio/miedo hacia él.

En el caso de la CEDA, bajo el lema de luchar "Contra la revolución y sus cómplices", su líder abandonó su aparente moderación y recorrió toda España alertando sobre el riesgo de unas izquierdas revolucionarias, separatistas y masónicas que eran la "Anti-España" y exigían una respuesta vigorosa ("Dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande"), acaso violenta ("Quien nos busque, nos encontrará") y sacralizada ("Para defender los derechos de Cristo y su Iglesia"). El papel reservado a los derrotados en caso de victoria cedista tampoco era halagüeño, dada la identificación entre enemigos revolucionarios y reformistas cómplices que transmitía su propaganda electoral:

> ¡Ni lucha de clases ni separatismo! Esas ideas no pueden tener cabida en el concurso de las ideas lícitas. Podremos discrepar en cosas accidentales, en procedimientos; pero en la esencia de una sociedad única y de una patria única no debe haber discusión; al que quiera discutirlo hay que aplastarle.

La retórica tremendista de Largo Caballero no fue menor, en un proceso de retroalimentación de descalificaciones que auguraba mal para el futuro, pese a los intentos moderadores de otros líderes socialistas o de Azaña. El líder de la izquierda socialista no ocultó su compromiso con "el legado de Octubre" ni su mínimo apego a "la democracia burguesa":

> Las elecciones no son más que una etapa en la conquista del poder y su resultado se acepta a beneficio de inventario. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podemos laborar dentro de la legalidad, pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. Yo deseo una República sin lucha de clases; pero para ello es necesario que desaparezca una de ellas.

La consulta tuvo alta participación, con casi 10 de los 13,3 millones de votantes acudiendo a las urnas: el 72,9% del censo. Su resultado fue un apretado triunfo del Frente Popular sobre sus oponentes por escasa mayoría (unos 300.000 votos): cerca de 4,7 millones votaron candidaturas frentepopulistas, en torno a 4,4 millones votaron a las derechas unidas, alrededor de 400.000 al centro y 126.000 al PNV. Pero, en virtud de la ley electoral, ese apretado triunfo en votos populares significaba una mayoría absoluta de escaños en las Cortes: 278 diputados del Frente Popular (58,7%) frente a 124 de las derechas (el 26,2%: 88 de la CEDA, 12 de Renovación Española y 10 tradicionalistas, entre ellos) y 51 del centro (10,7%). Sin embargo, el panorama no era tan idílico porque los diputados frentepopulistas estaban repartidos entre 18 grupos o partidos y solo dos de ellos superaban los 80 escaños: el PSOE, con 99; e Izquierda Republicana, con 87 (en tanto que Unión Republicana sumaba 38, ERC obtenía 21 y el PCE recogía 17).

La victoria del Frente Popular, reforzada por la movilización de sus partidarios en la calle, motivó la primera tentación golpista seria por parte de las derechas. Animado por Gil Robles, Franco trató de

obtener el 18 de febrero de 1936 la autorización de Portela Valladares y de Alcalá-Zamora para declarar el estado de guerra y evitar el traspaso de poderes. Pero la tentativa de golpe institucional desde el poder se frustró por la resistencia de las autoridades civiles a dar ese paso crucial, por la falta de medios materiales para ejecutarlo y por la decisión del cauteloso jefe del Estado Mayor de no actuar hasta tener casi completa seguridad de éxito ("El Ejército no tiene aún la unidad moral necesaria para acometer esa empresa", confesó Franco al jefe del gobierno). En ese contexto de crisis sociopolítica, Portela Valladares dimitió de su cargo y Alcalá-Zamora llamó urgentemente a Azaña para asumir la jefatura del gabinete. Lo hizo al frente de un ejecutivo exclusivamente republicano, habida cuenta de la oposición largo-caballerista a la participación ministerial del PSOE y contando nominalmente con el apoyo parlamentario del Frente Popular.

Desde el primer momento, el gobierno puso en marcha con renovada energía todas las reformas anuladas o paralizadas en el bienio anterior en un contexto de amplia movilización obrera y jornalera y de creciente intensidad de la crisis económica. Buena prueba de la nueva disposición activa del gabinete fue su actitud respecto a la truncada reforma agraria: si hasta octubre de 1934 solo se había expropiado unas 89.000 hectáreas de tierra en las que habían sido asentadas 8.600 familias campesinas, entre marzo y julio de 1936 fueron expropiadas más de medio millón de hectáreas y asentadas más de 100.000 familias jornaleras. Igual decisión se apreció en el restablecimiento de la legislación laboral progresista, en la restitución de poderes a la Generalitat, etcétera. Y buena prueba de la crítica coyuntura económica imperante es la descripción de José Ángel Sánchez Asiaín sobre la situación en el primer semestre de 1936:

> El índice de producción industrial pasó, en efecto, de 86,9 en 1935 a 76,9 en marzo de 1936 (base 1929 = 100). De diciembre de 1935 a abril de 1936 la actividad de los ferrocarriles disminuyó un 21% y el movimiento marítimo cayó un 27% en los mismos cuatro meses. En febrero de 1936 la cifra de parados se situaba en 843.972 trabajadores, casi un 10% de la población activa, destacando el desempleo en las industrias agrícolas y

> forestales, que representaban dos tercios. La caída del descuento de papel comercial era un hecho. Y desde el punto de vista de nuestras relaciones económicas con el exterior, la coyuntura a lo largo de los meses de paz de 1936 se definía como de 'tácita suspensión de pagos de España en los mercados internacionales'.

Enfrentadas al pésimo escenario y a la enérgica voluntad reformista de un gobierno imbatible en las Cortes, las fuerzas derechistas reprochaban crecientemente al Frente Popular la responsabilidad de estar abriendo las puertas a la revolución social. En el consecuente proceso de polarización transitado a lo largo del primer semestre de 1936 todos los partidos de la derecha fueron fijando sus esperanzas de frenar las reformas por medio de una intervención militar similar a la de 1923. Calvo Sotelo, que ahora pugnaba con éxito con Gil Robles por el liderazgo derechista, expresó a la perfección esta esperanza en un famoso discurso electoral:

> Se predica por algunos la obediencia a la legalidad republicana; mas cuando la legalidad se emplea contra la Patria […] se impone la desobediencia. […] No faltará quien sorprenda en estas palabras una invocación indirecta a la fuerza. Pues bien. Sí, la hay… […] ¿A cuál? A la orgánica: a la fuerza militar puesta al servicio del Estado. […] Hoy el Ejército es la base de sustentación de la Patria. Ha subido de la categoría de brazo ejecutor, ciego, sordo y mudo a la de columna vertebral, sin la cual no es posible la vida. […] Cuando las hordas rojas del comunismo avanzan, sólo se concibe un freno: la fuerza del Estado y la transfusión de las virtudes militares –obediencia, disciplina y jerarquía– a la sociedad misma, para que ellas desalojen los fermentos malsanos que ha sembrado el marxismo. Por eso invoco al Ejército y pido al patriotismo que lo impulse.

Efectivamente, reactivando la veterana tradición del militarismo pretoriano, desde principios de marzo de 1936 fue extendiéndose en el seno del ejército, entre el generalato y la oficialidad conservadora, una amplia conspiración. Tenía como finalidad preparar un golpe militar para acabar con el gobierno y atajar lo que percibían como un peligroso deslizamiento hacia la revolución social y la desintegración nacional. Sus mayores apoyos provenían de los llamados militares "africanistas", que habían hecho mayormente su carrera en el

ejército de África y estaban curtidos por la experiencia de la cruenta guerra colonial en Marruecos. Era uno de ellos tanto el jefe supremo reconocido, el general Sanjurjo (exiliado en Portugal), como el director "técnico" de la conjura, el general Emilio Mola (excolaborador de Primo de Rivera que ahora estaba al mando de la guarnición de Pamplona). Y tomaban parte en la trama generales monárquicos (como Fanjul o José Enrique Varela), republicanos conservadores (como Gonzalo Queipo de Llano o Miguel Cabanellas) o simpatizantes de la CEDA progresivamente radicalizados (como el general Franco y el general Manuel Goded), además de otros oficiales agrupados en la clandestina Unión Militar Española.

Definitivamente perfilado entre abril y mayo de 1936, el plan golpista de Mola suponía una sublevación simultánea de todas las guarniciones militares al principio del verano para tomar el poder en pocos días, previo aplastamiento enérgico de las posibles resistencias en las grandes ciudades y centros fabriles de fuerte implantación socialista y anarquista. Su ejecución fue aplazada por las vacilaciones de Franco sobre sus posibilidades de éxito ("No contamos con todo el Ejército") y su oportunidad (hasta principios de julio creyó posible atajar la crisis por medios legales con menos riesgo). Franco también logró de sus compañeros de armas el compromiso de que el hipotético levantamiento no tuviera perfil político definido (ni monárquico ni de otro tipo) y resultara obra exclusivamente militar y sin dependencia de ningún partido derechista. Esta toma de la iniciativa política por parte de los generales contó con la aceptación de todas las fuerzas derechistas: tanto carlistas, como alfonsinos, como cedistas, como falangistas acabaron reconociendo de grado o por fuerza que era el ejército, con sus generales al frente, el que tenía el protagonismo operativo y la dirección política del inminente asalto violento contra el gobierno.

Mientras en las filas de la derecha se llevaba a cabo esta unificación de estrategias en torno al protagonismo de los mandos militares conjurados, en las filas de la izquierda se experimentó el proceso contrario. La precaria unidad electoral del Frente Popular fue desintegrándose en los meses posteriores: había sido una útil

plataforma para vencer en las elecciones, pero se reveló un precario instrumento de gobierno y pésima garantía de estabilidad parlamentaria. La CNT, una vez liberados sus presos con la amnistía, reanudó su línea insurreccional contra el estado y encabezó una oleada de huelgas obreras muy intensa en toda España. De hecho, el semestre contempló una conflictividad sociolaboral que rozaba las cotas máximas de todo 1933: hasta julio de 1936 se registraron 887 huelgas y 809.495 huelguistas en el país. Por su parte, el PSOE y la UGT agudizaban su división entre prietistas, que dominaban el partido y querían entrar en el gobierno para reforzarlo, y largo-caballeristas, que apostaban por la presión desde la calle para arrebatar a la CNT el protagonismo reivindicativo. En medio de esta división interna de las izquierdas y de las huelgas obreras y jornaleras, en mayo de 1936 Azaña fue elevado a la presidencia de la República (previa destitución parlamentaria de Alcalá-Zamora) y el gobierno quedó a cargo de otro republicano, Santiago Casares Quiroga, que mantuvo la misma línea gubernamental pero con menos autoridad real.

La creciente tensión política de la primavera de 1936 empezó a manifestarse mediante enfrentamientos entre escuadrones de Falange o carlistas y milicias de los partidos y sindicatos de izquierdas. Esos choques fueron creando una oleada de violencia callejera que constituyó el ambiente propicio para justificar ante amplios sectores sociales conservadores la necesidad de un golpe de estado militar como única alternativa frente al peligro del caos. El perfil e intensidad de esa violencia son discutibles, pero los datos de Rafael Cruz revelan su volumen, visibilidad y efecto social perturbador más allá de toda duda: desde el 16 de febrero al 17 de julio se computaron no menos de 189 "incidentes" políticos que tuvieron como resultado un mínimo de 262 víctimas mortales. Esos incidentes mayormente ocurridos en pueblos (casi el 60%) tuvieron unas víctimas que fueron principalmente militantes de izquierda (el 56,3%), de derecha (19%) y policías y militares (7,2%).

Alarmado por esa dinámica, Prieto había advertido el 1 de mayo de 1936 contra la tenaza que se volvía a cernir sobre el proyecto

reformista-democrático por parte del golpismo militar ("existen fermentos de subversión, deseos de alzarse contra el régimen republicano") y de la estéril movilización cenetista y largo-caballerista:

> La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. […] Porque el fascismo necesita tal ambiente; el fascismo, aparte todos los núcleos alocados que puedan ser su agentes ejecutores […], no es nada por sí, si no se le suman otras zonas más vastas del país, entre las cuales pueden figurar las propias clases medias, la pequeña burguesía, que, viéndose atemorizada a diario y sin descubrir en el horizonte una solución salvadora, pudiera sumarse al fascismo.

Pero ni el fantasma de la escisión socialista, ni las advertencias sobre el peligro de la conjura militar apaciguaron los ánimos del largo-caballerismo y del anarquismo. La CNT, tras la clausura de su congreso en Zaragoza el 15 de mayo, no concedía importancia al peligro golpista y solo esperaba la ocasión para poner en práctica su "concepto confederal del comunismo libertario". Por su parte, el 26 de junio, Largo Caballero reiteraba en Madrid su retórica revolucionaria y desestimaba el riesgo golpista fiándose del fracaso de Sanjurjo en 1932:

> Se nos está hablando todos los días del peligro de la reacción y del golpe de Estado. En efecto, estamos siempre ante ese peligro, pero yo tengo la pretensión de que si ahora no ha surgido no es debido a la política que algunos preconizan y propugnan sino a la actitud de la clase obrera […]. No se puede negar que un día puede amanecer con una dictadura. ¡Ah! Pero que tengan en cuenta los que lo hagan que al día siguiente, por muchos entorchados en la bocamanga, la producción no la harán ellos. […] No conseguirán más que disfrutar unos días o unos meses de la satisfacción que pueda proporcionarles el mando. Porque no quiero suponer que nos vayan a cortar a todos las cabezas.

En esta crítica coyuntura, el 12 de julio de 1936 fue asesinado por pistoleros falangistas el teniente José Castillo, de simpatías

socialistas, que estaba al mando del destacamento de la Guardia de Asalto en el centro de Madrid. Como represalia por el crimen, al día siguiente, miembros de su unidad y policías de simpatías socialistas detuvieron y asesinaron a Calvo Sotelo después de haber intentado localizar a Gil Robles con igual propósito. El brutal crimen tuvo un impacto enorme y llevó al periodista Julián Zugazagoitia, director de *El Socialista* y seguidor de Prieto, a consignar: "Este atentado es la guerra". En efecto, aprovechando la conmoción causada por un asesinato que evidenciaba como mínimo la falta de disciplina en el cuerpo de Guardia de Asalto, todas las reservas de los militares conjurados fueron eliminadas y el 17 de julio comenzó la sublevación planeada desde marzo y ya definitivamente configurada en sus pormenores a la altura de junio de 1936.

III
EL ESTALLIDO DE LA GUERRA: UN GOLPE MILITAR PARCIALMENTE FALLIDO

La sublevación militar iniciada en Marruecos el 17 de julio de 1936 se extendió por casi todas las guarniciones peninsulares, insulares y coloniales de España. Cuatro días después la rebelión había logrado implantar su dominio indiscutido sobre todas las colonias, una amplia zona del oeste y centro peninsular, un reducido núcleo andaluz y en los archipiélagos de Canarias y Baleares (salvo la isla de Menorca). Sin embargo, la rebelión había sido aplastada por un pequeño sector leal del ejército con ayuda de milicias obreras armadas urgentemente en dos grandes áreas aisladas entre sí: la zona centro-oriental peninsular (incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia) y una estrecha franja norteña (desde el País Vasco hasta Asturias, salvo Oviedo). Ese inesperado fracaso de la sublevación en la mitad del país forzó la conversión del golpe en una verdadera guerra civil de duración en principio incierta y de violencia creciente.

LA TORMENTA DE JULIO DE 1936: ÉXITOS Y FRACASOS

El plan de operaciones de los conjurados había sido elaborado por Mola, desde su favorable destino en Pamplona (donde el apoyo popular carlista estaba muy arraigado), a partir de su "Primera instrucción reservada". Fechada el 25 de abril de 1936, esa directiva fue distribuida a todos los mandos militares involucrados en la conspiración, entre ellos, varios generales de prestigio en las filas: Franco, recién destinado en la comandancia de Canarias y previsto

jefe del ejército de África en el protectorado de Marruecos; Cabanellas, al mando de la división de Zaragoza; Goded, que ocupaba la comandancia de Baleares; y Queipo de Llano, que ejercía como inspector general de Carabineros.

Sobre la base de aquella instrucción había ido perfilándose una insurrección militar escalonada a partir de las tropas de Marruecos, que serían secundadas por las restantes guarniciones, con la posibilidad de tener que tomar al asalto algunas plazas consideradas difíciles (sobre todo Madrid y Barcelona, donde la conjura apenas conseguía adeptos). Dos axiomas estaban claros: la operación iba ser un acto de guerra en toda su violencia brutal y tenía como objetivo instalar en el poder un gobierno militar cuyo modelo era el bien conocido del Directorio de Primo de Rivera de 1923, esta vez presidido por Sanjurjo una vez regresara del exilio en Lisboa. El texto de aquella primera instrucción no dejaba dudas sobre ambas premisas y sería la guía de actuación de los sublevados:

> Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga. Conquistado el poder, se instaurará una dictadura militar, que tendrá por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al Ejército para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho.

Si bien el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio fue presentado como la chispa que prendió la llama, en realidad la fecha de comienzo de la operación había sido fijada por Mola previamente. Sería "el 17 (de julio) a las 17 (horas)" en Melilla, una de las capitales del protectorado, puesto que allí la trama conspirativa contaba con mandos respetados (como el teniente coronel Juan Yagüe, de la Legión) y con apoyos abrumadores entre los oficiales. Además, dada la prevista necesidad de realizar operaciones móviles contra Madrid y otras ciudades, el levantamiento solo podía iniciarse por aquel sector del ejército más disciplinado y curtido en la lucha:

un total de más de 32.000 hombres, contando con 4.200 legionarios, 17.000 regulares indígenas (los "moros") y 11.000 reclutas del servicio militar obligatorio.

El levantamiento iniciado en Melilla el día y hora previstos triunfó de inmediato, tras destituir, encarcelar y, en varios casos, fusilar a los jefes y oficiales que trataron de resistir. Mola había advertido en su "quinta instrucción" del 20 de junio: "aquel que no esté con nosotros está contra nosotros y como enemigo será tratado". Y la máxima se aplicaría de inmediato contra los mandos leales a la República, con la ejecución del general Romerales, comandante militar de Melilla, del capitán Álvarez-Buylla, alto comisario, del capitán Leret, jefe de la base de hidroaviones melillense, y del comandante Ricardo Lapuente Bahamonde (primo hermano de Franco), jefe del aeródromo de Tetuán, entre otros.

La sublevación de julio de 1936 comenzaba, así pues, como una guerra civil en el seno del ejército y sus primeras víctimas serían los mandos militares opuestos a la intentona o que fracasaron en la tentativa insurreccional. Por lo que respecta al primer caso, de hecho, fueron fusilados durante la guerra en toda España catorce generales (otros dos con posterioridad al término del conflicto), al igual que tres almirantes de la Armada. Por lo que hace al segundo caso, sufrieron idéntica pena unos 1.500 generales y oficiales acusados de traidores o desafectos (como les pasaría a Goded y Fanjul, por ejemplo y de manera destacada).

El triunfo de los insurrectos en el protectorado fue la señal para que Franco se sublevara en Canarias en la madrugada del 18 de julio de 1936. Lo hizo publicando un manifiesto explicativo que era un compendio de doctrina nacional-militarista, con su apelación al sagrado deber del ejército para asumir la autoridad pública por el bien de la patria y para salvarla de mortales enemigos internos y externos. Por eso fue masivamente difundido por los medios de propaganda en poder de los alzados:

> ¡Españoles! A cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida,

> la nación os llama a su defensa. La situación en España es cada día más crítica; la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas; a tiro de pistola y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los ciudadanos que alevosamente se asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia. Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza y creando una situación de hambre que lanzará a la desesperación a los hombres trabajadores. Los monumentos y tesoros artísticos son objetos de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo a la consigna que reciben de las directivas extranjeras. […] En estos momentos […], el Ejército, la Marina y fuerzas de Orden Público se lanzan a defender la Patria. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca.

Asegurado el control de Canarias, Franco dejó al mando al general Orgaz para trasladarse en avión hasta Tetuán a fin de asumir la prevista dirección del ejército de África. Su misión era atravesar con esas tropas el estrecho de Gibraltar, desembarcar en Andalucía e iniciar la marcha sobre Madrid (cuyo control era vital para consolidar la situación por ser capital y centro de los resortes del estado). Sin embargo, el transporte de esas tropas decisivas se convirtió pronto en un grave problema logístico por un doble revés imprevisto. En primer lugar, porque apenas había aviones disponibles para esa labor, dado que la mayoría de los aviadores permanecería leal a la República y solo un tercio de los aparatos, todos bastante anticuados, caerían en poder de los sublevados. Y, en segundo orden, porque la flota encargada de colaborar en la tarea quedaría en manos de una marinería que destituyó a los mandos conjurados tras un violento forcejeo en los buques y en la base naval de Cartagena, poniendo a casi el 70% de sus elementos al servicio del gobierno republicano e implantando un bloqueo del Estrecho más intimidante que efectivo.

En todo caso, el triunfo de la sublevación en Marruecos y Canarias fue seguido del levantamiento, con distinta fortuna, de casi todas las guarniciones militares (44 de las 53) que se distribuían en las ocho divisiones orgánicas existentes (cuyas capitales por orden de

numeración eran: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Valladolid y La Coruña). En otras palabras: la insurrección militar se extendió como un reguero de pólvora por toda España entre el 17 y el 20 de julio, creando una fractura en el seno del ejército (integrado por unos 15.000 jefes y oficiales comandando algo más de 200.000 hombres) que sería crucial para su devenir. Según cálculos de Gabriel Cardona, se alzaron en armas un total de cuatro de los 18 generales de división que formaban la cúpula suprema del ejército español (Franco, Goded, Queipo y Cabanellas), 18 de los 32 generales de brigada, casi todos los oficiales de Estado Mayor, en torno al 80% de los oficiales y la mitad de los 60.000 efectivos de las fuerzas de orden público (algo más del 50% de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto y solo un tercio de los Carabineros de Fronteras).

Esa fractura de las fuerzas armadas, que Franco había temido desde el principio ("No contamos con todo el Ejército", había advertido en mayo a Mola), resultó clave para el destino de la sublevación porque impidió un desenlace rápido en un sentido u otro de los posibles: o bien la victoria completa de los alzados en armas con más o menos resistencias sofocadas, siguiendo el modelo del pronunciamiento militar de Primo de Rivera de 1923, que había sido empresa unánime de toda la corporación militar; o bien el aplastamiento de los sublevados mediante el empleo masivo de la fuerza militar de un ejército unido, disciplinado y sometido a las autoridades civiles decididas y enérgicas, como había sucedido durante la tentativa golpista de Sanjurjo en agosto de 1932.

En las circunstancias de quiebra de la unidad y la disciplina de las fuerzas armadas de finales de julio de 1936, fue posible un resultado distinto: una sublevación que triunfó en casi media España, pero que fracasó en la otra mitad del país. Y ello según un patrón de conductas bien perfilado por Jorge Martínez Reverte:

> Casi en toda España se produce un mismo fenómeno: cuando las fuerzas de seguridad o una parte importante de la guarnición se mantienen leales, el golpe se para. Cuando la mayoría de la guarnición se subleva, las

> ciudades caen del lado de los golpistas. […] España se ve inmersa en una orgía de sangre que durará muchos meses.

En efecto, aquella sublevación militar faccional amplia pero no unánime abrió las puertas a la violencia extrema porque unos querían imponerse por la fuerza sobre otros que querían resistir y sofocar la tentativa. Y así, primero militares pero luego también civiles, los adversarios de tiempo de paz devinieron enemigos mortales de tiempo de guerra que había que tratar conforme a la suprema ley bélica: "matar o morir". La sublevación desató una violencia masiva que tendría su plasmación tanto en los frentes de combate como en las retaguardias respectivas, porque en ambas partes estaba el enemigo. El número de muertos por acción de guerra en operaciones bélicas llegaría a sumar un máximo de doscientas mil personas durante todo el conflicto. La violencia represiva en las retaguardias casi alcanzaría esa misma cifra porque estaba alimentada por la combinación letal de odio y miedo, tenía carácter estratégico y anegaría de sangre los campos y ciudades españolas, sobre todo en los calurosos meses iniciales veraniegos, testigos del "terror caliente" más atroz.

En el caso de los sublevados, como había previsto Mola, iba a ser una violencia aplicada por las tropas o colaboradores civiles (mayormente milicianos falangistas y carlistas). Pretendía "limpiar" la escoria y "depurar" el cuerpo social de la "anti-España" mediante la fulminante eliminación física de autoridades institucionales, dirigentes sociopolíticos o militantes de izquierda desafectos y peligrosos. Y ello no solo para liquidar resistentes activos o potenciales, sino también para paralizar a sus seguidores, temerosos de seguir su suerte en caso de oposición manifiesta o sospechada. Azaña apreciaría la finalidad estratégica de esa política represiva inclemente: "Se propone acabar con el adversario, para suprimir quebraderos de cabeza a los que pretenden gobernar". Por eso mismo, en palabras de Carlos Gil Andrés, "más de la mitad de las víctimas de la represión de los sublevados murieron en los dos primeros meses de la guerra" mediante ejecuciones militares sumarias y "paseos" irregulares que dejaron las cunetas y los

cementerios repletos de cadáveres a veces insepultos durante varios días, a modo de ejemplar escarmiento público. Según los cómputos autónomos de Paul Preston, Julián Casanova o Francisco Espinosa, fueron un mínimo de 130.000 víctimas mortales: cien mil durante la guerra a medida que avanzaban las tropas y ocupaban nuevas poblaciones y otras treinta mil durante la posguerra tras la victoria.

En el caso de las zonas donde los sublevados fracasaron y un estado republicano descoyuntado sobrevivió a duras penas al cataclismo de julio de 1936, la violencia homicida desatada también fue terrible. Como señala Gil Andrés, "no fue una mera explosión de ira popular, espontánea y descontrolada", porque "en los partidos de izquierda, los sindicatos obreros y las mismas instituciones estatales hubo muchos responsables de decenas de miles de asesinatos", aun cuando las máximas autoridades de la República intentaran frenar un terror revolucionario nutrido de odio al enemigo y de miedo ante su posible victoria. Esa violencia estuvo a cargo de milicias armadas socialistas, anarquistas y comunistas. Sus objetivos prioritarios fueron, desde luego, los militares alzados que fracasaron, pero también los dirigentes políticos derechistas, los patronos sospechosos de simpatizar con la sublevación y, sobre todo, los clérigos de la iglesia católica, erigida en perverso símbolo culpable de todo el mal acumulado durante decenios. El 80% de las muertes se registraría en los cinco primeros meses de la contienda, cuando el desplome estatal dificultó el control legal y real del orden público. La cifra final de esa cosecha llegaría a la cota de 55.000 víctimas mortales hasta la derrota de 1939, según las estimaciones de Paul Preston, José Luis Ledesma o Julius Ruiz.

En ese contexto sangriento, los éxitos más importantes de los sublevados comenzaron el mismo 18 de julio de 1936, justo a la par que Casares Quiroga anunciaba con suicida confianza que se había frustrado "un nuevo intento criminal contra la República" y predominaba "la absoluta tranquilidad" en todo el país.

Andalucía fue la tercera región sublevada con éxito y la primera de la Península. El artífice de la operación fue Queipo de Llano, que se presentó en Sevilla en la tarde del día 18, destituyó al vacilante

jefe de la división con apoyo de la mayoría de la guarnición, asumió la responsabilidad de implantar el estado de guerra y aplastó con suma violencia la débil resistencia ofrecida por los militantes de izquierdas en la ciudad y en los pueblos de la provincia. Secundando esa iniciativa, el general José Enrique Varela logró sublevar con éxito la guarnición de Cádiz y lo mismo sucedería de inmediato con las de Huelva, Córdoba y Granada, con los mismos episodios de anulación de mandos opuestos, encarcelamiento de autoridades civiles y aplastamiento violento de la resistencia ofrecida por los partidos y sindicatos obreros en la calle.

El 19 de julio la rebelión se generalizó por toda España logrando triunfos cruciales en cascada. En primer lugar, Mola se alzó en Navarra con apoyo masivo de las milicias carlistas, que colaboraron con las tropas en la reducción inclemente de las ocasionales resistencias encontradas. Simultáneamente, Cabanellas se sublevaba en Zaragoza ante la pasividad aterrada de sus masas anarquistas y lograba extender su control sobre Huesca y Teruel mediante una represión intensa. Seguidamente, el general Andrés Saliquet repetía la acción de Queipo en Valladolid y, previa destitución violenta del general Molero, sublevaba la división y desplegaba una sangrienta represión contra los opositores al golpe. Completando el rosario de éxitos, aquel mismo día se sumaban a la rebelión otras dos plazas cruciales. En Burgos, el general Fidel Dávila dominaba la resistencia de su superior, el general Batet, que había sofocado la revuelta catalana de 1934 pero permaneció fiel a la República y pagaría por ello con su vida. En Baleares se alzó el general Goded, que solo encontró resistencia a sus planes en la isla de Menorca, donde los aviadores y marineros destinados en sus bases se negaron a secundar la iniciativa y siguieron la línea de actuación mayoritaria de sus armas.

El día 20 de julio tuvieron lugar las últimas sublevaciones con éxito de los militares conjurados. El coronel Pablo Martín Alonso consiguió desde La Coruña levantar en armas a la mayoría de las guarniciones de Galicia, previa destitución de sus superiores leales al gobierno y al precio de una intensa lucha en la base naval de El

Ferrol y en los barrios obreros de Vigo. Ese mismo día, tuvieron lugar otras tres incorporaciones a la sublevación de gran valor simbólico. Por un lado, el teniente coronel Camilo Alonso Vega sumaba la provincia de Vitoria al bando rebelde. Por otro, el coronel Antonio Aranda decantaba la ciudad de Oviedo contra el gobierno republicano. Y, finalmente, el coronel José Moscardó, director de la Academia Militar de Toledo, se alzaba en armas y se atrincheraba en el viejo Alcázar con sus hombres y medio millar de civiles afectos o tomados como rehenes.



División de España a finales de julio de 1936 y primeras operaciones militares

Los grandes éxitos cosechados en ese 20 de julio solo tuvieron en contra un serio revés político: el general Sanjurjo perdió la vida en accidente aéreo en Lisboa cuando trataba de viajar hasta Pamplona para asumir la dirección suprema del movimiento. Los sublevados,

en suma, perdían a su líder reconocido apenas iniciada la operación y en medio de un contexto incierto en el plano militar y en el orden político.

En definitiva, después de cuatro días trágicos, la sublevación había logrado triunfar de manera indiscutida y tras varias vicisitudes en todas las colonias (Marruecos, Ifni, el Sáhara y Guinea), los dos archipiélagos de Canarias y Baleares (salvo la isla de Menorca), en un núcleo andaluz (cuyos ejes eran Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada) y en una amplia y compacta zona centro-occidental que iba desde La Coruña a Huesca y desde Cáceres a Teruel y que incorporaba las regiones de Galicia, León y Castilla la Vieja, Navarra y Álava, la alta Extremadura y la mitad occidental de Aragón. Era algo menos de la mitad de toda la superficie española peninsular.

El corolario de esa afirmación es evidente. La rebelión había fracasado en el resto del territorio nacional y había sido aplastada en dos grandes zonas separadas: una estrecha y aislada franja norteña de la costa cantábrica, que iba desde Guipúzcoa en el País Vasco hasta Asturias (salvo Oviedo), y un compacto territorio centro-oriental articulado por el triángulo de Madrid-Barcelona-Valencia, que incluía toda la región catalana y el resto de la costa mediterránea hasta Málaga, así como las áreas interiores desde Badajoz hasta Castilla la Nueva y La Mancha. Era algo más de la mitad de la superficie peninsular de España (véase el mapa de las pp. 96-97).

En efecto, en esas dos zonas, en parte como habían temido los mandos conjurados, la sublevación acabó siendo aplastada gracias a la acción enérgica de un pequeño sector del ejército y de las fuerzas de seguridad que permanecieron fieles al gobierno republicano y que pronto serían auxiliadas (incluso rebasadas) por milicias sindicales y partidistas armadas con toda urgencia. Esa combinación de tropas militares regulares y milicias civiles improvisadas resultó crucial para el aplastamiento del golpe en buena parte de las grandes ciudades (del mismo modo que su ausencia había permitido la caída en manos sublevadas de poderosos feudos sindicales como Sevilla, Zaragoza o Vigo, a título de ejemplo). Como reconocería después un

periodista anarquista que participó en los combates al lado de las fuerzas de la Guardia Civil y de Asalto en Barcelona:

> La combinación fue decisiva. A pesar de su acometividad, de su espíritu revolucionario, la CNT sola no habría podido derrotar al ejército y a la policía juntos. De haber tenido que luchar contra ambos, en unas pocas horas no habría quedado ni uno de nosotros.

En la capital española, el gobierno de Casares Quiroga había adoptado medidas eficaces para controlar la intentona, contaba con la colaboración de los mandos militares (empezando por el ministro de la Guerra, general Masquelet) y tenía a su disposición más de seis mil guardias civiles y de asalto leales que casi igualaban a los siete mil soldados presentes en la provincia. Los conjurados habían tanteado sin éxito a varios jefes de la región, como sería el caso del general José Miaja o del coronel Vicente Rojo. Este último recordaría posteriormente sus discusiones con compañeros que estimaban que la situación era tan grave que "no había otra solución que la fuerza drásticamente aplicada por el Ejército" y su respuesta al diagnóstico: "era un error dividir" al ejército y "quedaban fuerzas políticas organizadas, un parlamento sin estrenar siquiera y estaba claramente manifestada la voluntad mayoritaria de la nación en las últimas elecciones". También dejaría constancia del hecho decisivo de que sus opiniones eran dominantes en la región militar de Madrid, con su corolario:

> Mis jefes naturales –ministro, inspector general del Ejército, jefe del Estado Mayor Central, comandante de la División de Madrid y el general de quien yo era ayudante– no se sublevaron.

Así pues, la cadena de mando de la división madrileña no se sublevó, aunque tuvo que hacer frente a conatos de sublevación aislados fácilmente suprimidos. El más importante se produjo el día 19, cuando el general retirado Fanjul consiguió levantar en armas a poco más de dos millares de oficiales, soldados y civiles (milicianos falangistas y monárquicos) que se atrincheraron en el céntrico cuartel de La Montaña a esperar la llegada de tropas de auxilio

remitidas por Mola. Pero esa ayuda no llegó y mientras tanto sus enemigos sitiaban el cuartel a la espera del asalto final.

Las derrotas cosechadas, junto con la acción de Fanjul, precipitaron la caída del ejecutivo de Casares Quiroga, que fue sustituido el día 19 por una sucesión de gabinetes que evidenciaba la profunda crisis institucional desatada en la República. Primero, Azaña encomendó a Martínez Barrio la formación de un gobierno moderado que pactara con los insurgentes para evitar la guerra (y que tenía como ministro al general Miaja), lo que fue airadamente desechado tanto por Mola como por los partidos de izquierda. Después, al finalizar el día, Azaña entregó el gobierno a su amigo José Giral, que formó un ejecutivo de republicanos con dos militares en las carteras de Guerra (general Luis Castelló, pocas semanas después sustituido por el coronel Juan Hernández Sarabia) y Gobernación (general Sebastián Pozas). Y fue ese gobierno el que tomó una decisión crucial: licenciar las tropas (supuestamente para evitar que obedecieran a sus mandos sublevados) y autorizar la entrega de armas a los militantes de los partidos y sindicatos de izquierdas que clamaban por ellas para aplastar la sublevación.

Consagrada la decisión de combatir la rebelión con todos los medios, el 20 de julio la combinación de tropas leales y milicianos armados asaltó el cuartel de La Montaña, detuvo a Fanjul (que sería juzgado y fusilado) y masacró a la mayoría de sus defensores. El éxito gubernamental decantó toda la región castellano-manchega a su favor, al igual que sucedió con la provincia de Badajoz (cuyo gobernador militar era el general Castelló hasta su nombramiento ministerial). Y ese éxito fue reduplicado por la victoria defensiva lograda en el frente montañoso de Guadarrama, donde la mezcla de tropas leales y milicias de izquierdas consiguió frenar las débiles columnas remitidas por Mola desde Castilla la Vieja e impedir su avance sobre Madrid.

Tampoco la región militar de Cataluña había sido escenario de una sublevación de sus mandos naturales (el general Francisco Llano de la Encomienda, jefe divisionario, y el general Jesús Aranguren, jefe de la Guardia Civil). Por el contrario, ellos y la mayoría de sus

subordinados permanecieron leales a la República y fueron decisivos para sofocar los conatos de insurrección existentes a partir del día 19. La debilidad de la conjura en la capital industrial de España era tan grande que Goded se trasladó desde Palma a Barcelona para hacerse cargo de su dirección el 20 de julio, cuando ya todo estaba perdido ante la eficaz resistencia ofrecida por guardias civiles y de asalto. Al finalizar ese día, Goded se rindió y decantó la suerte de los aislados focos alzados en el resto de Cataluña. Para entonces, los militantes de los sindicatos anarquistas (y en menor medida los militantes comunistas y socialistas) ya habían conseguido apoderarse de las armas guardadas en los depósitos militares y sus milicias se convertirían en las dueñas de la región e incluso emprenderían operaciones en Mallorca y Aragón.

El tercer fracaso decisivo de la sublevación se produjo en la región militar de Valencia, gracias a la lealtad de los jefes superiores, el general divisionario Fernando Martínez Monje y el general de brigada Mariano Gámir Ulibarri. Aunque los conspiradores tenían bastantes partidarios, sus líderes fueron indecisos (incluso el general González Carrasco, que llegó de Madrid para tratar encabezarlos), tropezaron con una resistencia militar y civil enérgica y no consiguieron romper la disciplina de unas tropas que, como medida precautoria, estuvieron dos días acuarteladas. Finalmente, el día 20, en la estela de lo sucedido en Madrid y Barcelona, Martínez Monje reunió a sus oficiales de confianza para definir su conducta y por mayoría clara optaron por permanecer leales a la República. Su decisión, después del fracaso madrileño y catalán, sentenció la suerte de la sublevación en el resto de la costa levantina y murciana.

Los restantes fracasos de la sublevación fueron menos importantes en términos cualitativos, pero no en el plano simbólico. En el sur, la mayor derrota se produjo en Málaga, que acarreó la pérdida de Almería, en parte por la resistencia de fuerzas policiales y en parte por la llegada de buques de guerra desde Cartagena que inclinaron la balanza. En el norte, también fracasaron los conatos de levantamiento en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias (salvo Oviedo), por esa misma combinación de resistencia

militar mayoritaria, alzamiento de focos minoritarios e intervención de milicias civiles apresuradamente armadas. Así lo dejó expresado el historiador militar y excombatiente en las filas insurgentes, general Salas Larrazábal:

> En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Cartagena, en Bilbao, en Santander, en Málaga o en Almería, ciudades todas ellas en las que triunfó el Gobierno y que en su conjunto decidieron la suerte del golpe de Estado, fueron las fuerzas armadas que permanecieron fieles al Gobierno –Ejército, Guardia Civil, Carabineros o Asalto– quienes resolvieron la situación reduciendo a los rebeldes. Como hemos dicho repetidas veces, el ambiente local influía notablemente en la moral de unos y otros y favorecía el triunfo de quienes contaran con él; las excepciones de Oviedo y Santander, de Sevilla o Albacete, no hacen sino confirmar la verdad del aserto. Las milicias, escasamente instruidas, organizadas y armadas, pocas en número y sin cohesión ni encuadramiento, no pasaron de ser la máxima expresión de ese ambiente hostil o favorable a la rebelión; un coro activo con todo el valor ambiental que siempre prestó éste a la tragedia.

ESPAÑA PARTIDA EN DOS

Antes de cumplirse la primera semana de sublevación, los rebeldes no habían logrado derribar al gobierno republicano en la mitad del país, ni habían conseguido asumir el control del estado en todo el territorio nacional, además de perder a su líder supremo en accidente aéreo apenas cuatro días después de iniciarse el golpe. El gobierno republicano tampoco fue capaz de dominar la rebelión de manera eficaz y solo había conseguido sofocarla en media España, pero al precio de perder casi todo su ejército, tener que armar a milicias civiles incontroladas y contemplar el colapso de buena parte del organigrama institucional del estado.

Fue ese empate de éxitos y fracasos casi equilibrados lo que propició la conversión del golpe militar en una verdadera guerra civil de incierto resultado y duración. Enric Ucelay-Da Cal apuntó hace ya más de un decenio con claridad ese equilibrio imperfecto de impotencias recíprocas que resultó tan trágico: los insurgentes habían sido incapaces de "llevar a cabo su golpe con efectividad en

todas partes", pero el gobierno se había mostrado igualmente incapaz "de suprimirlo por doquier". El resultado: "No había más salida que dirimir las diferencias mediante las armas". Y eso significaba abrir la caja de Pandora de la guerra civil con todas sus implicaciones de barbarie fratricida y avasalladora.

Los sublevados estaban decididos a emprender operaciones militares para conquistar el territorio que había escapado a su control en la primera acometida y no se resignaban a aceptar una división del país según las líneas de frente talladas aquel sofocante mes de julio (uno de los más calurosos del siglo). Por su parte, sus enemigos, cualquiera que fuera su perfil (más reformista o más revolucionario), estaban dispuestos a defenderse a toda costa y a tratar de recuperar las áreas perdidas. Así pues, a finales de julio de 1936, el balance de cuatro días de sublevación y contra-insurrección ofrecía una imagen equilibrada de fuerzas y capacidades en casi todos los órdenes: un escenario de empate inestable entre los dos bandos que iban configurándose a marchas forzadas.

El territorio decantado hacia el gobierno republicano representaba el 53,5% de toda la superficie nacional (unos 270.000 de los 505.000 km^2 totales), integraba 22 de las 50 capitales de provincia y estaba habitado por 14,5 millones de habitantes (el 60% de la población española). Era, así pues, el más extenso, más densamente poblado y más urbanizado. Y era también el más industrializado (incluía la siderurgia vasca, la minería asturiana y la industria textil y química catalana), pero el de menores posibilidades alimenticias agrarias y ganaderas (exceptuando la producción horto-frutícola levantina).

El área en manos de los sublevados representaba el 46,5% de la superficie nacional (unos 235.000 km^2), integraba 28 de las 50 capitales provinciales pero acogía en su seno a solo 10 millones de habitantes (el 40% del total). Era, por tanto, el territorio menor, menos poblado y más ruralizado. Contaba con una débil infraestructura industrial moderna (las minas de piritas de Huelva y las minas de hierro marroquíes), pero tenía importantes recursos alimenticios agroganaderos y pesqueros (el 70% de la capacidad de

producción nacional en su conjunto: más de dos tercios del trigo y las patatas, el 60% de las leguminosas, el 75% del leche y el 70% del ganado ovino).

Sin embargo, ese reparto genérico equitativo (marcado por el contraste campo-ciudad) era de partida especialmente gravoso para el bando republicano en virtud de su escisión geográfica y de la falta de conexión entre áreas industriales y zonas de consumo. De hecho, ni el carbón asturiano ni el hierro vasco podían abastecer a la industria catalana o levantina, ni los productos de estas podían llegar a los mercados urbanos de la franja norteña leal. En palabras de Josep Bricall, "los rebeldes les habían arrebatado el mercado de su industria y los productos básicos para esta industria y para el consumo de la población".

En el orden financiero, la República tenía una ventaja porque mantuvo el control del 65% de las oficinas bancarias del país, así como los depósitos centrales de los cinco grandes bancos españoles de la época. Y todavía más crucial: bajo control del gobierno quedó la mayor parte de las reservas de oro del Banco de España, cuya movilización serviría como eficaz medio de pago internacional de los suministros importados del extranjero. Mientras tanto, sus enemigos solo consiguieron controlar el 35% de las oficinas bancarias y tuvieron que paliar sus carencias financieras con el recurso al crédito exterior y orientando sus posibilidades exportadoras a la obtención de divisas aplicables a las ineludibles compras en el extranjero. Esta ventaja inicial republicana en recursos financieros (sumados a los industriales) fue pronto mermada por las difíciles condiciones internas de su economía y sus oscilaciones entre modelos de gestión revolucionaria anticapitalista y de gestión centralizada más ortodoxa, a lo que se añadió un hostil contexto internacional para sus demandas económicas. De igual modo, la desventaja inicial de los sublevados fue pronto rebajada por las asistencias crediticias logradas en el exterior (en Italia, Alemania y Portugal) y por una gestión interna centralizada y disciplinada de los recursos disponibles.

En el plano militar, según datos de Salas Larrazábal, los sublevados habían conseguido sumar a su causa a más de la mitad de los jefes y oficiales que formaban el ejército (lo que suponía unos ocho mil hombres con capacidad profesional para hacer la guerra). También lograron controlar la mayor parte de efectivos de tropa de recluta obligatoria y buena parte de las fuerzas de seguridad, un conjunto de unos 140.000 hombres que incluían la totalidad de las curtidas tropas de Marruecos, con su estructura, equipo y cadena de mando operativa. Por el contrario, sus enemigos tuvieron el control nominal de otros 116.000 soldados de tropa y de algo más de 7.500 jefes y oficiales. Pero la realidad es que la decisión de licenciar las tropas destruyó el aparato de recluta militar y que solo 3.500 mandos prestaron sus servicios lealmente a la causa republicana (mientras que 1.500 perderían la vida, otros tantos serían encarcelados y en torno a mil se pasaron al enemigo en cuanto tuvieron oportunidad).

La distribución de fuerzas en la marina y en la aviación también benefició al gobierno en principio y sobre el papel. En el caso de la primera, la poderosa base naval mediterránea de Cartagena y casi el 70% de los buques quedaron en sus manos, aunque perdiera a casi todos sus jefes y oficiales por su compromiso golpista ("la escuadra la mandan los cabos", fue la noticia reveladora). Por su parte, los sublevados tenían que conformarse con la crucial base naval atlántica de Ferrol y el control de apenas un acorazado, un crucero, un destructor y otras pequeñas unidades variadas. En el arma aeronáutica, que disponía de poco más de trescientos aparatos de diferentes tipos y no muy modernos, se produjo una escisión parecida: el gobierno retuvo el dominio de 207 en tanto que los rebeldes lograron apoderarse de 96.

En todo caso, ese reparto de efectivos militares fue completado con una contribución al combate que revelaba la naturaleza civil de la contienda y el apoyo popular del que ambos bandos disfrutaban. Como ha recordado James Matthews, en los primeros meses de la guerra, jóvenes y no tan jóvenes se aprestaron a tomar las armas de manera voluntaria para combatir: en torno a ciento veinte mil

milicianos de todas las afinidades (socialistas, anarquistas y comunistas, sobre todo) en la zona republicana y aproximadamente cien mil combatientes voluntarios en la zona franquista (dos tercios de ellos falangistas y el otro tradicionalistas). Pero pronto se descubrió que la guerra no podía librarse con tan pocos hombres en armas y hubo que recurrir a la movilización forzosa de varones (entre 18 y 45 años) para mantener las operaciones y nutrir la mano de obra bélica. De hecho, los sublevados comenzaron a movilizar reclutas ya en julio de 1936 y acabarían la guerra habiendo llamado a quince reemplazos que suponían 1,2 millones de hombres. Por su parte, la República tardó meses en secundar a sus enemigos en virtud de la prevención antimilitarista de sus partidarios. Pero se rendiría a la necesidad a partir de octubre y desde entonces hasta su derrota movilizó veintiocho reemplazos que totalizaban 1,7 millones de soldados.

En resolución, a fines de julio de 1936 se habían configurado de manera apresurada y con mucha dosis de azar dos bandos enfrentados a muerte, empatados en recursos internos y que carecían del equipo militar suficiente para sostener un esfuerzo bélico de envergadura. Esa realidad, paralela a la conversión del golpe en guerra, planteó de inmediato un problema estratégico vital: en virtud de la equilibrada división de España y del previo raquitismo de su industria bélica, no cabía combatir con armas, municiones y materiales fabricados en el país. Por ese motivo, el mismo día 19 de julio de 1936, los máximos líderes de ambos bandos se vieron obligados a dirigirse de inmediato al exterior en demanda de ayuda a las potencias europeas afines a sus postulados, abriendo así la vía al crucial proceso de internacionalización de la contienda española.

El recién nombrado nuevo presidente republicano, José Giral, solicitó telegráficamente el envío de aviones y municiones para sofocar la rebelión a las autoridades de París, donde hacía pocas semanas había accedido al poder un gobierno francés del Frente Popular liderado por el socialista Léon Blum. El general Franco, desde Marruecos, envió sus emisarios a Roma y Berlín solicitando también a Mussolini y a Hitler armas y aviones para transportar sus

tropas a la Península y poder iniciar su marcha sobre Madrid. Esa simultánea petición de ayuda exterior suponía *de facto* el reconocimiento de las dimensiones internacionales presentes en el conflicto español y el intento deliberado de sumergirlo en las graves tensiones que fracturaban Europa. De hecho, en el contexto crítico de aquel verano de 1936, ambas peticiones iban a provocar la internacionalización de la Guerra Civil con resultados bien distintos para los militares sublevados y para las autoridades de la República.

Así pues, una España partida en dos mitades fiaba su suerte no solo al choque de las armas en suelo nacional sino también al duelo exterior en las cancillerías de las grandes potencias. Y, mientras tanto, ante el desafío imprevisto de una "guerra total", ambas partes se aprestaban a resolver tres grandes problemas generados en el plano estratégico-militar, en el ámbito económico-institucional y en el orden político-ideológico. Se trataba de la tríada de retos que Clausewitz había señalado como prioritarios en el sostenimiento de un conflicto bélico y que la Gran Guerra de 1914-1918 había mostrado con toda su complejidad: afinar las actividades de los militares como profesionales de las armas, modular la política de los gobiernos como gestores de los recursos disponibles y gestionar "las pasiones de los pueblos" como alimento moral y material del combate.

En el caso de España, bajo la forma de una guerra civil, en gran medida el éxito o fracaso de los respectivos esfuerzos bélicos de republicanos y de franquistas dependería finalmente de la acertada resolución de estas tres tareas básicas inducidas por la "guerra total" que siguió a una insurrección solo parcialmente victoriosa. A saber:

1°) La reconstrucción de un ejército combatiente regular, con mando centralizado, obediencia y disciplina en sus filas y una logística de suministros bélicos constantes y suficientes, a fin de sostener con vigor el frente de combate y conseguir la victoria sobre el enemigo o, al menos, evitar la derrota.

2°) La reconfiguración del aparato administrativo del estado en un sentido centralizado para hacer uso eficaz y planificado de todos los recursos económicos internos o externos del país, tanto humanos

como materiales, en beneficio del esfuerzo de guerra y de las necesidades del frente de combate.

3°) La articulación de unos Fines de Guerra compartidos por la gran mayoría de las fuerzas sociopolíticas representativas de la población civil de retaguardia y susceptibles de inspirar moralmente a esa misma población, hasta el punto de justificar los grandes sacrificios de sangre y las hondas privaciones materiales demandados por una cruenta y larga lucha fratricida.

Como hemos de ver, a juzgar por el desenlace de la guerra, parece evidente que el bando franquista fue superior al bando republicano en la imperiosa tarea de configurar un ejército combatiente bien abastecido y pertrechado, construir un estado centralizado eficaz para regir la economía de guerra y sostener una retaguardia civil unificada y comprometida con la causa bélica. Las razones de esa imagen genérica de superioridad franquista e inferioridad republicana a la hora de afrontar sus respectivos desafíos bélicos no fueron solo de orden interno y endógeno. Porque en la respectiva capacidad para abordar y acometer esas exigencias inducidas por la emergencia bélica influyó de manera crucial el contexto internacional que sirvió de marco a la Guerra Civil.

IV
REACCIÓN Y MILITARIZACIÓN EN LA ESPAÑA INSURGENTE: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DICTADURA CAUDILLISTA

En la parte de España donde triunfó la sublevación militar de julio de 1936, el dominio de los mandos insurgentes fue afianzándose al compás de una violenta militarización de la vida sociopolítica. La movilización bélica se articuló sobre dos ideas fuerza: la defensa de la unidad de una patria española acosada y la defensa de una fe católica amenazada. Sobre esas bases ideológicas, las necesidades político-estratégicas de concentración del poder decisorio en una sola mano fueron promoviendo el encumbramiento del general Franco a la máxima magistratura de Caudillo de España. A los pocos meses del estallido de la contienda, el nuevo estado insurgente cobraba la forma de una dictadura personal que se apoyaba en tres pilares institucionales: un ejército combatiente, una iglesia militante y un partido único del estado en proceso de fascistización. La prolongación de la guerra, junto con el crispado contexto internacional, fue consolidando la situación de Franco como dictador de plenos poderes vitalicios, muy influenciado por la Italia fascista y la Alemania nacional-socialista.

CONSOLIDAR UNA INSURRECCIÓN MILITAR INESTABLE

Primero en Marruecos y luego en las otras zonas españolas donde los sublevados consiguieron sus objetivos en aquellos cuatro días de

julio, el poder y la autoridad política quedaron en manos de la cadena de mando del ejército alzado en armas, con arreglo a la preceptiva declaración del estado de guerra y previa depuración de elementos hostiles o indecisos de sus filas. La implacable militarización de la vida sociopolítica se tradujo en la destitución, encarcelamiento y frecuente fusilamiento de las autoridades civiles nombradas por el gobierno republicano, así como en la detención, reclusión o simple eliminación de los dirigentes sindicales y partidistas afines al republicanismo reformista y a la izquierda obrera y jornalera. La toma del poder por el ejército implicó también la prohibición de todo tipo de huelgas, reuniones políticas o sindicales, resistencias armadas o sabotajes bajo pena de muerte inmediata para los acusados y sospechosos, al igual que el establecimiento del toque de queda y el control de todo movimiento de civiles dentro del territorio dominado.

La cosmovisión que alentaba a los sublevados y el carácter de sus medidas de control sociopolítico por la fuerza de las armas habían sido sintetizadas previamente en unas "normas de ejecución" del golpe redactadas por Mola. El bando declarando el estado de guerra en Andalucía dictado por Queipo de Llano es representativo de esas medidas:

> ESPAÑOLES: Las circunstancias extraordinarias y críticas porque atraviesa España entera; la anarquía que se ha apoderado de las ciudades y los campos, con riesgos evidentes de la patria, amenazada por el enemigo exterior, hacen imprescindible el que no se pierda un solo momento y que el Ejército, si ha de ser salvaguardia de la nación, tome a su cargo la dirección del país para entregarlo más tarde, cuando la tranquilidad y el orden estén restablecidos, a los elementos civiles preparados para ello.
>
> En su virtud, y hecho cargo del mando en esta División, ORDENO Y MANDO:
>
> 1°. Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de esta División.
>
> 2°. Queda prohibido terminantemente el derecho a la huelga. Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas los directivos de los Sindicatos, cuyas organizaciones vayan a la huelga o no se reintegren al trabajo los que se encuentren en tal situación a la hora de entrar el día de mañana. […]

Si el éxito logrado por Queipo de Llano en Sevilla hubiera sido general en toda España, se habría asistido a una repetición, *mutatis mutandis* y más o menos cruenta, del pronunciamiento encabezado por Primo de Rivera en 1923, el modelo conocido por los mandos sublevados. Sin embargo, esta vez la operación no había sido la tarea unánime de la corporación militar en su conjunto y se encontró enfrente la oposición decidida de significativos núcleos de fuerzas armadas leales al gobierno constitucional, que pronto serían reforzados por las concienciadas milicias sindicales y partidistas.

Como resultado de los éxitos del golpe, habían surgido tres núcleos geográficos aislados que estaban bajo el control respectivo de un destacado jefe militar: Mola, en Pamplona, era la autoridad máxima en la zona centro-occidental pese a que era de inferior edad y graduación que Cabanellas en Zaragoza; Queipo de Llano, en Sevilla, estaba al frente del reducto andaluz, donde actuaba como auténtico virrey; y Franco, en Tetuán, se había puesto al mando de las tropas de Marruecos como líder africanista indiscutido y después de asegurar el dominio de Canarias. El gran ausente de ese triunvirato que dirigía la sublevación era Sanjurjo, que debería haberse puesto al frente de todos regresando de su exilio portugués. Sin embargo, como hemos visto, perdió la vida en accidente aéreo en Lisboa el día 20 y esa muerte dejó sin cabeza la rebelión, acentuando los problemas derivados de su indefinición política.

Efectivamente, los generales sublevados carecían de alternativa política explícita, existiendo entre ellos una mayoría monárquica (Alfredo Kindelán, jefe de la fuerza aérea, Luis Orgaz, al mando de Canarias, y Andrés Saliquet, al frente de Valladolid), pero registrándose también carlistas (José Enrique Varela, en Cádiz), republicanos conservadores (Queipo de Llano y Cabanellas) y aun falangistas (el coronel Juan Yagüe) o accidentalistas (Antonio Aranda, en Oviedo, Mola y, en gran medida, Franco). Esa diversidad de sensibilidades había sido la razón del acuerdo entre los conjurados sobre el carácter neutral del pronunciamiento y la necesidad de establecer una dictadura militar más o menos transitoria, cuyo objetivo esencial era frenar las reformas

gubernamentales y atajar la amenaza de revolución proletaria. Así lo había subrayado la última de las "normas de ejecución" de la sublevación que Mola había firmado antes del inicio de la operación: "Prohibición de todo género de manifestaciones de tipo político que pudieran quitar al movimiento el carácter de neutralidad absoluta que lo motiva".

Se trataba, en definitiva, de un movimiento de contrarreforma efectiva y contrarrevolución preventiva liderado por el ejército como "espina dorsal de la Patria" cuyo fracaso parcial, paradójicamente, provocaría el temido proceso revolucionario en las zonas escapadas a su control. Ese exclusivo protagonismo militar corporativo fue inmediatamente subrayado por los mandos sublevados en todas sus proclamas y arengas. El 24 de julio, en Burgos, el primer organismo de coordinación de todos ellos reiteraba que estaba en marcha una operación del "Ejército, cerebro, corazón y brazo" de la patria, que había asumido la tarea de "la salvación de España" con "activa conciencia de su responsabilidad". Pocas semanas después, Franco se expresaba en la misma línea militarista pretoriana ante la prensa portuguesa:

> Implantaremos una corta dictadura militar, su duración dependerá de la que necesiten los organismos que con funciones especiales, en régimen nacional, servirán a la nueva España. Después, cuando ello sea posible, el Directorio Militar llamará a colaborar a los elementos que estime necesarios. La administración será confiada a los técnicos, no políticos, para conseguir el dotar a la Nación de la estructura orgánica, característicamente española, que le es imprescindible. La transformación española se asemejará a la de tipo portugués.

En función de esa indefinición política, el universo ideológico del movimiento insurreccional se circunscribía a tres ideas sumarias y comunes a todas las derechas conservadoras hispanas, con independencia de su programa político específico.

Ante todo, el nacionalismo español integrista e historicista, ferozmente opuesto a la descentralización autonomista o secesionista, que aprendieron a amar los cadetes en las academias militares desde finales del siglo XIX y en las cruentas guerras

coloniales libradas en Marruecos entre 1909 y 1926. Una fe nacionalista que estaría en la base de la espontánea restauración de la vieja bandera roja y gualda, en sustitución de la bandera tricolor que había adoptado la República, una medida oficializada el 29 de agosto de 1936 con estas razones:

> Sólo bastardos, cuando no criminales propósitos de destruir el sentimiento patriótico en su raíz, pueden convertir en materia de partidismo político lo que, por ser símbolo egregio de la Nación, está por encima de parcialidades y accidentes. Esa gloriosa enseña ha presidido las gestas inmortales de nuestra España; ha recibido el juramento de fidelidad de las sucesivas generaciones; ha ondeado los días de ventura y adversidad patrias y es la que ha servido de sudario a los restos de patriotas insignes que, por los servicios prestados a su país, merecieron tal honor.

En segundo orden, reforzada tras el episodio secularizante republicano, la profesión de fe en un catolicismo identificado con la idea de cruzada "por Dios y por España", que llevaba decenios proclamando a "España como país predilecto y predestinado para la realización del Reino de Cristo". Esa comunión nacional-católica tenía en Marcelino Menéndez y Pelayo su formulador más preclaro desde 1882:

> Ni por la naturaleza del suelo, ni por la raza, ni por el carácter, parecíamos destinados a formar una gran nación. […] Esta unidad se la dio a España el Cristianismo. La Iglesia nos educó a sus pechos, con sus mártires y confesores, con sus Padres, con el régimen admirable de los Concilios. Por ella fuimos nación y gran nación, en vez de muchedumbres de gentes colecticias, nacidas para presa de la tenaz porfía de cualquier vecino codicioso. […] España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio… ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad.

La tercera idea motriz del movimiento militar consistía en un virulento anticomunismo genérico que repudiaba tanto el comunismo *stricto sensu* como a sus "cómplices", el socialismo, el anarquismo y el liberalismo democrático, por sus efectos disolventes sobre la unidad nacional y religiosa. Con su habitual simplicidad, Mola sintetizaría ese credo doctrinal con una declaración lacónica: "Somos

nacionalistas porque es lo contrario de marxistas, o sea, que se pone el sentimiento de unidad nacional por encima de toda otra idea". Lo mismo había hecho Franco en su manifiesto del 18 de julio al proclamar "una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del obrero honrado, a los extranjeros y a los extranjerizantes que directa o solapadamente intentan destruir a España". Y lo mismo haría la propaganda bélica insurgente desde el inicio de la sublevación, como rezaría ya la portada del diario *Abc* impreso en Sevilla el 22 de julio de 1936: "Por la salvación de la Patria. Guerra a muerte entre la Rusia roja y la España sagrada".

LA JUNTA DE DEFENSA NACIONAL

Dueños de media España bajo esos postulados doctrinales, los mandos sublevados tuvieron que afrontar de inmediato los problemas planteados por el vacío de poder supremo creado por la muerte de Sanjurjo y por la dispersión de autoridad generada por la fragmentación territorial de las zonas dominadas. Con el apoyo de Cabanellas y aprovechando su prestigio como organizador (pese al evidente fracaso de muchas de sus previsiones golpistas), Mola trató de paliar ambos peligros mediante la constitución en Burgos el día 24 de julio de 1936 de la "Junta de Defensa Nacional", una entidad militar que, según su decreto fundacional, "asume todos los Poderes del Estado y representa legítimamente al País ante las Potencias extranjeras".

La Junta de Burgos estaba integrada por la plana mayor del generalato sublevado, al modo del Directorio Militar de 1923. Presidida por Cabanellas como jefe más antiguo en el escalafón, formaban parte de ella cuatro generales con mando en la zona centro-occidental (Mola, Saliquet, Dávila y Ponte) y dos coroneles que actuaban como secretarios. Pocos días después se incorporarían los mandos del resto de las zonas: Franco, Queipo de Llano, Orgaz, Gil Yuste y el almirante Moreno. Se trataba de un organismo de representación colegiada cuyo cometido básico era ser "una especie

de instrumento de la intendencia y la administración básicas" (palabras de Javier Tusell). Su carácter interino pretendía asegurar las mínimas funciones de gestión institucional hasta que la ocupación de Madrid permitiera hacerse con los órganos centrales del estado residentes en la capital. Por eso se referirá a sí misma, en el momento de su disolución, como "régimen provisional de Mandos combinados" que solo "respondían a las más apremiantes necesidades de la liberación de España".

Si bien la Junta se convirtió en un eficaz órgano de autoridad colegial del poder militar imperante en la zona sublevada, superando la crisis originada por la muerte de Sanjurjo, como institución no tuvo ningún papel en las operaciones bélicas. Esa responsabilidad siguió en las manos de los tres mandos que se habían configurado tras la sublevación.

En el frente norte-centro, esa dirección recaía en Mola, cuyas tropas trataban de sostener con creciente dificultad la ofensiva en dos áreas distintas: el avance desde Álava hacia la frontera franco-española en Irún, tratando de ocupar primero San Sebastián; y la preservación de las posiciones ganadas en la sierra madrileña de Guadarrama, donde sus tropas experimentaban una aguda escasez de material que las obligaría a depender de los suministros remitidos por los otros mandos operativos. En el frente sur, era Queipo de Llano el responsable de ampliar las bases iniciales mediante expediciones de columnas militares por toda Andalucía muy pronto reforzadas por la llegada de tropas marroquíes. Finalmente, en Marruecos, Franco afianzaba su condición de jefe del ejército de África y empezaba a convertirse en la cabeza de la sublevación gracias a sus incontestables éxitos militares y a sus triunfos político-diplomáticos. No en vano, los primeros (el rápido traslado por vía aérea de sus tropas hasta Sevilla, donde iniciaron su fulgurante avance para conectar con la zona central) eran en gran medida resultado de los segundos (sus gestiones para lograr la ayuda aérea italiana y alemana habían sido atendidas desde finales de julio).

Mientras las columnas africanas de Franco emprendían su veloz marcha sobre Madrid (y en apenas tres meses llegarían a sus

puertas habiendo salvado sin apenas resistencia más de 600 kilómetros), la Junta de Burgos legitimaba la militarización efectiva de España por un bando del 28 de julio que extendía el estado de guerra a todo el territorio nacional. La consecuente voluntad autoritaria de ruptura con el liberalismo democrático republicano fue confirmada por varias medidas posteriores. El 13 de septiembre decretaba la ilegalización de todos los partidos y sindicatos de izquierda, la incautación de sus bienes y la depuración de la administración pública de sus afiliados y militantes por "actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Nacional". Otro decreto del 25 de septiembre prohibía "todas las actuaciones políticas y las sindicales obreras y patronales de carácter político". La medida iba destinada a los grupos derechistas que apoyaban la insurrección y se justificaba por necesidades bélicas y supremo interés nacional: el apoyo al esfuerzo bélico del ejército, "símbolo efectivo de la unidad nacional".

Ese dominio absoluto de los mandos militares no encontró resistencia por parte de las fuerzas políticas derechistas que habían prestado su concurso a la insurrección. A la par que la CEDA se hundía para siempre como partido, sus bases católicas y sus dirigentes (incluyendo a Gil Robles, exiliado en Portugal), colaboraron en la instauración del nuevo orden político militar y dictatorial. Idéntica cooperación prestó el monarquismo alfonsino, descabezado por la muerte de Calvo Sotelo, que a pesar de no encuadrar masas de seguidores tenía asegurada la influencia política en virtud de su prestigio social, la alta cualificación profesional de sus afiliados, sus apoyos en medios económicos y sus fecundas conexiones internacionales.

Mayores reservas abrigaron el carlismo y el falangismo, cuyo crecimiento masivo desde los primeros días de guerra les permitió constituir sus milicias de voluntarios para combatir, si bien siempre encuadradas en la disciplina del ejército. Ese control militar de las "milicias nacionales", junto a la división interna en ambos partidos (entre colaboracionistas e intransigentes) y a la ausencia del líder de Falange (José Antonio Primo de Rivera estaba preso en zona

republicana y sería fusilado el 20 de noviembre de 1936), impidieron todo desafío al papel político rector de los generales. En esencia, los partidos derechistas asumían que la emergencia bélica y la necesidad de vencer exigían la subordinación a la autoridad de los mandos del ejército combatiente.

La Junta de Burgos pudo contar desde muy pronto con una asistencia crucial por sus implicaciones internas y externas: el apoyo de la jerarquía episcopal española y de las masas de fieles católicos. En consonancia con su previa hostilidad al programa secularizador de la República, y aterrada por la furia anticlerical desatada en la zona gubernamental (con una cosecha mínima de 6.832 víctimas), la iglesia española se alineó con los militares sublevados desde el inicio de la guerra. El catolicismo pasó a convertirse así en uno de los principales valedores nacionales e internacionales del esfuerzo bélico insurgente, encumbrado a la categoría de cruzada por la fe de Cristo y la salvación de España frente al ateísmo comunista y la anti-España.

La percepción de la Guerra Civil como cruzada se apreciaba ya en las palabras del cardenal Isidro Gomá a la Santa Sede en agosto de 1936 (véase p. 22). Pero la máxima expresión pública de la teología política del nacional-catolicismo vino dada por la influyente instrucción pastoral titulada *Las dos ciudades* del obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, publicada el 30 de septiembre. Aplicando la alegoría agustiniana de las dos ciudades contrapuestas, el prelado veía la guerra como manifestación de "dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal": a un lado, la ciudad terrenal de los "sin Dios", la zona republicana dominada por "la revolución", donde "comunistas y anarquistas son los hijos de Caín"; al otro, la ciudad celeste de "los hijos de Dios", la zona que ha asumido la tarea de "la contrarrevolución", donde florecen "el heroísmo y el martirio […] en amor exaltado a España y a Dios". La sacralización del esfuerzo bélico insurgente como "cruzada" era su corolario lógico: "Estemos dispuestos a cuantos nuevos sacrificios sean precisos por la causa de la Religión y de la Patria, pues todos ellos no son nada ante la alteza de tan sublimes ideales".

El decidido apoyo católico convirtió a la iglesia en la fuerza institucional de mayor peso, tras el ejército, en la conformación de las estructuras políticas estatales que germinaban en la España insurgente. La compensación por parte de los generales a ese apoyo vital no pudo ser más generosa. Una catarata de medidas legislativas fue anulando las reformas republicanas (ley de divorcio, cementerios civiles, educación laica, supresión de financiación estatal, etcétera) y entregando de nuevo al clero católico el control de las costumbres civiles y de la vida educativa y cultural.

La Junta de Burgos había iniciado el proceso de devolución a la iglesia de su protagonismo mediante la orden del 4 de septiembre de 1936 que ordenaba la "destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas", dejando en ellas "únicamente" las "obras cuyo contenido responda a los santos principios de la Religión y la Moral cristiana". En aquella misma fecha, se dictaba otra orden "suprimiendo, desde luego, la práctica de la coeducación", medida republicana que había sido considerada por la jerarquía como "un crimen ministerial contra las mujeres decentes". Poco tiempo después, la iglesia quedaba exenta de la contribución fiscal y conseguía apoyo estatal a su labor pastoral: las fiestas católicas se hicieron oficiales, la censura eclesiástica empezó a controlar la vida intelectual y las ceremonias religiosas devinieron actos masivos de culto oficial y tinte barroquizante (en expresión de Giuliana Di Febo).

Fuera o no la ciudad de Dios anhelada por la jerarquía eclesiástica, lo cierto es que la España sublevada sí demostró desde el principio propósito de reacción contra las reformas democráticas republicanas y de restauración autoritaria del sistema de dominación social vigente hasta 1931. La declaración del estado de guerra, que ya había significado la proscripción de todo tipo de huelgas y actividades opositoras bajo pena de muerte, había proseguido con la ilegalización de los partidos y sindicatos de izquierda y con la prohibición de toda actividad partidaria y sindical. Esas medidas significaron la desarticulación de las organizaciones de resistencia de la clase obrera industrial y del campesinado jornalero, grupos

sociales que desde entonces quedaron indefensos ante una catarata de decretos y leyes encaminada a la revisión de sus condiciones de trabajo.

La voluntad de restablecer el orden anterior se apreció sobremanera en la política agraria, volcada a la liquidación de la reforma republicana y al aplastamiento de la resistencia jornalera frente al dominio de la oligarquía latifundista y los propietarios rurales. Sucesivos decretos dictados por la Junta fueron disponiendo que "las fincas rústicas, invadidas por campesinos o jornaleros, […] y cuyos propietarios deseen recuperarlas para su explotación, se reintegran a la plena disposición de sus dueños". El proceso de contrarreforma agraria "fue una auténtica contrarrevolución, con la ocupación de las tierras por sus antiguos propietarios sin apenas control por parte del Estado" (palabras de Carlos Barciela). Y todo al compás de un expolio de los colonos y de una represión durísima de los jornaleros significados por su apoyo a las izquierdas. La nueva ordenación agraria permitió la creación de un marco económico favorable a la continuidad de las arcaicas explotaciones, gracias a la fuerte rebaja de sus costes laborales y a la garantía de reserva del mercado nacional para su producción.

La legislación relativa a las relaciones laborales en la industria y los servicios mostró iguales signos de reaccionarismo social. El sometimiento de la clase obrera a las directrices patronales mediante la anulación de la capacidad reivindicativa de sus sindicatos fue seguido por una política de intervencionismo estatal militarizado. El Nuevo Estado pretendía conseguir "productores disciplinados" (palabras posteriores del Fuero del Trabajo) que asumieran su deber de "fidelidad y subordinación" al "jefe de empresa", comprendieran que "la producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la Patria", y renegaran de "actos individuales o colectivos que de algún modo turben la normalidad de la producción o atenten contra ella", puesto que los mismos "serán considerados como delitos de lesa patria" y "objetos de sanción adecuada".

Las autoridades militares impusieron así una férrea disciplina laboral, anularon la contratación colectiva, reforzaron las

competencias directivas de la patronal en relación con sus obreros y dictaron medidas legales tendentes a rebajar los salarios e incrementar la jornada laboral. Esa situación, junto con la orientación autárquica de la política económica general, propició una elevada tasa de explotación de la fuerza de trabajo y una correlativa recuperación de las ganancias empresariales.

A finales de septiembre de 1936, los triunfos militares cosechados básicamente por Franco (el día 28 había liberado el Alcázar de Toledo de su asedio al precio de un desvío de su avance sobre Madrid) y la expectativa de un próximo asalto final sobre la capital, plantearon a los generales la necesidad de concentrar la dirección estratégica y política en un mando único para aumentar la eficacia del esfuerzo de guerra. Una situación de fuerza como la representada por la junta de generales no podía prolongarse sin riesgos internos y diplomáticos. Primero, porque esa dirección colegiada dificultaba la "unidad de mando" exigida por la nueva escala de las operaciones militares y afrentaba la visión jerárquica de unos militares que anhelaban el restablecimiento del "principio de autoridad" único e indiviso. Y, segundo, porque Mussolini y Hitler apremiaban en ese sentido, su apoyo militar y financiero era inexcusable y habían apostado por Franco como su interlocutor en España. Por eso mismo, fueron los asesores de Franco los que suscitaron la cuestión al compás de los avances triunfales de las columnas africanas por el valle del Tajo: su hermano, el ingeniero naval Nicolás Franco, convertido en su secretario particular y principal asesor político por entonces; el general Kindelán, jefe de la pequeña fuerza aérea insurgente; y el general José Millán-Astray, el condecorado mutilado que había sido fundador de la Legión y era amigo íntimo de Franco.

La cuestión del "mando único" fue objeto de consideración por la Junta en dos reuniones sucesivas celebradas en un aeródromo de Salamanca. El 21 de septiembre los reunidos aprobaron el principio de disolución del organismo y la elección de Franco como "Generalísimo" de todas las fuerzas sublevadas y líder político único de manera combinada, con la única reserva de Cabanellas, que

cuestionaba esa concentración de poderes y trataba de limitar la duración del nombramiento. La segunda reunión tuvo lugar el 28 de septiembre, justo a la par que Franco anunciaba la liberación del Alcázar y aseguraba su posición imbatible en el campo propagandístico con ese éxito crucial. Sus compañeros de armas cedieron con mayor o menor entusiasmo y aceptaron firmar el decreto que le nombraba "Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire" (función militar-estratégica) y "Jefe del Gobierno del Estado Español" (función política-administrativa), confiriéndole expresamente "todos los poderes del Nuevo Estado" a fin de permitirle "conducir a la victoria final y al establecimiento, consolidación y desarrollo del Nuevo Estado, con la asistencia fervorosa de la Nación".

El encumbramiento político de Franco significaba la conversión de la junta militar colegiada en una dictadura militar de carácter personal, con un titular individual investido por sus compañeros como representante supremo del único poder imperante en la España insurgente. Y así fue escenificado en la ceremonia de "transmisión de poderes" que tuvo lugar en la Capitanía General de Burgos el 1 de octubre de 1936. Franco fue consciente de la inmensa autoridad que recibía y de su procedencia militar originaria. Por eso había reconocido en privado tras su elección: "éste es el momento más importante de mi vida". Y dejó constancia de ello en su discurso público de aceptación del cargo:

> Mi general, señores generales y jefes de la Junta: Podéis estar orgullosos; recibisteis una España rota y me entregáis una España unida en un ideal unánime y grandioso. La victoria está de nuestro lado. Ponéis en mis manos a España y yo os aseguro que mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme. Llevaré la Patria a lo más alto o moriré en el empeño.

No cabía duda de que los títulos de Franco para asumir el cargo eran superiores a los de sus potenciales rivales. Ante todo, era exponente máximo de las características del militar español sublevado por su origen familiar (había nacido en 1892 en Ferrol en el seno de una familia de rancia tradición militar en la Armada), por su trayectoria bélica (un decenio destinado en Marruecos luchando

al frente de tropas de choque como la Legión), por su labor técnica (primer y único director de la Academia General Militar fundada en 1927 y clausurada en 1931) y por su protagonismo corporativo durante el quinquenio republicano (alma de la represión de octubre de 1934 y Jefe del Estado Mayor Central hasta su cese por el gobierno frentepopulista). Además, por esa asombrosa suerte que Franco tomaba como muestra de favor de la Divina Providencia, habían desaparecido los políticos (Calvo Sotelo y Primo de Rivera) y generales (Sanjurjo y Goded) que hubieran podido disputarle la preeminencia. A los restantes mandos los superaba por jerarquía (Mola), triunfos militares (Queipo y Cabanellas) y conexiones políticas internacionales (había conseguido la vital ayuda militar y diplomática de Hitler y Mussolini).

Por otra parte, en función de su reputado posibilismo político, Franco también gozaba del apoyo tácito de todos los grupos derechistas, que confiaban en poder inclinar a su favor sus designios futuros. Y también contaba su condición de católico ferviente, una característica que había heredado de su piadosa madre y reforzado tras su matrimonio con Carmen Polo, una altiva y bella joven de la oligarquía urbana ovetense. Por eso gozaba de la simpatía de la jerarquía episcopal y del grueso de los católicos españoles. La primera no tardaría en bendecirlo como *homo missus a Deo* encargado providencial del triunfo de la cruzada: "Caudillo de España por la Gracia de Dios". En justa correspondencia, Franco iba a convertir a la iglesia en el segundo pilar básico de su régimen de poder personal, tras el ejército, porque compartía su visión del catolicismo militante e integrista mayoritario en el país. Y no era mero ropaje para consumo público (a pesar de los beneficios que le reportó en el plano interno e internacional). Era una convicción arraigada que le llevaría a tener consigo, desde principios de 1937, durante toda la guerra y hasta su muerte, la reliquia de la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús (la "santa de la Raza").

EL CAUDILLO DE ESPAÑA Y LA JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO

El 1 de octubre de 1936, en Burgos, había nacido el régimen franquista en medio de una cruenta guerra civil y sobre la base de una dictadura militar de mando colegiado que había optado por entregar sus omnímodos poderes a uno de sus integrantes de manera personal y vitalicia. Un depositario de "todos los poderes del Estado" que al principio no había reservas en llamar "dictador", al modo del diario *La Gaceta Regional* de Salamanca al informar de la noticia un día después: "El nuevo Dictador de España dirigió la palabra a una imponente muchedumbre". Un dictador que pronto pasaría a ser, sencillamente, el "Caudillo de España", utilizando un vocablo de amplia circulación para denotar a los jefes militares heroicos y admirables. Un vocablo que, además, permitía fusionar sin distingos en una sola magistratura las dos transferidas por la Junta: la autoridad militar para librar la guerra ("Generalísimo") y la autoridad política para edificar el nuevo aparato estatal ("Jefe del Gobierno del Estado").

De hecho, a partir de aquel primero de octubre (declarado "Fiesta Nacional del Caudillo"), se pondría en marcha una campaña de propaganda destinada a promocionar por todos los medios (impresos, radiofónicos, cinematográficos) la figura de Franco como "Caudillo de España", con una sucesión de consignas de inserción obligatoria en la prensa, los partes de radio o los noticiarios de cine: "Una Patria, un Estado, un Caudillo". Era el comienzo de un culto carismático a la persona de Franco, inspirado en el de Mussolini (el *Duce*) y Hitler (el *Führer*), ensalzando con ese título de "Caudillo" al nuevo dictador español que asumía la *plenitudo potestatis* y ejercía los máximos poderes ejecutivos, legislativos y judiciales a la par, de manera vitalicia y sin posibilidad de remoción. En otras palabras: un dictador soberano que se convertiría en la clave del arco del nuevo régimen que estaban construyendo los insurgentes durante la Guerra Civil.

En su primera decisión política firmada como "Jefe del Estado" (la fórmula "Jefe del Gobierno del Estado" le pareció limitativa de su autoridad), Franco creaba su primer organismo de gestión civil para hacer frente a los crecientes problemas de administración. La

llamada "Junta Técnica del Estado", con sede en Burgos, estaría encargada de asegurar las funciones administrativas hasta ver "dominado todo el territorio nacional" (tras la ocupación de Madrid) y sometiendo sus dictámenes "a la aprobación del Jefe del Estado".

Presidida por un militar de la estricta confianza de Franco (el general Dávila y luego el general Francisco Gómez-Jordana), se vertebraba en siete "Comisiones" prefiguradoras de los futuros ministerios a cargo de civiles de distinta procedencia política pero comprometidos con la causa bélica: el escritor alfonsino José María Pemán (Cultura y Enseñanza), su correligionario y abogado Andrés Amado (Hacienda), el financiero carlista Joaquín Bau (Industria y Comercio), el ingeniero católico derechista Alfonso Peña Boeuf (Obras Públicas) y otros técnicos similares en Trabajo, Justicia y Agricultura. A todos les supervisaba el Cuartel General del Generalísimo (instalado en el Palacio Episcopal de Salamanca) a través de una Secretaría General del Estado que ocupaba Nicolás Franco. Y si bien ningún falangista notorio asumió entonces un cargo relevante, el peso creciente de su ideario quedó bien reflejado en los primeros discursos del Caudillo:

> España se organiza dentro de un amplio concepto totalitario mediante aquellas instituciones nacionales que aseguren su totalidad, su unidad y su continuidad. La implantación de los más severos principios de autoridad que implica este movimiento no tiene justificación en el carácter militar, sino en la necesidad de un regular funcionamiento de las complejas energías de la Patria. […] Desprestigiado el sufragio popular inorgánico, la voluntad nacional se manifestará oportunamente a través de aquellos órganos técnicos y corporaciones, que enraizados en la entraña misma del país representen de una manera auténtica su ideal y sus necesidades.

Apenas convertido en Caudillo, Franco tuvo que preparar la ofensiva final sobre Madrid, que habría de comenzar a primeros de noviembre de 1936. Y en el decisivo frente madrileño cosechó su primer revés político y militar. El ataque frontal tuvo que ser suspendido a final de mes por agotamiento de los asaltantes ante la fortaleza defensiva enemiga, reforzada por la llegada de los primeros suministros bélicos de la Unión Soviética. La intensificación de la

ayuda material ítalo-germana (ambas dictaduras reconocieron entonces a la administración de Franco como gobierno *de iure*) no consiguió evitar la transformación de lo que se esperaba que fuera una guerra breve en un conflicto de larga duración. Al mismo fin contribuyó el fracaso de varias ofensivas franquistas por los flancos norte, sur y este de la capital, que se sucedieron hasta marzo de 1937.

La inesperada prolongación de la guerra obligó a Franco a centrar su atención en los problemas planteados por la consolidación de su régimen de autoridad personal omnímoda. Esa necesidad de perfilar la configuración jurídica del Nuevo Estado fue exigida por la tímida reactivación de las actividades políticas de los partidos que disponían de milicias y cuyo concurso bélico era irreemplazable. En el caso de Falange, la cuestión no era urgente dada la desaparición de José Antonio, que la había convertido en un gran cuerpo sin cabeza y escenario de una guerra intestina entre el grupo directivo aglutinado en torno a sus familiares (Pilar Primo de Rivera, convertida en sacerdotisa del culto al "ausente", y su hermano Miguel) y el nuevo jefe "provisional" de la organización, Manuel Hedilla (un joven sin experiencia política). En el caso de la Comunión Tradicionalista, la crisis estalló a principios de diciembre de 1936 cuando su líder, Fal Conde, intentó crear un cuerpo de oficiales carlistas para dirigir las milicias al margen de las estructuras militares para incrementar la influencia del tradicionalismo.

La reacción de Franco ante el desafío carlista a su autoridad y al exclusivo poder militar fue tan rápida como enérgica: Fal Conde tuvo que partir al exilio en Portugal como alternativa al fusilamiento previo consejo de guerra. Su papel directivo fue ocupado por el conde de Rodezno, líder carlista navarro, que acató la decisión de Franco y aceptó el decreto de integración de sus milicias en el ejército sin discusión (como igualmente lo hicieron las milicias falangistas). Como anotó la dirección carlista, era imprescindible obedecer al Caudillo porque "las circunstancias por las que atraviesa España no autorizan a crear dificultad alguna a los que tienen la responsabilidad del Poder y de la Guerra". De hecho, Franco no solo

había impuesto por vez primera su autoridad suprema a uno de los grupos políticos que le apoyaban, en un ejercicio de arbitraje inapelable que sería consustancial a su labor futura. También había comenzado a dividirlos internamente entre intransigentes reducidos a la impotencia y colaboradores beneficiados por el disfrute del poder político.

Para acometer los problemas políticos generados por la prolongación de la guerra, Franco tuvo la fortuna de contar pronto con la ayuda de Ramón Serrano Suñer, joven abogado del estado y exdiputado de la CEDA que era también su cuñado. El que pronto pasaría a ser llamado "el cuñadísimo" había llegado a Salamanca con su familia en febrero de 1937 tras evadirse de Madrid, donde había estado preso y habían sido asesinados sus dos hermanos. Convertido en ferviente falangista, se instaló a vivir en el Palacio Episcopal y, en virtud de su formación jurídica, fue desplazando a Nicolás Franco en el papel de consejero político principal del Caudillo (hasta que este envió finalmente a su hermano a Lisboa como embajador ante Salazar).

Con Serrano Suñer como mentor, Franco procedió a dar un paso crucial en la institucionalización de un "Nuevo Estado" que superara las deficiencias de lo que su cuñado llamaba "un Estado campamental":

> Era preciso convertir el Alzamiento en una empresa política. La guerra, la victoria, iba a liquidar irrevocablemente el Estado anterior a ella y eliminaba cualquier discusión sobre la continuidad o discontinuidad del régimen. […] Tácticamente, pues, urgía la configuración del Movimiento como un Estado.

Tras varias dudas, la ocasión propicia surgió en abril de 1937, cuando el fracaso de la última ofensiva sobre Madrid convenció a Franco de la necesidad de trasladar el frente de operaciones al norte para ir conquistando, pieza a pieza, la aislada franja republicana que iba desde Bilbao hasta Asturias. Afrontar la consecuente dilación de la victoria final exigía consolidar el proceso de institucionalización de su régimen de dictadura personal vitalicia, como Serrano Suñer aconsejaba. El paso decisivo se dio el 19 de abril de 1937, cuando,

sin previa consulta con los interesados, el Caudillo decretó la unificación forzosa de todos los partidos derechistas, "bajo Mi Jefatura", en "una sola entidad política de carácter nacional, que de momento, se denominará Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista)". El propósito de FET y de las JONS, "Gran Partido del Estado", era, "como en otros países de régimen totalitario", el de servir de "enlace entre la Sociedad y el Estado", "comunicar al Estado el aliento del pueblo" y divulgar en él "las virtudes político-morales de servicio, jerarquía y hermandad".

La medida unificadora, tomada por el Cuartel General de manera autónoma, fue aceptada disciplinadamente por los monárquicos, los católicos y los carlistas, que disolvieron sus organizaciones ya muy disminuidas en operatividad (aunque siguieran funcionando *de facto* como meras "familias" de sensibilidad política afín). Pero fue objeto de tibias reservas por un reducido sector falangista fulminantemente aplastado con la destitución, encarcelamiento y procesamiento de Hedilla. El hasta entonces discutido jefe provisional recibió dos condenas de muerte que solo fueron conmutadas por Franco tras recibir muchas peticiones de clemencia y una vez demostrada la "domesticación" de la Falange.

La creación de FET significó un incremento de poder político sustancial por parte de Franco, que dejaba de ser mero dictador militar, aunque sacralizado y bendecido por clérigos, para pasar a ser líder del partido único del estado y promotor del proceso de fascistización del régimen caudillista. La operación fue provechosa para ambas partes, el Caudillo y la vieja Falange, por una razón bien apreciada por el embajador alemán en Burgos: "Franco es un jefe sin partido; la Falange es un partido sin jefe". El corolario fue esa unificación que hizo de Franco el tercer Jefe Nacional de Falange, en sustitución de un primer jefe mitificado como "El Ausente" (José Antonio) y en lugar de un segundo jefe amortizado sin contemplaciones (Hedilla). Desde abril de 1937, Falange Española se había convertido en la Falange de Franco porque ambas partes habían entendido que lo suyo era un enlace de mutua conveniencia

y, de hecho, el matrimonio duraría hasta 1975 sin básicos problemas de relación.

Tras la unificación y al compás de los sucesivos triunfos militares en la campaña del norte (que terminaría con la conquista de Asturias en octubre de 1937), Franco procedió a consolidar su poder personal mediante una labor de institucionalización política muy influenciada por el modelo fascista italiano (más que por el alemán). Una labor sostenida por la confianza de Franco en la capacidad política de Serrano Suñer, que había ampliado estudios jurídicos en la universidad de Bolonia y tenía vínculos con los jerarcas fascistas italianos. En esas circunstancias, el partido unificado, férreamente controlado por el Cuartel General, se convertiría en el tercer pilar institucional (tras el ejército y la iglesia) de un régimen calificable ya como "franquista".

Por inspiración del "cuñadísimo" y con autorización de Franco, la unificación de abril de 1937 fue la señal para emprender una creciente fascistización política del régimen que distintos autores han estudiado en profundidad (Ismael Saz, Joan Maria Thomàs, Ferran Gallego): la progresiva infiltración en el estado de medidas políticas filo-fascistas (la sindicalización corporativa y el encuadramiento orgánico de las masas civiles), programas (el caudillaje carismático como doctrina legal y el irredentismo imperialista como aspiración diplomática), personal político proveniente del viejo falangismo (que llegó a eclipsar a otras élites tradicionales e inundó las escalas municipales y provinciales de la administración estatal) y, desde luego, símbolos y rituales públicos. En consecuencia, desde el principio, FET tuvo mucho más de la antigua Falange que del viejo carlismo, la CEDA o el monarquismo. Por eso se hizo oficial el saludo fascista con el brazo en alto y la palma extendida, el emblema del "Yugo y las Flechas", el canto del "Cara al Sol", el uniforme de camisa azul (con la boina roja carlista), el culto político-religioso "a los mártires de la Cruzada por Dios y por España". También en la elección de los nuevos dirigentes predominó esa orientación: solo en nueve provincias correspondió la jefatura del partido a un antiguo carlista, frente a las veintidós donde la ocupó un falangista.

El abandono de los presupuestos políticos del conservadurismo tradicional en beneficio del ideario fascista se apreció pronto en las declaraciones del Caudillo. En julio de 1937, había reconocido a la United Press que la España nacionalista "seguirá la estructura de los regímenes totalitarios, como Italia y Alemania". Un mes más tarde, los nuevos estatutos de Falange demostraban la creciente hegemonía fascista sobre otros integrantes de la coalición antirrepublicana: definición del partido como "Movimiento Militante inspirador y base del Estado Español"; referencias a la "misión católica e imperial"; proclamación de la doctrina del caudillaje ("el Jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad. El Jefe responde ante Dios y ante la Historia"); asunción de la tarea de "encuadrar el Trabajo y la producción" mediante "Organizaciones Sindicales" de "graduación vertical y jerárquica a la manera de un Ejército creador, justo y ordenado", etcétera.

En octubre de 1937, la constitución del Consejo Nacional de Falange, cuyos cincuenta miembros fueron nombrados libremente por el Caudillo, revalidó el maridaje entre Franco y el fascismo español. Aquel se apoyaba en el partido para reforzar con una tercera fuente de legitimidad la base de su poder omnímodo, para disponer de un modelo político integrador de la sociedad civil, y para canalizar la movilización de masas exigida por la guerra y los nuevos tiempos. El falangismo de camisa vieja, privado de líder carismático y fracturado por rivalidades cantonales, asumía el liderazgo de un general victorioso a cambio de grandes parcelas de poder en el régimen y la expectativa de ampliarlas en el futuro.

El escritor Dionisio Ridruejo, entonces joven líder falangista a cargo de la propaganda oficial, comprendió bien que oponerse a los planes de Franco hubiera sido suicida. En consecuencia, tanto él como Pilar y Miguel Primo de Rivera o Raimundo Fernández Cuesta, la facción "legitimista" que tanto había criticado la moderación hedillista, aceptaron la conversión de Franco en Caudillo de la nueva Falange como única vía para realizar la "Revolución nacional-sindicalista" al compás de la guerra y gracias a un "caudillaje cimentado en la potencia militar". Pero con la esperanza de que ese

Caudillo aceptara el asesoramiento de sus fieles seguidores, como no dejaría de apuntar Ridruejo públicamente: "El Caudillo no está limitado más que por su propia voluntad, pero esta voluntad limitativa es justamente la razón de existir del movimiento".

Sin embargo, el proceso de fascistización puesto en marcha desde abril de 1937 en ningún momento puso en duda que el ejército "era la base del poder ya creado", que la iglesia católica era un intocable pilar institucional del "Nuevo Estado", ni que el "Movimiento Nacional" (la otra fórmula para referirse a FET) era una amalgama de grupos derechistas unida por el "dogma negativamente común" del repudio de la República (palabras de Serrano Suñer). Franco se encargaría de recordar siempre esa fuente del origen de su poder y ese perfil definitorio de la unidad sellada por la guerra: "En definitiva: somos la contrafigura de la República".

EL GOBIERNO DE LA VICTORIA DE UN ESTADO FASCISTIZADO

A finales de enero de 1938, poco antes del comienzo de la gran ofensiva militar que habría de dividir en dos el territorio republicano con la llegada de sus tropas al Mediterráneo, Franco ratificó esos rasgos fascistizantes de su régimen con una medida crucial. Previendo el desplome militar de sus enemigos y asumiendo su condición de árbitro supremo inapelable, decidió conformar su primer gobierno regular en sustitución de la interina Junta Técnica del Estado.

El gobierno anunciado el 30 de enero de 1938 era un ejecutivo de once miembros con representantes de todas las "familias" políticas. Siguiendo una pauta de equilibrios que casi nunca variaría, había alta representación de ministros militares que se reservaban las carteras de Defensa (Dávila), Orden Público (Martínez Anido), Industria (Juan Antonio Suanzes) y Exteriores (que llevaba anexa la vicepresidencia y estaba en manos de Gómez-Jordana). Falange tomaba a su cargo las carteras "sociales" de Agricultura (Fernández

Cuesta, secretario general de FET), Organización y Acción Sindical (Pedro González Bueno) y la de Interior (Serrano Suñer, hombre fuerte del gobierno por su condición de "cuñadísimo"). El conde de Rodezno en Justicia era el inexcusable exponente del carlismo, en tanto que el profesor Pedro Sainz Rodríguez representaba al monarquismo alfonsino en el ministerio de Educación, junto con Andrés Amado en la cartera de Hacienda. El titular de Obras Públicas, Peña Boeuf, ya había dirigido esa área en la Junta Técnica y permaneció a su frente por su competencia profesional.

Paralelamente a la formación del gobierno, Franco aprobó el 30 de enero la "Ley de Administración Central del Estado", vinculando la presidencia del gobierno con la jefatura del estado y ratificando su condición de dictador con plenos poderes ejecutivos y legislativos, solo responsable "ante Dios y la Historia". Su artículo 17 prescribía: "Al Jefe del Estado, que asumió todos los Poderes por virtud del Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general".

Así pues, al comenzar el llamado "segundo año triunfal", seguro de sus apoyos internacionales, Franco avanzaba en la empresa de consolidar un estado central militarizado en claro proceso de fascistización, a la par que aprovechaba al máximo los crecientes recursos económicos que sus victorias iban reportando (la siderurgia vasca y la minería asturiana, por ejemplo). Y todo ello sin que ocasionales reveses militares ni el espectro del hambre y las privaciones materiales socavaran la eficacia de su esfuerzo bélico o la unidad política e ideológica de su retaguardia. Entre otras cosas, porque una gran parte de la financiación de los gastos de guerra pudo dilatarse en el tiempo gracias a los créditos librados por Italia y Alemania y sobre la base de la reorientación del comercio exterior hacia esos países acreedores. En agosto de 1938, el representante británico en la zona franquista remitió a Londres un informe que subraya la buena situación interior de la zona franquista sin eludir ningún detalle:

> El orden público continúa siendo bueno. En general, la gente está bien alimentada, decentemente vestida y contenta. Los precios han subido pero poco y, claro está, los bienes importados han desaparecido del mercado. Pero, realmente, no hay signos externos de depresión. […] De hecho, en todas partes reina una apariencia externa de contento y normalidad. Por supuesto, la misma es en parte equívoca. En todos los lugares hay en marcha rigurosas medidas de represión.

También bajo el nuevo gobierno, de la mano de Sainz Rodríguez en Educación, la iglesia continuó reforzando el control católico sobre la vida cultural del país, cristalizando la ideología del nacional-catolicismo como simbiosis de ortodoxia católica y nacionalismo español intransigente. José Pemartín, alto cargo ministerial, reafirmó por entonces "la prohibición absoluta y total de la difusión proselitista de las Doctrinas anti-católicas". Ese catolicismo militante y fanático implicó una depuración radical del personal educativo desafecto: a finales de noviembre de 1938 habían sido sometidos a expediente depurativo (y en su caso apartados del cargo o sancionados) "prácticamente todos los maestros" (casi 52.000), además de 1.339 profesores de enseñanza secundaria y 1.101 profesores de universidad.

Esa profunda depuración del personal docente fue solo una de las facetas de la generalizada purga de los grupos y sectores considerados hostiles o disidentes. Como ya hemos señalado, la represión inclemente de todo enemigo declarado o potencial había sido una característica definitoria de la sublevación desde el principio, con la finalidad de atajar cualquier resistencia mediante la eliminación física y la intimidación moral. Franco reconocería posteriormente ese propósito con insólita distancia personal en conversación privada con su primo y ayudante militar: "Las autoridades tenían que prever cualquier reacción en contra del Movimiento por elementos izquierdistas. Por esto fusilaron a los más caracterizados".

La conversión del golpe militar en guerra civil transformó esa represión inmediata en una persistente política de depuración y "limpieza" de los enemigos en la retaguardia. De ese modo, los "paseos" y asesinatos irregulares de los primeros meses (como el

que se cobró la vida del poeta Federico García Lorca en Granada a mediados de agosto de 1936) fueron reemplazados por juicios sumarísimos en consejos de guerra militares. El volumen e intensidad de esa represión organizada cumplía una deliberada finalidad político-social "redentora" y no era resultado de un estallido espontáneo de violencia pasional como consecuencia de las hostilidades. Era un recurso estratégico conocido por los africanistas a partir de su experiencia colonial y presente en casi todas las guerras, civiles o interestatales: el uso de la violencia ejemplarizante que no solo elimina a resistentes activos, sino que por su brutalidad intimida y somete a los supervivientes menos peligrosos.

Un caso paradigmático de esa funcionalidad represiva se produjo tras la ocupación de la ciudad de Badajoz por las tropas de Franco al mando de Yagüe el 14 de agosto de 1936. Fue una operación clave que permitió unir las dos zonas insurgentes y asegurar la frontera portuguesa (facilitando la llegada de la ayuda logística de esa procedencia). Fue también una operación cruenta porque la defensa miliciana había sido por primera vez tenaz, ocasionando muchas bajas a los atacantes, soldados curtidos en una guerra colonial despiadada cuyos expeditivos métodos llevaron a suelo peninsular. Y por ambas razones fue seguida de una matanza de los defensores capturados y de otros sospechosos de desafección política, acción desarrollada por las calles de la ciudad, en su plaza de toros y en las proximidades del cementerio. No es verosímil que la matanza llegara a sumar casi dos mil víctimas en un solo día en una urbe de 40.000 habitantes, como alegaría la propaganda republicana con exageración y comprensible horror. Pero sí es evidente que sumó centenares puesto que la ciudad fue escenario de un mínimo de 530 víctimas mortales documentadas entre el 14 de agosto y finales de diciembre de 1936, en tanto que el conjunto de la provincia sumaría más de 11.000 muertos por acción represiva desde agosto de 1936 y hasta muy avanzada la posguerra (entre otros, casi 8.000 "paseados", 1.143 fusilados tras consejo de guerra, 572 fallecidos en prisión, 146 desaparecidos y 79 muertos en acción guerrillera). Como ha señalado al respecto Fernando Sánchez Marroyo:

> La arbitrariedad y la violencia de la represión, fruto de la generalización de la aplicación automática del bando de guerra, se explican en función de la propia debilidad numérica de los atacantes, obligados además a una marcha contra reloj (como reconoció el propio Yagüe). Un escrupuloso y auténtico ejercicio penal hubiese debido seleccionar cuidadosamente, a fin de exigir las máximas responsabilidades, a los que tenían delitos de sangre. Pero no había tiempo y era preciso, además, imponerse por el terror, lo que explica la exposición pública de los cadáveres en los primeros momentos.

En general, la "limpieza" represiva se cebó con dirigentes y militantes destacados de partidos políticos y sindicatos de izquierda, así como con autoridades republicanas, militares enemigos tildados de "traidores" y afiliados a las logias masónicas (consideradas sectas extranjerizantes, anticatólicas y antipatrióticas por su defensa de la tolerancia religiosa). Esa política represiva fue responsable de un elevadísimo número de muertes durante la guerra que pudo alcanzar las cien mil víctimas (más otras treinta mil en la posguerra). Unas muertes que se acumularon en el sur de España y durante el verano "caliente" de 1936 en claro reflejo de la tensión social allí vigente y de la dureza de las operaciones de las columnas africanas: las provincias andaluzas sumarían más de 47.000 víctimas mortales.

No cabe duda que ese inmenso "pacto de sangre" sellado por la represión en retaguardia tuvo el efecto político de garantizar para siempre la lealtad de los combatientes sublevados y luego vencedores hacia Franco, por temor a la hipotética venganza de los vencidos. Esa misma sangría también representó una útil "inversión" política respecto a los derrotados: los que no habían muerto quedaron mudos y paralizados por el miedo durante mucho tiempo. Y cabe señalar que mientras esa vesania homicida se desplegaba hubo pocos pronunciamientos críticos similares al que haría el 15 de noviembre de 1936 el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea: "¡No más sangre, no más sangre! No más sangre que la que quiere el Señor que se vierta, intercesora, en los campos de batalla, para salvar a nuestra Patria gloriosa y desgarrada". De hecho, la crucial carta pastoral colectiva de los obispos españoles a los católicos de todo el mundo, publicada en julio de 1937, amortiguaría esas aisladas reservas sobre "excesos" no autorizados en función de la

extrema violencia del enemigo ateo y comunista: "Toda guerra tiene sus excesos; los habrá tenido, sin duda, el movimiento nacional; nadie se defiende con total serenidad de las locas arremetidas de un enemigo sin entrañas".

En el plano político, en la primavera de 1938, ya era evidente que el Caudillo no concebía su dictadura como una solución política interina (al modo de Primo de Rivera), sino como institución vitalicia. Y, para desmayo de algunos de sus valedores monárquicos (como Kindelán), empezó a dejar claro que no tenía intención de proceder de inmediato a la restauración monárquica ni en la persona del rey Alfonso XIII (exiliado en Roma) ni en su hijo menor y heredero, el infante don Juan de Borbón. En julio de 1937 había dado la primera indicación en ese sentido en una entrevista al diario *Abc* de Sevilla: "Si el momento llegara de la Restauración, la nueva Monarquía tendría que ser, desde luego, muy distinta de la que cayó el 14 de abril de 1931". Comenzaba así el largo trayecto hacia la futura "instauración" de una monarquía franquista como alternativa a la hipotética "restauración" de la previa monarquía liberal.

Ese propósito manifiesto de permanencia en el poder estaba en la base del apoyo de Franco al proceso de fascistización, que dio dos nuevos pasos decisivos durante el año 1938. El 9 de marzo, el Caudillo aprobó el Fuero del Trabajo, la primera de las llamadas "leyes fundamentales" del régimen franquista y auténtico exponente de la creciente influencia italiana. El texto, además de considerar la huelga y toda perturbación de "la normalidad de la producción" como "delitos de lesa patria", incluía una declaración de principios resueltamente filo-fascista:

> Renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado, Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una acción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de canalizar –con aire militar, constructivo y gravemente religioso– la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez y para siempre la Patria, el Pan y la Justicia.

Apenas un mes después, el 22 de abril, fue aprobada otra disposición en igual sentido totalitario que llevaba la impronta de Serrano Suñer. La "Ley de Prensa" de 1938 imponía un férreo control gubernativo sobre las publicaciones mediante la institución de la censura previa, el derecho de veto sobre los directores de los medios, la reglamentación de la profesión de periodista y la obligación de atender las "normas dictadas por los servicios competentes" (eufemismo para las consignas). Tras la Ley de Prensa, la formación de la agencia de noticias EFE (enero de 1939) y la progresiva constitución de una amplia red de prensa y radio del Movimiento, completarían el dirigismo informativo imperante en la España franquista. Y con esa medida también se reforzó el culto carismático a Franco como providencial salvador de España de estatura sobrehumana. Baste recordar el tenor idolátrico de la portada del diario *Abc* con motivo de la celebración del segundo aniversario del "Alzamiento Glorioso del Ejército" el 17 de julio de 1938:

> Creemos en Dios. Creemos en España. Creemos en Franco. Esperamos en Dios. Esperamos en España. Esperamos en Franco. Amamos a Dios. Amamos a España. Amamos a Franco.

La orientación fascistizante impresa por Franco no agradó a todos los integrantes de la coalición dominante por obvios motivos de rivalidad con Falange. Los mandos militares lamentaban su decreciente influencia sobre el Caudillo y recelaban de la voluntad intervencionista de los falangistas sobre sus dominios "naturales": la política militar, el orden público y la seguridad interna y exterior. Los tradicionalistas se resentían de su escaso poder en el partido unificado y pese a su incontestada preeminencia en Navarra y las provincias vascas. Los alfonsinos veían con prevención el antimonarquismo falangista y su expansión entre el funcionariado de la administración estatal, provincial y municipal. Y, finalmente, los representantes del catolicismo político temían lo que los círculos vaticanos denominaban el peligro del "panestatismo" y la

competencia falangista en el adoctrinamiento y movilización de las masas.

Sin embargo, pese a ocasionales roces entre las "familias" por su respectiva cuota de poder en el régimen, todas asumían la necesidad de mantener "prietas las filas" (como demandaba el himno falangista) en el tramo final de su asalto militar contra una República acosada y aislada. Y todas convergían en el reconocimiento de Franco como Caudillo supremo e indiscutido por exigencia de las circunstancias bélicas y por ajustarse su régimen de mando personal a las tradiciones nacionales autoritarias y al marco internacional.

Lo mismo sucedía con las tres instituciones fundamentales del régimen. Para los militares, su "Generalísimo" era el Caudillo de la victoria y salvador de la patria en la hora de necesidad (así lo reconocerían con la concesión de la Gran Cruz Laureada de San Fernando el 19 de mayo de 1939). Para la iglesia católica, era el Caudillo de la cruzada por la gracia de Dios a tono con la idea teológica de la autoridad como investidura divina habitual en la tradición histórica española (así lo proclamarían con un *Te Deum* de acción de gracias por el triunfo militar en Madrid el 20 de mayo de 1936). Y para Falange, era el Caudillo de la revolución nacional que aseguraba su influencia política en el régimen (así lo reconocería Fernández Cuesta al proclamarlo "Jefe carismático" que "escapa de los límites de la ciencia política para entrar en el de héroe de Carlyle", el 18 de julio de 1938).

Desde luego, el componente militar de la síntesis institucional franquista siempre tuvo prioridad sobre el religioso católico y el populista falangista. Aunque solo fuera porque se estaba librando una guerra y el ejército era no solo instrumento de combate sino también modelo de reorganización de la vida sociopolítica de retaguardia. Y tanto clérigos como falangistas asumían con mayor o menor satisfacción esa circunstancia que tampoco les era ajena: "La vida es milicia y ha de vivirse con espíritu acendrado de servicio y de sacrificio", rezaba el 26° punto programático de la Falange (análogo

a una máxima famosa de san Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús).

En todo caso, el 1 de abril de 1939 Franco consiguió poner punto final a la Guerra Civil con una victoria rotunda. Desde entonces, la legitimidad de la victoria se convertiría en la fuente última de su derecho a ejercer el poder de manera personal y vitalicia. La Guerra Civil concluida triunfalmente habría de ser la columna vertebral sobre la que se erigió su larga dictadura de casi cuarenta años.

V
GUERRA Y REVOLUCIÓN EN LA ESPAÑA REPUBLICANA: DEL COLAPSO DEL ESTADO A LA PRECARIA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA

El estallido de la sublevación de julio de 1936 dejó la defensa de la República en manos de una combinación inestable de milicias organizadas por sindicatos y partidos de izquierda y de mandos del antiguo ejército profesional que permanecieron leales. Fue esa combinación la que consiguió aplastar la sublevación en dos áreas territoriales: el compacto triángulo formado por Madrid-Valencia-Barcelona y el aislado eje norteño entre Asturias y el País Vasco. Pero ese triunfo planteó con urgencia el grave problema sociopolítico que atenazaría al bando republicano durante todo el conflicto: ¿se luchaba por la continuidad de la reforma democrática republicana inaugurada en 1931 o más bien por una revolución social que rebasaba sus límites? Los sucesivos gobiernos republicanos presididos por Giral, Largo Caballero y Negrín afrontarían ese desafío hasta el desplome final protagonizado por el Consejo Nacional de Defensa del coronel Segismundo Casado en marzo de 1939. La dinámica sociopolítica de la República y su capacidad de resistencia quedarían lastradas por esas divisiones internas entre reformistas y revolucionarios.

EL GOBIERNO DE GIRAL: DESBORDAMIENTOS REVOLUCIONARIOS.

En la parte de España donde el golpe de julio de 1936 fracasó se produjo un colapso parcial de las instituciones del estado, debilitando la capacidad operativa del gobierno y las fuerzas democrático-reformistas y abriendo la vía al despliegue de un heterogéneo proceso revolucionario de alcance desigual. El acosado gobierno de Casares Quiroga que naufragó el 18 de julio había sufrido la defección de buena parte de sus jefes y oficiales, viéndose obligado a disolver los restos del ejército y quedando su defensa nominal en manos de una multiplicidad de milicias sindicales y partidistas improvisadas y a duras penas dirigidas por los escasos mandos militares que se mantuvieron leales y previa depuración de mandos hostiles o sospechosos: no menos de veintiún generales fueron fusilados en la zona republicana durante el transcurso de la guerra, según los datos de Salas Larrazábal. El hecho de que la República retuviera en su poder casi dos tercios de la minúscula fuerza aérea y algo más de la anticuada flota de guerra no mermaba esa desventaja crucial.

El ejecutivo presidido desde el 19 de julio por el farmacéutico José Giral, leal colaborador de Azaña, tuvo que enfrentarse al doble desafío de una rebelión militar triunfante en la mitad de España y al estallido de la revolución en el interior de su propia retaguardia. Y ello en un contexto internacional muy adverso en el que sus demandas de ayuda exterior tropezaron con las vacilaciones de Francia, con la hostilidad encubierta de Gran Bretaña y, finalmente, con el embargo de armas y municiones de la política europea de no intervención.

El gabinete estaba compuesto por políticos republicanos tan aterrados por la situación como sus dos jefes superiores. Aparte de los generales que asumían las carteras de Guerra (Castelló y luego Hernández Sarabia) y Gobernación (Pozas), incluía a miembros de Izquierda Republicana (Augusto Barcia en Estado, Enrique Ramos en Hacienda, Francisco Barnés en Instrucción, Mariano Ruiz Funes en Agricultura, Antonio Velao en Obras Públicas), de ERC (Joan Lluhí en Trabajo) y de Unión Republicana (Bernardo Giner de los Ríos en Transportes). Su gestión estuvo lastrada por sus propias deficiencias

(escaso apoyo social y parlamentario), por el colapso de las instituciones estatales (apenas tenía poder real efectivo en la capital) y por la falta de asistencia de otras fuerzas políticas y sindicales (el socialismo ugetista, en especial) nominalmente integradas en el Frente Popular. El jefe del ejecutivo confesaría a Azaña sus tribulaciones con amargo pesar:

> Giral recuerda la situación en que se halló, minada no solamente por el barullo y la indisciplina visibles, sino por el despego sordo y la hostilidad mal encubierta de algunas organizaciones cuyo concurso había derecho a esperar, como la UGT […]. Giral conserva la carta en que Largo Caballero desaprobaba las disposiciones del Gobierno encaminadas a reconstituir un ejército, que sería 'el ejército de la contrarrevolución'. No admitía más que milicias populares.

En efecto, la compleja tarea de reconstruir un aparato militar jerarquizado y disciplinado, sometido al control de un embrión de estado mayor profesional, resultó dificultada por las tradiciones antiestatistas y antimilitaristas imperantes en la CNT y la UGT. Los militantes armados de ambas organizaciones (más los libertarios que los largo-caballeristas) se vanagloriaban de ser "milicianos del pueblo" y se negaban a convertirse en "soldados encuartelados y con uniforme". Por eso, en frentes tranquilos al principio como el de Aragón, dominado por milicias confederales catalanas, se dieron espectáculos insólitos según Michael Alpert: "Los hombres regresaban a Barcelona los fines de semana"; "discutían las órdenes"; "se negaban a entregar material a Milicias de diferentes opiniones políticas o a fortificar las posiciones".

En el caso de Cataluña, las milicias de la CNT-FAI pudieron llegar a sumar al principio del verano unos 13.000 hombres en varias columnas que operaban por su cuenta: la columna "Durruti" (mandada por el líder homónimo) en el frente de Fraga, la columna "Los Aguiluchos" (mandada por García Oliver) en la zona de Huesca, etcétera. Los otros grupos consiguieron movilizar muchos menos efectivos: la columna "Lenin" del POUM pudo sumar tres mil hombres (entre ellos el escritor George Orwell, que reflejaría su experiencia en *Homenaje a Cataluña*); las columnas de UGT llegaron a contar con

dos mil hombres. En el frente de Madrid, donde dominaban las milicias socialistas y ugetistas (como la columna del capitán Sabio que operaba en Guadarrama), la unidad miliciana más relevante fue el "Quinto Regimiento" del PCE, que serviría de escuela a mandos futuros (como Enrique Líster o Juan Modesto) y llegaría a movilizar veinte mil hombres hasta su disolución. En todo caso, el problema generado por aquella multiplicidad de milicias autónomas sería recordado por Azaña:

> Reducir aquellas masas a la disciplina, hacerlas entrar en una organización militar del Estado, con mandos dependientes del gobierno, para sostener la guerra conforme a los planes de un Estado Mayor, ha constituido el problema capital de la República.

La conformación de esas milicias populares como casi únicas fuerzas de combate reales fue una de las manifestaciones más evidentes del proceso revolucionario desatado en la retaguardia de la España republicana. Pero no fue el único porque la ola revolucionaria también se expresó en otras tres facetas dañinas para la autoridad estatal.

En primer lugar, la revolución provocó el surgimiento de múltiples comités y consejos autónomos, organismos de nueva planta formados por sindicatos y partidos de izquierda, que asumieron las funciones de dirección político-administrativa en su respectivo ámbito territorial, a veces con escasa o nula relación con el gobierno o sus representantes. Ese fue el caso del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, constituido en Barcelona el 21 de julio bajo la hegemonía de la CNT y la dirección de Durruti, García Oliver y Abad de Santillán que, si bien no eliminó al gobierno de la Generalitat de Companys, redujo su papel al mínimo formal para no provocar una guerra intestina entre anarquistas y restantes fuerzas políticas. Fue también el caso del Consejo de Aragón creado por las milicias confederales y presidido por Joaquín Ascaso para gestionar la revolución en la parte oriental aragonesa ocupada. Idénticas funciones tuvieron otros órganos similares cuya composición política estuvo algo más equilibrada entre socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos: el Comité Ejecutivo Popular de Levante

creado en Valencia; el Consejo de Asturias y León establecido en Gijón; la Junta de Defensa de Vizcaya formada en Bilbao (hegemonizada por el PNV liderado por José Antonio Aguirre y Manuel de Irujo), etcétera.

Fue una atomización del poder público tan intensa que un atribulado Azaña no dudaría en calificar como un "desastre" la situación. Un juicio realista confirmado ante las Cortes por quien sería pocos meses después jefe de gobierno de la República, el médico socialista Juan Negrín:

> Desarticulado el Estado, sin elementos de control sobre la vida pública, aquí ha sucedido lo que todos sabemos: la gente estaba atemorizada; no había una justicia, sino que cada cual se creía capacitado a tomarse la justicia por su mano. […] El Gobierno no podía hacer absolutamente nada porque ni nuestras fronteras, ni nuestros puertos estaban en manos del Gobierno; estaban en manos de particulares, de entidades, de organismos locales o provinciales o comarcales; pero, desde luego, el Gobierno no podía hacer sentir allí su autoridad.

En segundo orden, la revolución generó una ola de expropiaciones y colectivizaciones que alteró por completo la economía de la España republicana. Fue resultado de algo más que exigencias de control de guerra y tuvo su mayor desarrollo en zonas de predominio anarquista (como Cataluña), en tanto que fue más reducido en el País Vasco (donde el PNV, de filiación demócrata-cristiana, se alineó con la República por su promesa de concesión de la autonomía, cumplida en octubre de 1936). El impulso básico que alentaba ese proceso había sido alimentado por el diario cenetista barcelonés *Solidaridad Obrera* en múltiples denuncias antiburguesas:

> La sociedad actual es una sociedad organizada de atracadores. Desde el pequeño comerciante, pasando por el pequeño industrial, hasta llegar a los más potentes consorcios capitalistas, no hacen otra cosa que especular, que en palabras concretas quiere decir robar. […] Cada tienda, cada almacén, cada industria es una cueva de latrocinio.

Las medidas económicas revolucionarias tomaron la forma de colectivizaciones agrarias impuestas por las milicias sindicales (confederales en Aragón y Cataluña, socialistas largo-caballeristas en

Castilla-La Mancha o Murcia) que fueron legalizadas a la fuerza por las autoridades republicanas: hasta agosto de 1938 se había expropiado un mínimo de 5,45 millones de hectáreas (casi el 40% de la superficie útil) y el 54% de esa tierra expropiada había sido colectivizada. Según cálculos de Julián Casanova, probablemente 150.000 campesinos entraron a formar parte de esas colectividades cuyo mayor desarrollo se produjo en Castilla-La Mancha (452), Valencia (353) y Aragón (306).

No menos trascendencia tendrían las colectivizaciones urbanas (en Barcelona, desde los tranvías hasta los cines) y la generalizada imposición del "control obrero" (tutela sindical cenetista o ugetista) en las operaciones de las industrias, comercios y servicios de casi toda la retaguardia republicana. Según Burnett Bolloten, en torno a 18.000 empresas industriales y comerciales registradas en zona republicana había sido expropiadas por los sindicatos o el estado en los primeros meses de la guerra: tres mil en Barcelona y otras dos mil quinientas en Madrid.

Finalmente, para completar el cuadro de signos que delataba la quiebra básica de las funciones del estado, surgió otro fenómeno inequívocamente revolucionario: la represión incontrolada del enemigo de clase, fueran militares, sacerdotes, patronos burgueses o intelectuales derechistas (como el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, asesinado en Paracuellos del Jarama, y el ensayista Ramiro de Maeztu, asesinado en una cárcel de Madrid). Fue la "vergüenza de la República" para muchas de sus autoridades y un auténtico parámetro de la incapacidad gubernativa para imponerse a los acontecimientos durante los primeros meses del conflicto. El saldo final de esa represión primero inorgánica (mediante "paseos" a cargo de patrullas milicianas) y luego encauzada (a través de tribunales populares y ejecución de sentencias firmes) llegaría a totalizar la cifra ya mencionada de cerca de 55.000 víctimas (de ellas, no menos de 6.832 religiosos y 2.670 militares). Y se concentraría principalmente en la capital madrileña, Andalucía y Cataluña.

Desde luego, el "paseo" no fue mera "práctica de justicia expeditiva" sancionada por un pueblo libre (palabras de García Oliver), sino obra criminal apadrinada por organizaciones sindicales y políticas revolucionarias, con la complicidad forzada o voluntaria de agentes de la autoridad. *Solidaridad Obrera* llamaba ya el 24 de julio a tomar todo tipo de represalias contra los sublevados y sus simpatizantes de manera expresa: "¡Ojo por ojo, diente por diente!". Y el 15 de agosto, haciéndose eco de lo que era una vesania criminal extendida, el diario pedía en primera plana: "Los obispos y cardenales han de ser fusilados". Cinco días antes, el diario comunista *Mundo Obrero* también reclamaba en Madrid medidas enérgicas contra lo que pronto llamaría "la quinta columna" (el enemigo interno): "La consigna es: exterminio". Y una semana más tarde, en carta privada a su mujer, el periodista Luis Araquistáin, "cerebro gris" de Largo Caballero, vaticinaba: "Todavía pasará algún tiempo en barrer de todo el país a los sediciosos. La limpia va a ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio".

Lo peor de esa furia mortal revolucionaria llegaría entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, con la batalla de Madrid en pleno apogeo. Ante la orden de evacuación de presos hacia Valencia dictada por el gobierno republicano, dos organizaciones que formaban parte de la recién formada Junta de Defensa de Madrid (la Juventud Socialista Unificada, dirigida por Santiago Carrillo, y la Federación Local de CNT, liderada por Amor Nuño; ambos de veinte años) acordaron en secreto segregar del conjunto a un grupo de 2.400 prisioneros considerados "fascistas y peligrosos" para llevarlos a parajes apartados de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, donde sufrirán una suerte así registrada en el acta levantada y localizada por Jorge Martínez Reverte: "Ejecución inmediata. Cubriendo la responsabilidad".

Contra esa voluntad de quienes tenían las armas y carecían de escrúpulos políticos o morales, de poco sirvieron en los primeros meses los llamamientos a la contención y al respeto a civiles

inocentes. Quizá uno de los más tempranos fuera hecho por Prieto desde las páginas de *El Socialista* ya en agosto de 1936:

> No imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa. […] ¡No los imitéis! ¡No los imitéis! Superadlos en vuestra conducta moral.

Francisco Partaloa, fiscal del Tribunal Supremo de Madrid, tuvo ocasión de apreciar la represión en las dos zonas y de comprobar la actitud de las autoridades respectivas. Se vio obligado a abandonar la capital por su enfrentamiento con milicianos comunistas que dirigían una checa partidista y se exilió en París con la aprobación del ministro de Justicia. De allí se pasó a la zona franquista y fue encarcelado en Sevilla durante algún tiempo hasta ser liberado por intercesión de Queipo de Llano, su amigo de tiempo atrás. Afincado en Córdoba observó la justicia nacionalista en acción y la "máscara de legalidad" de los consejos de guerra militares:

> Que quede bien claro: tuve la oportunidad de ser testigo de la represión en ambas zonas. En la nacionalista, era planificada, metódica, fría. Como no se fiaban de la gente, las autoridades imponían su voluntad por medio del terror. Para ello, cometieron atrocidades. En la zona del Frente Popular también se cometieron atrocidades. En eso ambas zonas se parecían, pero la diferencia reside en que en la zona republicana los crímenes los perpetró una gente apasionada, no las autoridades. Éstas siempre trataron de impedirlos. La ayuda que me prestaron para que escapara no es más que un caso entre muchos. No fue así en la zona nacionalista.

Los efectos del doble proceso de colapso del estado e implosión revolucionaria fueron bien apreciados por los contemporáneos, con pavor o con emoción, según fueran sus sensibilidades. El sociólogo austríaco Franz Borkenau, que visitó la España republicana apenas iniciada la guerra, dejó un retrato nítido de ese proceso en Barcelona, capital de la anarquía mundial durante el corto verano de 1936. Su descripción refleja las cuatro dimensiones revolucionarias apuntadas con precisión:

> La primera impresión: trabajadores armados con su fusil al hombro, vestidos con trajes de paisano. […] La cantidad de expropiaciones llevadas a cabo en los pocos días transcurridos desde el 19 de julio es casi increíble. Los mayores hoteles, con sólo una o dos excepciones, han sido todos expropiados por organizaciones obreras […]. Prácticamente todos los propietarios industriales, según se nos dijo, habían o bien huido o sido asesinados y sus fábricas habían sido tomadas por los trabajadores. […] Todas las iglesias habían sido quemadas con excepción de la catedral y sus inapreciables tesoros artísticos, salvada gracias a la intervención de la Generalitat. […] Lo que en realidad sucedió, según parece, es que hubo sacerdotes asesinados, no porque disgustasen a alguien en particular, sino por el hecho de ser sacerdotes; los propietarios industriales, principalmente en los centros textiles de los alrededores de Barcelona, fueron asesinados por sus trabajadores en caso de haber sido incapaces de escapar a tiempo. […] La única autoridad son los sindicatos y en Barcelona la CNT es, de lejos, la más fuerte de las organizaciones obreras.

EL DILEMA LETAL: HACER LA REVOLUCIÓN O HACER LA GUERRA

La dinámica sociopolítica en la República durante toda la guerra estuvo determinada por la respuesta de cada partido político y organización sindical ante ese multiforme proceso revolucionario, cuya existencia fue la raíz de la falta de unidad de acción que lastró su defensa militar y su fortaleza institucional. En esencia, el dilema consistía en decidir si la revolución permitía hacer la guerra y tratar de ganarla o, por el contrario, si era un lastre para ambas cosas y había que revocarla para no ser derrotados.

El anarcosindicalismo y el ugetismo largo-caballerista defendían los cambios revolucionarios como garantía del apoyo obrero al esfuerzo de guerra y se negaban a disolver las milicias en un nuevo ejército regular y a otras medidas de recomposición del estado: la disolución de juntas y comités en favor de organismos gubernamentales delegados; la restitución de competencias de orden público a las fuerzas de seguridad; la centralización de funciones directivas económicas en manos de los ministerios; la imposición de una disciplina laboral que permitiera recuperar los

desplomados niveles productivos y asumiera la prohibición de huelgas en las fábricas de interés militar o en servicios de transporte de mercancías vitales, etcétera. Como le había recordado Giral a Azaña, la izquierda socialista vetaba toda medida gubernativa tendente a reconstituir el ejército con prédicas incendiarias como la que su diario *Claridad* anunciaba a finales de agosto de 1936: "Pensar en otro tipo de ejército que sustituya a las actuales milicias para de algún modo controlar su acción revolucionaria es pensar de manera contrarrevolucionaria". La retórica de la prensa libertaria de la CNT no era menos tajante:

> Los millares de combatientes proletarios que se baten en los frentes de batalla no luchan por la 'República democrática'. No combatimos, entiéndase bien, por la República democrática, combatimos por el triunfo de la Revolución proletaria. La revolución y la guerra hoy, en España, son inseparables. Todo lo que se haga en otro sentido es contrarrevolución reformista.

En el mismo frente revolucionario se alineaba el pequeño pero activo POUM, de orientación filo-trotskista e implantación en la Cataluña urbana. Como ya hemos visto, a principios de septiembre de 1936 su líder, Andreu Nin (exfuncionario de la Internacional Comunista que había regresado en 1930 después de residir diez años en la Unión Soviética) denunciaba la tentativa de restaurar "la República de Azaña" con vigor: "Contra el fascismo sólo hay un medio eficaz de lucha: la revolución proletaria".

Sin embargo, la debilidad de esa revolución socialista o libertaria estribaba en tres obstáculos igualmente insalvables. Por un lado, la propia fragmentación y mutuo recelo de las fuerzas sociopolíticas revolucionarias, que oscilaban entre la adopción práctica de medidas radicales de perfil colectivista y las dudas sobre la oportunidad (y posibilidad) de lanzarse a la conquista del poder político de manera abierta, implantando "la dictadura del proletariado" o la "dictadura anarquista" vagamente perfiladas en su prensa. Por otro, el decisivo contexto internacional hostil a un proceso revolucionario local que no solo era una fiesta popular antimilitarista, sino que afrontaba una guerra total contra un enemigo bien armado y poderoso, nutrido por

dos potencias militares como Alemania e Italia y no mal visto por el resto del mundo capitalista. Finalmente, el hecho de que su continuidad destruía la expectativa de una alianza eficaz entre las clases obreras y la fracción reformista de las pequeñas y medianas burguesías enfrentadas a la reacción militar en curso por su propia tradición liberal y progresista.

Por esas razones, desde principios de la contienda, fue fraguándose un pacto tácito entre el republicanismo burgués articulado por el gobierno de Giral, el socialismo de Prieto y el comunismo ortodoxo representado por el PCE, para reconstruir el poder estatal, centralizar la dirección de la actividad económica y deshacer la revolución en la medida en que su pervivencia dificultaba la defensa armada contra el enemigo. Con amargura, Azaña recordaría la situación creada en los primeros meses:

> El primer objetivo de una revolución es apoderarse del Gobierno. Aquí, por diversos motivos, no han sabido, no han podido o no han querido hacerlo. Por su parte, los Gobiernos no han aceptado ni prohijado la revolución. Todo ha quedado en desbarajuste, indisciplina, despilfarro de energías. Los Gobiernos lo han soportado mientras no podían revolverse contra ellos.

El adverso curso militar de la contienda en el verano y otoño de 1936 propiciaría un cambio de actitud de las fuerzas sindicales revolucionarias y su mayor disposición a hacer los "sacrificios" exigidos por la guerra. Así lo demandaba cada vez con más audiencia pública el ejecutivo de Giral, con ayuda del PSOE liderado por Prieto y de líderes comunistas como José Díaz, secretario general del PCE, y Dolores Ibárruri, *La Pasionaria*, diputada famosa por su elocuencia. No en vano, en apenas dos meses de combates en los frentes, las milicias habían demostrado su patente inutilidad para librar una guerra de envergadura: no habían detenido la progresión del ejército de África por los campos andaluces y extremeños poblados de miles de fervorosos militantes y tampoco habían logrado reconquistar la ansiada "capital confederal" (Zaragoza). Un miliciano anarquista del frente aragonés consignó amargamente: "No podíamos seguir luchando así. Hacía falta más organización". Y algo similar expresó Cipriano Mera, jefe miliciano

cenetista, al coronel Vicente Rojo durante la batalla de Madrid: "Póngame unos galones, una estrella: quiero mandar como mandan los militares; mandar y que me obedezcan, así, a rajatabla". La desesperación de los líderes anarquistas por ese desplome de sus ilusiones fue intensa pero formativa, como reconocerían en el informe al Movimiento Libertario Internacional que explicaba sus cesiones:

> Nuestras milicias, sin prácticas de tiro, sin ejercicios militares, desordenadas, que celebraban plenos y asambleas antes de hacer las operaciones, que discutían todas las órdenes y que muchas veces se negaban a cumplirlas, no podían hacer frente al formidable aparato militar que facilitaban a los rebeldes Alemania e Italia. Durruti fue el primero que comprendió esto y el primero que dijo: Hay que organizar un ejército. La guerra la hacen los soldados, no los anarquistas.

Si la marcha de la guerra miliciana había dejado un poso de frustración enorme a los tres meses de su inicio, también la experiencia de gestión de una economía de guerra socavaba las certezas de los líderes revolucionarios y sus militantes. Sencillamente porque librar la guerra total exigía poner en marcha medidas reclamadas por las fuerzas reformistas republicanas para tener una mínima posibilidad de resistencia: aumentar las horas de trabajo para incrementar la productividad industrial; reducir los salarios para rebajar los costes dadas las condiciones de escasez de materias; proscribir las huelgas y acortar los descansos en interés de la continuidad de la producción bélica a ritmos intensos, etcétera. Esa forzada conversión del sindicalismo revolucionario en sindicalismo de gestión de una política económica de guerra se apreció hasta en los nuevos lemas de intensificación del esfuerzo laboral: "El hecho de no trabajar o gandulear en la etapa del capitalismo estaba justificado, pero ahora que la empresa es nuestra, tenemos que poner el cuello: el que no trabaja es un fascista".

En esencia, la "fiesta popular revolucionaria" de las primeras semanas (con sus descansos laborales, aumentos salariales y laxa productividad) se topó de pronto con las demandas de una guerra y esta impuso una lógica estrictamente militar. Frente a ella, el

sindicalismo de protesta quedó inservible por inútil y contraproducente. Así lo entendió un simpatizante anarquista que en febrero de 1937 juzgaba el resultado de un semestre de revolución y colectivización en Cataluña:

> La inmensa mayoría de los trabajadores ha pecado con exceso: se ha apoderado de ellos la indisciplina; en el trabajo, la producción ha bajado de manera alarmante y ha llegado en muchos casos a la caída vertical; el alejamiento del campo de batalla ha hecho que para ellos la guerra no haya sido vivida con la intensidad necesaria, rota la disciplina anterior, nacida de la coacción patronal, y sin una conciencia de clase que les autoimpusiese otra disciplina en bien de la colectividad, han caído en el infantilismo de creer que todo está ganado ya.

Efectivamente, según cálculos de Sánchez Asiaín, la producción industrial en territorio republicano casi se redujo a la mitad tras el inicio de la contienda: en octubre de 1936 era el 55% del índice obtenido en enero de 1936 (ya muy reducido por la crisis imperante). Paralelamente, la producción agraria en la misma zona se contrajo en niveles cercanos a la mitad de la de tiempos pre-bélicos. Mientras tanto, los precios se disparaban en una inflación galopante: aumentaron un 49,8% en el segundo semestre de 1936. El resultado era un creciente aumento del coste de la vida (en Barcelona pasó de un índice 100 en junio de 1936 a 372 en febrero de 1938) y las consecuentes dificultades para asegurar el abastecimiento de productos alimenticios básicos (pan, patata, leche y carne) y para sostener el funcionamiento de servicios urbanos e industriales (por falta de materias primas, combustibles y repuestos). Así pues, la evolución económica en zona republicana tuvo características catastróficas en comparación con la de la zona franquista.

A principios de septiembre de 1936, la situación militar era extremadamente grave para la República: el día 3, Franco había tomado Talavera de la Reina después de aplastar la caótica resistencia miliciana, abriendo las puertas al avance incontenible sobre Madrid, en tanto que Mola se aprestaba para ocupar Irún y la frontera francesa, aislando territorialmente la franja republicana

norteña. Además, el aislamiento internacional de la República se había consumado con la adhesión de todos los países europeos al Acuerdo de No Intervención y el comienzo de las deliberaciones de su comité de supervisión en Londres por esas fechas. Julián Zugazagoitia recordaría aquellos momentos con angustia: "Todo iba a la deriva. […] El enemigo progresaba por el Centro sin encontrar resistencia".

En esas circunstancias, Giral presentó la dimisión y forzó a la izquierda socialista a asumir sus responsabilidades como fuerza dominante ante la expectativa de una derrota inminente. Habida cuenta de que el movimiento sindical era la mayor fuerza política y miliciana, todos los líderes republicanos habían llegado a la conclusión de que solo Largo Caballero podría encabezar un gobierno de coalición, la única opción para no perder la guerra en cuestión de semanas. Se abría así la hora política del sindicalismo socialista, después de mes y medio de inestable equilibrio entre un gobierno de partidos impotente y unas organizaciones sindicales ajenas al gobierno pero hegemónicas en retaguardia.

LOS GOBIERNOS DE LARGO CABALLERO: LA INESTABLE UNIDAD ANTIFASCISTA

Alentado por su consejero de confianza, Araquistáin, y sin consultar siquiera con la dirección del PSOE, el líder ugetista aceptó el reto a sus sesenta y siete años. El 4 de septiembre de 1936 se anunció la formación de un gobierno de coalición de todas las organizaciones del Frente Popular en el que, además de la presidencia, Largo Caballero ocupaba la cartera de Guerra. Contaba con otros cinco socialistas: dos del ala radical, Ángel Galarza en Gobernación y Álvarez del Vayo en Estado; y tres del ala moderada, Prieto en Marina y Aire, Juan Negrín en Hacienda y Anastasio de Gracia en Industria. El resto de ministros pertenecían a partidos que habían estado ya en el anterior gabinete: Izquierda Republicana (Ruiz Funes en Justicia, Giral como ministro sin cartera), Unión Republicana

(Giner de los Ríos en Comunicaciones) y ERC (Josep Tomàs en Trabajo). La gran novedad del ejecutivo era la incorporación del PCE con dos ministros, Jesús Hernández en Instrucción Pública y Vicente Uribe en Agricultura, una medida dictada por la Internacional Comunista en aplicación de su estrategia de reforzamiento de frentes populares interclasistas para favorecer la política soviética de seguridad colectiva.

Según Largo Caballero, se trataba de un gobierno de Frente Popular que "no tenía matiz político alguno" más allá de un genérico antifascismo que trataba de ocultar las diferencias entre reformistas y revolucionarios porque ambos estaban amenazados por la reacción militar y solo con una tregua podrían evitar su inminente destrucción. Como la situación seguía siendo de gravedad extrema, el líder sindicalista prosiguió sus esfuerzos para sumar a la coalición las restantes fuerzas político-sociales de importancia en la República. Y tuvo dos éxitos notorios.

A finales de septiembre de 1936 se sumó al gobierno un representante del PNV (Manuel Irujo como ministro sin cartera) a cambio de la urgente aprobación por las Cortes republicanas del estatuto de autonomía del País Vasco el 1 de octubre. Como consecuencia, en Euskadi se formó un gobierno autónomo de coalición presidido por José Antonio Aguirre y donde los nacionalistas vascos dominaban las carteras de Defensa, Gobernación, Hacienda y Justicia.

El segundo éxito no fue menos impactante y se produjo en vísperas del inicio del asalto frontal franquista sobre la capital y del traslado del gobierno a Valencia como medida de precaución. El 4 de noviembre, Largo Caballero remodelaba su ejecutivo con la entrada de cuatro ministros anarquistas de la CNT y la FAI: Juan García Oliver al frente de Justicia; Federica Montseny, la primera mujer ministra española, en Sanidad; Juan Peiró, exdirector de *Solidaridad Obrera*, a cargo de Industria; y Juan López, líder del sindicato de la construcción, en Comercio. La insólita participación libertaria en el gobierno (en la medida en que era una renuncia a los principios antipolíticos clásicos) no fue rechazada por las bases cenetistas por

razones bien expuestas por Peiró al señalar que la marcha de la guerra "[impedía] todo movimiento contra el Estado, a menos de contraer la más enorme deuda de las responsabilidades ante el mundo y ante nosotros mismos". En público, la *Solidaridad Obrera* daba cuenta de la noticia con más optimismo:

> El Gobierno […] ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya al organismo que separa a la sociedad en clases. Y ambos dejarán aún más de oprimir a los pueblos con la intervención en ellos de elementos de la CNT.

El ejecutivo presidido por Largo Caballero, exponente de la heterogeneidad del Frente Popular incluso en sus dimensiones (dieciocho ministros), tendría corta vida: apenas siete meses. Y estaría sometido a fuertes tensiones internas porque la voluntad anarquista de "defender las conquistas revolucionarias" casaba mal con la voluntad republicana y prietista de "restaurar las competencias del Estado democrático", tampoco coincidía con la voluntad largo-caballerista de conciliar "avances revolucionarios" y "reconstrucción estatal", y estaba lejos de la voluntad comunista de "construir una República democrática y parlamentaria de nuevo tipo" bajo su hegemonía. Azaña anotaría esas contradicciones con fina ironía: "De nada sirve que el Presidente de la República hable de democracia y liberalismo, si al propio tiempo las películas que nuestra propaganda hace exhibir en los cines, acaban siempre con los retratos de Lenin y de Stalin".

En todo caso, a pesar de sus tensiones, la coalición presidida por Largo Caballero fue capaz de resistir el asalto franquista sobre Madrid y puso en marcha penosamente la reconstrucción de la autoridad estatal. De hecho, su gestión estuvo guiada por una línea directriz: restaurar los instrumentos de acción gubernativa en todos los ámbitos de gestión interior y exterior para no perder la guerra total declarada por un enemigo superior en todos los frentes.

Como parte de esa política de resistencia antifascista, el gobierno había procedido a militarizar las milicias a principios de octubre de 1936 sin graves resistencias. Empezaba así a construir sobre sus

bases el nuevo Ejército Popular de la República, restableciendo las jerarquías militares y la disciplina en las filas (y creando también la institución de los comisarios políticos como garantes de la lealtad de los mandos). Contando con el asesoramiento del general Asensio Torrado, Largo Caballero creó un Estado Mayor Central que trató de planificar la defensa republicana (diseñó un ilusorio "Plan P" para ocupar Extremadura) y asumiendo la práctica autonomía operativa de las tropas del aislado frente norteño y del área catalano-aragonesa. También encomendó la defensa de la capital, tras su traslado a Valencia, a una junta encabezada por el general Miaja, que tenía como principal asesor estratégico al coronel Vicente Rojo. Y, contra todo pronóstico, esas medidas de militarización y planificación, junto con la oportuna llegada de los primeros contingentes de las Brigadas Internacionales alentadas por la Comintern, permitieron a la República conseguir su primer éxito militar defensivo: a finales de noviembre de 1936 Franco tuvo que suspender el asalto frontal a Madrid por agotamiento ante la capacidad de resistencia mostrada por las tropas enemigas.

Entre las medidas tomadas por el ejecutivo para restablecer su autoridad y posibilitar la defensa estaban las disposiciones reponiendo en sus funciones a autoridades municipales y provinciales (en sustitución de las juntas y consejos surgidos en julio). Firmó también órdenes tendentes a la reorganización de las actividades económicas para evitar la bancarrota (limitando colectivizaciones e imponiendo una supervisión estatal de sus actividades, así como controlando la circulación monetaria y el régimen de exportaciones). Y no menos importante fue la reactivación de la actividad diplomática de la República, denunciando en todo el mundo el efecto dañino de una política de no intervención que vetaba el acceso del gobierno legítimo a los mercados de armamento exteriores pero no conseguía frenar los suministros ítalo-germanos a los rebeldes. En este plano, el mayor triunfo del gabinete frentepopulista consistió en lograr el apoyo abierto de la Unión Soviética a su causa: a principios de octubre de 1936 por decisión expresa de Stalin empezaron a llegar a la España

republicana las primeras remesas de armas soviéticas, junto con los asesores militares correspondientes, que posibilitaron la defensa de Madrid y el abastecimiento del ejército republicano.

Asegurado ese apoyo diplomático y militar de la URSS (muy superior en importancia al prestado desde el principio por el México de Lázaro Cárdenas), el gobierno republicano también optó por movilizar las reservas de oro del Banco de España para convertirlas en divisas con las que sufragar las compras de material bélico y los suministros alimenticios y petrolíferos demandados por la guerra. Como han demostrado las investigaciones de Ángel Viñas y Pablo Martín Aceña, las ventas de oro al Banco de Francia para recaudar fondos destinados a pagar gastos de guerra habían sido iniciadas ya por el ejecutivo de Giral y serían continuadas por Largo Caballero con Negrín al frente de la operación como ministro de Hacienda: entre el 25 de julio de 1936 y finales de enero de 1937, la República vendió al Banco de Francia 194 toneladas de oro bruto (algo más de una cuarta parte de sus reservas totales: 704 toneladas), recibiendo a cambio 196 millones de dólares (equivalentes al 40% de los ingresos totales del estado en 1935). El único problema generado por esa operación legal (por eso los tribunales franceses desestimaron las demandas franquistas para detenerla) consistía en que la política no intervencionista del gobierno francés impedía consumir esos fondos en la compra de las inexcusables armas requeridas por la guerra.

Un vez que la URSS asumió la defensa de la causa republicana, el gobierno tomó una decisión crucial: el 6 de octubre de 1936 el consejo de ministros, a propuesta de Largo Caballero, refrendada por Azaña y ejecutada por Negrín, decidió remitir a Moscú tres cuartas partes de las reservas auríferas (510 toneladas). Desde entonces y hasta el verano de 1938, con cargo a su venta se pagaron al contado los suministros bélicos procedentes de ese país y del resto del mundo a través de la discreta red bancaria soviética (véanse pp. 33-34 y 229-230). Resultado de esa movilización de las reservas de oro y otros expedientes financieros (rentas del comercio exterior, venta de las reservas de plata, etcétera), las autoridades

republicanas fueron capaces de generar un volumen de 744 millones de dólares. Ese sería el coste financiero de la guerra en el bando republicano, una cifra cercana al gasto del enemigo con el mismo fin pero obtenida mediante el recurso al crédito ítalo-germano (entre 697 y 710 millones de dólares).

La victoria defensiva lograda en Madrid en noviembre de 1936 se revalidó en los meses siguientes con el fracaso de las ofensivas franquistas para asaltar la capital por otros flancos: el norteño en enero de 1937 (batalla de la carretera de La Coruña), el sureño en febrero (batalla del Jarama) y el nororiental en marzo (batalla de Guadalajara). Sin embargo, esos triunfos no reforzaron la autoridad de Largo Caballero porque sus artífices y beneficiarios eran otros dos grupos progresivamente enajenados por el jefe del gobierno: 1°) Los mandos militares profesionales que lograron esas victorias al frente del Ejército Popular de la República (cuyos máximos representantes serían Miaja y Rojo, almas de la resistencia madrileña); y 2°) Los líderes de un Partido Comunista en franca expansión, que había apoyado la militarización y apostado por la defensa de Madrid a toda costa. Para los primeros, ya afrentados por lo que consideraban un abandono vergonzoso (el traslado del gobierno a Valencia), las posteriores decisiones militares de Largo Caballero fueron cuestionadas o abiertamente criticadas (el "Plan P" de Extremadura y la falta de reacción ante la caída de Málaga en febrero de 1937). Para los segundos, el previo idilio con el giro bolchevique del líder sindical se fue trocando en abierta diferencia de criterio político-militar y crecientes conflictos por competencia en el encuadramiento de masas populares.

En ese contexto incierto, a principios del año 1937 se recrudecieron las tensiones internas en el seno del gobierno y en la retaguardia republicana. La principal línea de ruptura acabó enfrentando a los dos grandes movimientos sindicales, el anarcosindicalismo y el socialismo largo-caballerista, con un PCE recién convertido en organización de masas. Avalado por su disciplina orgánica, el éxito de su política militar (su temprana demanda de ejército regular), una eficaz campaña de propaganda

(vital para la movilización madrileña) y el prestigio derivado de su asociación con la URSS (única fuente de ayuda militar de la República), el movimiento comunista había experimentado un auge espectacular. Según datos de Fernando Hernández Sánchez, el PCE había pasado de 50.000 afiliados en vísperas de la guerra a casi 250.000 un año después (sin contar los afiliados a su organización catalana, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC, y a las juventudes socialistas unificadas, JSU, que probablemente duplicarían esa cifra).

Ese crecimiento vertiginoso no solo permitió al PCE rivalizar con los sindicatos, sino que lo convirtió en un factor central del espectro político republicano. No en vano, el ascenso comunista contrastaba vivamente con la persistente división socialista entre prietistas y largo-caballeristas, con el desconcierto de los anarquistas renegados de sus principios antipolíticos y con el letargo de los fragmentados partidos republicanos desbordados por la oleada revolucionaria. Por si fuera poco, su acertada política militar y su preocupación por el mantenimiento de la pequeña propiedad le granjearon inicialmente la simpatía abierta de amplios sectores de las acosadas clases medias urbanas y rurales y de los militares profesionales.

El éxito del PCE transformó el escenario sociopolítico republicano porque su convergencia de intereses (no identidad de propósitos) con los grupos reformistas del prietismo, del republicanismo y de los militares profesionales supuso un creciente contrapeso al poder efectivo de los partidarios de preservar la revolución social (CNT-FAI y POUM) o de conciliar conquistas revolucionarias y reconstrucción estatal bajo dirección sindical (UGT). Ya antes de lograr la incorporación de los anarquistas a su gobierno, Largo Caballero había reprochado a la dirección comunista su proselitismo (la JSU había pasado de manos de la izquierda socialista a las del PCE) y su moderación filorreformista:

> Estáis más cerca de Prieto que de mí, habéis hecho una maniobra con la izquierda socialista. Los comunistas estáis convirtiéndoos en un gran partido, crecéis a costa nuestra. Esto prueba que hacéis una política contraria a la nuestra.

Era la respuesta de Largo Caballero a las demandas comunistas de moderación y respeto a la democracia burguesa, que no dejaron de prodigarle desde el comienzo de la insurrección y hasta el envío (hecho sin precedentes) de una carta personal de Stalin al líder español en diciembre de 1936 en ese sentido. A finales de agosto, antes de la caída del gabinete Giral, la Comintern había dado al PCE las instrucciones correspondientes:

> Nuestra delegación debe explicar a Largo Caballero, a los jefes de la CNT y de la FAI que es imposible realizar medidas de orden socialista, y menos de orden comunista [...] si no se conduce hasta el fondo la revolución democrática y si no se aplasta la contrarrevolución fascista. Las medidas de orden socialista prematuras encogerán la base social de la revolución y conducirán a la derrota; ellas serán un pretexto para la intervención extranjera simultáneamente a la capitulación del gobierno francés.

La creciente hostilidad del jefe del gobierno hacia el PCE se agravó en los meses sucesivos, al igual que el antagonismo entre dicho partido y la CNT-FAI (que llevó a graves disputas con muertos en Cataluña). Aunque ninguna de esas tensiones alcanzó el grado de violencia generado por la oposición entre el PCE y el POUM. Desde diciembre de 1936, a la par que Stalin iniciaba en Moscú las grandes purgas político-militares de traidores y espías "trotskistas", el PCE inició su campaña para "liquidar" al POUM como "agente del fascismo en el seno de la clase obrera". Era la primera señal preocupante en la estrategia política formulada por la Comintern y ejecutada por el PCE durante los primeros meses de la guerra. Desde entonces, la política de defensa de la democracia parlamentaria y respeto a la economía capitalista se fue conjugando en la estrategia comunista con la lógica stalinista de destrucción implacable del enemigo político y de satelización subordinada de los aliados coyunturales.

Dentro de esa deriva, el propósito último del PCE, consagrado en marzo de 1937 por José Díaz, sería un objetivo político ya no conciliable con los intereses del resto de los grupos democrático-reformistas: la implantación de "una República democrática y parlamentaria de un nuevo tipo y de un profundo contenido social. [...] No, la República democrática por la que nosotros luchamos es

otra". Por eso mismo, Dolores Ibárruri podría replicar a las denuncias anarquistas y largo-caballeristas con aplomo: "Hacemos la guerra, y hacemos también la revolución. Para consolidar ésta tenemos que ganar aquélla". Esa prefiguración de lo que serían las "democracias populares" del este europeo después de 1945 exigiría "destruir las bases materiales sobre las que se asientan la reacción y el fascismo", así como el control comunista de los instrumentos coactivos del estado (sus fuerzas militares y policiales).

En ese camino hacia la hegemonía política, el PCE se enfrentaría con éxito a sus desorientados adversarios revolucionarios, sin reparar en medios, incluyendo el apoyo logístico a las operaciones encubiertas de los servicios de seguridad soviéticos (la NKVD) contra enemigos políticos, cuyo mayor exponente sería el secuestro y asesinato de Andreu Nin en junio de 1937. Pero esa misma dinámica agresiva acabaría devolviendo a sus enemigos las fuerzas perdidas (esta vez bajo la bandera del anticomunismo) y también generaría un profundo recelo en el resto de las fuerzas republicanas, muy críticas con los métodos expeditivos utilizados por el PCE y reacias a tolerar su infiltración hegemónica en filas militares y policiales. Sin embargo, todos eran conscientes de que el concurso comunista resultaba indispensable para proseguir la guerra porque su fuerza numérica y disciplina orgánica así lo imponían, sin contar con el hecho de que la URSS fuera el mayor apoyo militar de una República asediada que luchaba por la supervivencia. El auge, estabilización y posterior retroceso que sufriría el PCE durante la guerra (en enero de 1938 sus filas se habían reducido a 180.000 militantes, por muertes en combate o abandonos) estaría enmarcado por el surgimiento de esa oposición a sus pretensiones hegemónicas que contradecían su compromiso democrático.

Tras el fracaso de la ofensiva de Guadalajara en marzo de 1937, Franco había dado un giro crucial a su estrategia bélica: abandonó la idea de tomar Madrid al asalto y decidió emprender una guerra de desgaste en el frente de Vizcaya, para eliminar la aislada bolsa enemiga y apoderarse de sus recursos materiales. Ese giro estratégico confirmó a los republicanos que estaban en presencia de

una larga "guerra total" muy diferente a la fiesta popular revolucionaria de los primeros meses. De hecho, la necesidad de afrontar ese desafío contribuyó a acentuar las tensiones en el seno del gabinete y en la retaguardia republicana.

El punto de ruptura en el delicado equilibrio político republicano se produciría el 3 de mayo de 1937, con el estallido de los "sucesos de mayo" en Barcelona. El detonante fue la tentativa de las fuerzas de seguridad de la Generalitat por retomar el control del edificio de la Telefónica, en plena plaza de Cataluña, que estaba en manos de la CNT desde el inicio de la guerra y era considerado "una posición clave en la revolución". No en vano, desde ella se controlaban las comunicaciones entre las autoridades civiles y militares y tanto Companys como Azaña (residente en Barcelona desde octubre de 1936) estaban a merced del visado cenetista para usar el teléfono.

La ocupación de la Telefónica se convirtió en el catalizador de una insurrección en la capital catalana de militantes anarquistas radicales, secundados por el POUM, que trataban de salvar los restos del poder revolucionario en una ciudad de retaguardia que todavía no había experimentado el azote enemigo. Un levantamiento en "una ciudad alejada del frente, símbolo de la revolución anarcosindicalista, que muchos creían proletaria" (Julián Casanova) y que había visto decaer su nivel de vida al compás de la prolongación de la guerra y ante la llegada de miles de refugiados huidos del avance enemigo. La situación se hizo tan peligrosa que Companys requirió la ayuda de Largo Caballero para sofocar la rebelión. El 4 de mayo, en una reunión tormentosa (con todos los ministros exigiendo a sus colegas anarquistas el final del "motín"), el gobierno decidió asumir el control del orden público y enviar fuerzas armadas a Barcelona para aplastar a los insurrectos. El 7 de mayo la lucha había terminado al precio de más de cuatrocientos muertos y mil heridos.

La crisis barcelonesa de mayo de 1937 se saldó, pues, con la derrota de los partidarios de la Revolución Social (proletaria o libertaria) en favor de quienes defendían una República Democrática (interclasista). También se saldó con un restablecimiento de la

autoridad estatal en Cataluña ante el desprestigio de la Generalitat. Pero ese restablecimiento ya no sería obra del gobierno de Largo Caballero, que naufragó en la estela de la sublevación y a la vista del agotamiento del programa político de la izquierda socialista (abandonada incluso por la CNT-FAI). El diario cenetista *Solidaridad Obrera* declaraba el 18 de mayo de 1937: "Se ha constituido un gobierno contrarrevolucionario".

LOS GOBIERNOS DE NEGRÍN: RESISTIR ES VENCER

En efecto, como resultado de la crisis, Largo Caballero perdió la presidencia del gobierno al negarse a considerar las demandas del PCE para modificar su estrategia bélica y reprimir a los grupos revolucionarios (incluyendo la ilegalización del POUM), medidas avaladas por el resto de partidos republicanos y el socialismo prietista. Abiertas las consultas por Azaña, la crisis ministerial no se resolvió con la prevista asunción del cargo por parte de Prieto, como casi todo el mundo daba por descontado. Para sorpresa general, el nombramiento recayó en el doctor Juan Negrín, un prestigioso médico fisiólogo de origen canario que había estudiado muchos años en Alemania y que apenas lleva siete de militancia en el PSOE.

El 17 de mayo de 1937 se anunciaba la formación de un nuevo gabinete de hegemonía socialista, compuesto solo por partidos políticos. Negrín seguía manteniendo la cartera de Hacienda, además de la presidencia, y sus correligionarios Prieto y Zugazagoitia asumían, respectivamente, el nuevo ministerio de Defensa unificado y el de Gobernación. El PCE mantenía sus dos carteras ministeriales (Uribe en Agricultura y Jesús Hernández en Instrucción Pública), los republicanos ocupaban las de Estado (Giral) y Comunicaciones (Giner de los Ríos), y el PNV y ERC mantenían su presencia de la mano de Irujo (Justicia) y Jaume Ayguadé (Trabajo). La UGT y la CNT se negaron a formar parte de un gobierno frentepopulista dominado por los partidos y cuya composición Negrín consultó con la dirección del PSOE porque quería que integrara, "si era posible, las tendencias

del Partido en derredor de una sola ilusión: ganar la guerra". Lo consiguió a medias puesto que, si bien los besteiristas se sumaron al proyecto, la izquierda socialista se negó.

Resulta incontestable que Negrín tuvo a favor de su elección el gran cometido desempeñado en Hacienda y su creciente prestigio internacional, en un momento en que la suerte de la guerra dependía de la evolución del contexto mundial. También es evidente que Prieto decidió renunciar a presidir el gabinete para no exacerbar la oposición largo-caballerista y dejar abierta la vía a su reincorporación al ejecutivo, al margen de sus malas relaciones con otras fuerzas políticas. Así lo hizo ver a la dirección socialista al declinar el cargo y proponer el nombre de Negrín: "Yo no soy el hombre de las circunstancias. Me llevo mal con los comunistas, mis relaciones con la CNT tampoco son cordiales".

Además, Negrín era el candidato deseado por los comunistas y la URSS con preferencia a Prieto y esa opinión pesaba cada vez más en la vida política republicana, porque la defensa militar dependía de los suministros bélicos soviéticos y porque el PCE había crecido mucho como resultado de ese apoyo. Sin embargo, la decisión última de entregar a Negrín el encargo de formar gobierno fue de Azaña, que dejó anotada en su diario la razón:

> Me decidí a encargar del Gobierno a Negrín. El público esperaría que fuese Prieto. Pero estaba mejor Prieto al frente de los ministerios militares reunidos, para los que, fuera de él, no había candidato posible. Y en la presidencia, los altibajos del humor de Prieto, sus 'repentes', podían ser un inconveniente. Me parecía más útil […] aprovechar en la presidencia la tranquila energía de Negrín […]. Negrín, poco conocido, joven aún, es inteligente, cultivado, conoce y comprende los problemas, sabe ordenar y relacionar las cuestiones.

Una vez elevado a la jefatura del gobierno, la gestión enérgica de Negrín quedó asociada a lo que fue su principal lema de campaña: "Resistir es vencer". Y cabe decir, como apuntaba Azaña, que capturó por algún tiempo los anhelos de la abatida retaguardia y reactivó las exiguas fuerzas del Ejército Popular. En esencia, el programa de gobierno de Negrín pretendía evitar la derrota cierta

mediante la resolución de los tres grandes desafíos que la "guerra total" declarada por el enemigo planteaba a la República en el plano militar, en el ámbito económico-institucional y en orden político-ideológico. Era muy consciente de la gravedad de la situación y así lo reconocería en su comparecencia ante las Cortes:

> La zona del país que nosotros ocupamos no produce lo suficiente para su propio abastecimiento, y tenemos, por lo tanto, que importar una cantidad considerable de alimentos. […] Tenemos, además, que adquirir abundantes materias primas, indispensables para la industria de guerra. Y tenemos también que adquirir material de guerra, aunque desgraciadamente no en la proporción que quisiéramos.

Como indicaba su lema, la resistencia propugnada por Negrín era una estrategia político-militar defensiva vertebrada sobre dos expectativas de horizonte alternativas. En el mejor de los casos, había que resistir el avance enemigo hasta que estallase en Europa el conflicto (estimado como inevitable) entre las democracias occidentales y el eje ítalo-germano, obligando a aquellas a asumir como propia la causa republicana y prestarle un apoyo hasta entonces negado. En el peor de los casos, si ese conflicto europeo no llegaba a estallar, había que resistir para conservar una posición de fuerza disuasoria que pudiera obligar al enemigo a conceder las mejores condiciones posibles en la negociación de la capitulación y la rendición.

En ambas contingencias hipotéticas (la salvación por ayuda exterior en un conflicto general o la búsqueda de condiciones de capitulación honorables), la estrategia de resistencia implicaba dos exigencias correlativas. En el plano exterior, exigía conservar intacto el vital apoyo militar y diplomático disponible: el que prestaba la URSS ("¿Si las armas no vienen de Rusia de dónde pueden venir"?, preguntaría a Azaña el diputado socialista Juan Simeón Vidarte en el verano de 1937). En el plano interno, imponía la colaboración con el reforzado PCE y su integración como uno de los pilares de la resistencia republicana, sobre todo teniendo en cuenta el contraste ofrecido por la división socialista, el desconcierto anarquista y las limitaciones de los partidos republicanos.

Habría de ser en este ámbito interno donde esa estrategia política acabaría naufragando, a pesar de que Negrín contó siempre con el concurso de su principal asesor militar: el general Vicente Rojo, nombrado Jefe del Estado Mayor Central y verdadero artífice de la defensa republicana. Asumiendo la superioridad material del enemigo y las dificultades propias de abastecimiento, la estrategia diseñada por Rojo y aprobada por Negrín trataba de "ganar tiempo" y conjurar la derrota mediante inesperadas ofensivas de distracción encaminadas a aliviar la presión del avance franquista en el frente principal de sus ataques. Pero, a pesar del éxito parcial de esas maniobras de diversión, desde principios de 1938 la sucesión de graves derrotas militares y el fracaso de las previsiones de ayuda franco-británica tuvieron su reflejo en un deterioro de las condiciones de vida material en retaguardia (sobre todo en el plano alimentario) que afectó hondamente a la moral de resistencia popular y militar. A finales de ese año, un informe confidencial del representante británico en zona republicana subrayaba ese deterioro inducido por reveses militares y estrangulamientos de suministros (bélicos y alimenticios):

> El gobierno español siempre ha estado escaso de material bélico pero no así de efectivos humanos. […] La situación alimenticia es realmente mala y parece muy probable que se agrave mucho más. […] La verdad es que la amplia mayoría de la población en la España republicana está sufriendo una severa infra-alimentación incluso en los distritos rurales. El racionamiento de los obreros de industrias esenciales y de las tropas de retaguardia ya ha sido recientemente intensificado drásticamente.

Ese deterioro de la situación militar y moral fue nutriendo la brecha latente que habría de dividir cada vez más a los gobernantes republicanos en dos bandos. De un lado, los partidarios de la resistencia a ultranza, capitaneados por Negrín, convencidos de que la alternativa de la rendición sin condiciones era peor que soportar la carga de la guerra porque Franco no contemplaría ningún armisticio ni mediación voluntariamente. De otro lado, los partidarios de acabar con una guerra perdida, encabezados por Azaña, favorables a pedir

la mediación franco-británica para obtener de Franco condiciones de capitulación.

Dicha tensión no solo enfrentaba a los comunistas con las restantes fuerzas políticas republicanas, aunque todas compartieran el recelo frente a sus expeditivos métodos proselitistas, su voluntad hegemónica en el mando militar y sus fines políticos últimos. Era una tensión que también fracturaba internamente a todas las fuerzas políticas en sectores favorables o contrarios a Negrín y, en particular, al ya muy debilitado movimiento socialista. Y era una tensión que debilitaba al gobierno en el momento en que afrontaba la sorda oposición de la Generalitat (con apoyo del gobierno vasco) porque su política de centralización del poder estatal menoscababa las competencias autonómicas. Esos enfrentamientos larvados se hicieron cada vez más patentes tras la decisión de Negrín de trasladar a finales de octubre de 1937 la capitalidad de Valencia a Barcelona, a fin de controlar mejor los recursos industriales y demográficos de Cataluña en beneficio del esfuerzo bélico.

Negrín tuvo plena conciencia de las divergencias políticas que fracturaban sus apoyos políticos y consultó con el general Rojo el alcance de sus efectos militares y morales. En particular, ambos siguieron con atención las críticas de Largo Caballero y la CNT-FAI sobre su supuesto entreguismo procomunista. Rojo siempre rebatió esas denuncias y a finales de 1938 avaló ante Negrín el diagnóstico de un informe confidencial que subrayaba que el PCE podía contar con la simpatía de "un 50% de los Jefes, Oficiales y Comisarios" del ejército republicano, pero con mucho desequilibrio: dominaban el ejército del Ebro, pero tenían una posición "muy frágil" en el ejército del Este y eran clara minoría en los ejércitos del Centro y Extremadura.

Esa impresión de hegemonía comunista truncada se reflejaría igualmente en el informe reservado para Stalin que escribiría el delegado de la Comintern en España en abril de 1939. En él señalaba que fue durante la segunda mitad de 1938 cuando "el partido [comunista] pierde posiciones, la influencia del partido

disminuye sistemáticamente, al partido le amenaza el aislamiento y se ha parado el crecimiento interno del partido".

Fue durante ese año crítico de 1938 cuando tuvo lugar en el PSOE la trascendental quiebra de la amistad política y personal entre Negrín y Prieto, abriendo la vía a una crisis sistémica en la dirección política de la República. El detonante sería el desplome militar republicano ante la ofensiva franquista en Teruel iniciada a principios de febrero de 1938. Su ímpetu arrollador no solo conllevó la reconquista de la ciudad sino que rompió a comienzos de marzo todo el frente republicano en el este y terminaría el 15 de abril con la llegada de las tropas franquistas a la desembocadura del Ebro, cortando la comunicación terrestre entre Cataluña y la zona centro-oriental republicana.

Cuando el gobierno se enfrentó a la contingencia de un imparable avance franquista sobre Barcelona, la respuesta de Prieto y Negrín no pudo ser más diversa. Mientras el ministro de Defensa advertía a sus colegas de que la derrota era inminente y sondeaba al embajador francés para que su gobierno actuara de mediador en una hipotética negociación de la rendición, el presidente del gobierno acudía a París para demandar apoyo directo en armas y el paso franco a las remesas bélicas procedentes de la URSS. La coincidencia de la crisis bélica republicana con la anexión alemana de Austria (12 de marzo de 1938) inclinó al ejecutivo francés a atender la solicitud de Negrín, abriendo su frontera al paso de armas y municiones (si bien desestimó el envío de un contingente militar). Con esos vitales refuerzos y gracias a las medidas de recomposición del frente arbitradas por Rojo, la prevista derrota quedó conjurada.

La discrepancia entre Prieto y Negrín en aquella dramática coyuntura bélica provocó una crisis gubernamental a finales de marzo de 1938, cuando Negrín cesó a Prieto por su "derrotismo" y decidió asumir personalmente la cartera de Defensa. Azaña, cuya conformidad con Prieto era conocida, abrió las consultas con los partidos para solucionar la crisis. Y a pesar de todas sus gestiones no consiguió conformar una alternativa a la ofrecida por Negrín y

alentada por Rojo (y el PCE y los negrinistas de los restantes partidos y sindicatos).

En consecuencia, Negrín formó nuevo gobierno el 6 de abril de 1938. El ejecutivo contaba con tres ministros socialistas (Negrín en Presidencia y Defensa, Álvarez del Vayo en Estado y Paulino Gómez en Gobernación), un técnico leal al presidente (Francisco Méndez Aspe en Hacienda), tres republicanos (Giral, sin cartera; Giner de los Ríos en Comunicaciones y Velao en Obras Públicas), un comunista (Uribe en Agricultura), un peneuvista (Irujo, sin cartera), un catalanista (Ayguadé en Trabajo) y la relativa sorpresa de dos sindicalistas: Ramón González Peña (Justicia) por la UGT, y Segundo Blanco (Instrucción Pública) por la CNT. Pero esta incorporación de los sindicatos era más aparente que real puesto que en sus filas la división era profunda: González Peña se había impuesto a Largo Caballero en la UGT por la mínima, en tanto que Segundo Blanco representaba una dirección cenetista colaboracionista muy contestada por un amplio sector de las bases libertarias. El gabinete también concitó la oposición de quienes criticaban la voluntad hegemonista del PCE, una plataforma en expansión que incorporaba a Largo Caballero y a Besteiro y a la que progresivamente se incorporaría Prieto.

En ese contexto de fractura interna socialista, Negrín había ofrecido ante la comisión ejecutiva del PSOE a finales de marzo de 1938 las razones que alentaban su línea política si se descartaba la alternativa de una rendición incondicional ante Franco:

> Bueno, voy a decir ante ustedes, oficialmente, lo que en el orden particular e íntimo he manifestado a alguien: no puedo prescindir de los comunistas, porque representan un factor muy considerable dentro de la política internacional y porque tenerlos alejados del Poder sería, en el orden interior, un grave inconveniente; no puedo prescindir de ellos, porque sus correligionarios son en el extranjero los únicos que eficazmente nos ayudan, y porque podríamos poner en peligro el auxilio de la URSS, único apoyo efectivo que tenemos en cuanto a material de guerra.

Esas eran las razones de la política de Negrín, cuya formulación oficial sería el "programa de 13 puntos" o fines de guerra presentado

el 1 de mayo de 1938. Y ni Prieto ni Azaña, menos aún Largo Caballero o la CNT, pudieron ofrecer una alternativa viable si no era la capitulación sin condiciones, descartada por el temor a la dura represión ejercida en la retaguardia enemiga. Así lo reconocería ante Azaña el presidente de las Cortes, Martínez Barrio: "Negrín es insustituible ahora".

Apenas lograda la conformidad del PSOE, Negrín hubo de proceder a un reajuste del gabinete por la dimisión de los ministros del PNV y ERC, opuestos a medidas de militarización de industrias catalanas y de tribunales de justicia para delitos de espionaje. La sustitución por el vasco Tomás Bilbao y el catalán José Moix el 17 de agosto de 1938 sirvió para paliar la crisis, pero no para ampliar las bases del gobierno. Tampoco sirvió para mejorar las relaciones de Negrín con Companys, cuyas protestas contra las decisiones de centralización de la dirección político-militar no acertaba a comprender y cuyas gestiones ante París y Londres para lograr una paz por separado conocía y condenaba: "No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera".

A pesar de sus aparentes triunfos, desde el verano de 1938 la estrategia política negrinista empezó a naufragar ante el cansancio popular por las privaciones ocasionadas por la guerra, el desánimo por la falta de ayuda de las democracias occidentales y la consiguiente descomposición de la moral de resistencia en amplios sectores republicanos. Ni siquiera la ofensiva desplegada por Rojo en la desembocadura del Ebro el 25 de julio (origen de la más cruenta batalla de la guerra) sirvió para modificar esa tendencia declinante, aunque lograra proporcionar cuatro meses de respiro. Pese a los fracasos, la consideración política de Negrín entre las cancillerías democráticas fue muy alta. En septiembre de 1938, poco antes de la firma del pacto de Múnich que desmembraría Checoslovaquia en beneficio de Alemania, un representante británico remitía a Londres un retrato de Negrín que le atribuía la capacidad de resistencia demostrada por la República:

> La rápida recomposición del gobierno que ha tenido lugar en los últimos meses se debe en gran medida [al señor Negrín]. Es un hombre viril y extremadamente capaz de unos 45 años, que parece tener un ascendiente completo sobre el consejo de ministros. Su carácter es excepcional y posiblemente sea el 'hombre del destino' de España.

Sin embargo, ni ese prestigio ni las gestiones emprendidas por Negrín ante el gobierno francés y la Sociedad de Naciones (en la cual anunció por sorpresa la retirada unilateral de las Brigadas Internacionales en septiembre de 1938) lograron un cambio en la política de no intervención de las democracias. La reiterada inhibición franco-británica ante la suerte de la República, junto con el comienzo de la triunfal ofensiva franquista sobre Cataluña a finales de diciembre de 1938, obligaron a Negrín a considerar la resistencia como estrategia disuasoria para conseguir una capitulación con mínimas condiciones. Ya a raíz de la firma del pacto de Múnich (29 de septiembre) había confesado con resignación a sus íntimos: "¡Garantías para una paz honrosa es lo único que estoy buscando!". En efecto, desde entonces, la resistencia estaba al servicio de un único propósito: "Conseguir una paz que previniera el exterminio de miles y miles de republicanos" (en palabras del doctor Rafael Méndez, colaborador de Negrín en la guerra).

A la vista del imparable avance de la ofensiva franquista en Cataluña durante el mes de enero de 1939 (Barcelona caería sin lucha el día 26), Negrín dispuso que las magras fuerzas militares republicanas sirvieran como escudo protector de una retirada masiva hacia la frontera francesa. Y con ese fin consiguió que una reunión de las Cortes celebrada en el castillo de Figueras, el 1 de febrero, ratificara la confianza de todos los grupos parlamentarios en el gobierno. Su último discurso ante las Cortes incluyó el ofrecimiento de entablar negociaciones para la capitulación a cambio de la renuncia de Franco a represalias indiscriminadas contra los republicanos y el permiso de emigración para cuantos desearan salir del país.

El acto final de la tragedia catalana tuvo lugar el 9 de febrero de 1939 cuando, poco antes de la llegada de las tropas franquistas,

más de 470.000 republicanos (civiles y militares) terminaron de entrar en Francia como exiliados. Entre ellos figuraba Azaña, que pasó a alojarse en la embajada en París y manifestó su negativa rotunda a regresar a España. Negrín permaneció en la frontera hasta el último día de evacuación, supervisando con Rojo el paso de las últimas unidades del ejército. Entonces hizo una confesión a Zugazagoitia sobre la operación concluida: "¡Veremos cómo liquidamos la segunda parte! Ésa será más difícil".

La prevista segunda parte de la operación no tendría lugar, pese a que Negrín regresó de inmediato a la zona central. El repliegue ordenado en la zona centro hacia los puertos mediterráneos para embarcar camino del exilio bajo la protección de la flota de guerra disponible en Cartagena se revelaría un sueño frustrado, al igual que la mediación de las potencias democráticas. La pérdida de Cataluña había activado el proceso de descomposición institucional, alentando a las fuerzas partidarias de negociar la rendición tras eliminar la influencia comunista del ámbito militar (que incluían a republicanos, militares profesionales, anarcosindicalistas y socialistas largo-caballeristas y besteiristas). La presencia de Negrín y su gobierno en la zona central no interrumpió ese proceso sino todo lo contrario: su deambular por Madrid y Valencia para recalar, finalmente, en la "posición Yuste" (cerca de Elda), era todo un símbolo de su precaria existencia.

El primer resultado de ese desplome interno se apreció el 27 de febrero de 1939, con la decisión franco-británica de reconocer *de iure* al gobierno de Franco antes de que terminara la resistencia militar republicana. La medida sirvió de pretexto para que Azaña presentara su dimisión irrevocable como presidente de la República, creando una crisis constitucional de imposible resolución por la negativa de Martínez Barrio a ocupar interinamente el cargo. En esas circunstancias, el 4 de marzo se produjo una sublevación profranquista en la base naval de Cartagena que solo pudo ser sofocada al día siguiente con un saldo aterrador: los once buques de la flota republicana abandonaron el puerto rumbo a Argelia para entregarse a las autoridades francesas.

El 5 de marzo de 1939, apenas perdida la crucial baza de la flota, tuvo lugar el último episodio de la crisis. El coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, se sublevó en Madrid contra el gobierno por considerarlo ilegítimo tras la dimisión de Azaña y con el apoyo de líderes republicanos, anarquistas y socialistas (incluyendo a Besteiro). Negrín, tras intentar un traspaso de poderes que evitara la quiebra constitucional, renunció a oponerse por la fuerza a la insurrección y optó por partir al exilio en Francia. Casado formó un Consejo Nacional de Defensa que abjuraba del gobierno de Negrín y anunciaba su voluntad de negociar "una paz sin crímenes" con Franco. Durante cinco días la zona republicana vivió una pequeña pero sangrienta guerra civil en la que los casadistas se impusieron sobre los comunistas.

Con el triunfo de Casado y la proscripción del PCE quedó barrida la viabilidad de una estrategia de resistencia que ya no tenía apoyos internos suficientes ni aparentes apoyos externos inmediatos. Pero, con ese triunfo, también se reveló ilusoria la alternativa de negociar con Franco otra cosa que la rendición incondicional. Como señalaría el general Salas Larrazábal:

> Ni Casado ni sus militares de carrera encontrarían mejor audiencia ante el Cuartel General de Burgos, ni Negrín modificaría la política británica de No Intervención.

En efecto, la exigencia de Franco de una rendición sin condiciones significó el fracaso político de Casado y conllevó el colapso de las instituciones republicanas. La ofensiva general franquista iniciada el 26 de marzo de 1939 no encontró oposición real y Madrid fue ocupada sin lucha dos días después. El puerto de Alicante, último reducto republicano, caería el día 31 con algo más de dos millares de personas esperando vanamente algún barco para escapar al exilio.

VI
LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL: EL REÑIDERO DE TODA EUROPA

La Guerra Civil surgió por causas internas, pero estuvo condicionada por el contexto internacional mediante la intervención o no intervención de las grandes potencias europeas en la lucha. Eso confirió a la contienda una importancia decisiva y dio origen a un debate que convulsionó la opinión pública europea. El recurso a la petición de ayuda exterior fue simultáneo en ambos bandos por una misma necesidad: dividida España por la mitad en territorio, población y recursos, ninguno contaba con armas para sostener el esfuerzo bélico. El consecuente proceso de internacionalización conformó condiciones ventajosas para el bando insurgente y generó lastres gravosos para el bando republicano. La decidida ayuda ítalo-germana y portuguesa a Franco nunca pudo ser compensada, ni en cantidad ni en calidad, por el limitado apoyo de la Unión Soviética o México a la República, que se vio privada de la asistencia de Francia y Gran Bretaña en virtud de su política de no intervención. El lento desahucio internacional de la causa republicana quedó sellado en vísperas de la guerra mundial, tras el pacto de Múnich de septiembre de 1938, que fue un golpe mortal para sus esperanzas.

UNA EUROPA INESTABLE Y CONVULSA

El 25 de julio de 1936, apenas una semana después del estallido del conflicto, *The Manchester Guardian*, un prestigioso diario liberal británico, afirmaba: "El significado internacional de la guerra civil

española es bastante más grande de lo que parecía en un principio". Poco después, el 8 de septiembre, otro influyente diario británico, el conservador *The Times*, corroboraba ese juicio y apuntaba el motivo: "[la guerra de España] puede considerarse como un espejo deformante en el que Europa contempla una imagen exagerada de sus propias divisiones". Ciertamente, como indicaban ambas citas, el conflicto tuvo desde el principio una dimensión internacional crucial para su desarrollo y desenlace.

Esa dimensión no era resultado de la participación de potencias extranjeras en el desencadenamiento de la contienda. No es verdad que antes del estallido de la guerra hubiera en marcha una conspiración comunista dirigida desde Moscú para propiciar una revolución social y la implantación de un régimen soviético en España (como afirmarían los militares insurgentes para justificar su sublevación como mero golpe preventivo). Antes al contrario, el Kremlin y la dirección moscovita de la Comintern, atemorizados por el peligro nazi y embarcados en la búsqueda de la alianza anglo-francesa, refrenaron sistemáticamente las ínfulas revolucionarias del PCE y recibieron con aprensión las primeras noticias sobre la sublevación. Tampoco es cierto que existiera un acuerdo previo de las autoridades de Italia y de Alemania con los conjurados con el fin de apoyar la realización de su golpe militar (como sostendría la propaganda republicana a modo de consoladora explicación del alcance del fenómeno insurreccional). Los vagos contactos exploratorios de los conspiradores con los líderes fascistas y nacional-socialistas no habían cuajado y tanto en Roma como en Berlín se vieron sorprendidos por el momento y alcance de la sublevación.

La dimensión internacional implícita en la contienda española respondía a dos razones correlativas que ya se han destacado previamente: la doble presencia de una analogía esencial y de una sincronía temporal entre la crisis bélica española y la crisis europea de la segunda mitad de los años treinta. Ambos factores fueron la causa del rápido proceso de internacionalización del conflicto (derivado de la intervención de varias potencias en apoyo a los

contendientes) y del interés pasional que suscitó en la opinión pública mundial. Los respectivos frentes y retaguardias creados en España se convertirían en el "espejo deformante" que concitaba el apoyo o la hostilidad de los diversos grupos sociales, ideologías políticas y potencias estatales que fracturaban el continente. Tanto para quienes percibían la contienda española como un combate frontal entre el comunismo y la civilización occidental, como para quienes la interpretaban como una batalla decisoria entre la democracia y el fascismo. Un representante diplomático británico advirtió el fenómeno con palabras reveladoras: "Por el momento, España tiene a su cargo el desdichado papel de constituir el reñidero de Europa".

La analogía esencial entre la crisis española que dio origen a la Guerra Civil y la crisis europea de los años 30 permite considerar a aquella como una versión regional específica de esta. De hecho, desde una perspectiva referencial histórico-comparativa (superadora de la habitual perspectiva diferencial hispano-céntrica), es evidente que la Guerra Civil española fue un episodio de la "crisis europea del periodo de entreguerras", que se extiende entre el final de la Gran Guerra de 1914-1918 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945.

La naturaleza general de la crisis de entreguerras que asoló Europa durante el ventenio de 1919-1939 derivaba del impacto devastador que la intensa movilización bélica había tenido sobre los fundamentos del previo orden liberal y capitalista. Como ya se ha visto, en todos los países europeos, tanto vencedores como vencidos o neutrales, se habían tenido que arbitrar soluciones de estabilización para hacer frente a los inéditos problemas sociopolíticos y desafíos económicos derivados de la experiencia de la guerra total: el arribo de la política de masas que demandaba nuevos modelos políticos de participación popular; la integración de las clases obreras reforzadas por el desarrollo industrial inducido por la guerra; la intervención masiva del estado en la economía para solventar fenómenos desconocidos como la inflación galopante y el

crecimiento desorbitado de la deuda pública, etcétera (véanse pp. 43-45).

Respondiendo a esos retos aparecieron en escena en el continente los tres núcleos de proyectos antagónicos de reestructuración del estado y las relaciones sociales que pretendían estabilizar la crítica situación en beneficio de los intereses de diversos grupos sociales que servían de soporte a cada uno: el proyecto reformista democrático; la alternativa reaccionaria fascista o fascistizante; y la propuesta revolucionaria. Serían las "Tres Erres" que iban a dominar el periodo de entreguerras y a protagonizar una espasmódica "guerra civil europea": Reforma, Reacción o Revolución. La Europa de entreguerras se convirtió así el violento laboratorio de experimentación política perfilado por Richard J. Overy:

> La crisis del periodo posterior a 1918 tuvo más que ver con el derrumbe repentino del viejo orden político y la explosión de la política de masas que siguió a este. Había pocos deseos de restaurar los viejos sistemas, pero no existía acuerdo real acerca de cómo debía ser el nuevo orden. La democracia liberal disputaba la autoridad moral al socialismo revolucionario y al autoritarismo nacionalista y popular. […] La amenaza que esta situación planteaba al liberalismo occidental se mostró en la rápida propagación de la dictadura, a menudo por imitación, dentro y fuera de Europa.

En todos los países de Europa, particularmente tras el impacto disolvente de la gran depresión económica de 1929, las tres alternativas habían estado presentes con mayor o menor intensidad y según el grado respectivo de modernización socioeconómica. Y en todos ellos había acabado por imponerse un modelo tras un grado mayor o menor tensión y violencia: triunfo bolchevique bajo la dirección de Lenin en la guerra civil rusa de 1917-1921 y consolidación de la URSS; quiebra del orden democrático en Italia e instauración del régimen fascista por Mussolini en 1922; proclamación de la dictadura militar en Portugal en 1926; fortalecimiento de la democracia en Gran Bretaña tras el fracaso de la huelga general laborista en 1926; colapso de la república democrática de Weimar en Alemania y acceso al poder de Hitler y el

nazismo en 1933; aplastamiento de la tentativa de asalto reaccionario a la Tercera República en Francia en 1934, etcétera.

Además de esa analogía esencial entre la crisis específica española y la crisis genérica europea (que haría posible la identificación de cada bando en España con sus homólogos europeos), entre ambos procesos se produjo una conexión cronológica de enorme transcendencia: la Guerra Civil española se iniciaría en julio de 1936 y se desarrollaría hasta abril de 1939 en medio de una coyuntura europea sumamente crítica. De hecho, a lo largo del año 1936 el sistema de relaciones internacionales en el continente entraría en una fase de crisis irreversible que conduciría gradualmente hasta el estallido de otra guerra mundial en septiembre de 1939. Esta sincronía temporal entre el curso de la guerra en España y el deterioro de las tensiones europeas sería la causa generadora del impacto diplomático del conflicto español y de su rápido proceso de internacionalización.

La crisis del orden mundial que se manifestó vivamente en 1936 tenía su origen en la fragilidad del sistema de relaciones internacionales surgido tras la apretada victoria en 1918 de la coalición aliada (Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos) frente a Alemania y sus satélites (Austria-Hungría y el Imperio Otomano). El símbolo de dicho sistema era la Sociedad de Naciones, el nuevo organismo internacional con sede en Ginebra, y su política de seguridad colectiva mediante consultas intergubernamentales, arbitraje y recurso a sanciones colectivas (económicas o militares), en caso de agresión a cualquier país miembro. En realidad, la organización ginebrina y el "sistema de seguridad colectiva" nunca tuvieron plena eficacia por contar desde su origen con fallas insuperables: Estados Unidos declinó integrarse y se retiró a un aislacionismo radical que no se quebraría hasta 1941, en tanto que Alemania y la Unión Soviética no serían admitidas hasta 1926 y 1934, respectivamente. Por si fuera poco, la profunda crisis económica desatada en 1929 terminaría por romper la precaria estabilidad mundial porque provocó graves desequilibrios en las

relaciones interestatales y en la dinámica interna sociopolítica de varias potencias.

La principal amenaza contra el orden imperante en la Europa de entreguerras provenía de los nuevos regímenes contrarrevolucionarios y totalitarios implantados en Italia y Alemania. Como corolario a su política de reforzamiento del poder estatal, exaltación ultranacionalista, férrea disciplina social y autarquía económica, tanto la dictadura fascista como la nazi postulaban una beligerante política exterior revisionista del *statu quo*. En gran medida, sus objetivos exteriores buscaban la solución de las tensiones latentes en el interior de ambos países mediante una rectificación ventajosa de las fronteras por vía de la intimidación y la fuerza militar.

En el caso italiano, el pragmatismo desplegado por el *Duce* se combinaba con una coherencia programática: convertir Italia en la potencia dominante del Mediterráneo, contrarrestando el control naval anglo-francés en la zona y expandiendo el imperio fascista sobre el norte de África y los Balcanes. En el caso del Tercer Reich, el oportunismo del *Führer* también se combinaba con un coherente programa de expansión: Alemania habría de romper las cadenas del tratado de paz de Versalles de 1919, implantar su hegemonía en Europa central y conquistar Rusia para convertirse en inexpugnable potencia continental.

Las pretensiones de Italia y Alemania estaban en conflicto con los intereses de Francia y Gran Bretaña, vencedoras de la Gran Guerra. Ambas veían con prevención el revisionismo territorial nazi y el irredentismo imperial fascista. Sin embargo, también consideraban improbable una combinación hostil de ambas dictaduras porque existía un latente antagonismo en su política exterior: la voluntad alemana de anexionar Austria y lograr la hegemonía en los Balcanes se enfrentaba al propósito italiano de garantizar la independencia austríaca (como estado tapón en el norte) y de ejercer un protectorado sobre los Balcanes.

Por otra parte, el temor franco-británico a una difícil concertación ítalo-germana estaba eclipsado por otra preocupación fundamental:

la sustitución de Rusia por la Unión Soviética tras el triunfo de la revolución bolchevique en 1917. Tanto por su naturaleza revolucionaria anticapitalista, como por su ascendiente en la política interior de otros estados a través de los partidos comunistas, la URSS provocaba fuertes recelos en los círculos gobernantes británicos y franceses, tanto si eran conservadores como liberales o socialdemócratas. Además, en esos medios políticos existía la convicción de que el estallido de otra guerra europea solo serviría para desencadenar nuevas revoluciones sociales y extender el comunismo, tal y como había sucedido en Rusia y Europa central entre 1917 y 1920. Y esa profunda prevención antisoviética no fue modificada por la moderación de la diplomacia soviética a partir de 1933.

En efecto, bajo la dictadura de Stalin, la política exterior de la URSS había dado un giro notable como resultado de la instauración del nazismo en Alemania, con su programa de expansionismo anticomunista. Previamente, los líderes soviéticos habían alentado la revolución mundial para sacar al régimen de su aislamiento y facilitar su difícil proceso de industrialización y colectivización. Destruida esa esperanza, la aguda conciencia de vulnerabilidad estratégica había sido agravada por el surgimiento simultáneo del peligro expansionista japonés en Asia oriental y del alemán en Europa central. El temor a una agresión combinada por ambos flancos expuestos, con la posible connivencia del resto de potencias capitalistas, había forzado a Stalin a retirar su apoyo a la revolución mundial para buscar un entendimiento con las potencias democráticas, a fin de contener la amenaza alemana y la pesadilla de una coalición de estados capitalistas contra la URSS. Esa era la razón de la política exterior soviética de defensa de la seguridad colectiva emprendida en 1934 con la integración en la Sociedad de Naciones y reforzada en 1935 con la firma de un pacto de asistencia mutua con Francia. Su complemento necesario era la estrategia comunista de frentes populares interclasistas en defensa de la democracia y en oposición al fascismo.

Dentro de ese inestable contexto, la primera sacudida al precario sistema internacional lo había dado Japón en 1931, al ocupar la provincia china de Manchuria para incorporarla a su incipiente imperio asiático, pese a las protestas de la Sociedad de Naciones. Dos años después, Hitler secundó ese desafío retirando a Alemania del organismo ginebrino y poniendo en marcha un intenso programa de rearme que violaba el tratado de Versalles. En 1935 fue Mussolini quien socavó la seguridad colectiva al iniciar la conquista militar de Abisinia y resistir las sanciones económicas decretadas por Ginebra. Por último, en marzo de 1936, Hitler aprovechó la división creada entre Italia y las potencias democráticas a propósito de Abisinia y ordenó la remilitarización de Renania, crucial provincia fronteriza con Francia que había sido neutralizada en Versalles.

Ninguno de esos actos revisionistas, realizados *manu militari*, fue contenido de manera efectiva por Francia y Gran Bretaña. Ambas democracias seguían confiando en la posibilidad de evitar un enfrentamiento armado y lograr un reacomodo de las pretensiones italianas y alemanas dentro del concierto europeo. De hecho, los dirigentes británicos, secundados con mayor o menor entusiasmo por los franceses, habían puesto en marcha desde el principio la llamada "política de apaciguamiento" de ambas dictaduras. Era esencialmente una estrategia diplomática de emergencia destinada a evitar una nueva guerra general mediante la negociación explícita (o aceptación implícita) de cambios razonables en el *statu quo* que satisficieran las demandas revisionistas sin poner en peligro los intereses vitales franco-británicos.

La base de dicha política era la convicción de que ambas democracias no tenían fuerzas para librar una guerra con tres potencias simultáneamente por varios motivos: 1°) Por la debilidad económica de ambos países como resultado de la crisis económica, que afectó más a Francia que a Gran Bretaña; 2°) Por la vulnerabilidad militar en caso de conflicto simultáneo con Japón en el Lejano Oriente, con Alemania en Europa y con Italia en el Mediterráneo; 3°) Por la desventajosa situación diplomática de los años 30 respecto a 1914-1918: no podían contar con la ayuda vital

de Estados Unidos, replegado a una posición de aislacionismo absoluto, ni tampoco con la de Rusia, convertida en un país peligroso; y 4°) Por la fragilidad política de ambos estados: la expectativa de otra guerra provocaba gran rechazo en la opinión pública franco-británica, predominantemente pacifista.

Así pues, en vísperas del estallido de la guerra española, la desintegración del sistema internacional era manifiesta. Y la respuesta del triángulo formado por las potencias europeas ante la crisis bélica en España estuvo condicionada por el perfil de su previa política exterior. La reacción anglo-francesa se subordinaría en todo momento a los objetivos básicos de su política de apaciguamiento. La respuesta soviética se enmarcaría dentro de los parámetros de su política de seguridad colectiva y búsqueda de aliados occidentales para frenar el expansionismo germano. E Italia y Alemania responderían a la crisis en virtud de su política revisionista y tratando de superar sus antagonismos mediante el reparto de esferas de influencia (primacía fascista en el Mediterráneo y nazi en Europa central).

EL DESIGUAL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO

En medio de ese contexto inestable, el 17 de julio de 1936 comenzó la insurrección militar que devino pronto Guerra Civil. Esa conversión planteó a ambos bandos un problema logístico vital: en virtud de la equilibrada división geográfica de España y del raquitismo de la industria bélica nacional, no existían medios militares necesarios para sostener un esfuerzo bélico intenso. Por eso, el mismo día 19 de julio, tanto el presidente Giral como el general Franco optaron por solicitar la ayuda urgente de las potencias europeas afines. Se abría así la vía a un proceso de internacionalización de la guerra que tuvo resultados distintos para las autoridades de la República y para los militares sublevados.

En Francia, apenas finalizada la oleada de huelgas que precedió a la victoria electoral frentepopulista en mayo de 1936, se había formado un gobierno de coalición bajo la presidencia del socialista Léon Blum. Recibida la petición republicana, Blum decidió el 21 de julio aceptarla tras consultar con los ministros del Partido Radical, Édouard Daladier (en la cartera de Guerra) e Yvon Delbos (en Asuntos Exteriores). Sólidas razones aconsejaban esa medida al margen de preferencias ideológicas, como han demostrado David W. Pike o Juan Avilés: la República española estaba regida por un gobierno reconocido y amigo, cuya colaboración benévola sería crucial en caso de guerra europea para asegurar la tranquilidad de la frontera pirenaica y garantizar el libre tránsito entre Francia y sus colonias norteafricanas (donde estaba acuartelado un tercio del ejército francés). Sin embargo, nada más conocerse esa decisión gracias a una filtración, la opinión pública y los medios políticos franceses se dividieron profundamente. La izquierda socialista y comunista, así como la mayoría del partido radical, aprobaron la medida. Pero las derechas, la opinión pública católica y amplios sectores de la administración civil y militar rechazaron cualquier ayuda a la República y postularon la neutralidad por un doble motivo: la hostilidad hacia los contagiosos síntomas revolucionarios percibidos en el bando gubernamental español y el temor a que la ayuda francesa desencadenase una guerra europea. El presidente de la República, Albert Lebrun, advirtió a Blum: "Eso que se piensa hacer, entregar armas a España, puede ser la guerra europea o la revolución en Francia".

Además de esta fuerte oposición interior, que halló eco en los influyentes ministros radicales (especialmente en Daladier y Delbos), Blum se topó con otra oposición igualmente decisiva: la actitud de estricta neutralidad adoptada desde el primer momento por el gobierno británico, su vital e insustituible aliado en Europa.

El gabinete conservador en el poder en Gran Bretaña, presidido por Stanley Baldwin, había visto en el estallido de la guerra española un obstáculo para su política de apaciguamiento y el peligro de un nuevo conflicto europeo. Además, debido a las noticias sobre lo que

sucedía en la retaguardia republicana, las autoridades británicas estaban convencidas de que en España, bajo la mirada impotente del gobierno republicano, se estaba librando un combate entre un ejército contrarrevolucionario y unas execrables milicias revolucionarias dominadas por anarquistas y comunistas. Esa doble preocupación quedó patente en la única directriz política que Baldwin transmitió a su secretario del Foreign Office, Anthony Eden, el 26 de julio: "De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país (léase Italia o Alemania), debe meternos en la lucha al lado de los rusos". Puestos a escoger entre reacción y revolución, los gobernantes británicos preferían la primera porque los riesgos del triunfo de la insurrección militar con ayuda ítalo-germana podrían contrarrestarse con dos resortes: el poder de atracción de la libra esterlina (clave para la reconstrucción económica postbélica española) y el poder de disuasión de la Royal Navy (clave para proteger o bloquear las costas y el tráfico marítimo español).

En función de ese doble motivo (perseverar en el apaciguamiento y conjurar la revolución), y a fin de garantizar la seguridad de la base naval de Gibraltar (clave en la ruta imperial hacia la India) y de los cuantiosos intereses económicos británicos en España, el gobierno del Reino Unido decidió adoptar una actitud de estricta neutralidad. Una medida que significaba la imposición de un embargo de armas y municiones con destino a España, equiparando así en un aspecto capital al gobierno reconocido (único con capacidad jurídica para importar dicho material) y a los militares insurgentes (que carecían de esa capacidad legal). Por eso era una neutralidad benévola hacia el bando insurgente y malévola hacia la causa de la República.

La situación creada por la división interna en Francia y por la actitud neutralista británica preocupó al gobierno francés y le llevó a revocar su intención de prestar ayuda a la República. El 25 de julio de 1936, tras un intenso debate en el consejo de ministros, Blum anunció la decisión de no intervenir en el conflicto español y cancelar cualquier envío de armas al gobierno de Madrid. Creía que

así contribuía a apaciguar la situación interna, a reforzar la alianza con Gran Bretaña, a localizar la lucha dentro de las fronteras españolas y a evitar el peligro de su conversión en una guerra europea. Sin embargo, la retracción francesa, una derrota diplomática para la República, no impidió la rápida internacionalización del conflicto.

La primera petición de ayuda de Franco a Alemania no había obtenido respuesta de las cautelosas autoridades diplomáticas y militares germanas. Por eso, el 23 de julio Franco envió a Berlín a dos empresarios nazis residentes en Marruecos para solicitar el apoyo directamente a Hitler. Ambos se entrevistaron el día 25 con el *Führer* y consiguieron que aceptase la demanda. Se comprometió a enviar, secretamente y mediante una ficticia compañía privada, veinte aviones de transporte (Junker 52) y seis cazas (Heinkel 51) con su correspondiente tripulación y equipo técnico, que salieron con destino a Tetuán. Con el concurso de esos aviones y pilotos, Franco pudo organizar un puente aéreo de tropas hacia Sevilla que eludiera el bloqueo naval del Estrecho impuesto por la marina republicana y comenzar así una meteórica marcha sobre Madrid.

Los motivos de Hitler para intervenir en la guerra española fueron esencialmente de orden político-estratégico: si el envío de una pequeña y encubierta ayuda alemana favorecía el triunfo de un golpe militar, podría alterarse el equilibrio de fuerzas en Europa occidental puesto que se privaría a Francia de un aliado seguro en su flanco sur. Por el contrario, una victoria republicana reforzaría la vinculación de España con Francia y la URSS, las dos potencias que cercaban Alemania por el este y el oeste y que se oponían a los proyectos expansionistas nazis. Además de esas ventajas, Hitler apreció la oportunidad política creada: el amago de revolución social en la República permitía presentar esa ayuda como mera reacción anticomunista y tranquilizar a Francia y Gran Bretaña sobre su naturaleza. Como ha demostrado Ángel Viñas, esa primacía de las consideraciones político-estratégicas, que revalidaban las ideológicas (el anticomunismo nazi), fueron subrayadas en las instrucciones

reservadas que Hitler daría a su primer representante diplomático ante Franco, el general Faupel:

> Según recuerdo, el *Führer* dijo, entre otras cosas, que le era indiferente el sistema político que se encontrara en España en el poder al final de la guerra, ya fuera una dictadura militar, un estado autoritario o una monarquía de tendencia conservadora o liberal. Él tenía exclusivamente como objetivo impedir que, al término de la guerra, la política exterior española se viera influida por París, Londres o Moscú, para que, en la confrontación definitiva sobre la reordenación de Europa, España no se encontrara en el lado de los enemigos, sino, a ser posible, en el de los amigos de Alemania.

Apenas decidida la intervención nazi, Mussolini adoptó una decisión similar tras recibir varias demandas de ayuda transmitidas por Franco a través del cónsul italiano en Tánger. El 28 de julio, el *Duce*, en contacto con su yerno y ministro de Asuntos Exteriores, el conde Ciano, resolvió apoyar a los insurgentes con el envío de doce aviones Savoia 81 para el traslado de tropas a Sevilla. Paralelamente decidió reforzar la precaria situación insurgente en Mallorca con el envío de una expedición militar italiana. Tomó esas medidas gradualmente, tras conocer la decisión de Hitler, haber comprobado la división francesa y tener noticia de la neutralidad británica.

Las motivaciones de Mussolini, al igual que las de Hitler, fueron esencialmente de naturaleza geoestratégica: se ofrecía la posibilidad de ganar un aliado agradecido en el Mediterráneo occidental, debilitando la posición militar francesa e incluso británica, y todo aparentemente a bajo precio y con riesgo limitado. Además, en caso necesario, podrían camuflarse esos motivos bajo el manto de una intervención meramente anticomunista y en absoluto dirigida contra los intereses franco-británicos.

Estas primeras motivaciones de los dictadores italiano y alemán se irían ampliando a medida que su intervención aumentaba y que la guerra se prolongaba. Entonces irían apareciendo otras razones derivadas para refrendar el mantenimiento de esa política. Por ejemplo, la pretensión alemana de asegurarse los suministros de piritas y mineral de hierro español, esenciales para abastecer su

programa de rearme acelerado. Igualmente, la voluntad de conversión de la guerra en un campo de pruebas militares donde sus ejércitos ensayaban técnicas y adquirían experiencia bélica con vistas al futuro: aplicaciones de la estrategia de *guerra celere* por los italianos en Málaga (febrero de 1937) y, con bastante peor fortuna, en Guadalajara (marzo de 1937); destrucción alemana de Guernica (26 de abril de 1937), primer ejemplo de bombardeo masivo y deliberado contra objetivos civiles sin estricto valor militar directo, etcétera.

Al margen y a la par de la ayuda ítalo-germana, el tercer apoyo externo (primero temporal) de la rebelión militar española provino de la dictadura de Salazar. Desde principios de 1936, el gobierno portugués había experimentado un creciente temor a los efectos de la evolución española sobre la estabilidad del *Estado Novo*. El inicio del golpe ofreció la oportunidad de extirpar el peligro de contagio comunista (y democrático) mediante el apoyo a los insurrectos y Salazar no dudó en "la necesidad de consolidar su fuerza de resistencia". Portugal se convirtió así en centro de importación de armas, además de servir como vía de comunicación entre los dos iniciales núcleos aislados insurgentes. Salazar también permitió el alistamiento de voluntarios portugueses para servir con las tropas españolas (los "viriatos", que llegarían a una cifra máxima de diez mil efectivos). Y su ayuda diplomática fue igualmente decidida, defendiendo incansablemente a los rebeldes en Londres y otros foros internacionales.

LA POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN COLECTIVA

El comienzo de la intervención ítalo-germana fue descubierta por el gobierno francés (dos aviones italianos aterrizaron por error en Argelia el 30 de julio). Y dado el peligro estratégico que supondría una España hostil aliada a una potencial combinación ítalo-germana, Blum reconsideró su decisión de no ayudar a la República. Sin embargo, la profunda división interna en el país y la absoluta

oposición del aliado británico volvieron a frenar toda medida resolutiva. Tras intensos debates y con el fin de lograr como mínimo un confinamiento real de la guerra española, el gobierno francés propuso el 1 de agosto de 1936 que las potencias europeas suscribieran un Acuerdo de No Intervención en España y prohibieran la venta y envío de armas y municiones con destino a ambos bandos.

En esencia, con su propuesta de pacto colectivo de No Intervención, Blum pretendía "evitar que otros hicieran lo que nosotros éramos incapaces de hacer": puesto que no podían ayudar a la República, al menos intentarían evitar que Italia y Alemania colaboraran con los rebeldes. Un año más tarde, Louis de Brouckère, presidente de la Internacional Socialista y estrecho colaborador de Blum, confesaría al presidente Azaña la imposibilidad de adoptar otra política:

> El año pasado, al regresar de España [Brouckère había visitado Madrid a principios de agosto], llegó a París cuando se ponía en marcha la política de no-intervención. Habló de ello con Blum toda una tarde. No podía tomar otro camino. Si hubiese dado armas a España, la guerra civil en Francia no habría tardado en estallar. Blum le dijo que no tenía seguridad del ejército. El Estado Mayor era opuesto a que se ayudase a España. La opinión se hubiera puesto en contra de Blum, acusándole de servir a Moscú. Inglaterra no le habría secundado en caso de guerra extranjera. Brouckère habla del 'miedo a Inglaterra' como uno de los motivos de aquella política.

La propuesta francesa fue inmediatamente asumida por las autoridades británicas, que vieron en ella un mecanismo ideal para preservar su neutralidad y amortiguar así las crecientes críticas de una oposición laborista solidaria con la causa republicana (no en vano, la iniciativa era del socialista Blum). Además, esa propuesta permitiría garantizar los cuatro objetivos diplomáticos establecidos por el Foreign Office en la crisis española: confinar la lucha dentro de España y, al mismo tiempo, refrenar la hipotética intervención del aliado francés en apoyo a la República, evitar a toda costa el alineamiento con la Unión Soviética en el conflicto, y eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su ayuda a Franco. Por

tanto, para el gobierno británico, la política multilateral de No Intervención contenía *ab initio* el germen de la impostura posterior, en la medida en que su objetivo real no era el declarado (evitar la intervención extranjera) sino la salvaguardia, por su mera existencia, de aquellos cuatro objetivos.

La diplomacia de ambas democracias desplegó un tenaz esfuerzo para lograr el concurso de todos los gobiernos europeos en esa inédita política multilateral de neutralidad cualificada (porque no suponía la retirada del reconocimiento jurídico del gobierno legal ni implicaba la concesión de derechos de beligerancia a los insurgentes). Fruto de esas gestiones, a finales de agosto de 1936 un total de 27 estados europeos (todos excepto Suiza, neutral por imperativo constitucional) habían suscrito el Acuerdo de No Intervención en España, que cobró la forma de una declaración política similar por parte de cada gobierno (no la de un tratado jurídico de obligado cumplimiento).

Poco después, los gobiernos firmantes también aceptaron constituir un comité que tendría como misión la vigilancia de la aplicación del pacto de embargo de armas colectivo. El 9 de septiembre de 1936 se formó en Londres el Comité de No Intervención bajo la presidencia del delegado británico y con la participación de los respectivos representantes diplomáticos. Inmediatamente, a propuesta británica, fue aprobado un "procedimiento de trabajo" que solo permitiría examinar las denuncias de infracción al acuerdo basadas en "pruebas sustanciales" presentadas por un gobierno partícipe (no por bandos españoles, prensa o instituciones independientes), tras lo cual se esperaría a las explicaciones del gobierno acusado "para establecer los hechos", sin provisión de sanciones en el caso de que se demostrase la veracidad de la denuncia.

Sin embargo, el triunfo de esa política de no intervención era desde el principio más aparente que real. Italia, Alemania y Portugal habían aceptado firmar el pacto y tomar parte en su comité para relajar la tensión internacional y no forzar una reacción enérgica anglo-francesa. Pero no tenían intención de respetar el compromiso

de embargo de armas. De hecho, Mussolini comunicó de inmediato a Hitler que había instruido a su embajador en Londres para que "hiciese todo lo posible a fin de dar a las actividades del Comité un carácter puramente platónico". En efecto, Italia y Alemania continuaron enviando armas a Franco, mientras Portugal seguía prestándole un vital apoyo logístico y diplomático. Además, al tiempo que suscribían el pacto, Italia y Alemania iniciaban una coordinación de sus actividades militares en España que abriría la vía al establecimiento de su alianza diplomática: el "eje Roma-Berlín". El 28 de agosto de 1936 se reunieron en Roma el almirante Canaris, jefe del servicio secreto militar alemán, y el general Roatta, su homólogo italiano. Entre los cruciales acuerdos adoptados en esa reunión figuraban los siguientes:

> 1) Proseguir (a pesar del embargo de armas) los suministros de material bélico y las entregas de municiones, según las peticiones del general Franco (posiblemente suministros italianos y alemanes en paridad). […]
>
> 6) Envío de parte de cada uno de los dos gobiernos de un oficial (eventualmente con un ayudante) como órgano de comunicación con Franco.

En consecuencia, el continuo sabotaje ítalo-germano (con la colaboración portuguesa), unido a la debilidad de la respuesta franco-británica, determinaron desde el comienzo el fracaso de la política de no intervención. Apenas constituido en Londres el comité, el representante alemán remitió a Berlín un informe confidencial donde subrayaba la falta de firme voluntad anglo-francesa para detener la intervención y la naturaleza de recurso elusivo que tenía el organismo recién creado:

> La sesión de hoy dio la impresión de que para Francia y Gran Bretaña, las dos potencias interesadas principalmente en el Comité, no se trata tanto de tomar medidas reales e inmediatas como de apaciguar la excitación de los partidos de izquierda en ambos países mediante el mero establecimiento de tal Comité. En particular, […] tuve la sensación de que el gobierno británico confiaba en aliviar la situación política interior del primer ministro francés con la formación del Comité.

En efecto, durante el mes de septiembre de 1936, a la sombra de las primeras deliberaciones del Comité de No Intervención, el proceso de internacionalización de la guerra había generado una estructura de apoyos e inhibiciones favorable para el esfuerzo bélico de los militares insurgentes y perjudicial para la capacidad defensiva del gobierno republicano.

Por una parte, Franco había logrado mantener intacta la vital corriente de suministros militares procedente de Italia y Alemania (concedidos además a crédito) y el inestimable apoyo portugués. Y todo ello a pesar de las prescripciones del acuerdo y de la participación de los representantes de esos tres países en el Comité de Londres.

Por otro lado, la República se había visto privada de los suministros bélicos de Francia, Gran Bretaña y otros estados europeos en virtud de la observancia del acuerdo por parte de sus gobiernos. Esta política había sido secundada por Estados Unidos, el otro gran mercado de armas disponible en el ámbito occidental. La administración del presidente Roosevelt había decretado un embargo de armas unilateral dados su tradicional alineamiento con la entente franco-británica, la tendencia aislacionista de la opinión pública norteamericana, el rechazo hacia los síntomas revolucionarios de la retaguardia republicana y el temor de los líderes demócratas a enajenarse el apoyo electoral católico en beneficio de los republicanos. En consecuencia, la República solo pudo contar con el apoyo abierto pero limitado del México presidido por el general Lázaro Cárdenas, que autorizó la venta de material perteneciente a su ejército y prestó apoyo diplomático. Una actitud que contrastaba con la adoptada por los otros países latinoamericanos, que oscilaron entre la neutralidad y la preferencia sin compromiso militar por uno u otro bando.

La simpatía cosechada por la República en ámbitos populares e intelectuales del mundo occidental no conllevó, sin embargo, ningún efecto práctico en los abastecimientos militares (aunque sí en el plano del reclutamiento de voluntarios extranjeros para luchar en sus filas). Esa situación impuso el recurso a las dudosas

oportunidades ofrecidas por los traficantes de armas. A título de ejemplo, los agentes republicanos fueron capaces de comprar viejas armas y municiones en la conservadora Polonia a precios desorbitados (un tercio más caras que su valor de mercado) y previo pago de sustanciosas comisiones de soborno. Y el caso polaco es representativo de lo sucedido igualmente en las tres repúblicas bálticas, en Checoslovaquia o en Turquía.

Para empeorar la situación, desde mediados de septiembre de 1936, a la vista de la brutal persecución sufrida por el clero católico, el Vaticano comenzó a secundar la beligerante actitud adoptada desde el primer momento por la jerarquía episcopal española. De este modo, el catolicismo mundial pasó a convertirse en uno de los principales valedores internacionales del esfuerzo bélico franquista, encumbrado a la categoría de cruzada por la fe de Cristo. Solo el hecho crucial de que los nacionalistas vascos, fervorosos católicos, se hubieran alineado con el bando republicano evitó una toma de partido más rotunda por parte del anciano Papa Pío XI. Su alocución del 14 de septiembre de 1936 condenó las "fuerzas subversivas" del comunismo y lamentó el sufrimiento de las víctimas de la furia antirreligiosa. El apoyo velado al bando franquista se deslizó en un cauteloso párrafo final:

> Nuestra bendición se dirige de manera especial a cuantos han asumido la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión, que es tanto como decir los derechos y la dignidad de las conciencias, condición primaria y la más sólida de todo bienestar humano y civil.

En su conjunto, la cristalización de esa estructura asimétrica de apoyos e inhibiciones internacionales tuvo su reflejo en el curso de las hostilidades en España, con su cosecha de recurrentes triunfos militares insurgentes y de clamorosas derrotas republicanas a lo largo de agosto y septiembre de 1936. Como resultado, las victoriosas tropas de Franco se acercaban imparables a Madrid y se aprestaban para lanzar el asalto frontal y previsiblemente definitivo sobre la capital. Parecía que la guerra iba a ser resuelta rápidamente con una tajante victoria insurgente. Sin embargo, el resultado de la

batalla de Madrid significaría la conversión de una guerra supuestamente breve en una contienda de larga duración. No en vano, la República lograría resistir el embate, mantendría el control de la capital y cosecharía así su primera y decisiva victoria defensiva. Y en ese resultado habría de tener una importancia crucial el cambio de actitud de la Unión Soviética.

EL GIRO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA Y SUS IMPLICACIONES

Secundando la iniciativa franco-británica, la URSS había suscrito el Acuerdo y se había sumado al Comité de de No Intervención sin mucha demora. Los líderes soviéticos habían percibido el estallido de la guerra como una perturbación inoportuna, ya que el amago revolucionario republicano podría arruinar su acercamiento a Francia y Gran Bretaña e incluso estrechar los vínculos de esas potencias con las dictaduras fascistas por el temor compartido a una nueva revolución en Europa. Por eso, Stalin se había limitado a declarar la "simpatía platónica" soviética por la causa republicana, permitiendo el envío de ayuda humanitaria, pero rechazando una petición de ayuda en armas remitida el 25 de julio de 1936.

La razón de esa cautelosa conducta había sido apreciada por el representante italiano en Moscú: "El gobierno soviético bajo ninguna circunstancia se dejaría involucrar en los asuntos internos de la Península (Ibérica), donde tiene mucho que perder y nada que ganar". Además, al igual que los gobernantes franceses, Stalin confiaba en que fuera posible localizar la guerra y evitar el peligro de un triunfo rebelde mediante la anulación de los suministros exteriores. Como escribió el mismo diplomático: "En consecuencia, la iniciativa francesa en pro de un acuerdo de no intervención en España ha sido recibida con enorme alivio". Prueba del acierto de ese diagnóstico son las instrucciones dadas por Maxim Litvinov, comisario soviético de Asuntos Exteriores, al nuevo embajador en Madrid, Marcel Rosenberg (que llegó a su destino el 31 de agosto de 1936):

> Antes de que usted partiera discutimos varias veces la cuestión de la ayuda para el gobierno español, pero llegamos a la conclusión de que es imposible enviar algo desde aquí. Es ineludible explicar a los amigos que nuestras posibilidades son bastante limitadas a causa de la larga distancia, de la falta de los calibres de fusiles y cartuchos que se necesitan en España, y del peligro de que los rebeldes intercepten los transportes. Además, nuestra ayuda ofrecería a Alemania e Italia un pretexto para una intervención completamente abierta y se produciría un aprovisionamiento de los sublevados de dimensiones tales que ya no lo podríamos igualar. […] No obstante, si se constatara y demostrara que, contrariamente a las declaraciones de No Intervención, se presta ayuda a los sublevados, podemos modificar nuestra decisión, pero también presionar al gobierno francés, que naturalmente tiene más posibilidades de ayudar que todo el resto de los estados europeos juntos.

Efectivamente, la posición inicial soviética acabaría modificándose desde principios de septiembre de 1936, una vez demostrado el fracaso de la no intervención para detener la ayuda ítalo-germana a Franco. Como han comprobado Daniel Kowalsky y Yuri Rybalkin, el 14 de septiembre Stalin en persona decidió el envío directo de armamento a España y encomendó la puesta en marcha de la operación a la NKVD (luego KGB: los servicios de seguridad soviéticos). En consecuencia, a principios de octubre de 1936, en un contexto bélico crítico, la URSS comenzó a socorrer militarmente a la República sin abandonar la política de no intervención, siguiendo así los pasos ítalo-germanos.

Los motivos de ese giro fueron esencialmente político-estratégicos, más que el compromiso con la revolución. Stalin decidió enfrentarse en España a las potencias del eje para evitar el deterioro de la posición estratégica de su reticente aliado francés y poner a prueba la viabilidad de su estrategia de colaboración con las democracias europeas frente al peligro expansionista nazi. España habría de ser la piedra de toque de ese proyecto de gran coalición antifascista. El recién llegado embajador republicano en Moscú, Marcelino Pascua, sería informado por Stalin del carácter supletorio de esa ayuda soviética (hasta que se materializase el apoyo franco-británico) y de los límites fijados a la misma (el enfrentamiento con el bloque franco-británico y la precipitación de una guerra general):

> Terminantemente, [Stalin] reitera que aquí no persiguen ningún propósito político especial. España, según ellos, no está propicia al comunismo, ni preparada para adoptarlo, y menos para imponérselo, ni aunque lo adoptara o se lo impusieran podría durar, rodeado de países de régimen burgués, hostiles. Pretenden impedir, oponiéndose al triunfo de Italia y de Alemania, que el poder o la situación militar de Francia se debilite. […] El Gobierno ruso tiene un interés primordial en mantener la paz. Sabe de sobra que la guerra pondría en grave peligro al régimen comunista. Necesitan años todavía para consolidarlo. Incluso en el orden militar están lejos de haber logrado sus propósitos. Escuadra, apenas tienen, y se proponen construirla. La aviación es excelente, según se prueba en España. El ejército de tierra es numeroso, disciplinado y al parecer bien instruido. Pero no bien dotado en todas las clases de material. […] Gran interés en no tropezar con Inglaterra.

Bajo esas premisas, hasta que se hiciera efectivo el hipotético apoyo franco-británico, las autoridades soviéticas decidieron poner en marcha dos vías paralelas para posibilitar la resistencia de la República ante lo que parecía un incontenible avance militar de Franco: 1°) mediante la formación de Brigadas Internacionales; y 2°) mediante el envío directo de material bélico soviético.

Desde finales de septiembre de 1936, los partidos comunistas de todo el mundo (bajo la dirección de la Internacional Comunista y previa autorización de Moscú) habían iniciado el reclutamiento de voluntarios extranjeros para combatir con la República. Debido al impacto de la guerra en la opinión pública antifascista internacional, la campaña tuvo un éxito resonante. A mediados de octubre llegaron los primeros efectivos a la base española de Albacete y el 8 de noviembre, en plena batalla de Madrid, entró en combate la primera de las Brigadas Internacionales (la XI Brigada, compuesta por unos 1.900 hombres, en su mayoría alemanes).

En conjunto, según cálculos de Rémi Skoutelsky, alrededor de 35.000 voluntarios procedentes de más de cincuenta países de todos los continentes sirvieron como brigadistas en las filas republicanas. En su seno predominaron los procedentes de medios obreros, aunque hubo abundante representación de miembros de las clases medias y círculos intelectuales. Las siete Brigadas Internacionales constituidas combatirían como fuerza de choque en casi todas las

grandes batallas hasta septiembre de 1938, cuando Negrín decidió su evacuación unilateral en un intento frustrado para forzar al bando franquista a imitar esa medida. Su contribución a la capacidad de resistencia de la República fue fundamental, no tanto por su estricto valor militar cuanto por el ejemplo de solidaridad internacional que demostraban y por el modelo de disciplina que ofrecieron al ejército republicano.

El primer envío de material bélico remitido desde la URSS fue recibido en Cartagena el 4 de octubre de 1936. Desde entonces, los suministros soviéticos de aviones, tanques, ametralladoras y artillería no dejaron de afluir hasta el final de la guerra, de un modo intermitente y según los obstáculos encontrados en la ruta marítima mediterránea y en la frontera francesa con la Cataluña republicana. Al lado de ese material bélico, los soviéticos también enviaron a España un conjunto de 2.082 asesores y especialistas militares (incluyendo agentes del NKVD), que trataron de ayudar en la constitución del Ejército Popular de la República y que serían discretamente retirados en el verano de 1938.

No cabe duda que los suministros militares soviéticos supusieron un refuerzo vital para la resistencia de la República. De hecho, serían su aporte fundamental de material bélico durante toda la guerra, a mucha distancia del recibido de Francia u otros orígenes. Según cálculos fidedignos, del total de aviones importados por la República durante la guerra (un máximo de 1.272 aparatos), en torno al 60% procedía de la Unión Soviética, un 21% de Francia y un 4% de Checoslovaquia. Al igual que la ayuda ítalo-germana a finales de julio de 1936 había salvado a Franco de una situación grave (permitiéndole trasladar el ejército de África a la Península e iniciar la marcha sobre Madrid), también la ayuda soviética contribuyó de modo decisivo a la inesperada resistencia republicana en Madrid en noviembre de 1936 (evitando la prevista derrota final en aquella crítica coyuntura).

La vinculación entre la República y la Unión Soviética se estrechó en octubre de 1936 con la decisión del gobierno republicano de depositar en Moscú tres cuartas partes de las reservas de oro del

Banco de España, que había sido movilizado desde el principio para atender a los gastos derivados de la compra de armas y suministros extranjeros. Como ya se ha apuntado (véanse pp. 33-34 y 177), las divisas generadas por esa operación de venta del oro se gastaron en compras de material bélico y pagos por servicios diversos (importaciones de alimentos, carburante, material sanitario, pago de "comisiones" de soborno a funcionarios extranjeros para conseguir permisos de exportación, etcétera). Además, según Gerald Howson, esas compras bélicas a la URSS incluyeron buena dosis de material anticuado y fueron pagadas al contado a precios de mercado internacional. Así pues, cabe desmentir el mito propagandístico franquista del "oro de Moscú" robado por los republicanos y entregado a Stalin sin contrapartida. De hecho, el mismo destino había corrido el resto de las reservas de oro, vendida al Banco de Francia y cuyo contravalor sirvió para pagar suministros procedentes de dicho país. Por motivos obvios de interés político, sobre ese "oro de Francia" no se hizo igual campaña de propaganda.

El apoyo militar y financiero que la URSS comenzó a prestar a la República desde octubre de 1936 tuvo dos consecuencias igualmente negativas para sus objetivos diplomáticos. Por un lado, la intervención soviética en el otro extremo de Europa acentuó la ansiedad franco-británica sobre las verdaderas intenciones de Moscú, reforzando su compromiso no intervencionista. Por otro, sirvió como pretexto para que las potencias del eje procedieran a un incremento cuantitativo y cualitativo de su ayuda a Franco. En ese proceso naufragó definitivamente la política de no intervención colectiva.

Para compensar militarmente la decisión soviética, Hitler decidió a finales de octubre de 1936 el envío de una unidad aérea alemana que combatiría en las filas nacionalistas como cuerpo autónomo, con sus propios jefes, pero en contacto directo con Franco. La "Legión Cóndor" arribó a España por vía marítima y llegaría a contar durante toda la guerra con unos efectivos de 19.000 soldados alemanes (pilotos, tanquistas, artilleros y expertos en comunicaciones), si bien nunca superó la cifra de 5.600 hombres en un mismo momento. Su

fuerza aérea se mantuvo regularmente en torno a 140 aviones de modo permanente. Como tal unidad tomó parte en casi todas las operaciones desarrolladas hasta el final de la guerra.

La respuesta italiana fue ligeramente posterior a la alemana pero la superó en número e intensidad, en consonancia con el mayor interés político-estratégico manifestado por Roma. El 28 de noviembre de 1936 Mussolini y Franco habían firmado un tratado secreto de amistad que estipulaba su "estrecha cooperación" diplomática, el respeto italiano a la integridad española y la adopción por España de una generosa "actitud de neutralidad benévola" hacia Italia en caso de guerra. Tras esa firma, entre diciembre de 1936 y enero de 1937 Mussolini envió a Franco un cuerpo de ejército expedicionario: el *Corpo di Truppe Volontarie*. El CTV agrupaba de modo permanente unos 40.000 soldados italianos y su número total ascendió a lo largo de toda la guerra a 73.000 hombres. Si a esa cifra se añade la fuerza aérea enviada en paralelo (la "Aviación Legionaria"), compuesta por 6.000 hombres, el número total de efectivos italianos en España alcanzaría los 79.000 hombres hasta el final del conflicto.

Así pues, Italia y Alemania habían decidido seguir prestando masivamente ayuda militar a Franco siempre que la misma no superara el límite de la permisividad tácita británica ni precipitara el estallido de una inconveniente guerra general. Una ayuda, además, prestada a crédito en condiciones ventajosas, lo que resultó esencial para los insurgentes puesto que no contaban con recursos financieros para hacer frente a los gastos de guerra.

En definitiva, entre octubre de 1936 y enero de 1937 se había producido un cambio fundamental en el escenario internacional de la guerra española. El compromiso soviético en favor de la República y la intensificación del apoyo del eje al general Franco culminaron el proceso de internacionalización. A partir de entonces, el cuadro de apoyos militares y diplomáticos quedó configurado y se mantuvo inalterado hasta el final. Por un lado, el bando franquista siguió contando con el vital apoyo de la Italia fascista, la Alemania nazi y el Portugal de Salazar (amén del aliento moral y humanitario del

catolicismo mundial). Por su parte, la República se basaba en el apoyo soviético y recibía de Francia una pequeña ayuda encubierta e intermitente (que Blum calificaría de "no intervención relajada": la tolerancia hacia el contrabando de armas por la frontera pirenaica). Mientras tanto, el resto de los países europeos, encabezados por Gran Bretaña, seguían adheridos al Acuerdo de No Intervención y respetaban su embargo de armas y municiones.

Precisamente por iniciativa británica y con el concurso franco-soviético, a lo largo del primer semestre de 1937, el Comité de No Intervención hizo varios esfuerzos para detener la escalada intervencionista mediante la imposición de un complejo control naval y terrestre de fronteras españolas (a cargo de observadores neutrales y de una flota compuesta por buques británicos, franceses, germanos e italianos). Su propósito era convertir en realidad efectiva el confinamiento de la guerra, evitando la llegada de suministros bélicos exteriores en gran escala y sin camuflaje.

Sin embargo, desde el crítico verano de 1937, incluso ese tímido esfuerzo de control fue abandonado por el deliberado sabotaje ítalo-germano y la consecuente retracción anglo-francesa. En adelante, la idea de su restauración, combinada con una retirada supervisada de los combatientes extranjeros, permanecería como pretexto político para justificar la vigencia del acuerdo y la existencia del comité. La política colectiva de No Intervención se había convertido en una farsa institucionalizada. Así lo entendieron los nuevos mandatarios de la entente franco-británica: el conservador Neville Chamberlain (que sucedió a Baldwin en mayo) y el radical Édouard Daladier (que sucedería a Blum meses después).

EL LENTO DESAHUCIO INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA

En efecto, a partir de la crisis del verano de 1937, el relativo equilibrio de fuerzas militares logrado entre los dos bandos españoles fue decantándose progresivamente en meses sucesivos a favor de Franco y en contra de la República. La causa principal de

ese proceso residiría en la firme reactivación del apoyo bélico de las potencias del eje al bando nacionalista, en una medida que no pudo ser compensada por los envíos militares soviéticos ni por el contrabando de armas.

La Unión Soviética no era entonces una gran potencia militar. A pesar de sus grandes reservas de tierras y hombres, su producción industrial bélica era incapaz de atender todos sus compromisos defensivos en el este (frente a un Japón que estaba en guerra contra China y Mongolia) y en el oeste (frente a una Alemania revisionista) y se concentró en la fabricación de aviones en detrimento de las necesidades de la marina y la infantería. Además, la eficacia operativa del Ejército Rojo estaba disminuida por las purgas recurrentes en el mando militar.

Aparte de esas limitaciones internas, el envío de material bélico soviético a España tropezaba con obstáculos logísticos notables. Ante todo, la enorme lejanía de los puntos de suministro obligaba a un largo, costoso y arriesgado transporte por mar. La travesía por el Mediterráneo desde Crimea se enfrentaba al peligro del bloqueo de la marina franquista y del apoyo abierto de la flota italiana a esa labor de bloqueo desde sus bases en Sicilia. La travesía desde el Ártico soviético por el Atlántico exigía desembarcar el material en Francia y esperar a la imprevisible decisión de sus autoridades de autorizar, o denegar el tránsito por su frontera pirenaica hacia Cataluña. En ambos casos, la incertidumbre y falta de regularidad en los envíos afectaron a la planificación militar republicana e impusieron una estrategia bélica defensiva que trataba de conjurar la lenta derrota mediante ofensivas por sorpresa encaminadas a aliviar la superior presión enemiga en otros frentes de operaciones. Buena prueba de la reticencia de los militares soviéticos a desprenderse de su escaso material bélico se encuentra en una carta a Stalin del mariscal Voroshilov, comisario de Defensa, en noviembre de 1937:

> Te envío una lista de mercancías que podemos vender, por mucho que nos duela, a los españoles [...]. Si Francia no se porta vilmente, conseguiremos que todo llegue a su destino en el plazo más breve posible. Verás que la

> lista contiene el lote de piezas de artillería, debido no sólo al hecho de que el ejército republicano las necesita, sino también a la decisión […] de deshacernos, de una vez por todas, de las piezas de artillería fabricadas en el extranjero […]. Lo más doloroso de todo es el material de aviación que estamos enviando; pero, como no pueden prescindir de él en España, hay que enviarlo.

En claro contraste con las dificultades soviéticas, las remesas de material bélico desde Italia y Alemania eran más fáciles de importar en términos geográficos y pudieron ser más constantes y regulares. En esas condiciones, tras descartar la posibilidad de tomar por asalto directo la capital española, desde abril de 1937 Franco se había embarcado en una estrategia de ofensivas de desgaste masivas destinadas a conquistar gradualmente el territorio enemigo mediante el sistemático quebrantamiento de la capacidad de resistencia de un ejército mal abastecido por parte de unas tropas mejor pertrechadas y nutridas. Y como complemento de esa estrategia militar, la diplomacia franquista concentró sus esfuerzos en la preservación inalterada del cuadro internacional de apoyos e inhibiciones existentes. Para ganar su guerra localizada, Franco necesitaba el continuo desahucio de la República por parte de las potencias democráticas, sin mengua de su propia capacidad para recibir ayuda ítalo-germana.

Desde el verano de 1937, el deterioro progresivo de la situación militar republicana trató de ser contenido por el gobierno de Negrín. Como corolario a su política interior de eliminación de vestigios revolucionarios y reforzamiento del poder estatal, los esfuerzos de Negrín en política internacional se dirigieron a conseguir el apoyo de las democracias occidentales y a terminar con una política de no intervención solo aplicada en realidad contra la República y sumamente lesiva para su esfuerzo de guerra. Mientras se lograba ese objetivo, la ayuda militar soviética era "la tabla del náufrago" que permitía resistir. Así lo confesaría con amargura el jefe del gobierno republicano a mediados de septiembre de 1937 a un colaborador:

> Aunque me ve aparentando optimismo, no creo que saquemos nada práctico de la reunión de la Sociedad de Naciones [cuya asamblea anual se celebraba en ese mismo mes]. Alemania, Italia y Portugal seguirán ayudando descaradamente a Franco y la República durará lo que quieran los rusos que duremos, ya que del armamento que ellos nos mandan depende nuestra defensa. Únicamente si el encuentro inevitable de Alemania con Rusia y las potencias occidentales se produjese ahora, tendríamos posibilidades de vencer. Si esto no ocurre, sólo nos queda luchar para poder conseguir una paz honrosa.

Sin embargo, los esfuerzos de Negrín para lograr el apoyo de las grandes democracias fueron infructuosos porque tanto Gran Bretaña como Francia continuaron manteniendo la fachada de la no intervención como mecanismo óptimo para confinar el conflicto español y evitar su conversión en una guerra europea. En julio de 1937, el ministro de Asuntos Exteriores francés había confesado al embajador estadounidense en París la supeditación francesa del "problema español" a los objetivos del apaciguamiento:

> Por lo que respecta al futuro, la posición que tomará Francia dependerá por completo de la posición de Inglaterra. Francia no emprenderá la guerra con Alemania e Italia. La posición de Francia será la misma que su posición en el asunto español. Si Inglaterra decide estar firme al lado de Francia frente a Alemania e Italia, Francia actuará. Si Inglaterra continúa mostrándose distante, Francia no podrá actuar. En ningún caso se encontrará en la posición de tener a la Unión Soviética como su único aliado.

Los gobernantes británicos, con el apoyo francés, solo se permitieron adoptar una postura de firmeza en septiembre de 1937, cuando los ataques indiscriminados de submarinos italianos contra los barcos mercantes que traficaban con la República superaron el límite aceptable, extendiéndose por todo el Mediterráneo y poniendo en peligro la navegación en dicho mar. Entonces, por iniciativa franco-británica y con apoyo soviético, tuvo lugar en Nyon (cerca de Ginebra) una conferencia de potencias ribereñas del Mediterráneo destinada a garantizar el tráfico y a terminar con los ataques de "submarinos piratas" (eufemismo para no acusar a la flota italiana). Con exclusión de la República y sin participación de Italia, la conferencia encomendó a las marinas británica y francesa la

vigilancia de las rutas comerciales mediterráneas, con autorización para hundir cualquier submarino agresor del tráfico mercante.

La respuesta franco-británica en Nyon, apoyada por todos los estados del Mediterráneo, puso límites precisos al apoyo italiano a Franco que Mussolini comprendió. A partir de entonces, la guerra española se convirtió en un escenario marginal de la tensión diplomática porque las miradas fueron concentrándose en los retos derivados de la expansión alemana en Europa central.

A mediados de marzo de 1938, Hitler procedió a anexionar Austria al Tercer Reich, sin réplica militar de las potencias democráticas y previo consentimiento italiano. La única reacción al golpe de fuerza nazi fue la decisión francesa de abrir *de facto* su frontera con Cataluña al paso de material bélico soviético con destino a la República. La medida permitió entrar por esa vía terrestre los suministros militares suficientes para contener la ofensiva que Franco había lanzado a principios de marzo en todo el frente de Levante y que había logrado partir en dos el territorio republicano a mediados de abril de 1938. Del mismo modo, el material recibido hizo posible lanzar a finales de julio la inesperada ofensiva en el río Ebro y frenar así el avance franquista sobre Valencia.

Sin embargo, la presión de las autoridades británicas logró que París aplacase sus temores y aceptara clausurar la frontera pirenaica el 13 de junio de 1938. Chamberlain había convencido a Daladier de que la victoria de Franco no sería un grave problema por varios motivos: 1°) El agotamiento humano y las destrucciones bélicas harían imposible que Franco participara en un conflicto europeo incluso si quisiera; 2°) Franco necesitaría recurrir al crédito británico para financiar el proceso de reconstrucción económica de posguerra; y 3°) La vulnerabilidad militar española ante la flota anglo-francesa era tan patente que bastaría para disuadir a Franco de cualquier tentación hostil.

Frente a esas razones que mitigaban el temor a la victoria franquista, la continuación de la guerra era peligrosa porque dividía a la opinión pública democrática e impedía separar a Italia de Alemania y restar fuerza a esta en sus pretensiones sobre Europa

central. En definitiva, la entente franco-británica consideraba que la República podía ser sacrificada sin excesivo riesgo en beneficio de la colaboración italiana y la preservación de la paz continental.

Desde el momento en que se cerró la frontera francesa, la República vio cortada su última y vital línea de suministros militares y alimenticios exteriores. El golpe de gracia a su esperanza de recibir apoyo de las democracias se produjo durante la crisis de septiembre de 1938, originada por la presión de Hitler sobre Checoslovaquia para que cediera de inmediato los Sudetes (zona habitada por mayoría de población alemana). El triunfo nazi fue sancionado por el acuerdo de Múnich firmado el 29 de septiembre por Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, que implicaba la desmembración de Checoslovaquia a cambio de una promesa alemana de paz y de negociación futura de cualquier cambio territorial. El acuerdo parecía configurar el Pacto Cuatripartito (sin la URSS) que Gran Bretaña había perseguido siempre y significaba la culminación (aparentemente triunfal) de la política de apaciguamiento.

La resolución de la crisis germano-checa en Múnich dio al traste con las esperanzas republicanas porque dejó claro que las potencias que no habían combatido por Checoslovaquia tampoco iban a hacerlo por España. Ese negro horizonte internacional agudizó la desintegración política de la República, acentuando el enfrentamiento entre partidarios de continuar la lucha y sectores proclives a negociar la rendición con aval de las potencias occidentales. Esa situación permitió que el triunfal avance franquista sobre Cataluña terminara con el colapso completo de la resistencia militar republicana.

En efecto, a finales de marzo de 1939, tras el breve episodio de guerra intestina en las filas republicanas, las tropas de Franco ocuparon todo el territorio español y dieron por finalizada la Guerra Civil con una victoria incondicional. Para entonces, la tensión europea había enfilado la recta hacia el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Apenas cinco meses después de terminada la contienda en España estallaría la guerra

europea que tan laboriosamente había evitado (o aplazado) la política de no intervención.

No cabe duda razonable de que el contexto internacional determinó de modo crucial el curso de la Guerra Civil y su desenlace. Los condicionamientos externos plantearon ventajas notorias e impusieron servidumbres sustanciales a cada uno de los bandos, que trataron de utilizarlos o sortearlos a fin de engrosar su capacidad de acción militar, acrecentar la eficacia de su aparato estatal para aprovechar sus recursos y fortalecer la moral combatiente de su población civil. Sin la constante ayuda militar, diplomática y financiera de la Alemania nazi y la Italia fascista, es harto difícil creer que Franco hubiera podido obtener su rotunda victoria. De igual modo, sin el asfixiante embargo de la no intervención y la inhibición de las grandes democracias occidentales, con su gravoso efecto en la capacidad defensiva, disponibilidad material y fortaleza moral, es poco probable que la República hubiera sufrido una derrota militar tan total. Así lo registró en un informe reservado el agregado militar británico en España:

> Es casi superfluo recapitular las razones [de la victoria de Franco]. Estas son, en primer lugar, la persistente superioridad material durante toda la guerra de las fuerzas nacionalistas en tierra y en el aire, y, en segundo lugar, la superior calidad de todos sus cuadros hasta hace nueve meses o posiblemente un año. […] La ayuda material de Rusia, México y Checoslovaquia nunca se ha equiparado en cantidad o calidad con la de Italia y Alemania. Otros países, con independencia de sus simpatías, se vieron refrenados por la actitud de Gran Bretaña.

VII

EL CURSO MILITAR: DE UNA GUERRA BREVE DE MOVIMIENTOS A UNA GUERRA LARGA DE DESGASTE

El golpe militar parcialmente fracasado en la mitad de España devino rápidamente en una guerra civil una vez configuradas las líneas de frente a finales de julio de 1936. Las autoridades insurgentes, haciendo uso de sus disciplinadas fuerzas armadas, se aprestaron a tomar el territorio escapado a su control en primera acometida. El gobierno republicano preparó su defensa con los escasos medios milicianos a su alcance y privado de unas fuerzas regulares. Una vez que la ayuda logística ítalo-germana permitió el traslado del ejército de África a la Península, la capacidad de iniciativa y ofensiva estratégica correspondió a los insurgentes sin interrupción durante todo un año. Solo a partir del verano de 1937 la República fue capaz de articular una estrategia defensiva mediante operaciones de diversión que permitió su supervivencia hasta la primavera de 1939. Para entonces, la expectativa de una guerra breve, predominante hasta finales de 1936, se había desvanecido ante la realidad de una larga guerra total y sin otro arreglo que la victoria absoluta de unos y la derrota incondicional de otros.

LA GUERRA QUE IBA A SER BREVE

Apenas convertido el golpe militar en guerra civil antes de finalizar julio de 1936, tanto los insurrectos como el gobierno republicano

comprendieron que tenían que hacer frente a una verdadera contienda previsiblemente corta. Y se aprestaron a ello con una diferencia de partida considerable que dejó su inmediata impronta en la suerte de las armas. En palabras de Gabriel Cardona:

> Desde los primeros momentos iniciales de la guerra civil española existió una diferencia cualitativa entre ambos bandos contendientes en el plano militar: los sublevados contaron con un Ejército mientras que los republicanos debieron organizarlo prácticamente desde cero, porque la sublevación de la mayor parte del Ejército derrumbó las instituciones de la República y permitió el estallido de la revolución. […] Ésta fue la gran ventaja de los rebeldes: sabían combatir mientras sus enemigos luchaban sin orden ni concierto.

En efecto, como hemos visto, en las zonas de España donde el golpe militar había logrado sus objetivos el poder quedó en manos de la cadena de mando del ejército sublevado, con arreglo a la preceptiva declaración de guerra y previa depuración de elementos hostiles o indecisos en sus filas. Gracias a ese soporte corporativo institucional en gran medida intacto (los 8.000 jefes y oficiales presentes en la zona sublevada se mantuvieron en su puesto sin reserva), la insurrección pudo contar desde el principio con un núcleo directivo capaz de utilizar una masa operativa para acciones bélicas de unos 140.000 hombres en armas: la mayoría de los reclutas ordinarios que prestaban servicio militar (90.000 en conjunto), las fuerzas de orden público sumadas al golpe (casi 30.000 efectivos entre guardias civiles, de asalto y carabineros) y las tropas del ejército de África disponibles (no menos de 20.000 legionarios y regulares de un total teórico de algo más de 32.000 movilizables). A ellos se sumó de inmediato la disponibilidad del torrente de casi 70.000 voluntarios civiles organizados por las milicias de la Falange (50.000), el requeté carlista (15.000) y otros 4.000 milicianos "nacionales" (monárquicos, cedistas, etc.).

Los líderes insurgentes, atendiendo a su experiencia profesional, pusieron en marcha de inmediato la maquinaria militar para nutrir sus filas de combatientes de manera disciplinada y bajo el control de mandos curtidos. Desde principios de agosto de 1936 y hasta finales

de noviembre de 1938 fueron llamados a prestar servicio obligatorio de armas los reclutas de 15 reemplazos de manera ordenada, a partir de los 19 años de edad y hasta los 33. Así consiguieron enrolar hasta el final de la contienda a 1.260.000 hombres que conformaron los efectivos totales del Ejército de Franco, básicamente compuesto por esos soldados de recluta forzada que atendieron a la llamada a filas sin reservas significativas y como siempre había sucedido en la historia del servicio militar obligatorio en España.

En el caso del gobierno republicano, la decisión de licenciar a las tropas para evitar su sublevación tuvo un efecto desastroso sobre su capacidad para librar la guerra con tropas regulares y mínima eficacia, a pesar de que 3.500 jefes y oficiales mantuvieron su lealtad al régimen y cooperaron en su defensa. El resultado de esa pérdida de maquinaria castrense fue la irrupción de las milicias armadas de voluntarios de sindicatos y partidos como única fuerza efectiva de combate, a duras penas asesorada o encuadrada por los militares leales: entre 100 y 120 mil hombres en armas que combatieron durante los primeros tres meses del conflicto. Solo en Madrid, según Michael Alpert, hubo en aquellos meses iniciales no menos de quince columnas milicianas que hacían la guerra por su cuenta y con poca coordinación.

Aparte de sus problemas de indisciplina, bisoñez y falta de instrucción y experiencia, el grave reto planteado por las milicias populares consistió en que el número de voluntarios para nutrir sus filas fue decayendo semana tras semana. Por eso, después de graves reveses y no pocos sinsabores, los líderes políticos y sindicales empezaron a prestar oídos a las recomendaciones de los mandos profesionales para restaurar la organización y disciplina militar. El testimonio resignado de uno de los mandos de la columna del POUM operante en Aragón es bien expresivo de ese estado de ánimo:

> Fue la escasez general [de toda clase de armas] la principal razón por la que no se pudo lanzar una ofensiva importante. Pero no fue la única. No había un plan global, ni creo que hubiese en Cataluña un oficial del ejército

> capaz de trazarlo. Entre las columnas no existía una coordinación apropiada y a veces no había ni siquiera comunicaciones. A menos que el coronel Villalba [asesor militar de las columnas cenetistas en Aragón] convocase una reunión de todos los jefes de columna, nadie sabía lo que el vecino tramaba.

Finalmente, el gobierno de Largo Caballero afrontó el desafío con decisión cuando el enemigo estaba ya a las puertas de Madrid: el 15 de octubre de 1936 se decretó la constitución del nuevo Ejército Popular de la República, poniendo fin al periodo de guerra miliciana. Poco después, el 29 de octubre, se restauró el reclutamiento militar obligatorio para los reemplazos de entre 19 y 44 años. Como resultado de ambas medidas, hasta el final de la guerra, la República movilizó a 28 reemplazos que llegaron sumar 1.700.000 hombres en armas en sus filas.

Al margen de la capacidad operativa tan diferenciada que tenían inicialmente insurgentes y republicanos en cuanto a hombres bien armados y encuadrados, estos últimos también carecían de un centro neurálgico de control de sus fuerzas y de cualquier estrategia general digna de tal nombre. Como ha escrito Jorge Martínez Reverte:

> La estrategia político-militar de la República es nada. No existe salvo por lo que se refiere a defenderse con lo que haya en cada momento de los golpes de un enemigo cuyo proyecto también se desconoce salvo por un detalle fundamental: quiere acabar con lo que hay de forma atroz.

En efecto, hasta el 8 de agosto de 1936 el ministerio de la Guerra ("un desbarajuste" por entonces, según Cardona) no crea una Inspección General de Milicias que trata de inventariar y asesorar a las columnas que combaten por los frentes del centro peninsular (la zona norte y el área catalana y levantina son tierras autónomas en esos primeros meses). Y hubo que esperar a la llegada de Largo Caballero para que se reconstruyera, el 5 de septiembre, un verdadero Estado Mayor del Ejército. Estaría a cargo de militares profesionales (entre ellos, los generales José Miaja y Toribio Martínez Cabrera y los coroneles Vicente Rojo, Segismundo Casado y Antonio Cordón) que asumirían las tareas de dirección estratégica y pondrían

en marcha con muchas dificultades los embrionarios cimientos del futuro Ejército Popular de la República.

En el caso de los insurgentes, los principales objetivos de su estrategia militar habían sido perfilados por los planes de sublevación y tenían como eje la ocupación de la capital española mediante una convergencia de avances de columnas de distintas procedencias: "El poder hay que conquistarlo en Madrid". Los reveses cosechados por el golpe en la ciudad fueron pronto agravados por la paralización de los ataques organizados por las tropas del general Mola en el frente de Guadarrama y Somosierra. Faltas de suficientes hombres y material, esas fuerzas fueron rechazadas por las milicias populares. La parálisis otorgó la máxima importancia al despliegue del ejército de África de Franco, que se convirtió en el instrumento decisivo para aplastar resistencias y emprender con toda celeridad la marcha sobre Madrid, cuya conquista se estimaba vital para el resultado de la lucha en toda España. Y Franco atendió las peticiones de ayuda de Mola en este sentido: "Siempre considero como tú que problema capital y de primerísimo orden es ocupación de Madrid y a ello deben encaminarse todos los esfuerzos".

Pertrechado por la ayuda logística ítalo-germana y habiendo logrado transportar por aire a la mayoría de sus fuerzas hasta Sevilla, el 1 de agosto de 1936 Franco había ordenado la partida de las primeras tropas con destino a la capital española. Pero no lo hizo por la ruta más corta y habitual, a través del desfiladero de Despeñaperros, sino por la Vía de la Plata. Con ello pretendía ocupar primero la ciudad de Badajoz para asegurar el control de toda la frontera hispano-portuguesa y la comunicación terrestre con la zona norteña sublevada. Catorce días después, la orden había sido cumplida y Badajoz estaba en manos de las columnas africanas dirigidas por el coronel Yagüe, que habían actuado con "rapidez, decisión y energía" y reduciendo "los elementos revolucionarios con energía extrema", según las directivas de operaciones recibidas.

Franco sumaba así ese triunfo militar al éxito previo de asegurarse el paso del Estrecho y abría la posibilidad de una marcha

rápida sobre Madrid siguiendo la línea del río Tajo. El avance de sus tropas (unos 4.500 hombres inicialmente) siguió siendo tan imparable que el 3 de septiembre de 1936 arrollaron la resistencia miliciana en Talavera de la Reina, casi a la par que las tropas de Mola conseguían ocupar Irún y cerrar la frontera con Francia a sus enemigos embolsados en la franja cantábrica. Pero en vez de seguir el avance directo sobre la atribulada capital (donde Giral daba paso a Largo Caballero ante la magnitud de la catástrofe), Franco decidió desviarse ligeramente del camino para liberar el Alcázar de Toledo y lograr un éxito simbólico y propagandístico indiscutible. La controvertida decisión fue probablemente un error militar porque daría un tiempo precioso al enemigo para preparar la defensa de Madrid, apuntalar la militarización de milicias en curso y recibir la primera ayuda soviética y de las brigadas internacionales. En todo caso, no fue un error político: el 28 de septiembre Franco consiguió su objetivo de ver liberado el Alcázar, al mismo tiempo que la Junta de Defensa Nacional se rendía ante la evidencia y le resignaba "todos los poderes del Estado" de manera formal.

Convertido ya en Caudillo indiscutido, Franco ordenó la reanudación de la marcha sobre Madrid, llegando a sus puertas a primeros de noviembre de 1936. Decidió entonces intentar el asalto directo y frontal sobre la capital desde la propia carretera de Extremadura y por el flanco suroccidental, a pesar de que el tajo del río Manzanares y la elevación del terreno no eran muy propicios. Su principal asesor militar entonces, el coronel Antonio Barroso (jefe de operaciones del Cuartel General), trató de disuadirle: "No tenemos fuerzas, es una empresa desesperada". Pero Franco pensaba que las alternativas de mover tropas hacia el norte montañoso (donde estaban las fuerzas de Mola empantanadas) o hacia el sureste (para atacar por el río Jarama y la carretera de Valencia) se presentaban igualmente problemáticas: obligarían a perder tiempo por el movimiento de tropas exigido y la climatología podría volverse adversa (las cumbres norteñas madrileñas solían cubrirse de nieve pronto y hacer imposibles los movimientos, lo que no parecía tan probable en el suroeste de la capital).

El 7 de noviembre de 1936 las tropas de Franco, bajo el mando directo del general Varela, comenzaron el asalto frontal a Madrid. Eran un conjunto de unos 30.000 hombres ya muy desgastados por la larga marcha desde Sevilla y tenían enfrente a 20.000 hombres dirigidos con una eficacia inesperada por el general Miaja y el coronel Rojo. El gobierno de Largo Caballero, considerando "imposible defender Madrid", había partido dos días antes hacia Valencia, nueva capital oficial de la República, en previsión de lo peor. La medida, contra todo pronóstico, facilitó la toma de decisiones rápidas por parte de Miaja y Rojo, apoyados por las fuerzas comunistas y anarquistas (entre ellos, Durruti, víctima mortal de la lucha), que se negaron a dejar caer la ciudad sin resistencia. Los combates fueron encarnizados y la ofensiva consiguió atravesar el río Manzanares y penetrar por la Ciudad Universitaria. Pero finalmente se impuso la realidad de un equilibrio de fuerzas entre atacantes y defensores. El 23 de noviembre Franco suspendió el ataque directo y reconocía así la primera victoria defensiva republicana. La marcha sobre Madrid había concluido. Comenzaba la batalla en torno a Madrid.

El fracaso del primer intento para tomar la capital por asalto directo no cambió los objetivos estratégicos de Franco. Pero impuso modificaciones importantes. En los meses sucesivos iba a tratar de romper la resistencia enemiga en Madrid por medio de ataques envolventes para estrangular sus comunicaciones y la llegada de aprovisionamientos de víveres y armas, a fin de rendir la ciudad por asedio activo y persistente.

La primera manifestación de esa nueva táctica se apreció en la batalla de la carretera de La Coruña, que trataba de ocupar el flanco norte-occidental de la ciudad para entroncar con las tropas de Mola en la sierra. Desarrollada entre mediados de diciembre de 1936 y mediados de enero de 1937, la batalla terminaría en tablas al precio de quince mil muertos entre ambos bandos.

La segunda ocasión de esta nueva táctica se puso en marcha a mediados de febrero de 1937, poco después de la victoria de las tropas italianas que habían ocupado Málaga en una operación de

guerra celere. Franco pretendía cortar las comunicaciones con Valencia atacando por el flanco suroriental, en la zona del río Jarama. Para ello desplegó una masa de más de veinte mil hombres que tendría en frente a unas tropas republicanas animadas por las victorias defensivas logradas y con nuevo material bélico soviético para resistir la ofensiva. A fines del mes de febrero, la Batalla del Jarama había concluido con un reajuste del frente favorable a Franco, pero sin haber logrado el objetivo de cercenar la conexión entre Madrid y Levante.

La tercera y última tentativa de Franco para asediar la capital y rendirla por la fuerza de las armas se desplegará por el flanco nororiental, en la batalla de Guadalajara, que se alargará entre el 8 y el 21 de marzo de 1937. La ofensiva franquista estuvo básicamente a cargo de las tropas del CTV italiano (con una masa de casi 35.000 hombres) bajo el mando directo del general Roatta. Y terminará con una derrota clamorosa por su mala planificación, pésima conducta de las tropas, inesperadas adversidades climáticas que impidieron el uso de aviones y unidades motorizadas y, finalmente, la eficaz resistencia de unas fuerzas republicanas que empezaban a curtirse en la defensa activa y disciplinada.

A finales de marzo de 1937, el fracaso de las sucesivas tentativas para tomar Madrid por asalto llevó a Franco a cambiar de manera decisiva su estrategia bélica. Comprobada la reiterada capacidad defensiva del enemigo en el frente madrileño, optó por renunciar de momento al objetivo de tomar la capital para volcarse contra la aislada franja norteña republicana, más vulnerable y cuya conquista ofrecería ventajas nada desdeñables en términos de incremento de producción minera, riqueza siderúrgica y acceso a reservas demográficas. Ese giro estratégico implicaba asumir que la guerra ya no iba a ser corta y breve, sino larga y dilatada, algo que no le preocupaba demasiado en vista de la confirmación del apoyo vital ítalo-germano y de la persistencia de la no intervención que estrangulaba a la República.

El cambio de escenario y objetivos decidido por Franco significaba asumir la necesidad de empezar a librar una guerra de desgaste y

agotamiento en un vasto frente norteño, con el propósito de ir derrotando gradualmente al enemigo mediante el quebrantamiento de su capacidad de resistencia gracias a una neta superioridad material y logística. Era la "táctica del carnero" en el contexto de la "guerra total": embestir de frente contra un enemigo inferiormente dotado para derribarlo y desangrarlo en cada acometida. Era lo que los militares de la generación de Franco habían visto y aprendido en las batallas épicas de la Gran Guerra (Verdún, Somme, Passchendaele).

Fue un cambio de estrategia crucial que sus valedores italianos y alemanes no siempre apreciaron ni comprendieron por los graves costes y riesgos implícitos para ellos, suscitando en Roma y en Berlín dudas sobre la competencia militar de Franco. En diciembre de 1936, tras el inesperado fracaso ante Madrid, el general Faupel, recién nombrado embajador alemán en España, había informado a Berlín:

> Personalmente, el general Franco es un soldado bravo y enérgico, con un fuerte sentido de la responsabilidad: un hombre que se hace querer desde el principio por su carácter abierto y decente, pero cuya experiencia y formación militar no le hacen apto para la dirección de las operaciones en su presente escala.

También en Italia se manifestaron entonces serias dudas sobre la capacidad militar del Generalísimo para dirigir con plena eficacia y según las modernas doctrinas estratégicas el esfuerzo bélico nacionalista. Meses después, el conde de Ciano anotaría en su diario privado la "inquietud" de los generales italianos destacados en España: "Franco no tiene idea de lo que es la síntesis en la guerra. Sus operaciones son tan sólo las de un magnífico comandante de batallón".

Sin embargo, sobre este controvertido tema, hay que recordar un aspecto determinante: el Caudillo español no actuaba bajo meras consideraciones militares ni perseguía una victoria rápida al estilo *blitzkrieg* (guerra relámpago) o *guerra celere*, como pretendían sus valedores germanos e italianos. Su pretensión era mucho más amplia y profunda, a tono con el carácter de guerra civil que tenía la propia contienda: aprovechar las operaciones bélicas para proceder

a la extirpación física de un enemigo considerado como la anti-España. En palabras de Franco en febrero de 1937 al teniente coronel Emilio Faldella, segundo jefe del contingente de fuerzas militares italianas que servía a sus órdenes:

> En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país aún infestado de adversarios.

Apenas dos meses después, ante la insistencia de Mussolini sobre la necesidad de agilizar las operaciones, Franco volvió a repetir al embajador fascista las razones de su nueva estrategia militar supeditada a un fin político de "limpieza" de enemigos:

> Debemos realizar la tarea, necesariamente lenta, de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar sería totalmente inútil. La redención moral de las zonas ocupadas será larga y difícil, porque en España las raíces del anarquismo son antiguas y profundas. […] Ocuparé España ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, ferrocarril a ferrocarril… Nada me hará abandonar este programa gradual. Me dará menos gloria, pero mayor paz en el territorio. Llegado el caso, esta guerra civil podría continuar aún otro año o dos, quizá tres. Querido embajador, puedo asegurarle que no tengo interés en el territorio, sino en los habitantes. La reconquista del territorio es el medio, la redención de los habitantes, el fin.

El cambio de estrategia bélica impuesto por Franco en la primavera de 1937 ha sido a veces interpretado como una renuncia consciente a ganar la guerra de manera rápida en el frente de Madrid y como una forma de alargar la lucha innecesariamente en términos militares. Y ello supuestamente por motivos políticos personales (ganar tiempo para consolidar su posición dictatorial) o por razones represivas (dar ocasión a la limpieza de enemigos capturados y a la matanza de soldados republicanos). Pero esas críticas y supuestos tropiezan con la evidencia de que Franco intentó tomar Madrid de manera reiterada y con todas sus fuerzas. Y que no dejó de acumular poderes omnímodos a la par y mientras la represión proseguía su labor depurativa de manera cada vez más organizada. Otra cosa distinta es que no demostrara la capacidad táctica necesaria para conseguir su anhelado objetivo militar porque

el gran obstáculo que se encontró fue tan imprevisto como eficaz: el nuevo Ejército Popular de la República, formado penosamente sobre el sustrato miliciano, abastecido por la URSS y reforzado por las Brigadas Internacionales desde octubre de 1936. Frente a ese enemigo cada vez más operativo y voluntarioso, hábilmente dirigido por Miaja y Rojo, las sucesivas ofensivas envolventes se estrellaron ante una estrategia defensiva tan fructífera como inesperada en sus resultados. Como ha señalado Gabriel Cardona: "Franco ganó la guerra y perdió una sola batalla: la de Madrid".

En esas circunstancias, el giro hacia la conquista del norte no fue, ni mucho menos, gratuito y erróneo, sino un cambio de escenario bélico sensato y hasta necesario. Entre otras cosas, porque para entonces ya no era evidente que la toma de Madrid fuera a suponer el final de la resistencia republicana, con el gobierno afincado en Valencia y disponiendo de la totalidad de la fachada levantina con todos sus recursos. No en vano, en torno a Madrid se reveló la existencia de un poderoso ejército con fuerte capacidad defensiva que podría replegarse, en caso de que la ciudad cayera, hacia La Mancha, Levante o Cataluña para proseguir su eficaz resistencia.

Por eso mismo, ese cambio estratégico tuvo el asentimiento de la mayor parte de los asesores militares de Franco, empezando por su jefe de operaciones, el coronel Barroso, que diseñó un completo plan de campaña a tal efecto. A tenor del mismo, abandonado solo provisionalmente el objetivo de tomar Madrid, las operaciones deberían dirigirse a liquidar primero el frente norte (para eliminar un sector secundario y hacerse con sus notables recursos de materias primas). Una vez logrado ese propósito, habría que emprender operaciones sobre la punta de Teruel y el Maestrazgo para cercar Madrid cortando su salida al mar por Valencia, como precondición para volverse de nuevo contra la capital aislada de todo contacto exterior. Y, en efecto, entre abril de 1937 y julio de 1938 la estrategia de las tropas de Franco se atendría a esas directrices sin apenas variación y con notables éxitos. También el coronel Rojo apreció la lógica subyacente del giro franquista y actuaría en consecuencia:

> El enemigo, después de Guadalajara, abandonó la directriz que seguía su plan de campaña y, al no haber podido ganar la guerra con su golpe decisivo sobre Madrid, decidió ganarla por partes. La lucha iba a tomar un carácter más regularizado y metódico; sería una verdadera guerra de conquista de partes sucesivas del territorio nacional con la colaboración de tropas extranjeras y poniendo en acción de manera patente en pequeños teatros una considerable superioridad. Con esa orientación desplazaría su actividad operativa al teatro del norte.

LA GUERRA QUE SE HIZO LARGA

La conversión de la contienda en una guerra larga, al compás de la nueva dirección estratégica de Franco, tuvo su inmediato efecto sobre lo que ya puede llamarse estrategia defensiva de la República. Entre otras cosas, porque sus primeros éxitos fueron realmente espectaculares: la ofensiva franquista sobre Vizcaya iniciada el 30 de marzo de 1937 avanzó con suma rapidez, contempló brutales demostraciones de fuerza (como el bombardeo germano-italiano de la villa de Guernica el 26 de abril) y concluiría con la ocupación el 19 de junio de Bilbao (con su puerto e industria intactos y listos para volver a producir). Tampoco en otros frentes secundarios iban mejor las cosas para el gobierno republicano, como demostraría el bombardeo de Almería por la flota alemana el 31 de mayo, en represalia por un previo ataque aéreo republicano sobre uno de sus buques fondeado en el puerto de Palma de Mallorca.

En efecto, aquella deriva militar tan adversa coincidió con la crisis política que terminó con la formación del gobierno de Negrín el 17 de mayo de 1937. Y una de sus primeras decisiones fue el nombramiento del ya general Rojo como nuevo jefe del Estado Mayor Central, convirtiéndolo en el máximo artífice de la defensa militar republicana. Era la primera de una serie de medidas de reorganización del Ejército Popular destinadas a aumentar su eficacia y centralización, tratando de superar sus carencias estructurales: las dificultades para cubrir los puestos de oficiales y suboficiales experimentados y para abastecer las demandas materiales de suministros y repuestos bélicos, además de las rivalidades políticas

por el nombramiento y destitución de mandos militares (sobre todo por la pretensión hegemónica de los comunistas y la resistencia de otros grupos a transigir al respecto).

Es significativo que fuera el gobierno de Negrín el primero en tratar de aplicar una política global para la organización de la industria vinculada a las necesidades de guerra. A pesar de las medidas particulares tomadas con anterioridad por Largo Caballero o por la Generalitat, no fue hasta el 28 de junio de 1937 cuando se crearon tres delegaciones de la subsecretaría de Armamento del nuevo ministerio de Defensa Nacional: Centro, Norte y Cataluña. Tres meses después, en atención a las protestas catalanistas (las vascas ya no tenían sentido tras la pérdida de Vizcaya), la delegación de Cataluña tuvo que ser sustituida por una Comisión de Industrias de Guerra con participación de cinco representantes gubernamentales y tres de la Generalitat. Disuelta esta comisión en enero de 1938, el gobierno no procedería a tomar el control directo de toda la industria bélica catalana hasta agosto, en medio de una crisis de sus relaciones con la Generalitat. Para entonces, habían pasado ya más de dos años desde el principio del conflicto y solo entonces se había adoptado una medida que resultaba inexcusable en tiempos de guerra total.

Rojo elaboró las bases de una estrategia defensiva que partía de la asunción de la neta superioridad material y profesional del enemigo y de la persistencia de las dificultades propias del abastecimiento bélico. Su objetivo central consistía en tratar de conjurar la lenta derrota final mediante una serie de inesperadas ofensivas de distracción en frentes secundarios, siempre encaminadas a aliviar la continua presión del avance franquista en el frente principal de sus ataques. A juicio de Rojo (pese a las reservas de Miaja), no cabía seguir aplicando una estrategia defensiva estática como hasta la batalla de Guadalajara. Porque ahora la pasividad en los frentes significaría "dejar a los ejércitos de Santander y de Asturias abandonados a su suerte" y "dejar que el enemigo agrupe sus fuerzas y consiga de una vez por todas acumular concentraciones de tropas y armamento que le den

sistemáticamente la superioridad en el teatro de operaciones donde quiera elegir la continuación de la guerra". Era una estrategia, además, que estaba a tono con la demanda que Negrín le había hecho a su máximo asesor militar: "ganar tiempo" para que pudieran cambiar las circunstancias internacionales, cesar el aislamiento exterior republicano o estallar la guerra mundial que permitiera sumarse a la entente franco-británica. El resultado de la aplicación de esa nueva estrategia republicana ha sido descrito por Cardona con sus luces y sombras:

> Entre el verano de 1937 y el siguiente invierno del mismo año, el Ejército Popular de la República desencadenó las ofensivas de Brunete, Belchite y Teruel, siempre con el mismo desarrollo. En los tres casos, el primer ataque republicano, encomendado a tropas escogidas, logró un gran éxito. Sin embargo, al cabo de dos o tres días de combates, el escalón de ataques estaba desgastado, sin que existieran reservas capaces de tomar el relevo y de continuar la ofensiva. Mientras tanto, el general Franco transportaba al lugar de la batalla tropas frescas en ferrocarril en tanto que su aviación dominaba el cielo. A los pocos días del primer ataque, la ofensiva republicana se convertía en derrota.

En efecto, la triunfal ofensiva enemiga en Vizcaya iba a ser seguida de inmediato por una operación similar contra Santander. Pero esa ofensiva fue retrasada por el primer ataque diseñado por Rojo en el frente madrileño: la batalla de Brunete. Desarrollada entre el 5 y el 26 de julio de 1937 con temperaturas elevadísimas, en Brunete se enfrentaron unas fuerzas republicanas de 80.000 hombres contra un contingente franquista de 60.000 soldados. Terminada la batalla con graves pérdidas para ambas partes, Franco emprendió la ofensiva contra Santander el 14 de agosto. Y logró su propósito de tomar la ciudad y su puerto el día 26 del mismo mes, colocándose en situación de afrontar la conquista de la última pieza del frente norteño: Asturias.

La ofensiva sorpresa diseñada por Rojo para aliviar la potente presión franquista en el norte se desplegó esta vez en el frente aragonés, en torno al pueblo de Belchite, en la carretera hacia Zaragoza. Movilizó a 80.000 combatientes republicanos contra 30.000 defensores enemigos acostumbrados a un frente inactivo.

Comenzada el 23 de agosto, la batalla de Belchite no logró su objetivo de impedir la caída de Santander tres días después, aunque retrasó el comienzo de la ofensiva asturiana, puesto que terminó en tablas el 6 de septiembre de 1937. Para entonces, ya se había iniciado el avance franquista en Asturias (1 de septiembre), movilizando a 110.000 hombres fogueados, bien armados y cubiertos por aviación y artillería, que se enfrentarían a 80.000 hombres con reservas limitadas de fusiles, ametralladoras y piezas de artillería y sin un solo avión operativo. Pese a esa abrumadora superioridad, gracias a la difícil orografía, la campaña de Asturias se prolongaría durante más de mes y medio y no concluiría hasta la definitiva ocupación del puerto de Gijón el 21 de octubre de 1937.

En todas las operaciones de ayuda al norte emprendidas por el ejército republicano durante 1937 quedaron patentes muchas de sus debilidades estructurales, como dejaron de manifiesto sus informes internos: suministros bélicos insuficientes, mandos de escala inferior poco experimentados, rivalidades políticas lesivas para la disciplina, etc. Sin embargo, el principal lastre para la capacidad defensiva del norte residía también en otros factores institucionales, como explicaba uno de los mandos republicanos del Ejército del Norte, en su informe de noviembre de 1937:

> Cada una de las tres provincias (Euskadi, Santander y Asturias) tenía su Gobierno, que odiaba cordialmente a los de las otras dos y hacía mangas y capirotes de las disposiciones del Gobierno de la República. Entre cada dos provincias existía una frontera, mucho más difícil de atravesar que una internacional y en tales menesteres aduaneros vivían emboscados multitud de hombres jóvenes perfectamente armados que hacían mucha falta en los frentes. […] La pérdida del norte se debe en gran parte a la aviación. […] A nadie se le ocultaba que nuestras fuerzas, preparadas y hechas en la defensiva, no tenían capacidad maniobrera, porque del jefe de batallón al cabo ninguno estaba preparado para mover a sus hombres en el campo.

La desaparición del frente norte causó conmoción en la República y acentuó las divergencias entre los partidarios de la resistencia, preconizada por Negrín, y los favorables a la mediación y liquidación inmediata del conflicto, encabezados por Azaña. Consciente de esa situación, Franco se aprestó a preparar una nueva ofensiva sobre

Madrid por el sector de Guadalajara, repitiendo la maniobra ya intentada en marzo, pero ahora con mayor amplitud y más medios humanos y materiales. Sin embargo, antes de que la operación pudiera emprenderse, de nuevo Rojo se adelantó a sus planes y le forzó a combatir en otro frente diferente.

El proyecto de ofensiva por sorpresa sobre la ciudad de Teruel, el más expuesto y vulnerable de los puntos franquistas en el bajo Aragón, comenzó el 15 de diciembre de 1938 a cargo de una fuerza republicana de más de 70.000 hombres. La operación iba a ser una de las más importantes de la República por sus ambiciosos objetivos: estratégico (desarticular el previsto ataque sobre Madrid), táctico (reducir un peligroso saliente en el frente y tomar una capital provincial), moral (estimular con una victoria a las masas populares y combatientes) y diplomático (demostrar la existencia de un ejército capaz de maniobrar y deshacer la idea de que la República estaba acabada). Después de unos combates durísimos bajo temperaturas invernales, Teruel cayó en poder de los republicanos el 8 de enero de 1938. Era la primera victoria ofensiva lograda por la República y permitió concebir la esperanza de estabilizar el frente militar para dejar obrar a la diplomacia.

Fiel a su compromiso de no ceder un ápice al enemigo, Franco aceptó el desafío de Rojo, suspendió la operación madrileña y movilizó todas sus reservas hacia Teruel para reconquistar la ciudad. En consonancia con su estrategia de ofensivas frontales de agotamiento, no repararía en medios para recuperar la plaza y compensar el éxito propagandístico enemigo. La contraofensiva iniciada el 5 de febrero de 1938 consiguió sus propósitos apenas dos semanas más tarde: el 22 de febrero la capital turolense volvía a manos franquistas. Fue solo el comienzo del mayor desastre republicano de toda la guerra: el Ejército Popular había perdido durante los meses de batalla más de 60.000 hombres (frente a 40.000 bajas enemigas), se había quedado sin repuestos de material bélico, destrozado o abandonado, y las tropas supervivientes en aquella línea de frente estaban desmoralizadas y exhaustas. El

informe interno redactado sobre la batalla no deja lugar a dudas sobre la catástrofe sufrida:

> Hemos creado un Ejército y no hemos sabido darle una constitución interna y vigorosa. Los mandos y los estados mayores de las grandes unidades no son precisamente los más aptos, se han elegido más bien por conveniencias políticas que por aptitud profesional. El problema técnico de nuestro Ejército antifascista es de aviación y artillería, este es el caso de Teruel que ya ocurre desde el principio de la guerra: grandes masas de aviación e imponentes concentraciones de fuegos de artillería han protegido los avances de los rebeldes, machacando literalmente el terreno, que más tarde ha sido ocupado por la infantería sin más respuesta que los estertores de agonía de nuestros heridos.

Consciente de esa coyuntura propicia y tratando de aprovechar la extrema debilidad republicana, Franco optó por emprender con urgencia una magna ofensiva en todo el frente aragonés. El plan consistía en atacar a lo largo de la línea del frente simultáneamente con el objetivo estratégico de destruir la resistencia enemiga, avanzar hacia el interior de Cataluña y llegar al Mediterráneo por la desembocadura del Ebro, para cortar en dos mitades incomunicadas al territorio republicano. Logrado ese objetivo, parecía previsible que el territorio central quedara expuesto a una ofensiva final victoriosa que completara el asedio de Madrid mediante la conquista de Valencia y el cierre del acceso al mar de la zona central. Para ejecutar dicho plan, Franco reunió en la zona a 150.000 hombres apoyados por gran fuerza artillera y con potente cobertura aérea.

La ofensiva franquista sobre Aragón comenzó el 9 de marzo de 1938, acompañada de una serie de bombardeos aéreos italianos sobre Barcelona que cosecharon más de mil muertos y dos mil heridos. Las débiles defensas republicanas fueron cayendo una a una, incapaces de resistir moral y materialmente el tremendo ataque. Las órdenes de repliegue del alto mando republicano apenas bastaron para contener una retirada caótica y un desplome general de la moral y la disciplina en filas. Belchite fue ocupado el 11 de marzo. Tres días después cayó Alcañiz. El día 23 de marzo las tropas franquistas cruzaron el Ebro a la altura de Quinto, en tanto que el 3 de abril tomaron Lérida, la primera capital provincial catalana que

caía en poder franquista. Finalmente, el 15 de abril de 1938 la vanguardia de las fuerzas atacantes ocupó la villa de Vinaroz en la costa mediterránea y permitió que la prensa franquista anunciara que "la espada victoriosa de Franco partió en dos la España que aún detentan los rojos".

Solo entonces se impuso una pausa en la ofensiva gracias al desgaste de los atacantes y al inicio de la reacción defensiva de los atacados, posibilitada por un triunfo diplomático de Negrín: lograr la apertura durante tres meses de la frontera francesa al paso de armas y municiones tan escasas como necesarias. Esa vía terrestre, cerrada o abierta según las vicisitudes de la política interior en Francia, se había convertido en el cordón umbilical que unía la asediada República con sus fuentes de suministro externas. En palabras de Ricardo Miralles:

> Del tráfico por Francia dependió la vida de la República desde el momento en que la acción submarina italiana en el Mediterráneo [agosto-septiembre de 1937] dificultó la navegación soviética hacia los puertos del Levante español. […] la frontera francesa fue el hilo vital que la conectaba a sus suministros de armas y a sus eventuales apoyos diplomáticos.

La vital victoria de Franco en Aragón y Levante, con la división de la República en dos mitades aisladas, le planteó la posibilidad de continuar la ofensiva en dos direcciones alternativas: seguir la marcha hacia Barcelona y la frontera con Francia, o avanzar sobre Valencia y los puertos mediterráneos. Escogió la segunda opción, contra el parecer de algunos de sus asesores, porque entendió que "los peligros más grandes para terminar la guerra están en las ayudas del exterior". Y temía que la expectativa de su llegada a la frontera hispano-francesa con tropas italianas y alemanas provocara una intervención de Francia a favor de la República, como había pasado en marzo tras la ocupación alemana de Austria.

En consecuencia, el 18 de abril de 1938 las tropas franquistas rompieron el fuego y emprendieron una ofensiva durísima en la zona del Maestrazgo con el propósito de avanzar hacia Levante, operación que concluiría con la ocupación de la ciudad de Castellón casi dos meses después (el 15 de junio). El terreno escabroso de esa zona,

unido a las lluvias primaverales y a la tenaz resistencia republicana, dilataron la victoria mucho más de lo previsto. En todo caso, el 18 de junio se reemprendió la ofensiva contra Sagunto para abrir la vía hacia Valencia, al tiempo que se iniciaba una ofensiva en el sector extremeño para acabar con "la bolsa republicana de La Serena" y evitar posibles maniobras distractivas de Rojo en el área. Y si bien la victoria fue inmediata en el frente extremeño, no sucedió lo mismo en el frente valenciano, donde la estrategia defensiva articulada por Miaja había conseguido frenar a los atacantes a mediados de julio en la línea fortificada desplegada desde la sierra de Espadán hasta la costa en Sagunto.

En esas circunstancias se pondría en marcha la última de las grandes ofensivas-defensivas planificadas por Rojo y ejecutadas por el Ejército Popular de la República. Desde mediados de junio de 1938, Rojo había diseñado una operación en torno a la desembocadura del río Ebro con el nuevo material soviético que había llegado a través de la frontera francesa (cerrada de nuevo por esas fechas). El proyecto, acorde con sus previas operaciones diversivas, consistía en cruzar por sorpresa el cauce bajo del río (entre Mequinenza y Tortosa) para asaltar un flanco desguarnecido por el enemigo, cuyos ataques principales se habían concentrado mucho más al sur de Castellón. Según Rojo, "la maniobra del Ebro" tendría dos objetivos: "Detener la maniobra sobre Valencia-Sagunto, obligando al enemigo a llevar al Ebro tropas no desgastadas en aquella ofensiva. Actuar sobre la moral de sus tropas y retaguardia". Contaba para ello con unas fuerzas, el Ejército del Ebro, bastante experimentadas y comprometidas, en razón de la fuerte implantación comunista en sus filas y sus mandos.

Aprobada la idea por Negrín (que tenía presente la creciente crisis germano-checa que pronto pondría a Europa al borde de la guerra), el 25 de julio de 1938 comenzó la que habría de ser la batalla más dura y larga de toda la guerra. También la más importante, movilizando a decenas de miles de hombres en ambos bandos (inicialmente, 100.000 republicanos contra 40.000 franquistas) y cosechando en total unas 120.000 bajas (entre heridos,

desaparecidos y muertos: unos 30.000, dos tercios de ellos republicanos). La batalla del Ebro habría de durar más de tres meses y medio, hasta el repliegue republicano a la orilla de partida completado el 16 de noviembre de 1938.

Inicialmente, como siempre en las ofensivas de Rojo, las tropas republicanas lograron un éxito inesperado porque consiguieron cruzar el río por varios puntos y avanzaron hasta ocupar un amplio arco de territorio entre Mequinenza al norte y la sierra de Pandols al sur. Apenas dos días después de iniciada la ofensiva, Franco suspendió los ataques sobre Sagunto para atender el desafío de Rojo y pese a los consejos contrarios de muchos de sus asesores. Había decidido apostar por un choque frontal de desgaste aprovechando que el enemigo carecía de reservas de hombres y material suficientes para alimentar el combate: "No me comprenden, tengo encerrado a lo mejor del ejército enemigo".

En efecto, el avance republicano fue frenado antes de finalizar julio de 1938 y el 6 de agosto comenzaba la primera de las contraofensivas franquistas. Desde entonces, las derrotas republicanas se sucedieron y acabaron forzando el repliegue hacia la orilla de partida del río con sus tropas destrozadas. A mediados de noviembre de 1938, todo había terminado: Franco había ganado nuevamente el "choque de carneros" pese a sus grandes bajas y el enemigo había perdido sus mejores fuerzas de maniobra y carecía ya de capacidad militar para resistir el asalto sobre Cataluña. Por eso, Franco no esperó ni un minuto para poner en marcha su última gran operación militar en la guerra: la ofensiva de Cataluña, emprendida el 23 de diciembre de 1938 después de haber reorganizado sus fuerzas y recibir una crucial remesa de material bélico alemán.

En esas circunstancias, las líneas defensivas republicanas, debilitadas, desmoralizadas y sin reservas después del agotador esfuerzo del Ebro, fueron incapaces de contener el avance general por todo el frente catalán del enemigo. Rojo rememoraría la situación existente el 11 de enero de 1939:

> La totalidad de las brigadas no alcanza la cifra de 90.000 combatientes; la de armamento no llega a 60.000 fusiles, y todo ello, según el despliegue de

> dicho día 11, en un frente de 135 kilómetros activos y 145 pasivos. Teníamos el cuarenta por ciento de la artillería en reparación y calculábamos la proporción entre la adversaria y la propia en 6 a 1. La aviación, absolutamente dominada por la adversaria, podía alguna vez, por sorpresa y con gran protección, hacer unos modestos bombardeos. La de caza salía en masa cuando no había más remedio, pero era impotente para evitar la acción de la enemiga en el incesante trabajo que ésta realizaba.

El 15 de enero de 1939, Tarragona caía en manos de Franco y se abría la vía para avanzar sobre Barcelona. El 22 de enero el gobierno republicano ordenaba la evacuación de la capital para trasladarse a Figueras, justo en la frontera con Francia. El precipitado traslado fue seguido del desplome de la administración republicana y del inicio de una masiva y caótica retirada de población civil y fuerzas militares en dirección a la frontera. Negrín conseguiría que Francia abriera la frontera para acoger como exiliados al casi medio millón de personas que se agolpaban en los pasos fronterizos, tanto refugiados civiles como tropas previamente desarmadas. Finalmente, el 26 de enero, se produjo la catástrofe anunciada: Barcelona fue ocupada por las tropas franquistas sin encontrar resistencia. El acto final de la tragedia tuvo lugar el 9 de febrero de 1939, cuando las tropas franquistas llegaron a la frontera. Horas antes Negrín y Rojo, acompañados de otros líderes republicanos, habían salido camino del exilio.

Ocupada Cataluña, el destino del territorio republicano en el centro estaba sentenciado. Palmiro Togliatti, enviado por la Comintern para asesorar al PCE, dejó constancia del hecho:

> En las masas el cansancio de la guerra y el malestar por sus sufrimientos tomaban la forma concreta de una aspiración profunda y general a la paz. En todo el país se esperaba un hecho nuevo que pusiera fin a la guerra. Y no se pensaba ya en la victoria de la República. Se preveía y se hablaba abiertamente de la victoria de Franco.

Ni la voluntad de resistencia de Negrín, reiterada tras su regreso a la zona centro, ni la sublevación de Casado consiguieron alterar la marcha de los acontecimientos. La ofensiva final franquista emprendida el 26 de marzo no encontró oposición en ninguna parte.

Madrid fue ocupada dos días después y el 1 de abril de 1939 Franco firmaba en Burgos su último parte de guerra victorioso:

> En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo, Franco.

VIII
VENCEDORES Y VENCIDOS: EL COSTE HUMANO DE LA GUERRA CIVIL

La violencia desencadenada por la guerra produjo una cosecha de 350.000 víctimas mortales directas. Buena parte no perdieron la vida en operaciones militares, sino en acciones de represión en retaguardia mediante "paseos" informales o juicios formales. Víctimas de la primera modalidad fueron el poeta Federico García Lorca, asesinado en Granada por los militares sublevados en agosto de 1936, y el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, asesinado en Paracuellos del Jarama por milicianos anarquistas y comunistas en noviembre de 1936. La segunda se cobró la vida del general Goded, sublevado sin éxito en Barcelona y fusilado tras consejo de guerra en agosto de 1936 por delito de rebelión; y la del general Batet, que se negó a sublevarse en Burgos y fue fusilado tras consejo de guerra en febrero de 1937 por igual delito de rebelión. A esos muertos por acción de guerra o represión se sumó el casi medio millón de personas que partieron al exilio al término de la guerra, la mayoría para no volver nunca más a su tierra natal. Esas pérdidas humanas reduplicaban la destrucción material inducida por la contienda en todos los ámbitos de la vida: lastres demográficos, carencias productivas, penurias alimenticias, emergencias sanitarias…

COMBATES, REPRESIONES Y PRIVACIONES: LOS MUERTOS DE LA GUERRA

1939 fue el "Año de la Victoria" para el régimen franquista. Contra todos los pronósticos, y a pesar de la tenaz resistencia ofrecida por sus enemigos, la sublevación emprendida tres años antes había logrado un triunfo incondicional. Las variadas razones de ese resultado final han sido analizadas en las páginas precedentes. Pero cabría reproducir a modo de resumen el balance apuntado ya en 1979 por Raymond Carr y Juan Pablo Fusi:

> ¿Por qué ganaron los nacionalistas? La respuesta, como en todas las guerras, es: un liderazgo y una disciplina superiores en el Ejército, y un esfuerzo militar respaldado por un gobierno de guerra unificado. Los nacionales fueron mejor ayudados que la República por sus simpatizantes extranjeros en cuanto a suministros de armas: la Legión Cóndor alemana y las tropas y el material italianos compensaron sobradamente la ayuda soviética al Frente Popular, que tan vital fue en las primeras fases de la guerra. […] La disciplina militar de los nacionales era un reflejo de su unidad política; la debilidad militar del Frente Popular una consecuencia de sus luchas políticas intestinas.

Pero si 1939 fue el "Año de la Victoria", también fue "el año más terrible de nuestra historia" (palabras de Francesc Vilanova). No en vano, con la llegada de la victoria, que no fue propiamente la llegada de la paz, llegó también la hora de hacer balance de pérdidas humanas y materiales. Y el saldo resultante fue aterrador y, peor aún, sus efectos continuaron su curso durante bastantes años.

Ya en la guerra fue habitual cifrar el impacto demográfico de la contienda en el mítico "un millón de muertos": lo apuntaba así el cardenal Gomá en una carta pastoral de 1937 y lo haría popular el éxito de la novela homónima de José María Gironella en 1961. Pero la realidad es diferente según todos los cálculos demográficos recogidos por Fuentes Quintana, Martín Aceña y Sánchez Asiaín.

Con márgenes de error inevitables, esas estimaciones coinciden en indicar que el trienio 1936-1939 fue terrorífico y registró las siguientes víctimas mortales en diferentes categorías: 1°) Entre un mínimo de 150.000 y un máximo de 200.000 muertos en acciones de guerra directamente (combates, operaciones bélicas, bombardeos, etc.): tres quintas partes de caídos en el campo

republicano y el resto en el campo franquista (y sin contar los muertos por acción guerrillera y contra-guerrillera después de 1939: aproximadamente 500 y 2.000 víctimas, respectivamente). 2°) Alrededor de 155.000 muertos en acciones de represión en retaguardia: cien mil en la zona franquista y el resto en la zona republicana (y teniendo en cuenta que esta cifra no computa los 30.000 muertos por represión franquista en la posguerra). Y 3°) En torno a 346.000/380.000 muertos por sobre-mortalidad durante el trienio y respecto al periodo anterior, derivada de enfermedades, hambrunas y privaciones inducidas por la contienda.

Así pues, ese volumen global de pérdidas humanas suma entre un mínimo de 651.000 y un máximo de 735.000 víctimas de la Guerra Civil en todas sus facetas. Y si bien esas cifras no llegan al mítico millón de muertos, siguen representando un porcentaje altísimo de la población española: entre el 2,63 y el 2,97% de los 24,69 millones de habitantes registrados en España en 1936. Nada menos.

Por si fuera poco, a esa abultada cifra de víctimas habría que añadir otras dos categorías de pérdidas perfiladas por los estudios demográficos y cruciales para el desenvolvimiento socioeconómico del país: 1°) El desplome de las tasas de natalidad, que provocó una reducción del número de nacimientos respecto a épocas previas que se ha situado entre 400.000 y 600.000 niños "no nacidos" durante el trienio bélico. Una cifra impresionante que superaba a las víctimas mortales por combates y represiones y que dejaría su impronta en la pirámide de la población española durante años. 2°) El incremento espectacular en el número de exiliados que abandonaron el país, ya fuera de manera temporal (quizá hasta 734.000 personas en diferentes fases) o ya fuera de forma definitiva (entre un máximo de 300.000 y un mínimo de 200.000 personas: el llamado exilio republicano español de 1939).

Con harta razón, por tanto, se ha considerado la Guerra Civil como "el fenómeno más negativo" de la historia demográfica contemporánea de España. Y su efecto lesivo brutal puede medirse atendiendo a la evolución de un indicador sociográfico ilustrativo, como es la esperanza media de vida al nacer de cualquier español

de entonces. En el caso de los hombres, ese indicador pasó de estar en 50,8 años en 1935 para desplomarse hasta 43,1 en 1939. En el caso de las mujeres, el indicador pasó de 54,6 años en 1935 para rebajarse hasta 51,8 en 1939. También puede apreciarse el efecto devastador de esas pérdidas en el volumen y formación del capital humano: como resultado de las bajas tasas de escolaridad durante el trienio y del desplome de infraestructuras y servicios educativos (por destrucción, represión y exilio de maestros o recorte de inversión), el tajo educacional fue realmente notorio. La generación nacida en 1931 (que entraría en la escuela después de la guerra) volvió a situarse en niveles de escolarización y alfabetización de principios del siglo XX.

Víctimas de la guerra, pero ya solo de un bando, fueron también las personas que a partir de la victoria de 1939 hubieron de pagar su simpatía hacia la República. Cálculos fidedignos estiman que en 1940 había en España no menos de 300.000 prisioneros hacinados en casi 500 cárceles o prisiones habilitadas para acogerlos (cuando el promedio de encarcelados "comunes" en el trienio 1931-1934 no llegaba a las 9.500 personas). Y a esa cifra habría que sumar el mínimo de 400.000 personas (básicamente soldados republicanos) internadas durante meses en el centenar de campos de concentración existentes en el país para fines de clasificación y depuración de responsabilidades políticas. Un volumen de población reclusa o concentrada que se convertiría pronto en una severa carga para la administración estatal y en un grave lastre para la recuperación de la actividad laboral.

En definitiva, la guerra ocasionó víctimas mortales, sufrimientos inerrables, penas profundas y muchas privaciones y sinsabores entre la población española. En 1939, ya instalado en el exilio en Francia y poco antes de su muerte, Azaña meditaba sobre aquella tormenta de fuego y apuntaba que su origen estaba en "el odio y el miedo": "Una parte del país odiaba a la otra, y la temía". Y proseguía que la consecuente "política de exterminio y venganza" desatada con la guerra había centrado su furia destructora en los grupos sociales

más temidos u odiados en cada bando, dando origen a una represión inclemente y brutal retroalimentada:

> En el territorio ocupado por los nacionalistas fusilaban a los franc-masones, a los profesores de universidad y a los maestros de escuela tildados de izquierdismo, a una docena de generales que se habían negado a secundar el alzamiento, a los diputados y exdiputados republicanos o socialistas, a gobernadores, alcaldes y a una cantidad difícilmente numerable de personas desconocidas; en el territorio dependiente del gobierno de la República, caían frailes, curas, patronos, militares sospechosos de 'fascismo', políticos de significación derechista. Que todo esto ocurriera, en su territorio, contra la voluntad del gobierno de la República, es importante para los gobiernos mismos […]. Pero si las atrocidades cometidas en uno y otro campo se consideran […] como un fenómeno patológico en la sociedad española, el valor demostrativo de unos y otros hechos viene a ser el mismo: su carácter, mucho más entristecedor.

El juicio anticipado por Azaña, como hemos visto, ha sido básicamente corroborado por la investigación histórica reciente. Pero no solo la represión, como víctima o como verdugo o como ambas cosas en distintos momentos (que también hubo muchos casos), fue el santo y seña de la guerra para la mayoría de la población española. Aunque sin duda fuera esa su faceta más definitoria del carácter "civil" del conflicto. Hubo también otras vivencias más o menos traumáticas pero igualmente indelebles porque dejaron huella profunda en los españoles que vivieron la guerra y sobrevivieron para contarla.

Por ejemplo, para los combatientes de ambos bandos que libraron las batallas y soportaron sus rigores, la guerra fue una cotidiana anormalidad que dio origen a su propio mundo autónomo de relaciones, sensaciones y temores: la vida de las trincheras, el campamento y el batallón, extraña escuela de fraternidad, entereza y bastante brutalidad, en un sentido muy lato pero vívido para los varones que pasaron por ella.

Siendo en su mayoría reclutas forzados, no combatientes voluntarios, tuvieron que adaptarse a las circunstancias aun a costa de matar para vivir, como demandaba la ley bélica imperante. Y a todos les preocupaba el futuro de sus vidas, la posibilidad de

perderlas, la situación de sus familias, la razón o sinrazón de su causa… Y otras cosas más prosaicas: cómo resistir el sofocante calor del día (como en Brunete, donde se alcanzaron los 40 grados diurnos durante la batalla); cómo protegerse del intenso frío de las noches (como en Teruel, donde se luchó con gélidas temperaturas bajo cero); cómo defenderse del ataque mortificante de las pulgas y piojos; cómo aplacar el intenso miedo al combate que provocaba náuseas, diarreas y ganas de desertar; cómo saciar la sed cuando escaseaba el agua; cómo soportar la muerte del compañero apreciado y seguir en la brecha, etcétera. En este plano, los tres años de guerra dieron para mucho. Y mientras unos respondieron a los retos planteados con estoicismo, llegando incluso a la categoría de héroes admirados, otros sucumbieron a la carga y cosecharon su pena: los reos de deserción o traición, los "emboscados" que rehuían el frente con excusas, etc.

Para la población no combatiente de la retaguardia civil, la guerra también generó ocasiones combinadas de alegría (al saber que el ser querido estaba vivo) o sufrimiento (al enterarse de su muerte), casi con tanta intensidad o más que en el frente de batalla. Sin descontar el hecho de que no era lo mismo afrontar la guerra siendo un anciano al borde de la muerte que un niño apenas asomado a la vida. En todo caso, según los testimonios recuperados, dos elementos provocaron la mayor angustia recurrente: el terror ante los devastadores bombardeos de la aviación o de la artillería pesada sobre ciudades y pueblos; y la aguda sensación de hambre y privaciones insoportables. Las palabras de una niña madrileña podrían ser elevadas a categoría explicativa general de los sufrimientos de la población civil:

> Todo el día soñaba con la comida. Mi madre perdió 30 kilos y mi abuelo murió de desnutrición. Hablábamos siempre de lo que nos gustaría comer, si pudiéramos. Mi hermana y yo con las amigas jugábamos a recordar cómo era un buen cocido, cómo tomar unos huevos.

Es, claro está, el relato de una impresión personal derivada de una vivencia íntima. Pero es también la expresión de un proceso bien descrito por el doctor Francisco Grande Covián, que estuvo al

frente desde 1936 de los abastecimientos madrileños y vigilaba los problemas de nutrición creados por la escasez de alimentos y su repercusión sanitaria. A tenor de sus estudios, la población de Madrid, como la de casi toda la España republicana, llegó a pasar hambre: sobre la base de una dieta mínima promediada por habitante de 2.131 calorías diarias, los madrileños solo fueron capaces de recibir el 49,7% de ese parámetro (1.060 calorías diarias). Era una dieta inferior a la soportada por los berlineses en 1916, durante la guerra mundial, cuando el bloqueo naval británico empezó a dejarse notar en toda Alemania. Y estaba en el origen del aumento de enfermedades (pelagra, glositis, edema de hambre) y de las tasas de mortalidad (sobre todo infantil) que se registraba en el seno de esa población desnutrida y sometida a todo tipo de privaciones.

Afortunadamente para la población civil en zona franquista, no puede decirse que esa situación de hambruna angustiosa fuera un rasgo característico de sus vivencias durante la contienda de modo general (otra cosa serían los desafectos y represaliados). Solo a partir de 1939, ya terminada la guerra, el hambre habría de enseñorearse de toda España en su conjunto, sin distinguir entre ambas zonas ni entre ambas poblaciones (aunque sí entre grupos sociales más o menos acomodados).

Si del ámbito humano pasamos a las consecuencias en el plano material, también cabe decir que la Guerra Civil fue "el fenómeno más negativo de la historia económica contemporánea de España". En conjunto, es probable que el producto interior bruto nacional se desplomara un 20% entre 1935 y 1940, mientras que la caída de la producción agraria llegaba a superar el 21% y la de la producción industrial rozaba el 30%.

Además de esas pérdidas macroeconómicas tan severas, el destrozo de la infraestructura productiva había sido también profundo. Aproximadamente medio millón de viviendas del parque inmobiliario nacional había sido destruido o dañado gravemente, al igual que una cuarta parte de la flota mercante. Más crucial resultó la pérdida de capacidad del vital transporte ferroviario: quedaron

inutilizados el 30% de las locomotoras y el 40% de los vagones de mercancías. El balance final que recoge Joan R. Rosés sobre el efecto de la guerra en la economía española no ofrece dudas:

> El coste total de la guerra equivale a algo más del producto interior bruto del año 1935. Además su impacto se prolongó durante dos décadas, ya que la economía española no recuperó su tendencia de crecimiento hasta 1956. Considerando la guerra y la larga recuperación de la posguerra, los españoles de la época sacrificaron algo más de cinco años de renta.

LA ESPAÑA DEL EXILIO

Como hemos visto, en los primeros meses invernales de 1939, casi medio millón de españoles abandonaba forzosamente la tierra en la que había nacido para empezar un largo exilio que habría de durar, para muchos, el resto de sus vidas. Eran los heterogéneos y desafortunados protagonistas, anónimos y reputados, hombres y mujeres, ancianos y niños, catalanes o asturianos, civiles o militares, jornaleros agrarios o catedráticos universitarios, del "exilio republicano español".

El éxodo había comenzado ya en el verano de 1936, pero nada de aquello tuvo la entidad de lo que se vivió a principios de 1939, durante la triunfal ofensiva franquista sobre Cataluña, que conllevó el paso de la frontera hispano-francesa de un mínimo de 470.000 personas en apenas seis semanas. A estas se les unirían otras 15.000 que consiguieron salir desde los puertos de la zona levantina antes del colapso militar de marzo de 1939 y que lograron llegar, bien a Francia, bien a la Argelia francesa. Esta oleada final del exilio revistió un carácter muy diferente a las migraciones políticas previas por varias razones que lo convierten en "un éxodo sin precedentes" (palabras de Geneviève Dreyfus-Armand).

Ante todo, porque no se trataba ya de la llegada espasmódica y discontinua de unos centenares de militantes y dirigentes de partidos y sindicatos republicanos, con o sin sus familias. Al contrario, el fenómeno consistió en la entrada masiva, rápida y

convulsa de millares de civiles y militares en retirada angustiada y penosa. Por eso, a diferencia de los episodios previos, esta marea humana vencida y abatida tuvo que ser gestionada y alojada por las autoridades francesas de manera improvisada y no poco drástica: en campos de internamiento creados al efecto mayormente en el departamento de los Pirineos orientales, entonces un área básicamente agrícola y pesquera que contaba con 250.000 habitantes abrumados por una avalancha humana que casi les doblaba en número, hablaba otra lengua y tenía ideas políticas muy diferentes a sus simpatías conservadoras. El recuerdo de aquella recepción temerosa en un invierno gélido por parte de la Francia que se veía como refugio vital quedaría grabado a fuego en la conciencia de la masa exiliada. Vicente Lloréns retrató con perfiles acertados aquel brusco despertar a la cruda realidad del exilio:

> Con pocas excepciones, el torrente de republicanos fugitivos fue conducido por fuerzas armadas francesas a campos de concentración localizados principalmente en la costa mediterránea […]. Campos que al principio no eran otra cosa que extensos arenales cerrados por alambradas y vigilados por guardias móviles y soldados africanos. Tristemente célebres fueron los de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, que en marzo de 1939 contenía ciento dos mil hombres, y Barcarès, el más reciente y mejor establecido […]. A estos campos, insuficientes a pesar de su extensión, hay que añadir varios más en otras partes de Francia: Gurs, en los Bajos Pirineos, donde se reunieron miles de vascos, combatientes de las Brigadas Internacionales y de fuerzas de aviación, […]; Setfonds, en Tarn-et-Garonne, con buen número de técnicos y obreros calificados; Bram, en Aude, con intelectuales, funcionarios y no pocos panaderos que trabajaban para la Intendencia militar francesa para proveer de pan a todos los demás campos; Le Vernet, Haute-Garonne, que tuvo carácter disciplinario, y Agde, en Hérault, donde hubo numerosos catalanes.

Es incuestionable que al término de la Guerra Civil la cifra de expatriados había superado ampliamente el medio millón de personas y hay estimaciones que la sitúan en 600.000 refugiados en conjunto, contando aportes posteriores (por ejemplo, entre 1946 y 1948 huyeron de España otros 21.000 represaliados). Sin embargo, también es cierto que su entidad numérica fue disminuyendo rápidamente. Por un lado, el gobierno francés no estaba dispuesto a

sostener de manera indefinida una población exiliada de esa magnitud (pese a que su manutención corrió inicialmente a cargo del gobierno republicano en el exilio). Y presionaba para que regresaran a su país de origen o se fueran a otro destino final (mayormente a la América de habla hispana). Por otro lado, buena parte de los refugiados acabó pensando que era mejor afrontar el riesgo de regresar a la España de Franco, vistas sus equívocas promesas de trato benévolo y comprobadas las penalidades de la vida en los campos (sobre todo una vez iniciada la guerra mundial en septiembre de 1939).

A finales de 1939, en torno a 300.000 refugiados habían retornado a su patria para sufrir las penalidades del vencido con mayor o peor fortuna. El resto de los exiliados, un máximo de 300.000 personas en su conjunto (su volumen exacto es imposible de establecer), permanecería fuera de España durante muchos años (al menos mientras el franquismo mantuvo la persecución por delitos derivados de la Guerra Civil, vigente hasta 1966) o incluso para el resto de sus vidas.

El mayor contingente, cifrado en unas 200.000 almas, se afincaría en Francia, mayormente en los departamentos del sur (con Toulouse como "capital" oficiosa del exilio). Otro máximo de 60.000 fugitivos acabarían "transterrados" (feliz expresión del filósofo José Gaos) en el conjunto del continente americano. México sería destino principal de más de la mitad de todos ellos (no menos de 30.000 en un país que entonces tenía 19 millones de habitantes), gracias a la generosidad del gobierno de Cárdenas. Detrás estuvo Argentina (receptora de hasta 10.000 refugiados, en un país de menos de quince millones), la República Dominicana (máximo de 5.000 en un país de menos de dos millones), Venezuela (hasta 5.000 para menos de cuatro millones) y Chile (entre 2.500 y 3.500 en un país de menos de cinco millones). Los restantes exiliados acabarían desperdigados por decenas de países europeos (4.500 en la Unión Soviética, cifra muy parecida a la de acogidos por Gran Bretaña), americanos (un millar entre Estados Unidos y el Canadá, otro millar

en Colombia y medio millar en Brasil) y hasta africanos, asiáticos y oceánicos.

El masivo exilio que puso término a la Guerra Civil no era el primero aunque fuera a la postre "el más trágico de la historia de España" (juicio de Alicia Alted). Tampoco era un caso anómalo en la Europa de la primera mitad del siglo XX, bautizado por los analistas como "el siglo de los refugiados" (griegos y turcos, armenios, rusos blancos, judíos…). Sin embargo, pese a esa tradición de exilios hispánica y europea, el exilio español de 1939 constituía un caso singular en varios aspectos cruciales. En el orden internacional, era resultado de una sangrienta guerra civil que había tenido una decisiva dimensión exterior y había suscitado enorme interés entre la opinión pública (mayormente simpatizante de la causa republicana, aunque con sectores influyentes favorables al bando franquista). Así se explica que aquel contingente de exiliados acabara encontrando refugio en sitios tan distintos y alejados de su patria de origen.

Desde el punto de vista español, era un exilio de masas superior en cantidad a cuanto se había registrado en la historia nacional y tenía características peculiares de entidad cualitativa. De hecho, partieron al exilio españoles de todas las regiones sin excepción, aunque más desde Cataluña y Aragón, por razón de cercanía territorial a la frontera francesa, que desde Asturias o Extremadura, por el motivo inverso. En el caso de los que encontraron refugio en Francia en 1939, nada menos que el 36,5% eran catalanes, seguidos de aragoneses (18%), levantinos (14,1%), andaluces (10,5%), madrileños y castellano-manchegos (7,6%) y norteños en general (5,2%: más asturianos que vascos y cántabros). En el caso de los que se afincaron en México, también la contribución catalana era mayoritaria (aunque menor: 21,8%), seguidos de norteños (17,2%: asturianos, vascos y cántabros), madrileños y castellano-manchegos (16,1%), levantinos (10,7%) y aragoneses (6,1%).

Ese torrente humano exiliado era de todas las edades (aunque predominaban los jóvenes del entorno de veinte años) y de ambos géneros (con predominio de varones). Entre los llegados a Francia a principios de 1939 había un mínimo de 220.000 hombres que habían

sido soldados movilizados frente a otro mínimo de 210.000 civiles entre los que se contaban mujeres (70.000), niños (otros 70.000) y ancianos (unos 50.000), amén de más de 10.000 mutilados y enfermos de diversa gravedad.

También eran de todas las condiciones sociales: casi la mitad (45,5%) eran obreros manuales y técnicos del sector secundario industrial; poco más del 30% eran trabajadores agrícolas y algo menos del 20% se había ganado la vida en el moderno sector terciario. Y en cuanto a sus opiniones y credos políticos, abrigaban todo el espectro desde el republicanismo democrático hasta el anarquismo, pasando por el socialismo, el comunismo y los nacionalismos vasco y catalán.

La existencia y vivencias de esa enorme masa exiliada no fueron en modo alguno fáciles. Lanzados al abismo del destierro como vencidos sin posibilidad de retorno (salvo arrostrando graves riesgos para sus vidas), tuvieron la desgracia de sufrir en sus respectivos países de acogida las consecuencias del estallido de la Segunda Guerra Mundial, singularmente aquellos que quedaron en Europa (la mayoría) y no tuvieron la fortuna de recalar en países americanos (menos desarrollados pero más alejados del frente bélico). Durante ese periodo de 1939-1945, considerando todavía su expatriación como provisional, el sentimiento de las masas de exiliados osciló entre el desánimo impotente (por su falta de fuerza para derribar el régimen franquista) y la ilusión de la esperanza (en una victoria aliada que arrastrara consigo al franquismo). De hecho, vivieron durante ese sexenio bélico y la inmediata posguerra bajo la creencia ilusoria de que "la guerra no había terminado" y que la derrota de las potencias del eje llevaría pareja la caída de Franco. Pero no tardarían mucho en darse cuenta de su error de juicio, que les haría sentirse doblemente derrotados.

Sin embargo, el factor persistente de la vida política de los exiliados siguió siendo la división interna y la lucha fratricida. El final de la guerra y la derrota habían acentuado las previas fracturas que habían lastrado el esfuerzo bélico republicano. Y esas mismas fracturas entre los distintos partidos y sindicatos, convertidas en el

exilio en diferencias insalvables, limitaron la eficacia de su activismo político.

La principal división que hizo imposible un frente unitario opositor ante el franquismo enfrentaba a los seguidores y detractores del doctor Negrín, último jefe del gobierno refrendado por las Cortes. La discordia entre ambos grupos impidió la necesaria colaboración entre ambas instituciones y dio origen a una suicida lucha política para lograr el apoyo entre los exiliados desperdigados por Europa y América Latina. No en vano, frente al organismo de ayuda al exilio constituido por Negrín, el SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles), sus opositores liderados por Prieto constituyeron otro organismo alternativo, la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles).

La constitución de ambos organismos ya en 1939 fue el momento culminante de la división política de lo que quedaba del aparato institucional de la República derrotada militarmente. Desde entonces, el cisma en el exilio quedó consumado y daría origen a una batalla que desangraría las fuerzas de ambos contendientes y lastraría su capacidad de acción política y diplomática.

Y todavía estaba por llegar lo peor: el final de la contienda mundial con la derrota del eje no significó la caída de Franco ni el retorno de la República a España. Desde el verano de 1945, las dos grandes potencias occidentales vencedoras (Gran Bretaña y Estados Unidos) habían puesto en marcha una política de cuarentena contra el régimen español. Su propósito era forzar la retirada voluntaria de Franco en favor del pretendiente, don Juan de Borbón, con el apoyo del alto mando militar, de los grupos monárquicos y de la izquierda moderada, y sin arriesgarse a una reapertura de la Guerra Civil. El interés geoestratégico de la península ibérica para la defensa de Europa occidental, acentuado por las primeras muestras de disensión entre la URSS y sus antiguos aliados, reforzaba esa voluntad de "no intervención" en asuntos internos de terceros países y de evitar todo peligro de desestabilización política en España. Desestimando, por tanto, la demanda soviética de aplicar sanciones efectivas (económicas o militares), las potencias democráticas se

limitaban a imponer un ostracismo internacional desdentado y más aparente que eficaz. Por eso, dentro de sus ambiguos contornos, al compás del creciente clima de Guerra Fría entre este y oeste, fue fraguándose la supervivencia de la dictadura franquista en la posguerra mundial.

Mientras el exilio republicano se aprestaba a vivir después de 1945 sin la esperanza del retorno, la España regida con mano de hierro por Franco iba recuperando sus fuerzas con lentitud pero sin temor a intervenciones exteriores. El país tardaría mucho tiempo en superar las consecuencias de aquella hemorragia humana de 1939, que privó al país de la competencia de un altísimo número de brazos y cerebros.

El único consuelo posible que cabe encontrar en aquella tragedia humanitaria es tan paradójico como trascendente: los exiliados expulsados de España por vencedores que los consideraban la "anti-España" acabarían reforzando la presencia de la cultura española en los países de acogida y transfiriendo sus saberes a otros pueblos cercanos o lejanos, pero ya para siempre unidos a España por ese flujo migratorio. Y, quizá, el paradigmático caso mexicano sea el más ilustrativo de los efectos históricos a largo plazo que tuvo el exilio de 1939 en las relaciones hispano-americanas y en la renovación de las percepciones mutuas, lastradas hasta entonces por los estereotipos de las guerras de emancipación del siglo XIX y tiempos posteriores (el español que era visto como conquistador cruel y vanidoso o como emigrante pobre y menesteroso). Estudiando la vida y obra de un notable grupo de exiliados afincados en México, una historiadora hispano-mexicana (pero no exiliada), Ascensión Hernández de León-Portilla, subrayaba en 1978 ese papel de "puente" cultural entre ambas orillas del Atlántico que había cumplido el exilio y que era su mejor legado. No cabe mejor homenaje final a sus involuntarios protagonistas que reproducir las palabras de esa autora:

> En México quizá se pueda ver con mayor claridad que su presencia, además de haber impreso una huella en la vida cultural del país, es considerada como un estímulo en otros ámbitos de la vida mexicana –economía sobre todo– y que contribuyó a que fructificasen instituciones y personas que hoy

son protagonistas del presente. Tan importante como la huella dejada en el campo de la cultura, los transterrados dejaron otra huella quizá todavía menos visible pero a la larga importantísima para el acercamiento hispano-mexicano. Gracias a su presencia en México, y sospecho que lo mismo se puede decir de otros países de América, se conoció a un nuevo tipo de español. […]. En América, concretamente en México, se descubrió a otros españoles que naturalmente proyectaban una nueva imagen de España. Con los años, la actitud de ellos, su asimilación y entrega al país, confirmó la confianza que el Gobierno y la sociedad mexicana había depositado en ellos cuando los acogieron. El nuevo tipo de español –con excepciones desde luego– desvalorizaba el tópico de aquel otro español que –voluntaria o involuntariamente– había herido el nacionalismo mexicano. Este hecho propició que en las conciencias de muchas gentes se formara una imagen dual del español: por un lado, persiste la del español tradicional –el gachupín– cada vez más escaso por la disminución de la emigración española a América; al lado de ésta, el español refugiado o transterrado, que hizo posible el conocimiento de otra cara de España en México, que abriría nuevas perspectivas entre ambos países. […] Quizá sea ésta una de las aportaciones claves del Exilio.

BIBLIOGRAFÍA: UNA SELECCIÓN BÁSICA

La selección de obras que sigue es solo una mínima parte de la inmensa producción bibliográfica existente sobre la Guerra Civil. Recoge una pequeña muestra de los trabajos más interesantes surgidos en los últimos decenios de investigación historiográfica, a juicio del siempre leal pero falible saber y entender del seleccionador. Por supuesto, no están todos los que son, si bien son todos los que están. Excluye la reiteración de obras canónicas comentadas en el primer capítulo. Pero incluye a los autores que han sido registrados en el texto de manera expresa en algún momento por su relevancia o renovadora perspectiva. Para mayor facilidad de uso, la selección está organizada en cinco apartados temáticos.

1. OBRAS GENERALES

ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y DEL REY REGUILLO, Fernando (eds.), *El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos*, Barcelona, RBA, 2012.

BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso (dir.), *República y guerra civil. Setenta años después*, Madrid, Actas, 2008.

CASANOVA, Julián. *República y guerra civil*, Barcelona/Madrid, Crítica – Marcial Pons, 2007.

CRUZ, Rafael, *En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936*, Madrid, Siglo XXI, 2006.

FRASER, Ronald, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*, Barcelona, Crítica, 2001.

GIL ANDRÉS, Carlos, *Españoles en guerra. 1936-1939. La guerra civil en 39 episodios*, Barcelona, Ariel, 2014.

GIL PECHARROMÁN, Julio, *La Segunda República Española, Madrid*, Biblioteca Nueva, 2002.

GRAHAM, Helen, *Breve historia de la guerra civil*, Madrid, Espasa Calpe, 2006.

JULIÁ, Santos (coord.), *República y guerra en España, 1931-1939*, Madrid, Espasa Calpe, 2006.

LINZ, Juan José, *La quiebra de las democracias*, Madrid, Alianza, 1987.

MALEFAKIS, Edward (dir.), *La guerra civil española*, Madrid, Taurus, 2006.

MORADIELLOS, Enrique, *La guerra de España (1936-1939). Estudios y controversias*, Barcelona, RBA, 2012.

ROMERO SALVADÓ, Francisco, *La larga guerra civil española*, Granada, Comares, 2011.

PRESTON, Paul, *La guerra civil española*, Barcelona, Debate, 2006.

SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, *Los datos exactos de la guerra civil*, Madrid, Rioduero, 1980.

TUSELL, Javier y PAYNE, Stanley G., *La guerra civil. Una nueva visión del conflicto que dividió España*, Madrid, Temas de Hoy, 1996.

VILLA, Roberto. *La República en las urnas. El despertar de la democracia en España*, Madrid, Marcial Pons, 2012.

2. ESPAÑA REPUBLICANA

ARÓSTEGUI, Julio, *Largo Caballero. El tesón y la quimera*, Barcelona, Debate, 2013.

BOLLOTEN, Burnett, *La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución*, Madrid, Alianza, 1989.

CASANOVA, Julián, *De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939*, Barcelona, Crítica, 2010.

FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo, *El País Vasco, 1931-1937. Autonomía, revolución, guerra civil*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.

GALLEGO, Ferran, *Barcelona, mayo de 1937. La crisis del antifascismo en Cataluña*, Barcelona, Debate, 2007.

GIBAJA VELÁZQUEZ, José Carlos, *Indalecio Prieto y el socialismo español*, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1995.

GRAHAM, Helen, *La República española en guerra, 1936-1939*, Barcelona, Debate, 2006.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando, *Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil*, Barcelona, Crítica, 2010.

JULIÁ, Santos, *Vida y tiempo de Manuel Azaña*, Madrid, Taurus, 2008.

MIRALLES, Ricardo, *Juan Negrín. La República en guerra*, Madrid, Temas de Hoy, 2003.

MORADIELLOS, Enrique, *Don Juan Negrín*, Barcelona, Península, 2006.

PAGÉS I BLANCH, Pelai, *Cataluña en guerra y revolución*, Sevilla, Espuela de Plata, 2007.

SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep, *¿Por qué hemos sido derrotados? Las divergencias republicanas y otras cuestiones*, Barcelona, Flor del Viento, 2006.

SEIDMAN, Michael, *A ras de suelo. Historia social de la República durante la guerra civil*, Madrid, Alianza, 2003.

3. ESPAÑA FRANQUISTA

ÁLVAREZ BOLADO, Alfonso, *Para ganar la guerra, para ganar la paz. La Iglesia y la guerra civil*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1995.

CAZORLA, Antonio, *Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista*, Madrid, Marcial Pons, 2000.

DI FEBO, Giuliana, *Ritos de guerra y de victoria en la España franquista*, Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2012.

GALLEGO, Ferran, *El Evangelio Fascista, La formación de la cultura política del Franquismo (1930-1950)*, Barcelona, Crítica, 2014.

MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*, Madrid, Siglo XXI, 1998.

ORELLA, José Luis, *La formación del Estado Nacional durante la guerra civil española*, Madrid, Actas, 2001.

PAYNE, Stanley G., *El régimen de Franco, 1936-1975*, Madrid, Alianza, 1987.

PRESTON, Paul, *Franco. Caudillo de España*, Barcelona, Debate, 2015.

RAGUER, Hilari, *La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española*, Barcelona, Península, 2008.

RODRÍGUEZ AISA, María Luisa, *El cardenal Gomá y la guerra de España*, Madrid, CSIC, 1981.

SAZ CAMPOS, Ismael, *Fascismo y Franquismo*, Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2004.

SEIDMAN, Michael, *La victoria nacional. La eficacia contrarrevolucionaria en la guerra civil*, Madrid, Alianza, 2012.

THOMÀS, Joan Maria, *La Falange de Franco. El proyecto fascista del régimen*, Barcelona, Plaza y Janés, 2001.

VILANOVA, Francesc, *1939. Una crónica del año más terrible de nuestra historia*, Barcelona, Península, 2007.

4. ASPECTOS ECONÓMICOS Y MILITARES

ALÍA MIRANDA, Francisco, *Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República*, Barcelona, Crítica, 2011.

ALPERT, Michael, *El Ejército republicano en la guerra civil española*, Madrid, Siglo XXI, 1989.

BALFOUR, Sebastian, *Abrazo mortal. De la guerra colonial a la guerra civil en España y Marruecos*, Barcelona, Península, 2002.

BLANCO ESCOLÁ, Carlos, *Franco y Rojo. Dos generales para dos Españas*, Barcelona, Labor, 1993.

CARDONA, Gabriel, *Historia militar de una guerra civil. Estrategia y tácticas de la guerra de España*, Barcelona, Flor del Viento, 2006.

ENGEL, Carlos, *Estrategia y táctica en la guerra de España, 1936-1939*, Madrid, Almena, 2008.

FUENTES QUINTANA, Enrique (dir.), *Economía y economistas españoles en la guerra civil*, Madrid, Real Academia de Ciencias Políticas y Morales/Galaxia Gutenberg, 2008, 2 vols.

HOWSON, Gerald, *Armas para España. La historia no contada de la guerra civil española*, Barcelona, Península, 2000.

MARTÍN ACEÑA, Pablo, *El oro de Moscú y el oro de Berlín*, Madrid, Taurus, 2001.

MARTÍNEZ REVERTE, Jorge, *El arte de matar. Cómo se hizo la guerra civil española*, Barcelona, RBA, 2009.

MATTHEWS, James, *Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la guerra civil, 1936-1939*, Madrid, Alianza, 2012.

PUELL DE LA VILLA, Fernando y HUERTA, Justo A., *Atlas de la guerra civil española. Antecedentes, operaciones y secuelas militares*, Madrid, Síntesis, 2007.

SÁNCHEZ ASIAÍN, José Ángel, *La financiación de la guerra civil española. Una aproximación histórica*, Barcelona, Crítica, 2012.

VIÑAS, Ángel, *El oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista*, Barcelona, Grijalbo, 1979.

5. CONTEXTO INTERNACIONAL Y EFECTOS CIVILES

ALTED VIGIL, Alicia, *La voz de los vencidos. El exilio republicano español de 1939*, Madrid, Aguilar, 2005.

AVILÉS FARRÉ, Juan, *Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española*, Madrid, Eudema, 1994.

CASANOVA, Julián (dir.), *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco*, Barcelona, Crítica, 2002.

CLARET MIRANDA, Jaume, *El atroz desmoche. La destrucción de la universidad española por el franquismo, 1936-1945*, Barcelona, Crítica, 2006.

COVERDALE, John, *La intervención fascista en la guerra civil española*, Madrid, Alianza, 1979.

DREYFUS-ARMAND, Geneviève, *El exilio de los republicanos españoles en Francia*, Barcelona, Crítica, 2000.

ELORZA, Antonio y BIZCARRONDO, Marta, *Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939*, Barcelona, Planeta, 1999.

ESPINOSA MAESTRE, Francisco (ed.), *Violencia roja y azul. España, 1936-1950*, Barcelona, Crítica, 2010.

HERNÁNDEZ DE LEÓN-PORTILLA, Ascensión, *España desde México. Vida y testimonio de transterrados*, Madrid, Algaba, 2003.

JULIÁ, Santos (coord.), *Víctimas de la guerra civil*, Madrid, Temas de Hoy, 1999.

KOWALSKY, Daniel, *La Unión Soviética y la guerra civil española. Una revisión crítica*, Barcelona, Crítica, 2004.

MATESANZ, José Antonio, *Las raíces del exilio. México ante la guerra civil española*, México D.F., El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.

MOLINERO, Carme; SOBREQUÉS, Jaume y SALA, Margarida (eds.), *Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo*, Barcelona, Crítica, 2003.

MORADIELLOS, Enrique, *El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española*, Barcelona, Península, 2001.

PIKE, David Wingeate, *France Divided. The French and the Civil War in Spain*, Brighton, Sussex Academic Press, 2011.

PRESTON, Paul, *El Holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después*, Barcelona, Debate, 2011.

RODRIGO, Javier, *Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista*, Madrid, Alianza, 2008.

ROSAS, Fernando (ed.), *Portugal e a guerra civil espanhola*, Lisboa, Colibrí, 1998.

RUIZ, Julius, *El terror rojo. Madrid, 1936*, Madrid, Espasa Calpe, 2012.

RYBALKIN, Yuri, *Stalin y España. La ayuda militar soviética a la República*, Madrid, Marcial Pons, 2007.

SAZ CAMPOS, Ismael, *Mussolini contra la Segunda República. Hostilidad, conspiraciones, intervención*, Valencia, Institución Valenciana de Estudios e Investigación, 1986.

SKOUTELSKY, Rémi, *Novedad en el frente. Las Brigadas Internacionales en la guerra civil*, Madrid, Temas de Hoy, 2006.

VEGA SOMBRÍA, Santiago, *La política del miedo. El papel de la represión en el Franquismo*, Barcelona, Crítica, 2011.

VIÑAS, Ángel, *La República en guerra. Contra Franco, Hitler, Mussolini y la hostilidad británica*, Barcelona, Crítica, 2012.